

Colección Facultad de Ciencias Jurídicas
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA

**DERECHO
CONSTITUCIONAL NICARAGÜENSE**



Edwin Castro Rivera

Margine Calderón Marengo

Edwin Castro Rivera

Master en Derecho Constitucional y Derecho Fundamentales por la Universidad Centroamericana (UCA). Profesor adjunto de la cátedra de derecho constitucional y derechos humanos, de la facultad de ciencias jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA) En la actualidad es diputado propietario de la Asamblea Nacional de la Republica de Nicaragua y miembro de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos.

Coautor de las reformas constitucionales de los años 2000 y 2005.

Es miembro del Instituto de Estudios e Investigación Jurídica.

Margine Calderón Marengo

Estudios de doctorado en derecho; Programa de derechos fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Licenciada en derecho por la facultad de ciencias jurídicas de la Universidad Centroamericana, profesora adjunta de la cátedra de derecho constitucional y derechos humanos, de la facultad de ciencias jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA), en donde se desempeña como directora académica, actualmente es asesora de la comisión de justicia y asuntos jurídicos de la Asamblea Nacional de la Republica de Nicaragua.

Es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional sección Nicaragua.

342.7285

C-355

Edwin Castro Rivera

Profesor adjunto de
Derecho Constitucional y Derechos Humanos
Universidad Centroamericana

C3

Margine Calderón Marengo

Profesora adjunta de
Derecho Constitucional y Derechos Humanos
Universidad Centroamericana

DERECHO CONSTITUCIONAL NICARAGUENSE

Ingreso	30-03-09
Clasificación	—
Temática	Derecho
Proceso	— 20099183



N

342

C146

Calderón Marengo, Margine

Derecho Constitucional en Nicaragua/

Margine Calderón Marengo; Edwin Castro

Rivera. -- 1a ed. -- Managua : Ediciones Calderón-
Castro, 2007

400 p.

ISBN : 978-99924-0-612-0

1. NICARAGUA-CONSTITUCION 2. HISTORIA
CONSTITUCIONAL 3. DERECHO CONSTITUCIONAL

ÍNDICE

Presentación	1
Introducción	3

PRIMERA UNIDAD CONSTITUCIONES PREVIAS AL CONSTITUCIONALISMO EN NICARAGUA

1. Constitución de Bayona	9
2. Constitución de Cádiz	11

SEGUNDA UNIDAD HISTORIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL NICARAGÜENSE

1. Constituciones Federales	15
a. Constitución de 1824	15
b. Constitución de 1826	20
2. Constitución de 1838	22
a. Antecedentes históricos	22
b. Características generales	23
c. Derechos fundamentales	24
d. Organización del Estado	24
3. Constituciones Non Natas	26
a. Constitución de 1848	26
b. Constitución de 1854	27
4. Constitución de 1858	28
a. Antecedentes históricos	28
b. Características generales	29
c. Derechos fundamentales	29
d. Organización del Estado	30
e. Reformas	31
5. Constitución de 1893	33
a. Antecedentes históricos	33
b. Características generales	34
c. Derechos fundamentales	35
d. Organización del Estado	37
e. Reformas	38

6. Constitución de 1905	41
a. Antecedentes históricos	41
b. Características generales	42
7. Constitución Non Nata 1911	42
8. Constitución de 1911	44
a. Antecedentes históricos	44
b. Características generales	45
c. Derechos fundamentales	46
d. Organización del Estado	46
9. Constitución Non Nata de 1913	47
10. Constitución de 1939	47
a. Antecedentes históricos	47
b. Características generales	53
c. Derechos fundamentales	54
d. Organización del Estado	54
e. Reformas	55
11. Constitución de 1948	55
a. Antecedentes históricos	55
b. Características generales	56
c. Organización del Estado	56
12. Constitución de 1950	57
a. Antecedentes históricos	57
b. Características generales	58
c. Organización del Estado	59
d. Reformas	59
13. Constitución de 1974	62
a. Antecedentes históricos	62
b. Características generales	63
c. Organización del Estado	65
d. Reformas	66
14. Constitución de 1979	67
a. Antecedentes históricos	68
b. Características generales	68
c. Derechos fundamentales	69
d. Organización del Estado	69

TERCERA UNIDAD
CONSTITUCIÓN DE 1987

1. Introducción	70
2. Antecedente histórico.....	72
3. Proceso Constituyente.....	72
4. Principales características de la Constitución.....	74
5. Preámbulo.....	75
6. Fundamentos de la nación nicaragüense.....	79
7. El Estado de Nicaragua.....	84
8. Parte Dogmática de la Constitución.....	86
a. Introducción.....	86
b. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense.....	86
b.1. Derechos individuales.....	88
b.1.1 Derechos de la personalidad.....	89
b.1.1.1. Derecho a la vida.....	89
b.1.1.2. Derecho a la integridad física	89
b.1.1.3. Derecho a la honra	91
b.1.2 Derecho a la libertad	91
b.1.2.1. La libertad individual o física.....	92
b.1.2.2. Libertad de expresión.....	95
b.1.2.3. Libertades espirituales.....	95
b.1.2.4. Libertades sociales.....	97
b.1.2.5. Libertad de trabajo.....	97
b.1.2.6. Libertad de reunión	98
b.1.3 Derecho a la seguridad.....	98
b.2. Derechos políticos.....	101
b.3. Derechos sociales	103
b.4. Derechos de las comunidades de la Costa Atlántica	105
b.5. Defensa nacional.....	105
b.6. Economía nacional	106
9. Parte Orgánica de la Constitución.....	109
a. Introducción.....	109
b. Principios y fundamentos que rigen el estado social de Derecho	111
c. Poder Legislativo.....	112
c.1. Organización.....	112
c.2. Principales atribuciones.....	114
c.2.1. Función de legislar.....	114
c.2.2. Función de controlar.....	115



c.2.3. Función de representar.....	116
c.3. Proceso de Formación de Ley.....	121
d. Poder Ejecutivo.....	127
d.1.Organización.....	127
d.2.Principales atribuciones.....	129
e.Contraloría General de la República	131
e.1.Atribuciones de la CGR	132
f.Poder Judicial.....	132
f.1.Organización	132
f.2. Principales atribuciones	134
g.Poder Electoral.....	136
g.1. Organización.....	136
g.2. Principales atribuciones.....	136
h.División política administrativa	138
h.1. Poder local.....	138
h.1.1. Régimen Autonómico	138
h.1.2. Municipalidades.....	139
h.2. Comunidades de la Costa Atlántica.....	140
h.2.1. Régimen Autonómico.....	140
10. Supremacía de la Constitución.....	141
11. Control Constitucional	151
a.Leyes Constitucionales	154
a.1 Ley de Amparo.....	154
a.1.1. Recurso por Inconstitucionalidad.....	155
a.1.2. Recurso de Amparo.....	157
a.1.3. Recurso de Exhibición Personal.....	160
a.2 Ley Emergencia.....	163
a.3 Ley Electoral.....	167

CUARTA UNIDAD

REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN DE 1987

El Procedimiento de Reforma Constitucional en el ordenamiento nicaragüense.....	178
1. Reforma 1990-La Gaceta No. 46 del 06-03-90.....	180
a. Objeto y contexto de la reforma	180
b. Artículos reformados.....	181
2. Reforma 1990- Ley No. 115, La Gaceta No. 226 del 23-11-90.....	182
3. Reforma 1994- Ley No. 173, aprobada 30-08-94	182

4.	Reforma 1995- Ley No. 192, La Gaceta No. 124 del 04-07-95.....	183
a.	Objeto y contexto de la reforma.....	183
b.	Artículos reformados	185
5.	Reforma 2000- Ley No. 330, La Gaceta No. 13 del 19-01-2000.....	191
a.	Objeto y contexto de la reforma.....	191
b.	Artículos reformados	191
6.	Reforma 2004- Ley No. 490, La Gaceta No. 132 del 07-07-2004.....	193
a.	Objeto y Contexto de la reforma	193
b.	Artículos reformados	194
7.	Reforma 2005- Ley No. 520, La Gaceta No. 35 del 18-02-2005	194
8.	Reforma 2005- Ley No. 521, La Gaceta No. 35 del 18-02-2005	196
9.	Reforma 2005- Ley No. 527, La Gaceta No. 68 del 08-04-2005.....	197
10.	Ley No. 558, La Gaceta No. 203 del 20-10-2005.....	197
11.	Ley No. 610, Ley de Reforma a la Ley No. 558	198

QUINTA UNIDAD

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA Y SUS REFORMAS.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

1.	Constitución Política de 1987.....	200
2.	Ley de reforma constitucional 1990	243
3.	Ley No. 115. Ley de reforma parcial a la constitución.....	245
4.	Ley No. 173. Ley de reforma parcial a la constitución	247
5.	Ley No. 192. Ley de reforma parcial a la constitución.....	248
6.	Ley No. 199. Ley Marco de implementación de las reformas constitucionales	292
7.	Ley No. 330. Ley de reforma parcial a la constitución.....	300
8.	Ley No. 490. Ley de reforma parcial a la constitución.....	312
9.	Ley No. 520. Ley de reforma parcial a la constitución.....	315
10.	Ley No. 521. Ley de reforma parcial a la constitución.....	321
11.	Ley No. 527. Ley de reforma parcial a la constitución	324
12.	Ley No. 558. Ley de reforma parcial a la constitución	326
13.	Ley No. 610. Ley de Reforma a la Ley No. 558	329
14.	Constitución Política con sus reformas	331

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía	397
--------------------	-----

De la Universidad al campo
es la única ruta donde
la libertad florece
¡Caminémosla!
Vamos hacia el bohío, compañero,
donde miseria, paludismo y
hambre devoran al hermano.
Juntemos a su esfuerzo nuestro
esfuerzo y hagamos Patria Nueva.
De la Universidad al campo
es la única ruta donde
la libertad florece.
¡Caminémosla!

Edwin Castro Rodríguez
(Cárcel de la Aviación 1958)

Al pueblo de Nicaragua, que a través de su historia ha luchado por la instauración de la Democracia, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la solidaridad, equidad y justicia social; queda nuestro trabajo como un humilde reconocimiento de sus esperanzas y sus sueños futuros.

Presentación

Tenemos a bien poner en manos de todo aquel que se interese por el estudio del Derecho Constitucional nicaragüense un libro que sintetiza el pensamiento de la doctrina nacional y foránea más actualizada en esta materia digna del Derecho, que inspira y pauta todo el ordenamiento jurídico de un país.

Este libro lleva algunos años de estar elaborándose, y pareciere que por una feliz coincidencia hemos hecho el máximo esfuerzo para entregárselo a los lectores justo ahora en que conmemoramos los veinte años de la Constitución Política vigente en nuestro país; en este afán, tenemos que reconocer la complicidad del doctor Diego Valadés, que con sus palabras preliminares nos ha ayudado a que este sueño sea una realidad. En este texto encontrará el lector, tanto el estudiante, como todo aquel operador del Derecho, una herramienta útil para encauzar su trabajo o investigación, en materia constitucional nicaragüense.

El material presentado ha sido fruto de una labor investigativa que nos exigió hilvanar la historia constitucional de nuestro país, ofrecerla al lector con fidelidad y luego erigir sobre ella un análisis científicojurídico, que se ajustare a las corrientes más modernas del pensamiento constitucional. Presentamos un análisis de las trece constituciones que formaron el ordenamiento jurídico del país y las cuatro constituciones non natas de dicha historia; así mismo, realizamos un análisis pormenorizado de la Constitución Política de 1987 y sus reformas, las que anexamos en el presente libro.

En los momentos en que publicamos esta obra, nuestro país se encuentra en el inicio de la discusión de posibles nuevas reformas parciales a la Constitución, pero no por ello esta trabajo pierde interés ni validez, antes, por el contrario, sirva ella de base de discusión de los Constituyentes derivados y del pueblo en general en dicho arduo trabajo, quedando los autores comprometidos a un análisis posterior de dichas reformas si éstas se materializaran.

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento, en primer lugar, a nuestras familias, que supieron ser indulgentes con el tiempo que le robamos para poder llevar a cabo, nuestro trabajo; a

Linda Hurtado, futura profesional del Derecho que apoyó con su labor esta obra, a la Universidad Centroamericana, por la edición y publicación, al doctor Diego Valadés por sus generosas palabras en el prólogo de este libro, presentadas como Palabras Preliminares.

Queda en ustedes, los lectores, el determinar la valía o no de este sueño común, enjuiciar los postulados y tesis esgrimidos, bien suscribiendo posiciones que adoptamos, o bien asumiendo distintas; pero en todo caso, quedarán logrados nuestros objetivos si incentivamos la reflexión en esta difícil materia, si contribuimos, con humildad, en la formación de una incipiente escuela del Derecho Constitucional nicaragüense, y si se comparten nuestras páginas en pos del correcto ejercicio diario del Derecho.

Edwin Castro Rivera
Margine Calderón Marengo
Managua, 21 de febrero de 2007

Palabras preliminares

A través de las páginas de este libro es posible seguir la epopeya del pueblo de Nicaragua. Dar forma a las instituciones y cauce a la defensa de las libertades, a través de la norma constitucional, es un objetivo que lleva tiempo y que exige voluntad. Ese proceso constructivo del Estado a través de sus constituciones, es desarrollado con precisión y claridad por los autores de la obra, Edwin Castro Rivera y Margine Calderón Marenco, a quienes agradezco que hayan dado cabida a estas breves reflexiones preliminares. Para un profesor mexicano es un alto honor figurar en una obra que da cuenta del proceso constituyente de una nación admirada y querida, como Nicaragua.

Hay trazos de la vida institucional nicaragüense que llaman la atención por su anticipación, así no hayan dado resultados en su tiempo. Por ejemplo, en 1838, la primera carta fundamental de Nicaragua, ya como un Estado independiente, perfila una forma de atenuar la concentración del poder presidencial: un Ejecutivo que duraba dos años en el cargo y que no ejercía la jefatura de las Fuerzas Armadas, y un Congreso integrado por dos cámaras. Esta composición del poder no resultó funcional, pero su importancia reside en la capacidad de sus autores para prevenir los problemas que resultan cuando las atribuciones presidenciales son excesivas.

Otro caso digno de interés es la inclusión de la censura congressional a los miembros del gobierno, en la Constitución de 1911, que no llegó a estar en vigor.

Los autores dan cuenta, pormenorizada, de las constituciones vigentes y de las que no llegaron a entrar en vigor, pero que aun así representan un esfuerzo en el sentido de sujetar el poder político a una norma jurídica. Un elemento significativo es el representado por el nomenclador aplicado al jefe del Estado y del gobierno. La Constitución de 1848 sustituyó la denominación de Director por la de Presidente; empero, como esta Constitución no tuvo vigencia, sólo fue con la de 1858 que quedó establecida la figura presidencial en Nicaragua. Éste no es un asunto menor, porque, como en el resto del hemisferio, dio lugar a la aparición entre nosotros del presidencialismo plebiscitario.

Hasta antes de que surgieran los estados independientes del trono español, la historia de los sistemas republicanos sólo registraba seis denominaciones para los depositarios del gobierno en una república: cónsul, en Roma; podestá, en las repúblicas medievales italianas, aunque su origen se debía a una institución imperial creada por Federico Barbaroja; Lord protector, en la breve república inglesa, si bien ésta era una institución utilizada durante los períodos de regencia; estatúder, en la república holandesa; Directorio y Consulado, en las primeras repúblicas francesas, y presidente, en el caso de Estados Unidos.

La nomenclatura era, por ende, muy limitada, y algunas de estas instituciones resultaban anacrónicas o contradictorias, en relación a una república de nuevo cuño. A su vez, la figura del estatúder guardaba alguna semejanza con la del virrey. En ningún caso de nuestro hemisferio se pensó en la institución republicana del consulado, tal vez por tener a la vista la experiencia napoleónica.

En los debates constituyentes de varios países latinoamericanos recién independizados, antes de hablarse de un presidente se propuso la figura de un director, como reflejo del directorio establecido por la Constitución francesa de 1795, aunque, a diferencia de ésta, en lugar de un órgano plural (cinco miembros), prevaleció, con pocas excepciones, la idea un órgano singular.

En Argentina, la Constitución de 1814 adoptó al Director Supremo. Esta figura fue ratificada sucesivamente por las cartas fundamentales de 1815, 1817 y 1819, y sólo en el quinto texto constitucional, de 1826, apareció la denominación del presidente. Otro tanto sucedió en Chile, cuya primera Constitución, de 1818, estableció la figura del Supremo Director. Esta figura permaneció en las constituciones de 1822 y 1823, y fue hasta en la cuarta, de 1828, cuando se optó por la forma presidencial. En Colombia, la Constitución de Cundinamarca, de 1812, previó un poder ejecutivo colegiado, compuesto por tres integrantes. A su vez, la primera Constitución peruana, de 1822, adoptó la estructura directorial, mediante una Junta Gubernativa integrada por tres miembros. Uruguay, curiosamente, incorporó la figura presidencial en su primera Constitución, en 1830, y fue en la de 1952 cuando puso en vigor el modelo directorial, con un Consejo Nacional de Gobierno integrado por nueve miembros. En

Nicaragua, la Constitución de 1848 sustituyó la figura del Supremo Director por la de presidente; pero no tuvo vigencia. Fue, por ende, en la de 1858 donde se adoptó, ya de manera definitiva, la institución presidencial.

Otra figura, presente sobre todo en América del Sur, fue la del protector. Fue el caso del Estatuto Provisional de Perú, de 1821, otorgado por el libertador José de San Martín, que depositaba “la suprema potestad directiva” en un protector (artículo 1º de la sección 2ª). Antes, en 1813, en Uruguay, José Artigas también se había proclamado protector. En el caso de México, también en ese año, el proyecto constitucional de Ignacio López Rayón propuso que el gobierno recayera en un protector nacional.

La Constitución de Estados Unidos tuvo mucho cuidado al diseñar el procedimiento para elegir al presidente. Se trataba, decían los constituyentes, de crear una especie de monarca temporal, pero procuraron no darle un poder excesivo. Por eso adoptaron un ingenioso mecanismo para elegirlo: el colegio electoral. Así, la fuente de legitimidad era, en cuanto a los diputados, el pueblo; en cuanto a los senadores, los congresos de los estados, y en cuanto al presidente, un colegio electoral. El poder del presidente no procedía directamente del pueblo, sino de un órgano intermedio. Por eso se registran varios casos en los que un presidente ha sido elegido a pesar de tener menos votos populares que su adversario.

En Francia, en cambio, se introdujo una importante variación al sistema presidencial, porque la Constitución de 1848 acentuó las notas monárquicas del presidente. La segunda república francesa fundó el presidencialismo plebiscitario, al establecer que el presidente sería elegido por sufragio universal y que, si ningún candidato obtenía más de la mitad de los votos, la Asamblea designaría presidente, por mayoría absoluta, entre los cinco candidatos más votados.

Paulatinamente, las constituciones del hemisferio fueron acogiendo la idea de la elección plebiscitaria del presidente. Bolivia la adoptó en la Constitución de 1851; Perú, en 1856; Venezuela, en 1858; Ecuador, en 1861; El Salvador, en 1864; Honduras, en 1865; Brasil, desde su primera constitución republicana, en 1891; Nicaragua, a partir de la Constitución de 1893; Panamá, desde su primera

Constitución, en 1903; Colombia, mediante la reforma de 1905 a la Constitución de 1886; Uruguay, en su segunda Constitución, de 1918.

En la actualidad, la elección indirecta del presidente no es una opción que pueda siquiera sugerirse. Conforme al desarrollo de los sistemas democráticos, no cabría plantear la supresión del derecho de los ciudadanos a elegir al presidente de la República. En cambio, sí existen otros mecanismos, como el gobierno de gabinete, cuya adopción ha proliferado en los sistemas presidenciales, que permiten distinguir entre las funciones de representación del Estado y las del ejercicio del gobierno. Ambas pueden recaer en el presidente, pero no confundidas. Los presidentes pueden seguir desempeñando ambas tareas, a condición de que, para no asfixiar al sistema representativo, se permita que el Congreso ejerza facultades de control sobre el órgano colegiado denominado gobierno.

En esta obra, los autores adoptaron una estructura que facilita la lectura continua o la consulta aislada. Es un trabajo de considerable utilidad, porque la sistematización de cada Constitución, explicada siempre en su contexto histórico, permite entender sus alcances y diferenciarla de los restantes textos constitucionales.

Ahora bien, examinar la evolución constitucional nicaragüense cobra especial sentido cuando sirve para conocer el punto en el que se encuentran las instituciones. El establecimiento del Estado laico, las variaciones en cuanto a la integración del Congreso, la forma adoptada por el gobierno y sus relaciones con los legisladores; los avances democráticos y las recaídas dictatoriales; la consolidación de los derechos fundamentales y la expansión progresiva de los derechos de contenido social, van marcando la senda constitucional de una nación involucrada en la construcción de un ordenamiento jurídico que le garantice libertades y justicia.

Los autores también abordan otra cuestión relevante: la intervención americana. Éste es un factor presente en diversos grados a lo largo del continente. Por ejemplo, no puede desconocerse que la Doctrina Monroe incluía la proscripción del sistema parlamentario en el continente americano, para evitar la posible afinidad política entre Gran Bretaña y los países del hemisferio independizado de España.

La lucha entre liberales y conservadores escenificada en Nicaragua, también es un rasgo común de nuestro hemisferio; se trata de una tensión permanente, que de manera sistemática se va resolviendo a favor del laicismo y de la extensión de los derechos sociales. Empero, en la medida en que las instituciones sociales hayan servido para auspiciar la hipertrofia burocrática y el paternalismo, también se han tenido que adoptar instrumentos propios de la democracia representativa. La construcción de esos mecanismos no es sencilla ni rápida, pero resulta indispensable para contar con un sistema de controles funcionales que no entorpecen la capacidad operativa de las instituciones, pero sí reducen la discrecionalidad de las autoridades, la concentración del poder y la corrupción.

El Derecho Constitucional de Nicaragua es un tipo de trabajo que sirve por igual al estudiante que al profesional, porque presenta un panorama que hace inteligibles las instituciones y sus cambios sucesivos. En todos los casos, los autores describen la estructura general de cada Constitución, para luego analizar sus elementos más representativos. La complejidad creciente de los ordenamientos constitucionales se pone de manifiesto cuando además de la organización y el funcionamiento de los órganos tradicionales del poder, incorporan a los partidos políticos y a los sistemas electorales, sin los cuales sería imposible articular los sistemas representativos de nuestro tiempo.

Los medios de defensa de la Constitución, y los requisitos para reformar la norma suprema, son también temas que los autores valoran y desarrollan con amplitud. Es digno de mención que, sin abusar del aparato crítico, los profesores Edwin Castro Rivera y Margine Calderón Marengo incluyan las fuentes más autorizadas de la doctrina en la materia.

Para completar su cuidadosa exposición, presentan el texto constitucional vigente y las actualizaciones de que ha sido objeto. De esta manera, son congruentes con el objetivo perseguido con su trabajo: dar seguimiento a la evolución constitucional nicaragüense, sin olvidar un solo detalle. Por eso, hacia el final del volumen aparece un conjunto de disposiciones reformadas, que muestran cómo es posible cambiar la Constitución sin cambiar de Constitución.

Una obra como ésta contribuye a fomentar la cultura constitucional, indispensable para la vida democrática. Los autores merecen un amplio reconocimiento por el trabajo que han realizado y, por mi parte, dejo constancia de mi gratitud por haberme ofrecido la hospitalidad generosa de estas páginas.

Diego Valadés

Diego Valadés. Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Academia Mexicana de la Lengua, del Colegio Nacional, y del Colegio de Sinaloa.

PRIMERA UNIDAD

CONSTITUCIONES PREVIAS AL CONSTITUCIONALISMO EN NICARAGUA

1. CONSTITUCIÓN DE BAYONA

Empezaremos nuestro estudio partiendo de la Constitución de Bayona, Constitución que hemos llamado previa a la historia constitucional nicaragüense. La influencia de la Ilustración en España y en la América Hispánica se plasmó en la Constitución de Bayona. El 6 de julio de 1807 Napoleón presentó el Proyecto de Constitución, y la Carta Magna fue promulgada el 06 de julio de 1808. Ésta no fue aceptada por el pueblo español ni por la Capitanía General de Guatemala, que terminó reconociendo el juramento de fidelidad al rey Fernando VII de España. El juramento se celebró en Guatemala el 12 de diciembre de 1808.

La Constitución de Bayona es breve, de 146 artículos. Es una mezcla de liberalismo francés con ciertas instituciones de la tradición española y el autoritarismo pragmático napoleónico.

Ésta no presenta un capítulo destinado a los derechos y libertades, ya que se encuentran dispersos en el texto constitucional, entre ellos podemos mencionar que: el Senado velaba por la conservación de la libertad individual y la libertad de imprenta (Arto. 39); existía el control constitucional para garantizar la libertad individual, a través de un procedimiento de Hábeas Corpus (Arto. 40 y siguientes), así como una Junta de cinco senadores, Junta Senatorial que velaba por la libertad de imprenta (Arto. 45 y siguientes).

Se establece la inviolabilidad del domicilio (Arto. 126 y siguientes); la libertad de industria, comercio y cultivo (Artos. 88 y 89); la supresión de los privilegios comerciales (Arto. 90); la igualdad de las colonias con la metrópoli (Arto. 87); la supresión de aduanas internas (Arto. 116); la igualdad en el sistema de contribuciones (Artos. 117 y 118); prohibición de la exigencia de la calidad de nobleza para los empleos civiles, militares y eclesiásticos (Arto. 140); así como la abolición del tormento y todo rigor o apremio no autorizado por la ley en la detención y ejecución de un delito (Arto. 133).

En dicha Constitución se establece un Estado Monárquico, donde el Rey es el titular del Ejecutivo, y colaboran con él, los ministros, el Senado y el Consejo de Estado. Eran nueve ministros nombrados por el Rey. El Secretario de Estado, con rango y calidad de Ministro, refrendaba los decretos reales. El Senado estaba integrado por los infantes mayores de 18 años y 24 personas mayores de 40 años nombrados por el Rey, tenían carácter vitalicio y sus funciones eran de control constitucional, de libertad individual, de libertad de imprenta, de declaración de inconstitucionalidad de decisiones de las Juntas Electorales, de suspensión constitucional, por sublevación y amenazas a la seguridad pública a petición del Rey.

El Consejo de Estado estaba presidido por el Rey y nombraba a todos sus miembros; era un órgano de consulta, tenía algunas funciones legislativas y servía de órgano de solución de competencias.

El Poder Legislativo lo ejercían las Cortes, que se formaban de tres estamentos: la nobleza, el clero y el Estado llano, formando una sola Cámara que se reunía al menos cada tres años. La Cámara de Diputados estaba formada por 25 miembros del clero, 25 de la nobleza, 62 del pueblo en representación de las provincias y colonias, 30 de las principales ciudades, 15 diputados representantes del comercio, 15 representantes de las universidades, y 22 de las provincias (colonias) (representantes ante las Cortes, Artos. 91 y 92).

El Poder Judicial se caracterizaba por la independencia en el desempeño de sus funciones y la inamovilidad de los jueces (Artos. 97-100). Se suprimieron los Tribunales Especiales y se procuró la unidad de los códigos: un solo Código de leyes civiles y criminales y un solo Código de Comercio (Artos. 96 y 113). Se establecieron los jueces de conciliación, y se formó un tribunal de pacificación y tres instancias en los juicios: Primera instancia, Tribunal de Apelación y un Tribunal de Reposición ante el Consejo Real (Artos. 101 al 107). Los procesos criminales eran públicos (Arto. 106).

Una Alta Corte Real conocía de los delitos personales cometidos por los individuos de la Familia Real, los ministros, los senadores y los consejeros de Estado. En sus sentencias no cabían recursos en contra.

La Constitución de Bayona establecía el carácter confesional del Estado. En el Arto. 1 determina que la religión Católica, Apostólica y Romana sería la religión del Rey y de la Nación (en España y en todas las posesiones españolas), no permitiéndose ninguna otra.

Esta Constitución no logró establecer un Estado representativo, pero sirvió de impulso e influencia para la Constitución de Cádiz de 1812.

2. CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ (1812)

La imposición de la Constitución de Bayona y el nombramiento de José Bonaparte, “José I” Rey de España, por el emperador Napoleón Bonaparte de Francia, aumentó la resistencia española contra Napoleón y contra el dominio francés ejecutado por las juntas locales o provinciales. Surgieron juntas por toda España y se formó una Junta Central, ésta a su vez nombró un Consejo de Regencia, que el 14 de febrero de 1810 convocó a Cortes Generales y Extraordinarias (Cortes Constituyentes). En la convocatoria se hacía un llamado a integrar un diputado por cada provincia americana. Las provincias de Guatemala nombraron a seis diputados a las Cortes de Cádiz. Por Nicaragua fue José Antonio López de Plata; por Guatemala, Antonio Larrázabal; por El Salvador, José Ignacio Ávila; por Honduras, José Francisco Morejón; por Costa Rica, Florencio del Castillo, y por Chiapas, Mariano Robles.

Las Cortes de Cádiz redactaron y aprobaron la Constitución con casi todo el territorio del país ocupado por las tropas francesas. La misma Plaza de Cádiz estaba sitiada por el Ejército francés. Los trabajos duraron todo el año de 1811, y fue promulgada hasta el 19 de marzo de 1812, día de San José, por eso popularmente a esta Constitución se le llamó “La Pepa”.

Es una Constitución muy extensa, con 384 artículos distribuidos en diez títulos; a veces cae en minuciosidades reglamentarias, y es de corte liberal, con gran influencia de la Revolución Francesa, pero con instituciones, derechos o principios extraídos de la tradición constitucional española.

Estableció la monarquía, pero una monarquía limitada por la propia Constitución; además, determinó la separación de poderes,

el reconocimiento de los derechos individuales, la limitación del monarca, la supresión de privilegios y la representatividad en las Cortes, estableciendo una democracia representativa. Las Cortes, como representantes de la Nación, ejercían el poder constituyente, y la reunión de todos los diputados representaba a la Nación en ellas (Poder Legislativo).

A pesar de todo ello, de su carácter democrático, no establecía un Capítulo Único sobre derechos y libertades, pero muchos de ellos se encontraban distribuidos en diversos capítulos, por ejemplo: el Arto. 4 hace una declaración general sobre la libertad y derechos fundamentales, tales como el derecho a la propiedad, libertad de pensamiento, derecho a educación elemental e inviolabilidad de domicilio.

Profundizó en los derechos y en las garantías procesales penales: prohibición de detención ilegal, sin orden del juez (Arto. 287); juicio breve y sin vicios (Arto. 286); no declarar en su contra (Arto. 291); excarcelación bajo fianza (Artos. 295 y 296); cárceles para asegurar y no para molestar a los presos (Arto. 297); 24 horas para comunicarle al reo las causas de su detención y el nombre de su acusador si existiera; juicio mixto, secreto y público; debían leerse al reo todos los documentos y las declaraciones testificales integrantes, de allí en adelante el juicio sería público (Artos. 301 y 302); se prohibió el tormento, los apremios y la confiscación de bienes (Artos. 303, 304 y 305); se estableció la posibilidad de jurado (Arto. 307). La Constitución de Bayona lo estableció, pero no lo aplicó.

También profundizó en los derechos civiles como el derecho al arbitraje para solución de conflictos (Arto. 280). Se estableció la conciliación previa al juicio, el conciliador era el alcalde (Artos. 282, 283 y 284). Todo juicio se daba por terminado en tres instancias (Arto. 285). Se suprimieron los fueros especiales, aunque los mantuvieron para militares y eclesiásticos (Artos. 248, 249 y 250).

Esta Constitución establecía también un Estado Confesional. En el Arto. 12 proclamó como religión perpetua de la nación española la Católica, Apostólica y Romana, y prohibía el ejercicio de cualquier otra. Esto resultó contradictorio con el espíritu liberal y nacionalista de su contenido.

La Constitución de Cádiz estableció claramente la separación de poderes: el Rey representaba el Poder Ejecutivo; las Cortes eran un órgano representante de la soberanía nacional, de carácter unicameral. El Poder Legislativo velaba por el cumplimiento de la Constitución y podía reformarla; establecía el Presupuesto Anual de Gastos de la Administración Pública y las contribuciones e impuestos; proponía y decretaba leyes, las interpretaba y las derogaba; vigilaba la libertad de imprenta; resolvía sobre créditos de la Nación; guardaba los bienes de ésta y promovía la industria. Las leyes eran sancionadas por el Rey.

En cuanto a la administración local, se establecieron los ayuntamientos o gobiernos de los pueblos, electos por el pueblo de forma indirecta y de segundo grado. El pueblo elegía electores que a su vez seleccionaban a los funcionarios: alcalde, regidores y procuradores síndicos (presididos por el jefe político o, en su defecto, por el alcalde).

Se establecía la Supremacía Constitucional y la estabilidad de la misma, instituyendo un procedimiento rígido de reforma que exigía ocho años sin alteración de la Constitución, que la reforma fuera aprobada por dos terceras partes, presentada tres veces con intervalo de seis días de una a otra para decidir si se admitía. Podía decidirse en doble aprobación, en diputaciones diferentes.

La Constitución de Cádiz se había convertido en un símbolo, y con las constituciones de Francia de 1791 y de Estados Unidos de 1787, era uno de los mejores modelos del constitucionalismo liberal occidental. Se llegó a decir que era mejor que la francesa por su nacionalismo, y tuvo gran influencia en el resto de Europa. Estuvo vigente en Portugal y en varios reinos de Italia.

Pero Fernando VII, influido por el júbilo de su recibimiento, por la influencia de la nobleza y de la Iglesia, por el apoyo de ciertos militares para instaurar la monarquía absoluta, y por el Manifiesto de los Persas (69 diputados) para derogar el régimen constitucional, el 4 de mayo de 1814 declaró nula y sin ningún valor ni efecto la Constitución de Cádiz, disolviendo las Cortes, e invocando su poder de origen divino. Gobernó como Rey absoluto y encarceló a los diputados y liberales más destacados, restableciendo el Santo Oficio y los privilegios a la nobleza y a la Iglesia.

La burguesía, la clase media, la clase obrera con tradición liberal, campesinos despojados por los señores y militares, aglutinados en un fuerte movimiento, pedían el cambio. Se realizaron varios levantamientos militares, con una actitud pasiva por parte del Ejército, que culminó el 1º de enero de 1820, con la sublevación del coronel Riego, quien comenzó a proclamar la Constitución de Cádiz, la cual fue aceptada y apoyada por las principales ciudades, lo que obligó a Fernando VII a establecer de nuevo la monarquía constitucional.

Se concedió amnistía, se convocó a elecciones conforme la Constitución de Cádiz y se restablecieron las Cortes, que eran mayoritariamente liberales; se restableció buena parte de la Constitución de Cádiz y se dictó el primer Código Penal. A este nuevo período constitucional español, de 1820 a 1823, se le denominó el “Trienio Constitucional”, y tuvo gran influencia en Europa y América.

La caída de Napoleón y la crisis interna de Europa, generaron la Santa Alianza para contener el avance liberal y restaurar las monarquías.

En Portugal e Italia ya había hecho eco. En España, Fernando VII aceptó que entrara el ejército de los cien mil hijos de San Luis (130,000 soldados franceses al mando del Duque de Angulema). Por decreto del 1º de octubre de 1823, declaró nulo todo lo actuado por el gobierno constitucional y las Cortes, declaró nula la Constitución y restableció el absolutismo. Se abrió un nuevo período político en España, de 1823 a 1833, la década ominosa, por la tremenda persecución que realizó Fernando VII, y en 1814, se estableció un régimen de corte absolutista y de regreso al pasado.

SEGUNDA UNIDAD

HISTORIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL NICARAGÜENSE

1. CONSTITUCIONES FEDERALES

a. Constitución de 1824

El 1 de julio de 1823, la Asamblea Nacional Constituyente promulgó el Decreto de Independencia Absoluta, con el que se crea también la Federación Centroamericana.

La Constitución de la Federación Centroamericana se fundamentó esencialmente en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, la que hay que ver en el contexto de las ideas de la época, plasmadas con anterioridad en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, en la Declaración de Filadelfia, y en las constituciones de Francia y Cádiz.

El 15 de septiembre de 1821, en el Palacio de la Capitanía General de la Ciudad de Guatemala, se proclamó el Acta de la Independencia de Centroamérica. En el artículo 2 de este documento se manda “que sin demora alguna se sirvan proceder a elegir Diputados y Representantes suyos (de las 5 provincias)... a formar el Congreso que debe la forma de Gobierno y la ley fundamental que debe regir”. En los Artos. 3, 4 y 5 del Acta de Independencia se establecen los procedimientos para la elección de estos constituyentes. En el Arto. 6 se dice que para el 1^{ero} de marzo de 1822 deben estar reunidos en la Capitanía de Guatemala todos los diputados para elaborar la Constitución.

En toda América había una doble visión del futuro régimen de gobierno que debía establecerse: unos preferían un gobierno monárquico regulado por una Constitución (ejemplo: San Martín, Iturbide, González, y Saravia, en Nicaragua) y otros preferían la instauración de un gobierno republicano (como Bolívar, o Pedro Molina en Guatemala).

En medio de esta discusión, el general Iturbide es proclamado Emperador de México, invade las antiguas provincias centroamericanas y las obliga, el 5 de enero de 1822, a firmar el Acta

de Anexión, un “gobierno monárquico moderado”. Esto ocasionó resistencia de los republicanos que iban en búsqueda de un gobierno más liberal: la resistencia salvadoreña, por ejemplo, así como Cleto Ordóñez, en Nicaragua, entre otros.

El 19 de mayo de 1823, Iturbide es declarado emperador por la Asamblea Constituyente de México, y a finales de este año sustituyó al jefe político, Gabino Gaínza, por Vicente Filísola; sin embargo, Iturbide es resistido en Centroamérica, y, además, combatido en México por los republicanos, quienes obligan a la misma Asamblea Constituyente, por decreto del 31 de marzo de 1823, a deponerlo y a cesar al gobierno existente desde el 19 de mayo de 1823, y en su lugar se instaló una Junta Provisional de tres miembros: “Supremo Poder Ejecutivo”.

Viendo derrotado a Iturbide, Don Vicente Filísola, aún Jefe Político de Centroamérica, en Decreto del 29 de marzo de 1823, con arreglo al texto del Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821, convocó a un Congreso de Diputados de las Provincias de Centroamérica.

Efectivamente, el Congreso se instaló el 24 de junio de 1823, y el 1^{er} de julio de ese año decretó la independencia absoluta de Centroamérica, tanto de España como de México o de cualquier otra potencia. Ese día nació la República Federal Independiente, que recibió el nombre de “Provincias Unidas del Centro de América”. Los deseos escritos en el Acta de la Independencia recobraban vida dos años después.

Este Congreso se transformó en Asamblea Nacional Constituyente y elaboró la Constitución Federal que fue promulgada el 24 de noviembre de 1824.

Precedida de tales acontecimientos y con la influencia de las constituciones de Estados Unidos, Francia y Cádiz, y haciendo suyos los derechos soberanos del Pueblo, formado por todos los habitantes de Centroamérica (Arto. 3), la Asamblea Constituyente, reunida en Guatemala, decretó esta Constitución para “afianzar los derechos del hombre y del ciudadano sobre los principios inalterables de libertad, igualdad, seguridad y propiedad” (Arto. 2), a la vez que deseaba “establecer el orden público y formar una perfecta federación”.

Es una Constitución de amplio articulado, en total 211, en la cual se constituyó un Estado Federado, conformado por estados federados (Artos. 8 y 9). Estableció claramente la división de poderes tanto a nivel federal como a nivel estatal: Ejecutivo, Judicial y Legislativo. En ella se reconocía la existencia de los derechos del hombre y de los ciudadanos consagrados en una serie de derechos y garantías individuales, agrupados en los Títulos X (Arto. 152 y subsiguientes) y XI (Arto. 175 y siguientes), aunque se encuentran algunos otros derechos dispersos en otros artículos.

Es una Constitución de corte liberal. No es una Constitución desarrollada en materia social. Se establecía el principio de soberanía nacional en los Artos. 1 y 2. En el Arto. 11 se establecía un Estado confesional, que tenía como religión oficial la Católica, Apostólica y Romana, con exclusión del ejercicio público de otra, influencia de Cádiz y Bayona. El régimen de gobierno era popular, representativo y federal.

El sistema electoral era influencia de la Constitución de Cádiz, un sistema complicado. La elección era indirecta, y a través de ella se elegía a los diputados ante el Congreso, al Presidente y al Vicepresidente de la República, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia y a los senadores del Estado.

Existía una elección de tercer grado: las Juntas Populares reunían a todos los ciudadanos que seleccionaban a electores primarios. Éstas se reunían en Juntas de Distrito que elegían a la Junta Departamental, los que escogían a los funcionarios indicados. El Congreso Federal hacía el escrutinio. La ciudadanía la tenían todos los habitantes naturales o naturalizados, casados, mayores de 18 años, siempre que ejercieran profesión útil o tuviesen medios conocidos de subsistencia.

Se establecía con claridad el proceso de formación de las leyes: el Congreso las aprobaba, el Senado las vetaba o sancionaba y el Presidente las promulgaba.

Algunos derechos, libertades y garantías que se destacan en esta Constitución son los siguientes: no hay esclavitud; se prohíbe el tormento, apremios, confiscación de bienes, azotes o penas crueles,

inviolabilidad del domicilio, derecho de reuniones públicas; se prohíbe, así mismo, la pena de muerte, salvo en los delitos contra el orden público, en el asesinato, homicidio premeditado o seguro. Se estableció el sistema de Jurado, nadie podía ser detenido si no era con orden escrita de autoridad competente, sólo que se temiera la fuga del delincuente o se encontrare en el acto de delinquir, y en esos casos debía ser llevado al juez en 48 horas o puesto en libertad. Había libertad bajo fianza, salvo en los casos que la ley lo prohibiera.

En el Arto. 174 se estableció que ninguna Ley del Congreso ni de las asambleas estatales podía contrariar las garantías contenidas en el Título X, sólo ampliarlas a señalar otras nuevas.

En cuanto a la organización del Estado se destaca:

- 1) Poder Legislativo de la Federación: residía en un Congreso conformado por representantes popularmente elegidos en razón de uno por cada treinta mil habitantes. Por cada tres representantes se escogía un suplente. Debían ser mayores de 23 años, tener cinco años de ser ciudadanos, del estado seglar o del eclesiástico secular, y encontrarse en ejercicio de sus derechos. Sus atribuciones estaban en el Arto. 69, entre ellas: hacer leyes, decretar las rentas generadas para cubrir los gastos, reconocer la deuda nacional y sus formas de pago, ratificar los acuerdos y tratados internacionales, conceder amnistía o indulto, y resolver sobre la creación y admisión de nuevos estados.
- 2) El Senado: estaba compuesto por miembros elegidos popularmente a razón de dos por cada Estado, podían ser seglares o eclesiásticos seculares. El Senado era presidido por el Vicepresidente, quien votaba sólo en caso de empate. Sus funciones eran: sancionar todas las resoluciones del Congreso; velar por el cumplimiento de las leyes generadas y por la conducta de los funcionarios del Gobierno Federal, y dar consejo al Poder Ejecutivo.
- 3) Poder Ejecutivo: lo ejercía un Presidente y en su defecto un Vicepresidente, nombrados por el pueblo de todos los estados de la Federación. Ambos debían ser seglares y electos por cuatro años, reelegibles por una sola vez, sin intervalo

alguno. Entre sus funciones estaban: promulgar y publicar las leyes, proponer amnistías o indultos al Congreso, dirigir las Fuerzas Armadas de la Federación, nombrar a propuesta del Senado a los diplomáticos, al Comandante de Armas de la Federación, a los oficiales superiores del Ejército, a comandantes de puertos y fronteras, a los ministros de la Tesorería General y a los jefes de rentas generales. Se encargaba, además, de nombrar de ternas presentadas por la Corte Suprema a los tribunales inferiores de los asuntos federales, de presentar al Congreso los gastos hechos, un presupuesto para los venideros, y medios para cubrirlos; de proponer al Congreso el número de secretarios de despachos, de la organización de los secretarios y de sus competencias para su designación.

- 4) El Poder Judicial: residía en la Corte Suprema de Justicia, que estaba compuesta de cinco a siete miembros elegidos por el pueblo para un período de seis años; debían ser mayores de 30 años y del estado seglar. No se exigía preparación jurídica. Las atribuciones estaban en los Artos. del 136 al 140, y entre ellas destacan: resolver controversias entre poderes, conocer causas civiles de los diplomáticos, y causas criminales cuando el Senado haya declarado que ha lugar a formación de causa.

Explicítamente, la Constitución del Estado de Nicaragua regula todo lo relativo a las reformas constitucionales en el Título XIII, denominado “De la Observancia de la Constitución y Leyes y la Reforma de la Misma”, último Título de la Constitución, Capítulo Único, del Arto. 165 al 167.

Todas las reglas fundamentales para realizar una Reforma a la Constitución se encontraban en el Arto. 165 Cn., el cual señalaba que en cualquier tiempo en que se juzgare necesaria la reforma o adición de algunos artículos debía realizarse de la siguiente forma:

El proyecto de reforma o adición debía presentarse por escrito, firmado por lo menos por tres diputados, debiendo leerse por dos veces con el intervalo de ocho días entre lectura y lectura. Admitido un proyecto a discusión, debía pasar a Comisión, la cual evacuaría

el Dictamen después de doce días. Éste debía ser leído por dos veces, con un intervalo de ocho días entre lectura y lectura.

La Reforma o adición debía ser aprobada por los dos tercios (2/3) de votos de los diputados que se hallaren presentes.

Sin embargo, para su aprobación y validez como parte de la Constitución, las reformas o adiciones debían ser sancionadas por la legislatura inmediata.

Según lo establecido en el Arto. 167 Cn., la presente Constitución no podía ser objeto de una reforma total (revisión total) hasta pasados tres años de su entrada en vigor. En dicho caso, habiendo cumplido con los requisitos antes expuestos sobre la Reforma Parcial, debía convocarse a una Asamblea Constituyente, cuyos diputados tenían poderes bastantes y especiales.

b. Constitución de 1826

El Estado de Nicaragua fue el último en promulgar su Constitución debido a los conflictos bélicos (guerra civil) que desde 1824 convulsionaban gran parte del territorio. Se dio la existencia simultánea de cuatro juntas de gobierno en el Estado: en León, en El Viejo, en Managua y en Granada. El Gobierno Federal envió primero a José Justo Milla, quien fracasó en su misión mediadora. Luego envió al coronel Manuel de Arzú, quien tampoco logró su objetivo. Por último, mandó al general Manuel José Arce, quien consiguió momentáneamente su objetivo a inicios de 1825, cuando ya se había promulgado la Constitución Federal de 1824. Lograda la pacificación, Arce se retiró y dejó al mando al coronel Manuel Arzú, quien basado en la Constitución Federal convocó a elección de Asamblea Constituyente y a elección de autoridades del Ejecutivo del Estado: jefe y vicejefe, por espacio de cuatro años (Constitución de 1824, Arto. 187).

La primera elección popular en Nicaragua se llevó a cabo el 8 de abril de 1825, y se conformó la primera Asamblea Constituyente del Estado de Nicaragua, que a su vez nombró el 10 de abril, como jefe y vicejefe de Estado, a Don Manuel Antonio de la Cerda y a Don Juan Argüello, respectivamente, quienes tomaron posesión el 22 de abril, en la ciudad de León, para un período de cuatro años.

La elección entre ambos fue muy reñida. Se creía que Argüello sería vencedor, pero Don Cleto Ordóñez dio sus votos a De la Cerda para que ganara. Manuel Antonio de la Cerda, inmediatamente de asumir, emitió decretos que le ganaron la antipatía del pueblo y de la misma Asamblea: suprimió la libertad religiosa y de reunión, prohibió los piropos callejeros y exigió el pasaporte para el tránsito interno. Ante la acusación de Argüello en la Asamblea Constituyente, ésta lo destituyó en noviembre de 1825, siete meses después de electo, y fue sustituido por Juan Argüello. Éste fue el primer golpe de Estado en Nicaragua, y todavía no se había promulgado la primera Constitución.

El 26 de abril de 1826, cuando era Jefe de Estado Juan Argüello, se promulgó la Constitución del Estado de Nicaragua. Ésta era prácticamente una copia de la Federal de 1824. Era una Constitución breve, de 168 artículos, de tipo liberal, en la cual se establecieron como principios fundamentales:

- a) La soberanía y el federalismo.
- b) La libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad.

El Gobierno se fundaba en el mandato popular representativo y era republicano; era su objetivo la felicidad de los individuos que componían el Estado. La soberanía del Estado radicaba en el pueblo, la Ley estaba por encima de cualquier funcionario.

La principal Ley era la Constitución, que regulaba a las autoridades, y éstas no podían pasar los límites fijados por ella. En el Capítulo Único del Título III se consagraron los Derechos y Libertades del Hombre y de los Ciudadanos, así como sus deberes, entre ellos: libertad de palabra, escritura e imprenta; a ser libres y no vendidos (Arto. 26); libertad de movimiento interno y externo (Arto. 31); derecho de ser admitido en los empleos del Estado sin ninguna distinción que no fuera sus capacidades; derecho de defensa; derecho de no ser torturado; inviolabilidad de domicilio salvo mandato por escrito de autoridad competente; derecho a no testimoniar en su contra y a que su pena no trascendiera a otros.

En el tema de la división de poderes, el Poder Ejecutivo estaba presidido por un jefe y un vicejefe nombrados por el pueblo de

manera indirecta, por un período de cuatro años, los cuales podían ser reelegidos una sola vez sin intervalos. El Poder Legislativo residía en una Asamblea compuesta por diputados electos popularmente (Arto. 42), del estado seglar o del eclesiástico secular. El Poder Judicial residía en los tribunales y en los jueces nombrados según la Constitución. Los militares y eclesiásticos tenían su propio foro.

A pesar del corte liberal, era un Estado confesional, y se establecía como la religión del Estado la Católica, Apostólica y Romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra religión.

2. CONSTITUCIÓN de 1838

a. Antecedentes históricos

La Constitución de 1838 es la primera Carta Magna de Nicaragua como Estado Unitario e Independiente. Es resultado de la separación del Estado de Nicaragua del Estado Federal de Centro América, mediante Decreto de la Asamblea nicaragüense del 30 de abril de 1838. Es así, como el 12 de noviembre de ese año, es promulgada la primera Constitución de Nicaragua, como Estado Libre, Soberano e Independiente.

En 1826, en la Federación Centroamericana estalló la guerra civil que concluyó en 1829, con el triunfo de bando liberal de Francisco Morazán. Se aumentaron los conflictos entre liberales y conservadores, se expulsaron y expropiaron a líderes políticos y religiosos, lo que incendió aún más los ánimos. El Gobierno Federal envió a Dionisio Herrera (hondureño), quien logró la pacificación, expulsando de Nicaragua a don Juan Argüello. Manuel Antonio de la Cerda ya había sido fusilado por su rival en plaza pública. Dionisio Herrera fue electo Jefe de Estado.

En el Gobierno Federal, en 1830, Francisco Morazán fue electo Presidente; posteriormente fue reelecto, aunque no acabó el nuevo período porque volvió a estallar la guerra. Renunció en 1839, y derrotado, en 1840 se fue al exilio en Panamá. Retornó en 1842, y fue capturado y ejecutado.

En Nicaragua, después del período de Herrera, Don Benito Morales se hizo cargo del Ejecutivo hasta 1834. Lo sucedió provisionalmente

José Núñez. Estalló de nuevo la guerra encabezada por Cándido Flores. En 1835 le sucedió José Zepeda, con José Núñez como Vicejefe. José Zepeda murió violentamente en un levantamiento armado de Bernardo Méndez y Casto Fonseca, por lo que José Núñez asumió el poder nuevamente. La Asamblea decretó que había lugar a la revisión de la Constitución de 1826, y convocó a una Asamblea Constituyente, la que se instaló el 31 de marzo de 1838, y el 30 de abril del mismo año, un mes después, decretó que asumía el Poder Legislativo.

Reinaba la anarquía en todo el Estado y en la Federación. La Asamblea Constituyente, el mismo 30 de abril de 1838, decretó que el Estado de Nicaragua se separaba de la Federación. Fue el principio de la desintegración, pues poco a poco fueron separándose los otros estados, y desapareció la federación de las “Provincias Unidas del Centro de América”, frustrándose el sueño de Francisco Morazán.

Una vez decretada la separación de Nicaragua, y declarando que ésta era un Estado libre, soberano e independiente, la Asamblea Constituyente de Nicaragua trabajó en la elaboración de la nueva Constitución, que se promulgó el 12 de noviembre de 1838, aún bajo el mandato de José Núñez como Jefe de Estado.

b. Características generales

Mediante la Constitución Política de 1838 se establecía un régimen republicano, popular y representativo. Prevalió durante este período un sistema semipresidencialista, a cuya cabeza había un Supremo Director de Estado elegido por el pueblo, que ejercía su mandato por un período de dos años, y tenía prohibida la reelección en el período próximo posterior a su mandato, pero existía la posibilidad de volverse a postular, luego de dos años de terminado el mismo (Arto. 132 Cn.).

Esta Constitución se caracterizaba por:

- 1) Poseer un marcado carácter liberal y no ser desarrollada en materia social.
- 2) Ser extensa: poseía 198 artículos en su cuerpo normativo.
- 3) Conservar una estructura bastante similar a la de 1826, aunque era más abierta y liberal.

c. Derechos fundamentales

Los deberes y derechos de los nicaragüenses y ciudadanos están en el Capítulo IV, entre ellos se destacan: libertad, igualdad, seguridad y propiedad, protección de la ley, libertad de pensamiento, palabra, escritura e imprenta sin previa censura, libertad de movilización interna y externa, no ser detenido arbitrariamente, inviolabilidad de la vivienda, no confiscación, igualdad de oportunidades.

d. Organización del Estado

En cuanto a la organización del Estado, éste era un Gobierno republicano, popular representativo, dividido en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El Poder Ejecutivo era débil, con dualidad de mando; por un lado, el Supremo Director, y, por otro, un Comandante de las Fuerzas Armadas. Entre las atribuciones contempladas para este Supremo Director estaban: publicar la Ley, proponer a las cámaras los proyectos de Ley que juzgare convenientes y las adiciones, aclaraciones y reformas que a su juicio necesitaren las leyes anteriormente dadas, devolver a las Cámaras (dentro del término de Ley) los proyectos de Ley y resoluciones que le pasaren aprobadas y a su juicio fueren de inconveniente ejecución o perjudiciales, convocar de manera extraordinaria a las Cámaras cuando el Estado se hallare amenazado de invasión o trastornado el orden público, etc.

El Poder Legislativo residía en un Congreso compuesto por dos cámaras: la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados (Arto. 83 Cn. de 1838). La Cámara del Senado estaba integrada por senadores nombrados por las Juntas de Departamentos. Cada Junta debía elegir dos senadores y dos suplentes. La Cámara de Diputados estaba integrada por diputados electos por las Juntas de Electores de Distrito, a razón de uno por cada veinte mil habitantes.

Apesar de existir independencia entre ellas, las cámaras podían actuar unidas, teniendo en cada caso atribuciones diferentes. El Congreso, compuesto por las cámaras de senadores y de diputados, sesionaba cada año. Para emitir resoluciones era necesaria la concurrencia de las dos terceras partes de los miembros que componían cada Cámara, y el acuerdo de más de la mitad de los concurrentes.

Todo lo relativo a la reforma constitucional se contenía en el Capítulo XIV (último Capítulo de la Constitución), titulado: “De la Observancia de la Constitución y leyes y reformas de la misma”, en los artículos que van del 194 al 196 Cn.

No existía mucha diferencia en este Capítulo, puesto que es exactamente igual al Título XIII, denominado “De la Observancia de la Constitución y leyes y la reforma de la misma”, de la Constitución de 1826, con las siguientes diferencias:

1. Extensión del derecho de iniciativa a senadores.
2. Límite temporal para convocar a la reforma total de la Constitución, variándose de tres años --que establecía la Constitución de 1826-, a cuatro, como lo establecía la Constitución de 1838.

El quórum se formaba con dos tercios de los miembros de cada Cámara, y las resoluciones eran tomadas con el acuerdo de la mitad de los que se hallaren presentes. El resto del procedimiento establecido es exactamente igual, según lo expresado en el Arto. 194 de la Cn. de 1838, cualquier miembro de las cámaras podía proponer una reforma o adición a la Constitución.

Señalaba como requisitos para la iniciativa de reforma o adición, el presentar la propuesta de forma escrita, con la firma de al menos tres diputados en sus respectivas cámaras. La propuesta debía ser leída dos veces, con un intervalo de ocho días entre una lectura y otra.

Una vez admitido para discusión, el proyecto se pasaba a Comisión. Ésta debía emitir un dictamen sobre el mismo, y tenía un plazo de doce días para su evacuación. Este dictamen debía ser leído dos veces, con un intervalo de ocho días entre una lectura y otra.

La aceptación para reforma o adición debía ser tomada en Cámaras Unidas, debiendo ser aprobada por las dos terceras partes de los diputados y senadores que se hallaren presentes.

Para aceptar de forma definitiva la iniciativa de reforma o adición se requería, de acuerdo con esta Constitución, la sanción de la

legislatura siguiente, para de esta manera evitar que quienes daban la iniciativa fueran los que la aprobaran (límite temporal), con la excepción de que aquellos proyectos que no fueren admitidos, no podían volverse a proponer durante el mismo año.

Siguiendo el procedimiento, en esta Constitución se establece para la reforma total, un período de cuatro años, tiempo durante el cual era prohibido mediante mandato constitucional, el convocar a reforma total de la misma. Pasados estos cuatro años, si se declaraba con lugar la revisión total, siguiendo el mismo procedimiento de reforma parcial, se debía convocar a una Asamblea Constituyente. Por tal razón, se establecía que debía ser un constituyente derivado el encargado de realizar la reforma total de la Constitución.

El Poder Judicial lo presidía la Corte Suprema de Justicia, con miembros sólo seculares, y dividida en dos secciones que residían en dos departamentos. La Constitución establecía claramente que la ley estaba por encima de los poderes y tenían que sujetarse a ella.

3. CONSTITUCIONES NON NATAS

a. Constitución de 1848

Los constantes levantamientos, según los conservadores, tenían origen en la Constitución excesivamente liberal de 1838. El 12 de marzo de 1847, el supremo director, José León Sandoval, presentó ante la Asamblea un proyecto de Reformas Constitucionales. En un decreto del 19 de marzo de 1847, ambas cámaras decretaron una revisión total de la Constitución. El 3 de septiembre de ese año se instaló la Asamblea Constituyente en la Ciudad de Santiago de Managua. El supremo director era José Guerrero.

La nueva Asamblea Constituyente decidió hacer una nueva Constitución, sustituyendo el nombre de Supremo Director por el de Presidente, y fundiendo en esa persona la autoridad civil y la militar, así el jefe del Ejército quedó subordinado, al Presidente de la República, al que convirtió en comandante de las Fuerzas Armadas del Estado.

El general Trinidad Muñoz no estaba dispuesto a ceder el mando militar ni a ponerlo en manos del Presidente, como aparecía en el proyecto de la nueva Constitución.

Presionó a algunos diputados para que no asistieran y no hubiese quórum, y estancó el proyecto que ya estaba terminado, pero no pudo ser promulgado. Esto ocasionó que a esta Constitución se le conociera como “Non Nata”. La Asamblea se disolvió. El militarismo de Muñoz había triunfado sobre el Ejecutivo y el Legislativo.

b. Constitución de 1854

El 4 de agosto de 1851, por intriga del general Trinidad Muñoz, la ciudad de León se insurrecciona y desconoce la autoridad de Laureano Pineda, quien había sido electo Supremo Director en 1851. Establecen un Gobierno provisional con Justo Abaunza, y le piden elecciones para una Constituyente.

La Asamblea Nacional reunida en Managua no acepta el golpe de Estado de León e instala un gobierno en Granada, reasumido por Laureano Pineda, quien se había ido al exilio y había logrado regresar. Chamorro derrota a Muñoz, lo destierra el 10 de enero de 1852, y se instala un solo Gobierno, al frente del cual está Don Laureano Pineda.

En la elección del 26 de febrero de 1853, la Asamblea declara que no hubo triunfador en la elección popular, y nombra a Frutos Chamorro como Supremo Director. Éste asume el 1 de abril de 1853.

Frutos Chamorro y los conservadores granadinos vieron la necesidad de reformar totalmente la Constitución de 1838 por ser “abiertamente liberal;” y porque tal reforma les permitiría instaurar una dictadura constitucional bajo el lema de Legitimidad y Orden.

El 31 de julio de 1853 se iniciaron las elecciones primarias, y el 28 de agosto se realizaron los comicios de distrito para los diputados. En León se tensaron las cosas, y Frutos Chamorro expulsa, encarcela o confina a los principales opositores, algunos, diputados electos para la Asamblea Constituyente.

Aun con esas ausencias, la Asamblea Constituyente se instala el 22 de enero de 1854. La Asamblea Constituyente, a través del Decreto del 28 de febrero de 1854, cambia el nombre de Estado por el de República, y expresa que la persona que detendrá el Poder Ejecutivo se llamará Presidente. Todo esto sin haber elaborado una nueva Constitución. Esta Asamblea estaba dominada por partidarios de Frutos Chamorro.

El 30 de abril de 1854 se aprueba la nueva Constitución, firmada por algunos diputados suplentes. Los principales dirigentes de la oposición no reconocen su validez y siguen aferrados a la Constitución de 1838.

Esta nueva Constitución de 1854, como la Non Nata de 1848, era de carácter conservador. Era una Constitución breve de 112 artículos, mermaba garantías y desechaba muchas de las igualdades ciudadanas que contemplaba la Constitución de 1838.

Se impuso niveles económicos para optar a cargos: para ser senador debía poseer 1,000 pesos; para ser Presidente, no menos de 4,000 pesos libres; se restringía la ciudadanía, obligando a una propiedad de 100 a 300 pesos. En esta Constitución se prohibía la reelección, situación que sí era permitida en la Non Nata de 1848.

La Constitución de 1854 establecía que el primer Presidente de Nicaragua sería nombrado por la Asamblea, asegurándose así Frutos Chamorro su elección, pero durante ese año estalló la Guerra Nacional, y se dio la intromisión de tropas norteamericanas al mando de Byron Cole y William Walker, lo que hizo imposible que la Constitución de 1854 pudiese ser aplicada, por lo que quedó como la segunda Non Nata de nuestra historia.

4. CONSTITUCIÓN de 1858

a. Antecedentes históricos

La proclama de William Walker como Presidente de Nicaragua y su pretensión de ser Presidente de Centroamérica, obligó primero a unirse contra el gringo a los nicaragüenses conservadores y liberales, y luego a los centroamericanos. El 12 de septiembre de 1856 se firmó el Pacto Providencial, que dio como resultado la victoria de San Jacinto, la expulsión de los filibusteros y el fin de la guerra. Acabada la guerra contra los invasores, Martínez y Jerez suscribieron un pacto y se creó un Gobierno binario, al que el pueblo bautizó como “Chachagua”, y que tomó posesión en 1857.

En el Arto. 3 del Pacto Providencial se expresaba que “la primera legislatura que se elija y se instale legalmente convocará la Constituyente de 1854 o emitirá las bases para la elección de otra

nueva, a fin de que se revea el proyecto de Constitución del propio año 1854, si lo tuviesen a bien”.

La Constitución se promulgó el 19 de agosto de 1858, sin que elementos foráneos pudiesen impedirlo, como había sucedido con los proyectos de 1848 y 1854. Esta Constitución, la segunda de Nicaragua independiente, logró regir hasta 1893, cuando Zelaya, en el poder, promulgó “La Libérrima”, aboliéndola.

b. Características generales

Esta Constitución fue promulgada cuando era presidente Tomás Martínez, y derogó la de 1838. Entre sus características más importantes están:

- Es una copia de los proyectos de Constitución de 1854 y de 1848 con breves cambios.
- Es una Constitución breve, de 104 artículos.
- Es una Constitución prototipo del conservatismo.
- Expresa que en Nicaragua no había clases privilegiadas ni títulos, ni vinculaciones ni destinos venales ni hereditarios (Arto. 14), aunque no se puede obviar que favorece a la clase privilegiada, y cierra las puertas a la gran mayoría de nicaragüenses para ocupar los puestos más importantes, ya que para ellos eran necesarios el dinero y los bienes raíces, y éstos no eran comunes a todos los ciudadanos.
- Mantiene un Estado confesional, y la religión oficial es la Católica, Apostólica y Romana. Se le limitaban los derechos a los que no profesaran la religión católica.
- Las leyes regulan los poderes de Gobierno y no viceversa. La Constitución era la principal ley.

c. Derechos fundamentales

Las libertades contempladas tenían restricciones, por ejemplo: libertad de movilización interna y externa, siempre que la persona se encontrara libre de responsabilidad; libertad de pensamiento y de expresión sin previa censura, ni ser perseguido por ello, si no infringe la ley y responde por el abuso ante jurado; se establece la pena de muerte para el asesinato, para el homicidio premeditado o seguro, para los incendios con circunstancias agravantes, asalto en

poblado seguido de muerte, o en despoblado si resultase herido. La propiedad es inviolable y nadie puede ser privado de ella.

d. Organización del Estado

Se establecía claramente, como en el resto de constituciones antecesoras, la división del Estado en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El Poder Ejecutivo era ejercido por el Presidente, elegido por voto popular, indirecto, de segundo grado, a través de Juntas Populares y Juntas de Distrito, sin reelección para el período inmediato. El Presidente era el Jefe del Ejército.

El Poder Legislativo residía en el Congreso que era bicameral: lo conformaban la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Para ser senador se necesitaba ser seglar, padre de familia y poseer un capital no menor de 2,000 pesos. Para ser diputado se necesitaba ser seglar, no se menciona capital, pero se debía ser ciudadano. Los senados eran escogidos en elección popular de tercer grado por seis años, y los diputados en elección popular de segundo grado por cuatro años.

El Poder Judicial residía en la Corte Suprema de Justicia, y estaba integrado por jueces y tribunales. La Corte se dividía en dos secciones con residencia en departamentos distintos.

Existía el sistema electoral, no como un Poder claramente establecido. Éste se encargaba del sistema complicado de elecciones populares indirectas, similar a las constituciones anteriores, heredado de la de Cádiz. Para las elecciones, el país se dividía en departamentos (siete), en distritos que tuvieran no menos de 20,000 ciudadanos, y en cantones de 330 a 3,000 habitantes; a su vez, existían Juntas Populares integradas por los ciudadanos del cantón.

Las Juntas Populares escogían un elector por cada 330 nicaragüenses de ese cantón, y otro más si hubiese residuo superior a la mitad del referido número. Estos electores pasaban a formar las Juntas de Distrito. Las Juntas de Departamento se integraban por doce electores nombrados por la Junta de Distrito. Para elegir Presidente

y diputados se celebraban Juntas Populares y de Distrito, esta última era la que hacía la elección (indirecta de segundo grado). Para los senadores se celebraba Junta de Distrito en la cabecera del departamento, donde se elegiría un senador propietario y su suplente, o dos propietarios y dos suplentes en los casos que dispusiera la ley.

e. Reformas

Esta Constitución se produce en el período que va de 1858 hasta 1893, conocido como los “Treinta Años de Gobierno Conservador”, años de gran estabilidad económica, política y social para nuestro país.

En esta época hubo una alternabilidad en el poder, lo suficientemente sana y fluida, que originó estabilidad económica y social. Esta situación duró hasta que las ansias de poder de Roberto Sacasa hicieron que quisiera reelegirse, lo cual dio origen a la Revolución Liberal de 1893.

En 1857, una vez expulsados los intervencionistas, una nueva Asamblea Constituyente promulga la Constitución del 18 de agosto de 1858, considerada una copia íntegra de la Constitución del 1848.

Esta Constitución fue la de más vigencia en la historia de Nicaragua, y el período durante el cual rigió fue el de mayor bonanza en el país. Dio origen a un sistema presidencialista con muchas atribuciones. El Presidente debería ser elegido por votación popular. Pese a la existencia de un Poder Ejecutivo a cargo del un Presidente, en el Senado la situación se mantenía igual, con algunas diferencias, por ejemplo, las sesiones del Legislativo cambiaron, para establecerlas en dos años.

El quórum se obtenía con la concurrencia de los dos tercios de los diputados y con dos senadores, y sus disposiciones debían ser acordadas por mayoría absoluta de votos.

Se establecía como procedimiento a las reformas constitucionales, lo referido en el contenido del último Capítulo, el XXIV, denominado: “De la reforma a la Constitución”, en los artículos que van del 102 al 104 inclusive.

Dicho procedimiento difiere de lo establecido en la Constitución de 1826 y en la de 1838. Se establecía para la reforma absoluta un período de ocho años. Una vez aprobada la reforma, se debía convocar a una Asamblea Constituyente.

En cuanto al procedimiento para la reforma parcial (el mismo para la reforma total, excepto porque se convocaba para una Asamblea Constituyente), se disminuyó la iniciativa de tres legisladores a dos. En cuanto al plazo para evacuar dictamen por la Comisión Dictaminadora, de 12 días se disminuyó a seis.

En las constituciones precedentes, se estipulaba que el dictamen sería leído dos veces con un intervalo de ocho días. En esta nueva Constitución se establece que debe ser en días distintos, pudiendo hacerse al siguiente día. Una vez admitido a discusión, se pasaba el proyecto a una Comisión que presentaría su dictamen pasados seis días. En la Constitución anterior (Constitución de 1838) se establecía que debía ser de 12 días. A diferencia del procedimiento anterior, en éste el dictamen debía ser leído dos veces, pero en días distintos, lo que abría la posibilidad de poder hacerlo en días consecutivos.

Se disponía que la reforma no tuviera fuerza de ley hasta que fuera sancionada por la legislatura inmediata. Dicha sanción era efectiva con la aprobación de la mayoría de votos, previos trámites ordinarios.

Existe una notoriedad en esta Constitución, y es que una vez aprobada la reforma por la mayoría del Congreso, ésta debía ser publicada por la imprenta, entendiéndose por tal, un diario oficial. Desde entonces se le asignaba a la imprenta un carácter oficialista.

Una vez admitido para discusión, el proyecto se pasaba a Comisión, la cual tenía que emitir un dictamen sobre el mismo, para cuya evacuación había un plazo de doce días. Este dictamen debía ser leído dos veces, con un intervalo de ocho días entre una lectura y otra.

La aceptación para reforma o adición debía ser tomada en Cámaras Unidas, debiendo ser aprobada por las dos terceras partes de los diputados y senadores que se hallaren presentes.

Siguiendo el procedimiento, en esta Constitución se establecía para la reforma total, un período de cuatro años, tiempo durante el cual era prohibido mediante mandato constitucional, el convocar a reforma total de la misma. Pasados estos cuatro años, si se declarare con lugar la revisión total, siguiendo el mismo procedimiento de reforma parcial, se debía convocar a una Asamblea Constituyente. Por tal razón, se establecía que debía ser un constituyente derivado el encargado de realizar la reforma total de la Constitución.

5. LA CONSTITUCIÓN de 1893 (10 de diciembre de 1893)“La Libérrima”

a. Antecedentes históricos

El presidente Evaristo Carazo falleció en el poder, en medio de su período presidencial, el 15 de agosto de 1889; fue sustituido por el senador Roberto Sacasa para completar el período. Sacasa intentó reelegirse para el siguiente período. La reelección continua estaba prohibida en la Constitución de 1858; esto provocó el rechazo de buena parte de su partido y de los liberales. En 1893 estalló la revolución en Granada y Masaya contra Roberto Sacasa, reelegido inconstitucionalmente. El 31 de marzo se firmó el Pacto de Sabana Grande y se depositó el gobierno en una Junta de Gobierno presidida por Salvador Machado. El 11 de julio de 1893, los liberales de León desconocieron a las nuevas autoridades, y el 24 de julio en la Cuesta del Plomo las tropas gubernamentales conservadoras fueron derrotadas. El 25 de julio los liberales entraron triunfantes a Managua, la capital, por la calle que después se conoció como la “Calle del Triunfo”.

Con ello terminó el Gobierno de los Treinta Años Conservadores, y se dejó lugar a un Gobierno liberal que abarcó desde 1893 hasta 1909.

El 30 de julio se firmó un Tratado de Paz entre vencedores y vencidos, se restituyeron amplias garantías y se acordó convocar a una Asamblea Constituyente para el 15 de septiembre, con la finalidad de “dictar una nueva Constitución”. También se consagraba el principio “del voto directo y reservado” que debía desarrollarse 15 días después de la firma del Tratado de Paz del 30 de julio de 1893 (voto directo y secreto). Se restituyó la vigencia de la Constitución de 1858, hasta que se dictara la nueva Constitución.

El 10 de agosto se convocó a elecciones de diputados constituyentes, los que se instalaron en Asamblea el 15 de septiembre. Esa Asamblea Nacional Constituyente en su instalación el mismo 15 de septiembre, a través de un Decreto, eligió como Presidente de la República al general José Santos Zelaya, sin lugar a reelección, de forma provisional, y como Vicepresidente al general Anastasio J. Ortiz.

La nueva Constitución era de ideas liberales y se le comenzó a llamar “La Libérrima”. Fue promulgada el 10 de diciembre de 1893, y ella misma determinaba que entraría en vigor desde el 11 de julio de 1894; pero por Decreto Presidencial se adelantó su entrada en vigor al 4 de julio, en honor de la independencia de los Estados Unidos.

b. Características generales

Dentro de sus principales características debemos señalar:

- Es una Constitución no desarrollada y breve, con 162 artículos.
- Es el prototipo de la Constitución liberal de nuestro constitucionalismo, con las de 1826 y 1838.
- Cambió radicalmente el sistema electoral: incrementó el número de electores, impuso la obligatoriedad del voto, y el sufragio se convirtió en directo y secreto. Dejó en el olvido las elecciones populares indirectas a través de Juntas Populares (o de cantón), las Juntas de Distritos y las Juntas de Departamentos.
- Se eliminó la condición indispensable de tener propiedades para poder ser electo o ser ciudadano.
- Se consideró ciudadanos a los mayores de 18 años y a los mayores de 16 que fueran casados o supieran leer y escribir.
- Mandó a elaborar una ley constitucional para regular la materia electoral, que es la Ley Electoral, en donde se estableció representación a las minorías.
- Se determinó como leyes constitutivas las siguientes: Ley de Imprenta, Ley Marcial, Ley Electoral y Ley de Amparo, promulgadas en 1894.

- Eran principios fundamentales la soberanía, que reside en pueblo, y es una, inalienable e imprescriptible.
- Se sujetarían los funcionarios a la ley, en donde tienen sus facultades y competencias; todo acto que se ejecutase al margen de la ley era nulo. La Constitución es la Ley Suprema (principios de legalidad y de supremacía constitucional).
- La democracia era representativa, la elección del Presidente, diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jueces locales y de agricultura, se realizaba por votación directa y secreta.
- Se reconoció la garantía de todos los habitantes de Nicaragua, nacionales o extranjeros, la seguridad individual, la libertad, la igualdad y la propiedad.
- Se abandonó, por parte del Estado nicaragüense, la confesionalidad de todas sus constituciones, hasta ese momento, heredadas de las constituciones de Bayona y Cádiz. El Estado se separó de la Iglesia, se declaró laico. Dejó de proteger la religión católica. La religión era permitida, pero en libertad de culto.
- Se dictó la ley que declaraba laicos todos los cementerios, y bajo la dirección y administración de las municipalidades. Se prohibieron los entierros en los templos o en cualquier otro lugar.
- Se estableció el matrimonio civil previo, se estableció el divorcio, se suprimieron las cofradías y se logró apropiarse de los bienes de la Iglesia Católica. Esto provocó una relación tensa con la Iglesia y el Partido Conservador.

c. Derechos fundamentales

Se reconoció una extensa lista de derechos, libertades y garantías a los nicaragüenses, ciudadanos y extranjeros, en los Títulos IV y V. En el Título VI se reguló los derechos y obligaciones de los extranjeros, y también había derechos, libertades y garantías en otros artículos diseminados en la Constitución. Vale la pena destacar:

- a) El del sufragio directo y secreto, y el de optar a cargos públicos sin la condición de tener propiedades.
- b) La supresión de la pena de muerte.
- c) El Hábeas Corpus, es decir, no ser arrestado sin orden de autoridad competente, el no poder ser incomunicado sino por orden competente, por falta grave y no por más de tres días, el no poder jurar sobre hecho propio en materia criminal.
- d) El no ir a cárcel por deuda.
- e) El derecho al asilo sagrado de los extranjeros. Se prohíbe la extradición por delitos políticos o comunes conexos.
- f) El recurso por inconstitucionalidad de la ley.
- g) El derecho a la defensa en los juicios y prohibición de penas perpetuas, la fustigación y toda clase de tormento.
- h) La inviolabilidad del domicilio, la correspondencia epistolar o telegráfica, de documentos o papeles privados.
- i) La libertad de enseñanza, y la laicidad de la enseñanza pagada con fondos públicos, la gratuidad y la obligatoriedad de la educación primaria.
- j) La libertad de reunión, de asociación; pero no se aceptan asociaciones contrarias a los derechos individuales o que impongan votos morales de clausura perpetua.
- k) La libertad de disponer de la propiedad sin restricción alguna, pero se prohíbe las vinculaciones, donaciones y existencia a favor de instituciones de manos muertas.
- l) La libertad de circulación interna y externa.
- m) La eliminación de privilegios en materia tributaria, y los impuestos tienen la base de la proporcionalidad.
- n) El establecimiento del jurado en materia penal.
- o) La prohibición del monopolio en la industria agrícola.
- p) La suspensión de garantías temporalmente en virtud de decretarse el estado de sitio, menos la inviolabilidad de la vida humana y la prohibición de dictar leyes confiscatorias.
- q) Ninguna ley puede restringir, disminuir, adulterar o negar las garantías expresadas en la Constitución.

d. Organización del Estado

El Gobierno era republicano, democrático y representativo, y había independencia entre los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial (Arto.68 Cn.).

En cuanto al Poder Legislativo, por primera vez era únicamente ejercido por la Asamblea o Congreso de diputados, electos de forma directa, secreta y por distritos electorales, para un período de cuatro años renovables por mitad cada dos años. Se reunían el 1° de enero en sesión ordinaria, con duración de sesenta días prorrogables por treinta más cuando lo exigían asuntos de interés actual (Artos. 69 y 70).

También podían ser citados para sesiones extraordinarias por convocatoria del Ejecutivo o cuando lo pidieran cinco diputados para tratar únicamente los asuntos expresados en el decreto de convocatoria. Sesionaban con quórum de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Sólo los de estado seglar podían ser diputados.

Eran atribuciones del Congreso: interpretar, reformar y dirigir leyes; hacer el escrutinio de las elecciones para Presidente, Vicepresidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y proclamar a los electos si hubieran obtenido mayoría absoluta; si no la hubiera, al que tuviera mayoría numérica, y si hubiera empate, decidía quiénes eran los electos. También le correspondía nombrar a los miembros del Tribunal de Cuentas, imponer contribuciones, decretar impuestos; aprobar el presupuesto de gasto público, regular el pago de la deuda nacional, declarar la guerra o la paz; declarar el estado de sitio; conferir los grados de General de Brigada y de División.

El Poder Ejecutivo residía en el Presidente de la República, en su defecto, en el Vicepresidente, o en defecto de los dos, en el designado que establecía el Congreso.

El Presidente era electo por voto popular, directo y secreto, por un período de cuatro años, y no había reelección inmediata. Tenía que ser mayor de 25 años, ser ciudadano natural de Nicaragua, del estado seglar. También podían ser ciudadanos de otras repúblicas de Centro América. Ello daba muestras del espíritu unionista centroamericano que tenía esta Constitución.

El Presidente, en diez días, debía sancionar o vetar la ley aprobada por el Congreso. Era el Jefe Supremo de la nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas de Mar y Tierra.

El Poder Judicial estaba compuesto por la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales de Apelaciones, los jueces de agricultura, de distrito y los jueces locales.

La Corte Suprema de Justicia tenía cinco magistrados electos popular y directamente por un período de cuatro años. También eran electos popularmente los jueces locales y de agricultura, en una elección similar a los comicios municipales. Los jueces de distrito y los miembros de la Corte de Apelaciones eran nombrados por la Corte Suprema de Justicia.

e. Reformas

Las reformas a la Constitución Política podían ser parciales o totales. Sólo podían ser decretadas 10 años después de haber entrado en vigencia la Constitución que se quería reformar. No podían reformarse los artículos constitucionales que prohibían la reelección del Presidente ni el que establecía la duración del período presidencial. Toda reforma era decretada por el Congreso, por dos tercios de sus votos, y convocaban una Asamblea Constituyente para realizarla. Al decretar la reforma, la Asamblea ordinaria cerraba sus sesiones y quedaba disuelta, dando paso a la Asamblea Constituyente.

La reforma que tuvo “La Libérrima” fue la del 15 de octubre de 1896. La situación del gobierno de Zelaya no era buena, había sufrido un levantamiento el 24 de febrero de 1896, pues se le acusaba de traidor y tirano. Una disidencia contrarrevolucionaria anuló el decreto del 15 de septiembre de 1893, que nombró a Zelaya presidente, y pretendía nombrar a Francisco Baca. Zelaya logró derrotar a los conjurados y los exilió. Por su parte, la Asamblea de Managua, fiel a Zelaya, se proclamó Asamblea Constituyente, dándole al gobierno de éste poderes suficientes para sofocar la rebelión, suspendió las elecciones programadas para 1898, y el 11 de septiembre de 1896 declaró electo Presidente por segunda vez al general José Santos Zelaya para un período que iba del primero de febrero de 1898 al 31 de enero de 1902; para ello suspendió la aplicación de los Artos. 95, 96 y 159¹ hasta el 1° de febrero de 1902 en adelante.

¹ Artículos que tienen que ver con la elección del Presidente, su período y la prohibición de la reelección.

El capítulo referente a las reformas se encuentra contenido en el Título XXI de “Reformas de la Constitución y las Leyes Constitutivas”.²

Se estableció por primera vez en la historia constitucional un procedimiento jamás establecido, puesto que ante cualquier intento de reforma --fueran parciales o totales-- debía convocarse a una Constituyente permanente. Una vez declarado por la Asamblea Ordinaria que se aprobaban las reformas a la Constitución, ésta cerraría sus sesiones y quedaría disuelta ipso facto.

De hecho, sólo podía decretarse la reforma absoluta de la Constitución, diez años después que entrara en vigencia, estableciéndose de esta forma el límite temporal más grande en la historia de las constituciones de Nicaragua. Toda reforma debía decretarse por dos tercios de los diputados en sus sesiones ordinarias. Se debía verificar, sin embargo, por una Asamblea Constituyente que se convocaba con el único objetivo de reformar la Carta Magna. La elección de los representantes, integrantes de la Asamblea Constituyente, se efectuaba de la misma forma y en igual número que los representantes al Congreso.

Esta Asamblea Constituyente proclamó las reformas constitucionales el 15 de octubre de 1896, las que suprimieron algunas garantías constitucionales, y le otorgaron más poder al Presidente. Entre lo más significativo se señala:

- Se endureció el trato a los extranjeros en sus reclamos, pues se les prohibía recurrir a la vía diplomática.
- Se suprimió el Hábeas Corpus contra el reclutamiento militar.
- Se suprimió la prohibición de cárcel por deuda.
- Se reguló por ley ordinaria la extradición de nacionales y extranjeros.
- Se reguló el libre tránsito nacional e internacional por ley ordinaria.
- Se excluyó los jurados a los delitos políticos.
- Se le suprimió al Congreso las facultades de elegir a los miembros del Tribunal de Cuentas y al Fiscal de Hacienda.

² En los Artos. que van del 156 al 160, inclusive.

- Se le permitió al Congreso facultar al Ejecutivo para declarar la guerra, antes sólo podía hacerlo el Congreso.
- Se le confirió al Ejecutivo iniciativa de poder otorgar grados de general de Brigada y de División en períodos de campaña. Esta atribución era suya, los autorizaba el Congreso.
- Se le suprimió al Congreso las facultades de otorgar cartas de naturalización a extranjeros.
- Se suprimió la Vicepresidencia y los designados, y la edad para ser presidente se aumentó a 30 años.
- Se suprimió la elección popular de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y esa atribución pasó al Congreso.
- Sólo el Ejecutivo presentaba el Presupuesto de la República al Congreso, se le quitó al Poder Judicial la facultad de presentar el suyo.

Esta Constitución estaba colmada de muy buenas intenciones, las que no pasaron de ser exactamente eso: buenas intenciones. De tal forma que tres años más tarde, en 1896, fue reformada con el objetivo de permitir la reelección de Zelaya, anulando muchos de los avances institucionales logrados con la Constitución de 1893, y otorgando atribuciones dictatoriales al Ejecutivo.

Durante el período transcurrido entre 1893 y 1905, sucesos como la ocupación inglesa (25 de abril de 1895) del puerto de Corinto, y el estallido de un movimiento revolucionario en León (2 de febrero de 1896), permitieron que Zelaya gobernara a su gusto y antojo, respaldado con el Estado de Sitio y la Ley Marcial, que le permitía la suspensión de algunos derechos.

Primaba un Gobierno republicano, democrático y representativo, el régimen político imperante era el Presidencial, por lo que cada vez se le otorgaban más atribuciones al Presidente. Esta Constitución tuvo una característica peculiar, y es que con ella se creó por vez primera el cargo de Vicepresidente. Ambos cargos se ejercían por cuatro años, sin posibilidad de reelección continua.

El Poder Legislativo era ejercido por una Asamblea o Congreso, que se diferenciaba de los anteriores por ser unicameral. Estaba integrado por diputados electos para un período de cuatro años, que debían ser renovados por mitades cada dos años. El Congreso se

reunía anualmente. El quórum era establecido con la concurrencia de la mayoría absoluta de sus miembros.

6. CONSTITUCIÓN de 1905 “LA AUTOCRÁTICA”

a. Antecedentes históricos

En 1900, Zelaya lanzó su candidatura para reelegirse, y a finales de ese año convocó a elecciones que se llevaron a cabo el 10 de noviembre de 1901. Recordemos que la Asamblea Constituyente de 1896, el 11 de septiembre de ese año había “electo” a Zelaya presidente para el período del 1º de febrero de 1898 al 31 de enero de 1902.

En las elecciones de noviembre de 1901, ganó Zelaya sin candidato competidor. Asumió un nuevo período presidencial en 1902, y convocó a una Constituyente para reformar la Constitución, para lo cual, sin realizar elecciones, convirtió en Constituyente la Asamblea Legislativa Ordinaria, como había hecho en 1896, violando la doctrina del poder constituyente.³

Se aprobó una nueva Constitución, sancionada el 30 de marzo de 1905. “La Libérrima” ya había pasado los diez años de restricción. “La Autocrática” no es más que la Constitución de 1893 con la incorporación de las reformas de 1896.

Después de proclamada la Constitución, el 30 de marzo de 1905, el 12 de noviembre se celebraron elecciones presidenciales con un único candidato: nuevamente, José Santos Zelaya, quien ganó un nuevo período que inició el 1º de diciembre de 1905 y debía ir hasta 1911. Pero en 1909, el país de nuevo entró en otra crisis.

En Bluefields se levantó el general Juan José Estrada, y el Partido Conservador lo apoyó en su lucha abierta contra Zelaya. Se dio la famosa “Nota Knox”, del secretario de Estado de Estados Unidos

³ La doctrina del Poder Constituyente establece el principio de la soberanía popular. Al respecto, se plantean diversas teorías en cuanto al procedimiento para establecer una Constitución, sobre la base de que es al pueblo a quien le corresponde, en todo caso, indicar las condiciones bajo las cuales delega el ejercicio de su Poder Constituyente. *Es el pueblo, quien a través de su conducta establece y delega las facultades de su poder.*

En vista de las diversas teorías sobre el Poder Constituyente, la mayoría de los estados adoptaron el sistema democrático-liberal. La intervención popular podía o puede --según sea el caso-- tener manifestaciones diversas. Las más importantes en ese momento y hasta nuestros días han sido: la Asamblea Constituyente, el referéndum constitucional y el plebiscito.

de Norteamérica, el 1º de diciembre de 1909; la intervención de los norteamericanos y la caída del gobierno de José Santos Zelaya, aduciendo la acusación de asesinato a los estadounidenses Cannon y Groce.

b. Características generales

Las características más importantes que podemos señalar de la Constitución de 1905 son: se anhela la unión centroamericana, se manifiesta más fuerte la lucha contra la Iglesia, se mantiene la elección presidencial por voto popular, directo y secreto, pero no se dice nada de la prohibición de la reelección, por tanto, se permite. Se aumenta el período presidencial a seis años, fortaleciendo aún más el poder del mandatario.

Fue una Constitución breve de 122 artículos, de tipo liberal, no desarrollada socialmente. Se mantuvo la división de poderes y la subordinación de los poderes y funcionarios a las leyes. En los títulos III, IV y V y otros artículos diseminados en la Constitución se reconocieron los derechos, libertades y garantías, más restringidos que los de la Constitución de 1893, “La Libérrima”.

Era una democracia representativa con un gobierno republicano, democrático y representativo, el Presidente, los diputados y los gobiernos municipales eran electos popularmente por el voto directo y secreto.

7. CONSTITUCIÓN NON NATA de 1911 (4 de abril de 1911)

El general José Santos Zelaya se retiró del poder el 16 de diciembre de 1909, refutando la Nota Knox, y el Congreso eligió como Presidente de la República a José Madriz, por un corto período: del 21 de diciembre de 1909 hasta el 19 de agosto de 1910.

La guerra continuó, y José Madriz renunció el 19 de agosto de 1910. Lo sustituyó el diputado José Dolores Estrada, según decreto del 20 de agosto de ese año, pero éste le trasladó el poder horas después a su hermano, el general Juan José Estrada.

Éste con el apoyo unánime del Congreso y con el reconocimiento de los Estados Unidos, suscribió los Pactos Dawson el 27 y el 30 de octubre de 1910, los cuales eran intervencionistas y lesivos a la soberanía nacional. Disponían lo siguiente:

1. Convocar a una Asamblea Constituyente para elaborar una Constitución que sustituyera a la de 1905, que era de corte liberal, y elegir a un presidente y a un vicepresidente por espacio de dos años.

2. Prestar apoyo a las candidaturas de Juan José Estrada para Presidente y de Adolfo Díaz para Vicepresidente.

3. Suprimir los monopolios y dar plena garantía y derechos legítimos a los extranjeros.

4. Convocar al pueblo a elegir Presidente constitucional para el período posterior a los años señalados.

5. Crear una Comisión Mixta dirigida por el Departamento de Estado de Estados Unidos para resolver reclamos al régimen anterior al de Zelaya.

6. Perseguir y castigar a los culpables de la muerte de Cannon y Groce e indemnizar a los familiares de éstos.

7. Conceder empréstitos a Nicaragua con garantía de las entradas de la Aduana, la que pasó a ser manejada por Estados Unidos.

8. Escoger por mayoría un candidato a presidente y vicepresidente para el período constitucional posterior a los dos años concedidos al general Juan José Estrada, los que representarían a los liberales y conservadores. El general Estrada no podía ser candidato.

9. Proscribir al zelayismo, no podía participar bajo ningún pretexto en la Administración Pública.

La Asamblea Constituyente se instaló el 1° de enero de 1911, y ese mismo día, por decreto, se nombró presidente al general Juan José Estrada, y vicepresidente a Adolfo Díaz, por un período de dos años.

La Asamblea Constituyente redactó la nueva Constitución que sustituiría a la de 1905. La comisión redactora presentó el proyecto el 19 de enero de 1911, y el 4 de abril del mismo año se concluyó el trabajo y fue aprobada y firmada por los diputados.

Surgieron dos problemas que influyeron en su disolución:

- a) La Constitución se redactó sobre bases conservadoras, repitiendo la Constitución de 1858. Se impuso el criterio confesional al establecer de nuevo a la religión Católica, Apostólica y Romana como religión del Estado. El presidente Estrada protestó enérgicamente a la Asamblea, pues violaba el Convenio de Bluefields firmado por él, el general Emiliano Chamorro y Adolfo Díaz.
- b) Los constituyentes establecieron la censura contra los ministros, mediante la cual el Ejecutivo estaba obligado a retirar a un ministro censurado. Esto provocó el malestar entre los ministros, y, sobre todo, en el de Gobernación, José María Moncada, y en el de Guerra, el general Luis Mena. El Ejecutivo y sus ministros exigieron a la Asamblea Constituyente suspender ese artículo. Los constituyentes se negaron, y al día siguiente de la firma de la Constitución, es decir, el 5 de abril de 1911, el presidente Estrada, con apoyo de los ministros militares y con el visto bueno de la Embajada de Estados Unidos, dictó el decreto que disolvía el Congreso, por lo que la Constitución quedó sin promulgar.

Ésta fue la tercera Constitución Non Nata de Nicaragua. En ese mismo decreto de disolución, se convocó a una nueva Asamblea Constituyente, la que elaboró una nueva Constitución Política que fue promulgada el 21 de diciembre de 1911, y estuvo vigente por varios años hasta 1939.

8. CONSTITUCIÓN DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1911

a. Antecedentes históricos

Luego de disolver el Congreso el 5 de abril de 1911, que había elegido por unanimidad al presidente Estrada, éste estaba debilitado, y se creó una crisis de gobernabilidad. El general Emiliano Chamorro había salido del país. La enemistad entre Estrada y Mena fue creciendo. Estrada, en asociación con Moncada, capturó al general Mena el 8 de mayo de 1911, pero las tropas leales a Mena obligaron al gobierno a restituirlo como Ministro de Guerra. El 9 de mayo renunció el general Estrada, asumió Adolfo Díaz para completar el período que terminaría el 1° de enero de 1912. El Presidente, general

Estrada, y el general Moncada, salieron al exilio. Mena quedó como Ministro de Guerra.

La nueva Constitución fue promulgada el 21 de diciembre de 1911; era presidente Adolfo Díaz. El general Luis Mena, aprovechando la influencia que tenía sobre la segunda Constituyente, se hizo nombrar sucesor del presidente Adolfo Díaz para el siguiente período, lo que era violatorio a los Pactos Dawson, que exigían que el gobierno posterior del Protémpore debía surgir de elecciones libres. Por presión de los Estados Unidos, el general Mena fue sustituido del gabinete, e inmediatamente se levantó en armas, y el 29 de julio de 1912 inició una nueva guerra civil.

El presidente Adolfo Díaz, por medio de su ministro de Gobernación, Diego Manuel Chamorro, solicitó la intervención estadounidense; fue así como los marines desembarcaron el 15 de agosto de 1912. Las tropas interventoras norteamericanas apoyaron a Díaz en la lucha armada contra Mena. Los liberales apoyaron a Luis Mena, quien fue vencido. En esta guerra murió, el 4 de octubre de 1912, el líder liberal y héroe nacionalista Benjamín Zeledón.

b. Características generales

- La Constitución no era desarrollada en materia social y económica, era aprobada para servir a un gobierno conservador, aunque mantenía algunas tradiciones liberales. Contenía 172 artículos.
- A los habitantes, nicaragüenses o extranjeros, se les garantizaba la seguridad personal, la libertad, la igualdad y la propiedad.
- La soberanía se consideraba una, inalienable e imprescriptible, y se hacía residir esencialmente en el pueblo.
- Los funcionarios y los poderes estaban subordinados a las leyes, que dictaban su competencia; fuera de ello, todo acto era nulo.
- El Estado era unitario, pero autorizado a celebrar pactos o tratados que tendían a la unión centroamericana.
- El gobierno era republicano, democrático, representativo y unitario.
- Se planteó la división de poderes, con tres poderes independientes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

c. Derechos fundamentales

Los derechos, libertades y garantías estaban agrupados en el Título VIII, pero también en otras disposiciones diseminadas en diferentes títulos, entre los que vale destacar:

- La enseñanza libre, y la primaria gratuita y obligatoria.
- La ciudadanía se establecía a los 21 ó 18 años, cuando fueran casados o supieran leer o escribir.
- Se garantizó libertad para practicar otras religiones que no se opusieran a la moral cristiana y al orden público. Se reconoció la religión Católica, Apostólica y Romana como la profesada por la mayoría de los nicaragüenses: Estado confesional.
- El sufragio era directo y público, el derecho al voto era personal e indelegable.
- Se estableció la pena de muerte en caso de delitos militares graves, asesinato, parricidio, incendio o robo seguido de muerte.
- Se mantuvieron muchos derechos y garantías de 1905.

d. Organización del Estado

En el Poder Ejecutivo se destaca: el presidente y el vicepresidente eran electos por voto popular, directo y público, por un período de cuatro años, sin reelección. Tenían que ser mayores de 30 años, del estado seglar y naturales de Nicaragua.

El Poder Legislativo estaba conformado por el Congreso, nuevamente bicameral: la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Los diputados eran electos por voto popular, directo y público. Por cada distrito había un diputado y su suplente. En los departamentos se elegía a los senadores: un senador y su suplente por cada dos diputados en el departamento. Eran electos por cuatro años, del estado seglar, en uso de sus derechos, mayores de 25 años. En el caso de los senadores era igual, sólo que se exigía ser mayor de 40 años.

El Poder Judicial estaba compuesto por la Corte Suprema, máxima autoridad, los tribunales de apelaciones y jueces. Los munícipes eran electos por voto popular, público y directo. El número de miembros lo señalaba la ley.

9. CONSTITUCIÓN NON NATA de 1913 (3 de abril de 1913)

Concluida la “Guerra de Mena”, se celebraron elecciones unilaterales en 1912, bajo la supervisión de los interventores norteamericanos y de los liberales. Fue electo presidente Adolfo Díaz, con sólo 15,000 votos.

No todos los ciudadanos estaban satisfechos con la Constitución del 21 de diciembre de 1911. Una vez acabada la “Guerra de Mena”, bajo un ambiente favorable al cambio, el 18 de octubre de 1912 se convocó a una tercera Constituyente para redactar una nueva Constitución.

Los constituyentes trabajaron sin tropiezo y elaboraron una nueva Carta Magna, la cual terminaron el 3 de abril de 1913. El presidente Díaz no gozaba de la simpatía de muchos de los diputados. El 5 de abril envió una nota en la que se pedía que se limitaran a suprimir los Artos. 168 y 170 de la Constitución de diciembre de 1911, que estaba vigente. Con ello se despojaría a los congresistas de poderes constituyentes. Ante la amenaza de disolución, el Congreso emitió decreto de supresión de los Artos. 168 y 170, por lo que la Constitución de 1913 quedó como la cuarta Constitución Non Nata de Nicaragua.

10. CONSTITUCIÓN de 1939

a. Antecedentes históricos

La primera intervención de las tropas norteamericanas había durado desde 1912 (físicamente, aunque inició en 1909 con la Nota Knox y la destitución de Zelaya) hasta 1925.

En la presidencia de Adolfo Díaz (1912-1916) se firmó el Tratado Chamorro-Bryan, en 1914, tratado canalero que daba exclusividad a Estados Unidos en Nicaragua y el control geopolítico del Caribe. Este tratado fue firmado por Emiliano Chamorro.

En 1916, Emiliano Chamorro ganó las elecciones. Los norteamericanos presionaron al contrincante, Julián Irías, que era zelayista, y éste se retiró de la contienda (período de 1917, al 1º de enero de 1921).

En 1920 se celebraron elecciones supervisadas por el comisionado norteamericano Onel Miller. Resultaron electos Diego Manuel Chamorro, Presidente, y Bartolomé Martínez, Vicepresidente. Asumieron su período el 1° de enero de 1921. Durante el mismo, que terminó el 31 de enero de 1924, se promulgó el 12 de octubre de 1923 una Ley Electoral denominada “Ley Dods”, por haber sido redactada por el general H. W. Dods. El 7 de febrero de 1923 se firmaron en Washington, entre los gobiernos de Centroamérica y Estados Unidos, los “Pactos Washington”.

Por estos “Pactos”, entre otras cosas, se comprometían a no reconocer a ningún gobierno que surgiera de algún golpe de Estado o por movimientos revolucionarios; los conflictos entre las naciones centroamericanas se deberían resolver en un Tribunal de Justicia Internacional Centroamericano. Ninguno de los países podría intervenir en otro donde hubiese guerra civil, y debía mantenerse en la Constitución el principio de no reelección.

El 13 de octubre de 1923 falleció en el ejercicio de su cargo Diego Manuel Chamorro, y lo sucedió Bartolomé Martínez.

Durante este período, los norteamericanos tuvieron atada a Nicaragua con los planes financieros de 1912, de 1917 (Plan Lansing) y de 1920. Bartolomé Martínez logró, en parte, subsanar la economía: canceló deudas a banqueros norteamericanos y recuperó las acciones del ferrocarril nacional.

En las elecciones de 1924 resultó electa una fórmula libero-conservadora apoyada por Bartolomé Martínez, quien patrocinó el Pacto de la Transición entre liberales y conservadores simpatizantes de Martínez. La fórmula la integraban Carlos José Solórzano (conservador) para Presidente, y Juan Bautista Sacasa (liberal) para Vicepresidente. El derrotado en las elecciones fue Emiliano Chamorro, candidato del Partido Conservador. El nuevo período presidencial iría de 1925 a 1928.

Chamorro protestó las elecciones, y disgustado por la presencia de liberales trató de llegar a un acuerdo con Carlos José Solórzano, lo que no consiguió. Aprovechando la salida de las tropas norteamericanas de Nicaragua, Emiliano Chamorro dio un golpe de Estado, conocido

como “El Lomazo”, porque se había tomado por las armas la Loma de Tiscapa, el más importante cuartel del país.

El 16 de enero de 1926, el presidente Carlos José Solórzano renunció ante el Congreso y salió al exilio a San Francisco de California. Días después, el Congreso nombró presidente a Emiliano Chamorro; el vicepresidente electo, Juan Bautista Sacasa, a quien constitucionalmente le correspondía la presidencia, tuvo que salir también al exilio por persecución de Chamorro. El Congreso, asimismo, le dio golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia, y destituyó a todos los magistrados el 12 de abril de 1926, y eligió a magistrados fieles al golpe.

Estados Unidos, invocando el Pacto de Washington, desconoció al gobierno de facto de Emiliano Chamorro. Ante esta presión, Chamorro entregó la presidencia el 26 de octubre de 1926, y el Congreso eligió al senador Sebastián Uriza, quien por presión norteamericana y con la decisión de la Asamblea Legislativa, le traspasó la presidencia a Adolfo Díaz, el 11 de noviembre de 1926. Esta presión de Chamorro se reflejó en las dos “Notas Kellog” --del 15 de enero y del 28 de agosto de 1926--, y en la carta del Encargado de Negocios, Mr. Dennon, del 6 de septiembre de 1926, en la que insistía en el inmediato retiro de Chamorro de la presidencia.

Las partes en conflicto decidieron, por orientación de Estados Unidos, tener unos diálogos con el fin de solucionar el conflicto surgido con el golpe de Estado y la presión norteamericana, que no reconocía el gobierno de Chamorro. Las conversaciones se llevaron a cabo en el barco “Denver”, norteamericano, anclado en Corinto, entre el 16 y el 20 de octubre de 1926.

En la Cuarta Conferencia, el 18 de octubre de ese año, los conservadores (representados por Carlos Cuadra Pasos Stadthagen, el general J. S. D. Estrada, y los Sres. Guzmán y Siero) defendían a ultranza el Estado de facto de Chamorro; y los liberales (representados por los Dres. Rodolfo Espinoza, Leonardo Argüello, Enoc Aguado, Mariano Argüello Vargas y Abaunza) abogaban por el Estado de Iure. Estas conferencias eran presididas por Lawrence Dennis.

No hubo entendimiento, pero sí la imposición de Adolfo Díaz como Presidente, nombrado por el Congreso el 11 de noviembre de 1926, y reconocido por Estados Unidos. Por otra parte, el vicepresidente constitucional, el Dr. Juan Bautista Sacasa, se proclamó Presidente Constitucional el 1° de diciembre en Puerto Cabezas, y estalló la “Guerra Constitucionalista”. Sacasa recibió reconocimiento y apoyo del Presidente de México, general Plutarco Elías Cañas.

Adolfo Díaz solicitó ayuda norteamericana el 15 de noviembre de 1926, y con rapidez asombrosa, el 6 de enero de 1927, desembarcaron por segunda vez los marines estadounidenses, dos mil marines, llamados nuevamente por Díaz.

En el Pacífico, la tropa liberal estaba dirigida por el general Julián Irías y por el general Crisanto Sacasa. Ésta derrotó al general Roberto Hurtado al mando de las tropas conservadoras. Las tropas liberales eran incontenibles, y a pesar de la ayuda político-militar de las tropas norteamericanas, la derrota de Adolfo Díaz era inminente. Para evitar una derrota total de los conservadores, en 1927 vino a Nicaragua Henry L. Stinson, enviado especial del gobierno de Estados Unidos, en busca de un arreglo político.

El 4 de mayo de 1927, los liberales al mando del general Moncada, en Tipitapa, firmaron el Pacto del Espino Negro, en donde Stinson impone las siguientes condiciones:

Acuerdo de paz inmediata; desarme de las dos fuerzas en conflicto; creación de una nueva fuerza armada de carácter apartidista; la aceptación de la presidencia de Adolfo Díaz hasta 1928; la posibilidad de que los liberales ocuparan cargos en el gobierno de Díaz, la celebración de elecciones en 1928 supervisadas por Estados Unidos; la presencia de los marines hasta cumplirse los acuerdos.

Firmaron todos los líderes y generales liberales, excepto Juan Bautista Sacasa, quien salió del país, y el general Augusto C. Sandino, que al mando de sus hombres combatió la intervención norteamericana, hasta la salida de los invasores en 1933. La “Guerra Constitucionalista” dio lugar a la “Guerra Antiimperialista”.

De acuerdo con lo pactado, el 22 de diciembre de 1927 se celebró el Convenio Cuadra Pasos–Munro, creando la Constabularia, antecedente

inmediato de la Guardia Nacional, integrada por nicaragüenses, pero entrenada y dirigida por norteamericanos.

El 15 de noviembre de 1928 se celebraron elecciones supervisadas por los Estados Unidos, bajo el Reglamento Electoral elaborado por los interventores, conocido como “Ley McCoy”. El general Frank Ross McCoy fue nombrado Presidente del Congreso Nacional de Elecciones. En estos comicios triunfó en la presidencia el general José María Moncada y en la vicepresidencia el Dr. Enoc Aguado, y tomaron posesión el 1º de enero de 1929, hasta el 31 de diciembre de 1932.

El 21 de febrero de 1929, Moncada sancionó el Convenio Cuadra Pasos-Munro.

Durante su gobierno, Moncada y los norteamericanos invasores combatieron a Sandino (1927-1932).

El 6 de noviembre de 1932 se celebraron elecciones sumamente vigiladas por los norteamericanos, en éstas --para el período 1933–1937-- resultaron electos como presidente Juan Bautista Sacasa, y como vicepresidente Rodolfo Espinoza. Sacasa tomó posesión el 1º de enero del 1933, y ese mismo día nombró Jefe Director de la Guardia Nacional al general Anastasio Somoza García. El 2 de enero los oficiales norteamericanos abandonaron los cargos de dirección de la Guardia Nacional. En 1933 las tropas norteamericanas comenzaron a abandonar gradualmente el país, mientras la Guardia Nacional se hacía cargo de la guerra contra Sandino. El 3 de enero de 1933 salieron las últimas tropas norteamericanas, poniendo fin a la intervención iniciada en 1912, interrumpida en 1925 y retomada en 1927 hasta 1933.

Una vez que las tropas norteamericanas abandonaron Nicaragua, y con Juan Bautista Sacasa en la Presidencia, Sandino empezó con éste las conversaciones de paz. El 13 de enero de 1933 se nombró una Comisión de Paz, la que visitó a Sandino el 19 de enero del mismo año, y le presentó el Protocolo de Paz. Sandino llegó a Managua y firmó el Convenio de Paz el 2 de febrero de 1933.

Somoza no estaba de acuerdo con la paz con Sandino, pues temía un entendimiento entre el general Portocarrero, Sacasa y Sandino para

destituirlo como Jefe Director de la Guardia Nacional, y se preparó para atacar a Sandino en 1934. Al finalizar enero de 1934, Sandino denunció ante el presidente Sacasa los planes de Somoza, de incumplir el Convenio de Paz y atacar a sus fuerzas en el campamento de Wiwilí.

El presidente Sacasa invitó a Sandino a cenar el 21 de febrero de 1934 en Casa Presidencial, y al regresar de la cena un pelotón de la Guardia Nacional capturó a Sandino y a sus acompañantes, y los ejecutaron cobardemente esa misma noche. Sacasa protestó de forma enérgica y proclamó su inocencia. El Congreso decretó una amnistía que cubría la muerte de Sandino, y Sacasa la vetó, pero con el apoyo de los conservadores de Emiliano Chamorro se dio la amnistía.

Esto tensó más las relaciones entre Somoza y Sacasa. Somoza era casado con una sobrina carnal de Sacasa.

En 1934 corrió el rumor de un golpe de Estado que fue sofocado. Somoza no tenía apoyo de los partidos ni de la Embajada de Estados Unidos.

En septiembre de 1935, Somoza se proclamó candidato presidencial, con la oposición de Sacasa y en contra de la Constitución, ya que era militar activo y sobrino del presidente.

Somoza renunció a la jefatura de la Guardia Nacional y nombró como sustituto al general Rigoberto Reyes, pero como no pudo evitar el parentesco con el presidente Sacasa, presionó para que éste renunciara seis meses antes de las elecciones.

Ante el avance armado de Somoza en la plaza de León y ante la presión de la Guardia Nacional por su renuncia, Juan Bautista Sacasa presentó ésta al Congreso el 6 de junio de 1936, y se fue al exilio. El 8 de junio renunció también Rodolfo Espinoza, Vicepresidente, quien había sido llamado a sustituir a Sacasa. El Congreso eligió al Dr. Carlos Brenes Jarquín para terminar el período del 9 de junio de 1936 al 1° de enero de 1937.

El 8 de diciembre de 1936 se celebraron elecciones que ganaron Anastasio Somoza García, como Presidente, y Francisco Navarro, como Vicepresidente, para el período 1937-1940.

El 17 de agosto de 1938 se convocó a una Asamblea Constituyente para que redactara una nueva Constitución Política que sustituiría a la de 1911. La Constituyente se instaló el 15 de diciembre de 1938, y aprobó la nueva Constitución Política el 22 de marzo de 1939.

Aumentó el período presidencial a seis años, y por disposición transitoria autorizó a la Asamblea Constituyente a nombrar Presidente de la República por un período de ocho años, que comenzaría el 30 de marzo de 1939 y concluiría el 1º de mayo de 1947; además, para esas elecciones quedaban sin efecto las disposiciones no reeleccionistas. El nombramiento cayó sobre Somoza, que llevaba dos años y seis meses en el poder, y con esta disposición alargaba su período a 10 años y seis meses.

b. Características generales

Entre las características principales de esta Constitución, se puede señalar que:

- Era extensa, con 352 artículos y cuatro disposiciones transitorias.
- Contenía aspectos referidos al desarrollo social, al estilo de las corrientes predominantes en Europa, en la Italia de Mussolini, en la Alemania de Hitler, en la España de Franco y en la Portugal de Salazar. El Poder Ejecutivo lo ejercía el Presidente, quien personificaba la Nación.
- Proclamaba un Estado laico. El Estado no tenía religión oficial (Arto.6).
- Establecía los principios de legalidad y democracia: se reconoció al pueblo como fuente de todo poder político, el cual ejercía por medio de delegación en el gobierno del Estado, con sujeción a la Constitución y a las leyes (Artos. 2, 5 y 11).
- Señalaba que eran indivisibles e inalienables el territorio y la soberanía; no obstante, se podían celebrar pactos y tratados que tendieran a la unión centroamericana.
- Expresaba que el gobierno es republicano, democrático y representativo.

- Calificaba como ciudadanos a los nicaragüenses mayores de 21 años y a los mayores de 18 que supieran leer y escribir.
- Señalaba garantías y derechos, que estaban en el Título IV en cuatro capítulos, a saber: Garantías Nacionales, Garantías Sociales, Garantías Individuales y Libertades.
- Expresaba que eran leyes constitutivas: la Ley de Amparo y la Ley Marcial.
- Expresaba la supremacía constitucional y la nulidad de leyes que se le opusieran (Artos. 345 y 346).

c. Derechos fundamentales

Es la primera Constitución que desarrolla derechos y garantías sociales: función social de la propiedad; seguridad social en maternidad, prole numerosa; educación primaria gratuita y obligatoria; derechos laborales y prestaciones sociales a los trabajadores; descanso dominical obligatorio; indemnización por accidente; un mes de vacaciones después de un año de trabajo continuo, y creación por parte del Estado del Instituto Nacional de Seguro Social, entre otros.

d. Organización del Estado

El Estado se dividía en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

El Poder Legislativo estaba compuesto por un Congreso bicameral: diputados y senadores. Los diputados eran electos por el voto popular y directo. Un diputado por departamento por seis años, por cada 30,000 habitantes, y uno más si el exceso fuese mayor de 15,000. Tenían que ser del estado seglar, y ser ciudadanos mayores de 25 años en ejercicio de sus derechos.

Existían quince senadores propietarios electos directamente por el pueblo. Tenían que ser seglares en ejercicio de sus derechos, mayores de 40 años y electos por el voto popular por seis años.

El Poder Ejecutivo lo ejercía un ciudadano con título de Presidente de la República. Era el jefe de Estado y personificaba a la Nación, era electo popularmente por seis años, tenía que ser mayor de 30 años, seglar, nacido en Nicaragua, y haber residido en el país cinco años antes de la elección.

El Poder Judicial se ejercía a través de la Corte Suprema de Justicia; había cinco Cortes de Apelaciones, con sedes las ciudades de León, Granada, Masaya, Bluefields y Matagalpa, jueces de distrito en las ciudades cabeceras, y jueces locales en las municipalidades. La Corte Suprema de Justicia estaba compuesta por cinco magistrados propietarios y dos suplentes. Las calidades para ser magistrado eran: ser varón, seglar, natural de Nicaragua, ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de 40 años y menor de 70, haber sido Magistrado o Juez de Distrito por más de dos años, o abogado con crédito por más cinco años de ejercicio. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones eran electos por el Congreso Nacional, así como los jueces de distritos o locales eran nombrados por la Corte Suprema de Justicia.

e. Reforma constitucional

Esta Constitución no podría ser reformada sólo después de cinco años. Los trámites de reformas estaban contenidos en los Artos. 348, 349 y 350.

11. CONSTITUCIÓN de 1948

a. Antecedentes históricos

La gestión de Somoza no estaría exenta de turbulencias políticas, ya que esta época estuvo llena de caudillos: el general Tiburcio Carías, en Honduras; el general Maximiliano Hernández Martínez, en El Salvador, y el general Jorge Ubico, en Guatemala.

Las intenciones reeleccionistas de Somoza llevaron al levantamiento estudiantil de 1944. Algunos líderes liberales rompieron con Somoza y con el PLN y fundaron el PLI. En Managua, políticos como José María Moncada, Carlos Pasos, Carlos Castro Wassmer, Enoc Aguado y Ulises Terán, decidieron pedirle la renuncia a Somoza. Moncada, al ver que no lo consideraban como candidato presidencial, los traicionó e informó al presidente Somoza. Ya conocedor del intento de golpe, Somoza apresó a los sublevados y los expulsó del país. Ante este estado de oposición y con la caída de los otros tiranos en Centroamérica, Somoza decidió no ir de candidato en las elecciones de 1947, pero nombró como tal al Dr. Leonardo Argüello Barreto. Enoc Aguado fue el contrincante por el Partido Conservador. Argüello Barreto ganó las elecciones del 2 de febrero de 1947, bajo fuertes protestas de fraude.

El Dr. Argüello en su toma de posesión, el 1° de mayo de 1947, se declaró independiente, y leal sólo al pueblo. Llegaba con intenciones de destituir a Somoza y sacarlo del país. Somoza le dio golpe de Estado, y ese mismo año, el 26 de mayo, el Congreso lo separó del cargo por incapacidad. El Congreso nombró como Presidente a Benjamín Lacayo Sacasa, tío político de Somoza. Este gobierno no fue reconocido internacionalmente y duró escasos tres meses, hasta el 15 de agosto de 1947. Benjamín Lacayo convocó a una Constituyente el 3 de agosto, la que se instaló el 15 de ese mes, en un intento por obtener reconocimiento internacional. Ese mismo día, la Asamblea Constituyente nombró Presidente a Víctor Manuel Román y Reyes, para completar el período hasta 1951. Tres días antes del nombramiento, Somoza, Román y Reyes y Mariano Argüello Vargas (Vicepresidente) celebraron un pacto en el que reconocían a Somoza como Jefe Director de la Guardia Nacional y le rendían lealtad.

El 22 de enero de 1948 se promulgó la nueva Constitución Política. Paralelo a la promulgación de la Constitución se iniciaron pláticas, y el 26 de febrero del 1948 se firmó un Pacto entre Carlos Cuadra Pasos, por el Partido Conservador, y el general Anastasio Somoza García. Este pacto contemplaba que Román y Reyes completaría su período, y que se celebrarían elecciones libres y puras en 1951. Estableció, además, la participación de los miembros del Partido Conservador en las directivas de los Bancos, y en las comisiones de Vigilancia y Control.

Román y Reyes murió antes de terminar su período, el 6 de mayo de 1950. El Congreso nombró como Presidente al general Anastasio Somoza García, quien era senador vitalicio.

b. Características generales

Es una Constitución muy similar a la de 1939. Consta de 289 artículos, por lo que es extensa. El Catálogo de Derechos y Garantías es muy similar al de la Constitución de 1939, en el Título IV.

c. Organización del Estado

Esta Constitución consagró la clásica separación de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

El Poder Legislativo era bicameral, compuesto por diputados (igual que en 1939) que debían ser del estado seglar y mayores de 25 años. Se elegía uno por cada 30,000 habitantes, más uno, cuando el número de habitantes excediera en más de 15,000. Eran electos para un período de seis años. El número de senadores era de quince propietarios con sus respectivos suplentes, debían ser del estado seglar, mayores de 40 años, y electos popularmente por seis años.

El Poder Ejecutivo era dirigido por el Presidente, electo por el voto popular, directo, para un período de seis años. El mandatario debía ser mayor de 30 años, del estado seglar, y no haber renunciado nunca a su ciudadanía.

El Poder Judicial estaba presidido por la Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones, jueces distritales y locales, y jueces laborales. Los magistrados tenían que ser varones mayores de 25 años y nombrados por el Congreso.

12. CONSTITUCIÓN de 1950 (1° de noviembre de 1950)

a. Antecedentes históricos: “Pacto de los Generales” (3 de abril de 1950)

El general Emiliano Chamorro, liberado por la amnistía de 1948, celebró otro pacto con el general Anastasio Somoza, que firmaron el 3 de abril de 1950, conocido como “Pacto de los Generales”. Este pacto es la base para la nueva Constitución Política el 1° de noviembre de 1950.

Los firmantes decidieron adelantar las elecciones el 21 de mayo de 1950, para asumir el 1° de mayo de 1951. Aunque la Constitución de 1948 prohibía la elección de un militar en servicio activo para el cargo de Presidente, a no ser que hubiera renunciado sesenta días antes de la elección (Arto. 171, inciso 2° Cn. de 1948), esta cláusula fue suprimida en el “Pacto de los Generales” y en el decreto del 15 de abril de 1950, que era de hecho una Reforma Constitucional. Así, Somoza García podría de nuevo ser candidato a Presidente.

En el Pacto se reconocían los principios de la nueva Constitución Política, como la habilidad de la mujer para elegir y ser electa de acuerdo con la legislación de la materia. Sin embargo, en la

convocatoria para elecciones generales de Presidente de la República y representantes a una Asamblea Constituyente en 1950, se convocó sólo a los varones.

El 21 de mayo fue electo presidente Somoza García para el período que iniciaría el 1º de mayo de 1951. La Asamblea Constituyente se instaló el 4 de junio de 1950, y aprobó la Constitución Política el 1º de noviembre de ese año.

b. Características generales

Las características de esta Constitución son:

- Surge del Pacto de los Generales.
- Suspende el derecho de petición de un tercer partido en las elecciones para impedirle al Partido Liberal Independiente participar en las mismas.
- Proclama a Nicaragua como un Estado unitario, libre, soberano e independiente.
- Es extensa, compuesta por 336 artículos.
- Establece que el pueblo es fuente de todo poder político y lo ejerce por medio del gobierno, del Estado.
- Expresa que la soberanía es indivisible e inalienable, pero se pueden celebrar tratados que busquen la unidad centroamericana.
- Señala que el Estado no tiene religión oficial.
- Enuncia que son ciudadanos los nicaragüense varones y mujeres, mayores de 21 años; los mayores de 18 que sepan leer y escribir o sean casados; los menores de 18 años que ostenten un título académico.
- Instaura la prohibición de la formación y actividades de partidos políticos de organización internacional. Se exceptúan los centroamericanos.
- Instituye en el Arto. 32 que la mujer puede ser elegida o nombrada para el ejercicio de cargos públicos, salvo los que expresamente exceptúe la Constitución.
- Consagra en los Títulos III y IV los derechos y garantías de los nicaragüenses y ciudadanos; en el Título I la nacionalidad, y en el Título II los derechos y deberes de los extranjeros.
- Establece que el gobierno es republicano, democrático y representativo. El Estado ejerce sus funciones a través de

tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Se consagra el derecho de la representación de las minorías en la organización de los poderes del Estado.

- Instaura, en materia electoral, un Consejo Nacional de Elecciones, compuesto por un presidente y dos miembros políticos que representarán a cada uno de los partidos políticos de la Nación. El presidente del Consejo Nacional de Elecciones será nombrado por la Corte Suprema de Justicia por mayoría de votos.
- Son leyes constitucionales: la Ley de Amparo, la Ley Marcial y la Ley Electoral.
- Deja establecida claramente la supremacía constitucional.
- Establece diez años de vigencia para la reforma total. La reforma parcial es facultad del Congreso; la reforma total, de la Asamblea Constituyente.

c. Organización del Estado

El Poder Legislativo era bicameral. La Cámara de Diputados estaba compuesta por 42 miembros, y la del Senado por 16, con sus suplentes. Eran electos por voto popular y directo, por un período de seis años. Los ex presidentes se mantenían como senadores vitalicios. Los diputados eran seglares, mayores de 25 años, y los senadores mayores de 35.

El Poder Ejecutivo era dirigido por el Presidente, electo por seis años por voto popular y directo.

El Poder Judicial estaba integrado por la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales de Apelaciones, el Tribunal Superior del Trabajo y los jueces de Distrito y locales.

a. Reformas de la Constitución de 1950: 1955, 1959, 1962, 1964, 1966, 1971

Reforma de 1955

En la reforma del 20 de abril de 1955, se expresó que el Arto. 116 se debía leer así: “El Estado prohíbe la formación y actividades del partidocomunistaydelosquesustentenideologías similares, lo mismo que de cualquier otro partido de organización internacional”.

También se eliminaron las limitaciones establecidas para el ejercicio del derecho de participación política de las mujeres, y se suprimió la prohibición de formar parte del Congreso a los parientes del Presidente de la República. Esto último permitió que Luis Somoza, hijo del general Somoza, estuviese de Presidente del Congreso cuando éste fue ajusticiado el 21 de septiembre de 1956, y así le pudiese suceder en la Presidencia de la República

En esta reforma se le dio plenos derechos a la mujer para ser electa o nombrada como funcionaria del Estado.

Se reformó el Arto. 186 que prohibía la reelección del Presidente de la República, permitiendo con ello que Somoza se propusiera como candidato para otra reelección, aspiración truncada por la acción heroica de Rigoberto López Pérez, el 21 de septiembre de 1956.

Reforma del 26 de agosto de 1959

Hubo otra reforma el 26 de agosto de 1959, pero de poca importancia, ya que únicamente hacía una precisión en el Arto. 186 ya reformado en 1955.

Luis Somoza sucedió a su padre, que había fallecido el 29 de septiembre de 1956. Se presentó a los comicios de 1957 y fue electo para el período 1957-1963. En 1959 se realizó una contrarreforma, que restablecía la prohibición a la reelección presidencial en el Arto. 186 de la Cn. de 1950. La mujer votó por primera vez en las elecciones, el 3 de febrero de 1957.

Reforma del 25 de mayo de 1962

Entre lo que se debe destacar de esta reforma está la incorporación del Poder Electoral como órgano del Estado, la reducción del período presidencial de seis a cuatro años, y la integración de la Corte Suprema de Justicia por siete magistrados inamovibles. Se estableció el Poder Electoral como cuarto poder del Estado. El voto popular era personal, indelegable, igual, directo y secreto. Se integró como senador el candidato presidencial del segundo lugar. Se determinaron tres vicepresidentes, la inamovilidad en el cargo a los magistrados de la CSJ, con retiro a los 75 años. En el Título

XII se estableció la conformación del Poder Electoral a través del Tribunal Supremo Electoral, tribunales departamentales electorales y directorios electorales. El Tribunal Supremo Electoral estaría integrado por un miembro del Congreso, un miembro de la CSJ, un miembro del partido del primer lugar, un miembro del partido del segundo lugar, un miembro del partido que presentara más firmas de respaldo. En total, eran cinco los miembros. También se reformó la Ley Electoral.

Reforma del 19 de marzo de 1964

Tiene que ver con el Presupuesto de la República, su envío al Congreso y la flexibilidad del inicio del año fiscal por Ley.

Reforma del 4 de mayo de 1966

Se elevó a rango constitucional la autonomía universitaria. Se consultó a la Universidad Nacional Autónoma para la incorporación de extranjeros. Los períodos de los diputados, senadores y presidentes pasaron a cinco años. Se mantuvo en el Arto. 116 la prohibición de actividades del Partido Comunista o similares, y de los de organización internacional, castigando a sus miembros, salvo los que pregonaran la unidad centroamericana.

Los vicepresidentes, de tres pasan a dos. Se efectuaron reformas en la organización y funciones de los poderes locales. Se reformó parcialmente la Ley Electoral, y se determinó el número de diputados para la elección de 1967, entre otras.

Reforma del 25 de mayo de 1971

Reforma parcial de la Constitución, en materia electoral, y de la Ley Electoral, el 25 de mayo de 1971, para dar cumplimiento a los pactos Agüero-Somoza y a la elección de la Junta Nacional de Gobierno.

El período de esta Junta de Gobierno era del 1° de mayo de 1972 al 1° de diciembre de 1974, cuando debía tomar posesión el ciudadano que resultara electo en los comicios de autoridades supremas.

Durante el período de la Junta de Gobierno, el 23 de diciembre de 1972 Managua es destruida por un terremoto. La Junta de

Gobierno queda más subordinada a Somoza al crearse el Comité de Emergencia que es presidido por él, y que asume el control total del país. La Junta de Gobierno, denominada popularmente “Pata de Gallina”, pasa a ser “manos atadas”.

13. CONSTITUCIÓN de 1974

a. Antecedentes históricos

En 1954, la Legión del Caribe fraguó una rebelión contra Somoza García. Emiliano Chamorro y otros fueron apresados, y se rompió el Pacto de los Generales de 1950.

Somoza García prepara su reelección, y en 1955 hace una Reforma Constitucional que lo permitiera. El 21 de septiembre de 1956, Somoza García es postulado por la Convención Liberal en León. En los festejos en la noche, en el Club Social de Obreros, Rigoberto López Pérez ajusticia al tirano, quien es declarado muerto el 29 de septiembre. Le sucede su hijo Luis Somoza, y éste se reelige en 1957, bajo estado de sitio y de juicios militares. Durante la presidencia de Luis Somoza Debayle la agitación política antisomocista fue intensa.

Se dieron revueltas en la Fuerza Aérea para dar golpe de Estado el 26 de junio de 1958, pero éste fracasó. Los miembros eran Rivas Gómez, Alí Salomon y Carlos Ulloa. Se pueden mencionar, entre otras revueltas: el Movimiento de Ramón Raudales de 1958; Olama y Mollejones, en mayo-junio de 1959; El Chaparral, con la participación de Carlos Fonseca, en 1959; la masacre de estudiantes del 23 de julio de 1959 en León; la toma de los cuarteles en Jinotepe y Diriamba, el 11 de noviembre de 1959, por los dirigentes del Partido Conservador: Diego Manuel Robles, y Emilio y Edmundo Chamorro Rappaccioli.

En julio de 1951 surge el Frente Sandinista de Liberación Nacional bajo la conducción de Carlos Fonseca Amador. El 29 de mayo de 1960 la Juventud Conservadora ganó elecciones en la Convención del Partido Conservador, con Fernando Agüero electo Presidente del mismo. René Schick, Presidente de la República para el período 1963-1967, muere en el poder el 3 de agosto de 1966. El Congreso nombra como sustituto a su vicepresidente, Lorenzo Guerrero.

Fernando Agüero encabezaba la Unión Nacional Opositora, con gran arrastre, y el 22 de enero de 1967, en campaña electoral, una gran manifestación contra el gobierno es reprimida violentamente. De ello resultan varios muertos, heridos y encarcelados. En esas circunstancias se celebraron las elecciones del 6 de febrero de 1967, en las cuales resultó electo con acusaciones de fraude el general Anastasio Somoza Debayle, quien tomó posesión el 1º de mayo de 1967, hasta 1973.

Después de muchas conversaciones, el 28 de marzo de 1971 se celebró un pacto político entre el Partido Liberal Nacionalista y el Partido Conservador, en las figuras de Anastasio Somoza Debayle y Fernando Agüero Rocha, en virtud del cual se reformaría totalmente la Constitución y se convocaría a una Constituyente, se nombraría a una Junta de Gobierno integrada por tres miembros por un plazo de dos años y medio. La Junta de Gobierno provisional convocaría elecciones generales para el período que iniciaría el 1º de diciembre de 1974.

Se celebraron elecciones para la Constituyente el primer domingo de febrero de 1972, y se instaló la Asamblea Constituyente el 15 de abril del mismo año. La Junta de Gobierno provisional tomó posesión el 1º de mayo de 1972.

Surgen pugnas entre liberales y conservadores, y Agüero renuncia. Es sustituido por Edmundo Paguaga Irias el 1º de marzo de 1973. El 14 de mayo de 1974 la Nueva Constitución Política de Nicaragua fue aprobada por la Asamblea Constituyente, y ese mismo día fue promulgada por la Junta de Gobierno. Se derogó la Constitución de 1950.

La Junta de Gobierno provisional convocó a elecciones el 1º de septiembre de 1974, las ganó el general Anastasio Somoza Debayle, quien tomó posesión el 1º de diciembre de 1974.

b. Características generales

Esta Constitución reúne una serie de características:

- Es extensa, con 343 artículos.
- Recoge en su mayoría las disposiciones de la Constitución de 1950.

- Se considera, desde el punto de vista formal, una Constitución elaborada bajo un riguroso control técnico.
- Observa en sus disposiciones, prohibiciones basadas en la Guerra Fría, y en el afán de frenar desde el poder la guerra de liberación que se libraba contra Somoza y que lo derrotaría el 19 de julio de 1979.
- Prohíbe la formación y actividades de partidos comunistas y de los que ostenten ideologías similares, lo mismo que de cualquier otro partido de organización internacional (herencia de la Cn. de 1950).
- Inhibe a los individuos que a ellos pertenezcan de desempeñarse en cualquier función pública sin perjuicio de las otras penas que la ley señale (herencia también de la Cn. de 1950).
- Prohíbe a los clérigos, seglares o ministros de cualquier culto, efectuar cualquier forma de propaganda política invocando motivos religiosos o valiéndose de las creencias religiosas del pueblo.
- Prohíbe que en los templos, además, con ocasión de actos de culto o propaganda religiosa, se haga crítica a las leyes del Estado, al gobierno, o a los funcionarios públicos en particular (esto es nuevo).
- Se observan facultades conferidas al Presidente de la República que amenazan las libertades, como la siguiente: “El Presidente de la República, cuando a su juicio se hallare amenazada la tranquilidad pública, podrá dictar detención de quienes se presume responsables, interrogarlos o mantenerlos detenidos hasta por diez días, dentro de los cuales deberá ponerlos en libertad o a la orden de jueces competentes, pero si a juicio del Presidente de la República fuera necesario confirmar a los indiciados, podrá decretar su confinamiento en Consejo de Ministros (Arto. 195, párrafo primero).
- Son iguales que los de la Constitución del 50, los principios de Nación, de legalidad, de democracia y el tipo de ciudadanos.
- El Estado es laico, sin religión oficial.
- Se introduce el principio de autodeterminación, la no intervención en los asuntos de otros estados; la no agresión política, militar o económica contra otros estados. Se plantean como medios de solución de los conflictos el arbitraje y el derecho internacional.
- Son leyes constitucionales: la Ley de Amparo, la Ley Marcial y la Ley Electoral.

- El Catálogo de Derechos y Garantías está comprendido en el Título II: la nacionalidad; Título III: los derechos y deberes de los extranjeros; Título IV: la ciudadanía, y Título V: los derechos y garantías en los siguientes capítulos: Disposiciones Generales, son los derechos individuales: de la propiedad, de la familia, del trabajo, de la educación, de la religión y templos e impuestos.

c. Organización del Estado

El Poder Legislativo era bicameral, compuesto por la Cámara de Diputados con un número no menor de 70 miembros, uno por cada 30,000 habitantes o fracción residual mayor de 15,000 electos en circunscripciones departamentales. La Cámara de Senadores estaba integrada por 30 senadores y sus suplentes en circunscripción nacional. Los miembros de ambas cámaras eran electos por un período de seis años y por voto popular, y debían ser del estado seglar, naturales de Nicaragua, y tener 25 y 40 años, respectivamente.

El Poder Ejecutivo lo ejercía la figura del Presidente, electo popularmente de forma secreta y directa. Éste tenía que ser nicaragüense natural, mayor de 25 años, del estado seglar, en ejercicio de sus derechos, con residencia de al menos cinco años en el país, y no haber renunciado nunca a su nacionalidad.

El Poder Judicial estaba integrado por la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales de Apelaciones, Tribunal Superior del Trabajo, Tribunal de lo Contencioso Administrativo (que no funcionó por falta de Ley), jueces de Distrito y locales, jueces del Trabajo, y registradores públicos de la Propiedad. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eran nueve: cinco del partido de la mayoría y cuatro del partido del segundo lugar en la elección de autoridades supremas. Eran electos por seis años por el Congreso Nacional en Cámaras Unidas; debían ser mayores de 35 años y menores de 70, naturales de Nicaragua, seglares, y abogados con más de diez años de desempeño de su profesión o de magistratura.

El Poder Electoral estaba integrado por el Tribunal Supremo Electoral, Tribunales Departamentales Electorales y Directorios Electorales.

El Tribunal Supremo Electoral, con sede en la ciudad capital; los Tribunales Departamentales, en cada cabecera departamental, y un Directorio en cada mesa electoral. El Tribunal Supremo Electoral

tenía cinco miembros: dos del partido mayoritario, dos del partido que había obtenido el segundo lugar, y un quinto que sería el presidente del partido mayoritario o en concurso con el del segundo lugar.

d. Reformas

En la Constitución se establecía la reforma parcial, facultad derivada en el Congreso, y la reforma total sólo pasados diez años de vigencia por una Asamblea Constituyente, después de que el Congreso declare que ha lugar de reforma.

La única reforma sufrida por esta Constitución fue la del 13 de julio de 1978, en la cual se estableció la libre organización política, siempre que sostuviera el orden democrático y el republicano. Se reformaron las leyes constitucionales: la Ley Marcial y la Ley de Amparo, y el voto fue regulado en la Ley Electoral.

Esta Constitución estuvo en vigencia hasta el 19 de julio de 1979, cuando la dictadura somocista sucumbió a una Revolución Popular armada, y asumió el poder un Gobierno Revolucionario de Reconstrucción Nacional.

14. CONSTITUCIÓN de 1979

EL ESTATUTO FUNDAMENTAL DEL GOBIERNO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL (20 DE JULIO DE 1979), ESTATUTO SOBRE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS NICARAGÜENSES (21 DE AGOSTO DE 1979)

a. Antecedentes históricos

Esta Constitución deroga la Constitución Política de 1974. La Junta de Gobierno promulgó el Decreto N°. 1: “Estatuto Fundamental del Gobierno de Reconstrucción Nacional”, que establecía, entre otras cosas, la derogación de la Constitución de 1974, y de las leyes constitucionales de Amparo, Marcial y Electoral (Arto. 3); disolvía las estructuras del régimen anterior como las cámaras (de diputados y de senadores), la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior del Trabajo (Arto. 2).

Si bien esta Constitución no está otorgada por el Poder Constituyente,⁴ ésta hacía las veces de Constitución Política, y fue la que nos rigió en el ámbito constitucional por más de ocho años.

Entre otros aspectos, garantizaba el respeto a los Derechos Humanos de conformidad con los tratados y acuerdos de la OEA, la libertad de conciencia, de culto, de sindicalización etc. (Artos. 6 a 8); y se organizaba

⁴ La noción de Poder Constituyente si es oportunamente depurada de incrustaciones ideológicas, se define, simplemente, por oposición a la de Poder Constituido.

Se llama “**constituido**” a todo poder “legal”, es decir, conferido y disciplinado por normas positivas vigentes (y ejercido de conformidad con ellas). Las normas que provienen de un poder constituido encuentran su fundamento de validez en las normas del sistema jurídico vigente.

Por el contrario, se llama “**constituyente**” al poder de instaurar una primera Constitución. Llamemos primera Constitución a toda aquella que no encuentra su fundamento de legitimidad en una precedente. Una primera Constitución es, en suma, una Constitución emanada *extra ordinem*, fruto de una revolución, y, por lo tanto, privada de fundamento de validez en normas (las eventuales normas sobre la producción constitucional propias del ordenamiento constitucional precedente).

Linares Quintana afirma que el Poder Constituyente “*es la facultad inherente a toda comunidad soberana de darse su ordenamiento jurídico-político fundamental originario por medio de una Constitución, y de reformar éste total o parcialmente cuando sea necesario*”.

Como se puede deducir de la definición que nos brinda Linares Quintana, el concepto de Poder Constituyente está unido al de Constitución --recordemos la definición al respecto, de la primera unidad--. Tanto desde un punto de vista lógico como histórico, el Poder Constituyente es una necesidad para la Constitución escrita, que no puede ser pensada racionalmente si no es a partir de éste.

el Estado estableciendo como órganos de gobierno: la Junta de Gobierno, el Consejo de Estado y los Tribunales de Justicia (Arto. 9). Se declaran disueltas las Cámaras de Diputados y Senadores, y la Corte Suprema de Justicia. El Estatuto le otorgó la legalidad a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, y a través de él se crearon los Tribunales de Justicia, los cuales estarían a cargo de la Corte Suprema de Justicia.

Un mes después se hizo necesaria la promulgación del Estatuto de Derechos y Garantías de los Nicaragüenses, del 21 de agosto de 1979, en donde aparece el Catálogo de Derechos Humanos, por el cual la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional hacía efectivo el ejercicio de los Derechos Humanos.

b. Características generales

Existe discusión en cuanto a si es una Constitución o no. En amplio sensum podemos afirmar que posee las dos partes fundamentales de una Constitución Política: la Parte Dogmática, con el Estatuto de Derechos y Garantías de los Nicaragüenses, y la Parte Orgánica, el Estatuto Fundamental.

Es el primer texto que dispone que en Nicaragua no hay pena de muerte, sin excepción alguna. En él se reconoce la igualdad de todos los ciudadanos y la participación de los mismos, tanto en la vida social como en la vida política.

En el Estatuto de Derechos y Garantías de los Nicaragüenses se garantiza plena vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, y de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, de la Organización de Estados Americanos.⁵

Es el primer texto constitucional donde existe protección a los derechos, incluyendo las situaciones excepcionales o de emergencia, los derechos insuspendibles y el Recurso de Amparo.

⁵ Protección estatal, que hoy se establece de igual manera en el Arto. 46 de la actual Constitución Política de Nicaragua.

b. Derechos fundamentales

Dentro de los principales Derechos humanos que se consagraron en el Estatuto de Derechos y Garantías podemos señalar: la igualdad ante la ley; el derecho a la vida; la integridad física, psíquica y moral; la libertad individual y la seguridad personal; las garantías del procesado; no sufrir prisión por deuda; la libre circulación y residencia; el derecho al asilo; el respeto de su honra y reputación; la protección de la vida privada; la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; la libertad de información; la libertad de expresión; la igualdad incondicional entre los nicaragüenses; la libertad de conciencia y de culto; la libertad irrestricta de pensamiento hablado y escrito; el derecho de petición, y el derecho de elegir y de ser elegido, entre otros.

c. Organización del Estado

El Estatuto Fundamental del Gobierno de Reconstrucción Nacional fue el que se encargó de la organización del Estado. La Junta de Gobierno asumió facultades del Poder Ejecutivo y compartía facultades de Poder Legislativo con el Consejo de Estado, que estaba integrado por 35 miembros designados por las organizaciones políticas, socioeconómicas y sindicales.

El Poder Judicial lo ejercían una Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Superior del Trabajo, cuyos magistrados eran nombrados por la Junta de Gobierno y por jueces de Distrito y locales, nombrados por la Corte Suprema de Justicia.

El Estatuto Fundamental sufrió una reforma en los Artos. 8, 9, 18 y 28, con el objetivo de preparar las condiciones para el proceso electoral que iba a realizarse, del cual surgiría la nueva Asamblea Nacional, que elaboraría la nueva Constitución. En dicha reforma se incorporaban como órganos máximos de gobierno, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral. También se establecía que hasta la promulgación de la nueva Constitución seguirían vigentes los Estatutos mencionados y la Ley Electoral que sería publicada.

TERCERA UNIDAD

CONSTITUCIÓN DE 1987

1. Introducción

Es necesario comenzar el estudio de la Constitución Política de 1987, con el análisis de la estructura constitucional, partiendo de las constituciones de la posguerra, cuyos rasgos básicos se han ido consolidando, si bien son indudables las profundas transformaciones sociales que han ocurrido desde entonces.

La Constitución de 1987 fue promulgada el 9 de enero de 1987, y publicada en La Gaceta No. 5, con esa fecha. Consta de 202 artículos por lo que se puede clasificar como una Constitución extensa.

Las constituciones actuales se dividen en Títulos, Capítulos y Artículos. Normalmente van precedidas de un preámbulo.

Por regla general, en el Preámbulo que precede a las constituciones se consignan en forma solemne los principios ideológicos que han inspirado al constituyente para promulgarla, y pueden finalizar con disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.

En la Constitución se distingue entre la Parte Dogmática –que contiene la declaración o el Catálogo de Derechos Fundamentales– y la Parte Orgánica, donde se expresan, en general, las normas sobre la forma y el funcionamiento del Estado y los poderes públicos. Esta rígida distinción cada vez lo es menos, debido a la intención de toda la norma constitucional.

Viene enseguida el contenido mismo de la Carta Magna, el cual se suele dividir por materias, en Títulos o Capítulos, o Secciones. Cada uno se compone de Artículos, en los cuales se consignan las disposiciones particulares correspondientes a la materia de que se trata.

Los Artículos pueden estar subdivididos en ordinales, párrafos o en partes, y también constar de varios numerales cuando se trata de relacionar, por ejemplo, las atribuciones o funciones de algún órgano del Estado, autorizaciones, prohibiciones o limitaciones concedidas o impuestas a determinado agente del poder. Por lo

general, las cláusulas de reforma van al final del texto constitucional, y las declaraciones de derechos al comienzo del mismo.

La Constitución Política de Nicaragua, por ejemplo, consta de un Preámbulo y once Títulos, divididos en 202 Artículos.

- a. El Título I trata de los Principios fundamentales.
- b. El Título II habla sobre el Estado.
- c. El Título III consagra la nacionalidad nicaragüense.
- d. El Título IV se ocupa de los derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense.
- e. El Título V se refiere a la defensa nacional.
- f. El Título VI trata la economía nacional, reforma agraria y finanzas públicas.
- g. El Título VII habla de la educación y la cultura.
- h. El Título VIII se refiere a la organización del Estado.
- i. El Título IX trata sobre la división política administrativa.
- j. El Título X aborda la supremacía de la Constitución, su reforma, y de las leyes constitucionales.
- k. El Título XI expresa las disposiciones finales y transitorias.

Puede decirse que nuestra Constitución, en su presentación y contenido, responde a los exigentes cánones de la técnica jurídico-constitucional, y que, salvo contadas excepciones, está redactada de forma clara y concisa.

Desde otro punto de vista, la estructura específica de una Constitución Política normalmente la encontramos de la siguiente manera:

- 1) Preámbulo
- 2) Parte Orgánica
- 3) Parte Dogmática
- 4) Supremacía de la Constitución
- 5) Control constitucional
- 6) Reformas constitucionales
- 7) Vigencia de la Constitución
- 8) Disposiciones finales y transitorias

2. Antecedente histórico

La Constitución de 1987 se alimentó de las experiencias adquiridas en más de siete años, luego del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, en los cuales hubo un gran enriquecimiento de la teoría con la práctica. Esta Constitución, sin dejar de tener las bases teóricas y las aspiraciones revolucionarias, reflejó la realidad del pueblo nicaragüense, ya que en su elaboración se contó con la participación de todos los sectores políticos, económicos y sociales. Esto lo veremos reflejado en el capítulo siguiente, referido al proceso constituyente.

3. Proceso constituyente

La Constitución Política de la República de Nicaragua, de 1987, tiene como base un proceso electoral que culminó el 4 de noviembre de 1984, con las elecciones de las máximas autoridades del país. Fue redactada, consultada, discutida y aprobada por una Asamblea Constituyente convocada para tal efecto, después de haberse dado en la historia constitucional doce cartas magnas, la primera promulgada en la época de la Colonia, en 1826, y la última en 1974.

El proceso constitucional en Nicaragua fue amplio y abierto, tuvo gran publicidad, y se procuró la mayor participación tanto popular como de las organizaciones de todos los sectores involucrados en el mismo. Fueron siete los partidos políticos⁶ que participaron en las elecciones, cubriendo todo un espectro ideológico.

Para tal efecto, se siguieron los siguientes pasos:

a. La recaudación de la información que se requería

En este sentido, se creó una Comisión Especial Constitucional que tuviera la mayor representación de todos los partidos políticos, la que se enfocó en tres actividades principales: la recolección de información de diversos países acerca de sus constituciones y de los procesos constitucionales, y la recepción --oral y por escrito--

⁶ El Frente Sandinista de Liberación Nacional, y los partidos Conservador Demócrata de Nicaragua, Liberal Independiente, Popular Social Cristiano, Socialista de Nicaragua, Comunista de Nicaragua, y el Movimiento de Acción Popular Marxista-Leninista. Los mismos obtuvieron como resultado lo siguiente: 61, 14, 9, 6, 2, 2 y 2 representantes, respectivamente, en una elección en la cual se inscribió el 93 por ciento de los electores, y votó el 75 por ciento de los inscritos.

de las opiniones de los partidos políticos existentes en el país, de las organizaciones económicas, gremiales, religiosas, sindicales, de mujeres y otras, y la realización de debates abiertos sobre temas constitucionales.

b. Proyecto de Constitución

El proyecto de Constitución se redactó con base en las opiniones emitidas por los partidos políticos y en las discusiones generadas en torno a la elaboración del mismo, y luego fue presentado a Plenario de la Asamblea Nacional, para que fuera remitido a la Comisión Dictaminadora Constitucional, integrada por 20 representantes de los distintos partidos políticos.

c. La realización de una consulta nacional del proyecto de Constitución

Para llevar a cabo la consulta nacional, se imprimieron 750 mil ejemplares de la Constitución, los que fueron distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional, en inglés, misquito y sumo, para las comunidades de la Costa Atlántica.

Se organizaron 75 cabildos abiertos constitucionales, para que todos los sectores de la población expresaran su opinión y emitieran sugerencias, aportes y recomendaciones sobre el proyecto constitucional, el que ya había sido estudiado por jóvenes, mujeres, obreros, campesinos, artesanos, y comerciantes, entre otros, convirtiendo así el territorio nacional en una escuela de formación cívica, política y patriótica.

Toda esta información recopilada fue analizada, procesada y organizada en forma de un índice cronológico, el que fue entregado a los representantes con el propósito de que éstos lo incorporaran al momento de las discusiones constitucionales. Posterior a la consulta, la Comisión Dictaminadora se reunió en sesión permanente durante dos meses, en 1986, para la discusión del proyecto, tomando en cuenta la información recogida por la Comisión Especial Constitucional, los resultados de los cabildos abiertos y los dictámenes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral sobre la materia de su competencia.

d. Debate constitucional en el plenario de la Asamblea Nacional Constituyente

Esta discusión y aprobación fue realizada a lo largo de diez semanas por los siete partidos políticos, lo que constituyó el aspecto principal del proceso constitucional.

El debate fue participativo, y sustentado en los análisis histórico, filosófico, sociológico, político y jurídico.

“Todos los partidos políticos se acogieron al derecho de expresar sus acuerdos, desacuerdos y votos razonados sobre los artículos. Hemos dejado constancia de las votaciones, unanimidad, mayorías, votos en contra y razonados, en las actas e informes.

Nos sentimos satisfechos de que la persuasión haya sido el medio utilizado para lograr el consenso que nos dio los siguientes resultados: 117 artículos aprobados con el 80 por ciento de los votos, 19 artículos con el 70 por ciento de los votos, y 18 artículos con el 60 por ciento de los votos de los representantes presentes⁷ ...”

4. Principales características de la Constitución

La Constitución Política cuenta con un Preámbulo y 11 Títulos, 26 Capítulos y 202 Artículos. Es un documento político jurídico que sintetiza las aspiraciones de todos los sectores sociales, y en donde prima la identidad nacional sobre los intereses partidistas.

Es una Constitución que deja amplias garantías y deberes individuales, y, además, establece aspectos en sus Títulos y Capítulos sobre la economía, la defensa y la reforma agraria, así como también los mecanismos sociales y gubernamentales necesarios para que se realicen y se defiendan.

Así mismo, el pluralismo político está expresado en el proceso de elaboración de la misma, en la economía mixta, en el respeto absoluto a las distintas creencias religiosas y en la pluralidad multiétnica del pueblo; se define la división de los poderes del Estado como una manifestación de la más pura expresión democrática, la autonomía

⁷ Informe Constitucional, presentado por el presidente de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, Comandante de la Revolución Carlos Núñez Téllez, Managua, Plaza de la Revolución, 9 de enero de 1987.

municipal, y por primera vez se deja establecida la autonomía de las regiones de la Costa Atlántica.

No es una Constitución perfecta, pues en su articulado refleja los mecanismos y procedimientos para reformarla, faculta a la Corte Suprema de Justicia a través de los recursos de Exhibición Personal, de Amparo e Inconstitucionalidad, a establecer su imperio con respecto a la incorrecta aplicabilidad e interpretación de la misma.

5. Preámbulo

Podemos definir el Preámbulo como la enunciación previa contenida en las constituciones, donde se exponen los grandes principios y fines que guiaron al constituyente para redactar las normas básicas de la organización política del país.

Es, además, esa fórmula solemne colocada, a manera de introducción, en el encabezamiento de la Constitución, y que debe servir de pauta o guía a gobernantes y gobernados en la vida del Estado. Puede definirse también como “la enunciación previa contenida en las constituciones, donde se exponen los grandes principios y fines que han guiado al constituyente para redactar las normas básicas de la organización política del país”.

El Preámbulo contiene la finalidad, quiénes elaboran la Constitución, por qué se hace, los principios que inspiran o motivan esa Constitución Política, y los antecedentes históricos que se consideran convenientes, entre otros.

El contenido no es rígido. Cada Asamblea Constituyente define si se hace Preámbulo o no. No es obligatorio que lo haya o se defina el contenido del mismo.

Acerca del valor legal del Preámbulo, hay dos posiciones:

- 1) Que no forma parte de la Constitución. Es una declaración y no tiene valor legal.
- 2) Es parte de la Constitución y tiene valor legal.

A efectos prácticos, es irrelevante su validez jurídica o no, en cuanto efectivamente es una declaración política y una expresión de las

motivaciones y aspiraciones del constituyente, pero es de utilidad para captar esas motivaciones y aspiraciones, que pueden ayudar a una mejor interpretación de la Constitución, al recoger el espíritu de la Ley o del legislador.

La fórmula solemne de los preámbulos se complementa y desarrolla dentro del texto del articulado constitucional por medio de disposiciones contenidas en él, ya sea de manera dispersa u ordenada dentro de un Título o de un Capítulo especial.

Un Título especial es la manera más adecuada de consagrar formalmente las declaraciones de derechos, y así lo hacen la mayoría de las constituciones modernas, comenzando con la de Estados Unidos, cuyo “Bill of Rights”, o sea, Derecho a Iniciativa de Ley, está formado por las 10 primeras enmiendas que le introdujeron entre 1789 y 1791.

El objeto esencial de las declaraciones de Derecho es que los ciudadanos conozcan de manera precisa los derechos y libertades que el Estado les debe garantizar, y, a la vez, cuáles son las limitaciones impuestas al ejercicio de esos derechos y libertades, para concluir que “una declaración de derechos es, por reciprocidad, una declaración de deberes también”.

Así podemos comenzar a hablar del Valor Jurídico de las declaraciones de derecho: éstas tienen por objeto inspirar al legislador, pero no pueden imponerse al Juez, para otros tendrán valor de Ley Constitucional y podrían ser sancionados de violación.

Los estudiosos de la Constitución de Estados Unidos de 1789, al entrar en vigencia el problema del alcance jurídico de su preámbulo --en donde pensaron condensar los principios ideológicos que la inspiraron, o sea, que era el faro que iluminaba todo el cuerpo de la Constitución--, se enfrentaron al problema jurídico de si el texto del Preámbulo de esa Constitución tenía fuerza normativa o no.

En 1905, la Corte Suprema sostuvo lo siguiente: “...aun cuando el Preámbulo indica el propósito general para el cual el pueblo ordenó y estableció la Constitución, éste nunca ha sido considerado como fuente de ningún poder sustantivo conferido al gobierno de los Estados Unidos”.

Como explica Burdeau, para resolver el problema del valor jurídico de las declaraciones del Derecho, es necesario distinguir dos categorías: las que anuncian una regla de Derecho Positivo, y las otras disposiciones, que están desprovistas de la fuerza obligatoria propia del Derecho Positivo, y son ellas las que determinan la finalidad estatal o fijan metas al legislador para afianzar la “justicia, libertad y la paz”.

En materia de preámbulos, el de la Constitución de los Estados Unidos de 1787 sirvió de modelo clásico a la gran mayoría de las constituciones americanas y europeas del siglo XIX, e incluso de la época contemporánea. Este preámbulo dice:

“Nosotros, el pueblo de Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para todos nosotros y para nuestra posteridad, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América.”

Si examinamos, por ejemplo, el Preámbulo de la Constitución de Argentina de 1853, aún en vigor, vemos que en buena parte es copia del anterior:

“Nosotros, los representantes del pueblo de Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación Argentina”.

Por su parte, el Preámbulo de la Constitución de Colombia, de 1886, adopta una fórmula más sucinta, pero no menos expresiva:

“En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, y con el fin de afianzar los bienes de la justicia, la libertad y la paz, hemos venido en decretar, como decretamos la siguiente Constitución Política de Colombia.”

La Constitución francesa de 1958 --o de la Quinta República-- se remite, como las anteriores, a la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, y en su segundo inciso formula una invitación a los territorios de ultramar. Su texto es el siguiente:

“El pueblo francés proclama solemnemente su adhesión a los derechos del hombre y a los principios de la soberanía nacional tal como han sido definidos por la declaración de 1789, confirmada y completada por el preámbulo de la Constitución de 1946.

La Constitución nicaragüense, de 1987, dice:

“Nosotros los representantes del pueblo de Nicaragua, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, evocando la lucha de nuestros antepasados indígenas, el espíritu de Unidad Centroamericana y la tradición combativa de nuestro pueblo, que inspirado en el ejemplo del general JOSÉ DOLORES ESTRADA, ANDRÉS CASTRO Y ENMANUEL MONGALO, derrotó el dominio filibustero y la intervención norteamericana en la Guerra Nacional. La guerra antiintervencionista de BENJAMÍN ZELEDÓN. Al General de Hombres Libres, AUGUSTO C. SANDINO, Padre de la Revolución Popular Antiimperialista. La acción heroica de RIGOBERTO LÓPEZ PÉREZ, iniciador del principio del fin de la dictadura.

El ejemplo de CARLOS FONSECA, el más alto continuador de la herencia de Sandino, Fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y Jefe de la Revolución.

A todas las generaciones de Héroes y Mártires que forjaron y desarrollaron la lucha de liberación por la independencia nacional. En nombre del pueblo nicaragüense; de todos los partidos y organizaciones democráticas, patrióticas y revolucionarias de Nicaragua; de sus hombres y mujeres; de sus obreros y campesinos; de su gloriosa juventud; de sus heroicas madres; de los cristianos que desde su fe en Dios se han comprometido e insertado en la lucha por

la liberación de los oprimidos; de sus intelectuales patrióticos; y de todos los que con su trabajo productivo contribuyen a la defensa de la patria. De los que luchan y ofrendan sus vidas frente a la agresión imperialista para garantizar la felicidad de las nuevas generaciones. Por la institucionalización de la conquista de la revolución y la construcción de una nueva sociedad que elimine toda clase de explotación y logre la igualdad económica, política y social de los nicaragüenses y el respeto absoluto de los Derechos Humanos. Por la Patria, por la Revolución, por la Unidad de la Nación y por la Paz, promulgamos la siguiente Constitución Política de Nicaragua.”

Instituciones nuevas fundadas sobre el ideal común de libertad, de igualdad y de fraternidad, y concebidas en vista de su evolución democrática.”

Como se observa, el Preámbulo de la Constitución nicaragüense se dedica a relacionar los aspectos que a criterio del constituyente, son los elementos que tuvieron más relevancia en la Historia de Nicaragua.

6. Fundamentos de la nación nicaragüense

Los principios fundamentales que inspiraron la elaboración de esta Constitución fueron incorporados en el Título I como parte del mismo articulado de la Constitución.

La nación nicaragüense se proclama en tres derechos, que son irrenunciables y fundamento de la nación: la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional.⁸

La independencia, vista ésta como la libertad de la nación, así como el rechazo de cualquier injerencia extranjera. La independencia del Estado no debe ser vista como una característica separada y agregada a la soberanía, sino como una manifestación particular de esa misma soberanía. O mejor dicho: soberanía e independencia son los dos aspectos inseparables de una misma cualidad; el monopolio estatal de la fuerza. Este monopolio se expresa hacia

⁸ La independencia, la soberanía y la autodeterminación, son derechos irrenunciables del pueblo y fundamento de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de la nación de Nicaragua o cualquier intento por menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo: es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos.

adentro como posibilidad de mandato superior a cualquier otro sujeto (soberanía); y hacia afuera, por necesidad lógica y práctica, como imposibilidad de usar la violencia dentro de otros estados, y, a la vez, como exclusión de la fuerza de cualquier otro Estado dentro de sus fronteras (independencia).

Separado de cualquier otro Estado, la delimitación exacta del territorio es una condición necesaria e irrenunciable para garantizar la soberanía y la independencia. En efecto, es necesario establecer exactamente hasta dónde se extiende el poder coercitivo soberano del Estado, y desde dónde comienza el poder soberano de otros estados o de un espacio libre de poder (por ejemplo, el mar libre).

Si las fronteras del Estado fueran inciertas e indeterminadas, constantemente sería puesta en discusión la existencia misma del Estado, pues la disputa sobre las fronteras lo sería siempre con otro Estado, es decir, con otro monopolio de la fuerza, y, por lo tanto, constituiría una fuente de guerra entre ellos (si se tratara de una reivindicación puramente verbal, en cuyo caso uno de los dos afirmaría de hecho su soberanía y delimitaría sus propias fronteras, y el otro se limitaría a protestar; o quizá sería un conflicto real y efectivo entre ellos para afirmar su poder exclusivo sobre un territorio).

La soberanía, de acuerdo con el artículo 2 Cn., reside en el pueblo, el que la ejerce a través de instrumentos democráticos, decidiendo y participando libremente. El poder político lo ejerce el pueblo, por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. La misma establece que ninguna persona o reunión de personas puede arrogarse este poder o representación.

Etimológicamente, la palabra soberanía viene del latín *superanus*, que significa el que está por encima, es decir, se dice que el Estado es soberano porque tiene un poder de mandato superior a todo.

Existen múltiples centros de poder dentro de las fronteras del Estado, pero todos están subordinados a él y ninguno es igual o superior que él; por el contrario, el Estado es superior a todos los demás. Se trata de una consecuencia evidente e inevitable que deriva del hecho de que el Estado detenta el monopolio de la fuerza, de

modo que la pretensión de ser superior a cualquier otro es efectiva y materialmente fundada.

Aunque tenga el monopolio de la fuerza, el Estado no lo puede todo, al menos desde el punto de vista jurídico, porque debe respetar ciertos límites amplios y generalizados. Si bien toda institución no es otra cosa que un complejo sistema de límites a través de los cuales la fuerza del Estado no puede querer jurídicamente la muerte de los hombres, porque la pena de muerte esta vedada, al privar de la libertad, al prohibir ciertos comportamientos, el Estado debe respetar procedimientos rigurosos y límites infranqueables.

Podemos decir, en general, que el Estado sólo puede usar la fuerza en los casos y modos y con los límites contenidos en las leyes aprobadas por un cuerpo representativo de todo el pueblo. Entonces, en principio, la soberanía del Estado no significa libertad absoluta ni arbitrariedad del poder estatal, es por ello que también el Estado tiene límites.

Sin embargo, sigue siendo cierto que tales límites y garantías son eficaces y efectivos sólo si el Estado (el aparato estatal) los hace propios y los respeta. Normalmente sucede así, pero el Estado en cuanto monopolista de la fuerza tiene la posibilidad material de desconocer todo límite y toda garantía, de violar sus propias leyes.

Las mismas revoluciones --es decir, la destrucción del orden existente por parte de masas populares que se rebelan y triunfan en su empresa-- confirman, paradójicamente, la soberanía del Estado. En efecto, las revoluciones son acontecimientos que destruyen el monopolio de la fuerza del Estado existente, y con ello se destruye al mismo Estado, de tal forma queda demostrado que privado de dicho monopolio el Estado muere. Aunque todas las revoluciones modernas que han ocurrido hasta ahora han destruido y construido el Estado, es decir, destruyeron el viejo monopolio de la fuerza y construyeron uno nuevo.

Ejemplo de ello fue el triunfo de la Revolución Sandinista, el 19 de julio de 1979, que destruyó un Estado que materialmente desconocía todo límite y violaba sus leyes. La Revolución impuso nuevas reglas, y construyó a partir de julio un nuevo monopolio a través del Estado Revolucionario.

La autodeterminación es la potestad de elegir el propio destino, de tomar éste para llevar a cabo el proyecto de la nación. El poder político lo ejerce el pueblo directamente, mediante el sufragio, también podrá ejercerlo mediante el referéndum y el plebiscito.

Cuando hablamos de referéndum, nos referimos a los principios de la democracia directa, donde se somete al pueblo el texto de una nueva ley o de una nueva Constitución, para que él se pronuncie libremente sobre su adopción, mediante sufragio universal. Ya no es una asamblea, sino el pueblo mismo el que establece de manera directa la aprobación.

Existen dos tipos de referéndum constitucional:

- 1) Una Asamblea Constituyente elabora y aprueba un texto constitucional que luego debe ser sometido a la ratificación popular mediante referéndum. Se aplica en este caso el procedimiento de la democracia semidirecta.
- 2) El gobierno elabora un texto que propone a la consideración del pueblo, mediante la vía del referéndum, caso en el cual el pueblo ejerce directamente el Poder Constituyente. Este sistema fue utilizado en Francia para la adopción de las constituciones de 1946 (IV República) y 1958 (V República), y en Italia para la Constitución de 1947, que instauró definitivamente el régimen republicano en ese país. También fue aprobada por referéndum la Constitución de Egipto de 1971.

La institución del plebiscito tiene su origen en la Roma antigua, donde las decisiones de la Asamblea de las tribus (*comitia tributa*) y del Consejo del pueblo (*consilium plebis*) eran sometidas a ratificación popular, a través de plebiscito, y donde los tribunos se hacían plebiscito. En la práctica, el procedimiento del plebiscito es semejante al del referéndum; en ambos casos se somete a la consideración del pueblo un proyecto de decisión, para que diga “sí” o “no” al mismo tiempo, por medio del voto. Sin embargo, existen notables diferencias entre un procedimiento y otro. Por una parte, mientras el referéndum se hace sobre un texto ya elaborado de Constitución, o de reforma constitucional, o de ley, o de cualquier otro tipo de decisión normativa,

el plebiscito se realiza sobre una consulta a un acto, al pueblo, sobre qué opina en cuanto a determinado tema.

La nación nicaragüense está sostenida en una serie de principios, los cuales son la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad de la persona humana, el pluralismo político, social y étnico, el reconocimiento de las distintas formas de propiedad, la libre cooperación internacional y el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos.

Se define la libertad como la facultad que permite actuar de una manera u otra o de no actuar, de hacer o decir cuanto no se oponga a las leyes; la justicia, como la virtud que se inclina a dar a cada cual lo que le corresponde o pertenece; el respeto a la dignidad de la persona humana, que tiene su origen en la ideología que inspira la Revolución Francesa, posee como su eje al ser humano, que es considerado un fin en sí mismo, y por lo tanto merecedor de un trato acorde con su dignidad humana; el pluralismo político, social y étnico es el sistema por el cual se acepta o reconoce la diversidad de doctrinas o posiciones.

La Constitución nicaragüense reconoce que el pluralismo político, social y étnico asegura la existencia y participación de todas las organizaciones políticas en los asuntos económicos, políticos y sociales del país, sin restricción ideológica. Reconoce también las distintas formas de propiedad, entre las que se establecen la propiedad pública, privada, asociativa, cooperativa y comunitaria, las que deben ser estimuladas sin discriminación para producir riquezas, y deben cumplir una función social. Respeta la libre cooperación internacional y la libre autodeterminación de los pueblos.

Se establece el compromiso nacional de basar nuestras relaciones internacionales en la amistad, solidaridad y reciprocidad entre los estados. En consecuencia, se inhibe y proscribe todo tipo de agresión política, militar, económica, cultural y religiosa y la intervención en los asuntos internos de otros estados. Se reconoce el principio de solución pacífica de las controversias y se proscribe el uso de armas nucleares y otros medios de destrucción masiva, tanto en conflictos internos como en los internacionales. Se asegura el asilo para los perseguidos políticos y se rechaza toda subordinación de un Estado respecto de otro.

7. El Estado de Nicaragua

Nicaragua es un Estado independiente, libre, soberano, unitario e indivisible, es una república democrática, participativa y representativa. En este Capítulo de la Constitución Política nicaragüense, se establece claramente cuáles son los órganos de gobierno: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Electoral.

Trataremos de dirigirnos a hablar doctrinariamente sobre lo que es el Estado, ya que en el mundo de hoy es difícil encontrar quién no tenga en mente una noción, así sea muy vaga, de lo que es el Estado, de lo que representa éste en su vida, de lo que se puede esperar o se puede temer de él.

Su presencia en el mundo real es un hecho evidente que se hace sentir en todas las actividades y en todos los momentos de la existencia, desde el nacimiento hasta más allá de la muerte. Puede decirse que todas las acciones del hombre como ser social, aun las más íntimas o individuales, están de una u otra forma, directa o indirectamente, sometidas a regulaciones y controles estatales, o, en última instancia, a la vigilancia imperceptible del Estado. Su realidad resulta, pues, evidente. Lo sentimos gravitar sobre nosotros las veces que lo estimamos necesario para el desarrollo de nuestra existencia.

Sin embargo, la idea que las personas tienen acerca de lo que es el Estado es producto más de la propia intuición que de una comprensión exacta de lo que significa éste. Para poder tener una visión clara de la importancia que en el Derecho tiene el Estado, en este capítulo trataremos de definir lo que es éste, así como sus principales características.

El Estado es definido como una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurado y regido por un orden jurídico creado y sancionado por un poder para obtener el bien común. Para cumplir con sus funciones, el Estado necesita imponer obligatoriamente sus decisiones, y, para ello, necesita tener poder.

El Estado de Nicaragua dispone de cuerpos armados para garantizar el Estado de Derecho, y, por ende, los derechos individuales de los ciudadanos. El Estado no sólo tiene instituciones armadas que garantizan su estabilidad, sino también instancias que la garantizan a través de leyes.

Tenemos, en consecuencia, que además del suelo, el territorio de un Estado se extiende en sentido vertical, por debajo y por encima de aquél, y también en sentido horizontal, cuando se trata de estados con zonas costeras. Por consiguiente, los componentes del territorio del Estado de Nicaragua se extienden a las islas, cayos y bancos adyacentes, así como al agua interior, al mar territorial, a la zona continua, a la plataforma continental, a la zona económica exclusiva y al espacio aéreo correspondiente.

El estudio del territorio como espacio físico o material incumbe a ciencias como la Geografía, la Geología o la Geopolítica, a nosotros nos corresponde estudiarlo en cuanto sirve de asiento a la población del Estado de Nicaragua, y en cuanto al ámbito espacial dentro del cual se ejerce el poder del Estado; también cabe considerarlo como campo de aplicación de la política.

Podemos señalar que el espacio aéreo está constituido por la atmósfera que cubre el territorio del Estado de Nicaragua. Éste se ha reservado su dominio sobre todo por razones de estrategia y de seguridad.

En los comienzos de la navegación aérea, la mayor parte de los estados prohibió que su territorio nacional fuese sobrevolado por aviones civiles extranjeros. Estos vuelos han quedado admitidos, con muchas reservas, después de la conclusión de la Convención de París de 1919.

El mar territorial y la plataforma submarina comprenden una zona determinada del mar que baña las costas del Estado, y el subsuelo marítimo correspondiente. En relación con el mar territorial, existe un acuerdo unánime sobre el hecho de que la jurisdicción de un Estado se extiende sobre una zona del mar que lo circunda. En lo que todavía no se ha llegado a un acuerdo definitivo entre los estados es en la determinación exacta de esa zona, y en el criterio que debe tenerse para fijar su extensión.

8. Parte Dogmática de la Constitución

a. Introducción

La Parte Dogmática de nuestra Constitución comienza con un Título I, que suele denominarse Principios Generales o Principios Fundamentales, ahí se recogen los principios que sirven de base a toda la Constitución, y se explican las opciones fundamentales del constituyente. Estos principios --los cuales fueron estudiados con anterioridad-- tienen hoy carácter normativo.

La Parte Dogmática de la Constitución suele llamarse genéricamente Declaración de Derechos, por cuanto en los albores del Constitucionalismo los derechos del individuo frente al Estado se solían promulgar en un documento especial que recibía esta denominación; así sucedió con los “Bill of Rights” estadounidenses y con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Revolución Francesa. Esta declaración o parte de ella está plasmada en el Preámbulo de la Constitución Francesa de 1958, como ya señalábamos.

La primera Declaración de Derechos de la llamada “Era del Constitucionalismo” fue la del Estado de Massachussets, en 1780, seguida de las de la Unión Americana.

La de mayor repercusión y trascendencia para el mundo moderno fue la Constitución francesa, aprobada en 1789. Con la influencia de ésta, las constituciones modernas han incluido las correspondientes declaraciones de derechos en Títulos y Capítulos especiales en el cuerpo de la Carta Magna de Juan sin Tierra.

b. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense

Empezaremos con nuestro estudio de las partes que contiene la Constitución de 1987, con el Catálogo de Derechos, Deberes y Garantías, establecidos en el Título IV de nuestra Constitución, del Arto. 23 al 91. Este Título consta de seis capítulos que se dividen de la siguiente manera: Capítulo I, Derechos Individuales; Capítulo II, Derechos Políticos; Capítulo III, Derechos Sociales; Capítulo IV, Derechos de la Familia; Capítulo V, Derechos Laborales, y Capítulo VI, Derechos de las Comunidades de la Costa Atlántica.

- ✓ Podemos definir o entender como derechos las facultades que satisfacen nuestras necesidades de libertad, igualdad y solidaridad, reconocidas todas ellas en nuestro ordenamiento jurídico, así como podemos afirmar que los deberes son los límites a los derechos, el estar obligados a algo que la Constitución establece, y las garantías serían las enmiendas jurídicas para restablecer el goce de un derecho transgredido.

Para el estudio que efectuaremos a continuación, hemos realizado la siguiente clasificación:

- ✓ **Derechos individuales.** Son derechos directamente ligados al ciudadano, a las personas: el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad ante la ley, a la seguridad personal, a la vida privada; derecho a la honra y a la reputación; derecho a la libertad de conciencia, a libertad de expresión, a la libre circulación; garantías mínimas en el debido proceso, derecho a la integridad psíquica y física, a no ser detenido por deuda; derecho al refugio y a la propiedad privada, entre otros.
- ✓ **Derechos políticos.** Son los que como ciudadanos tienen las personas en Nicaragua. Se es ciudadano a partir de los dieciséis años, sólo los ciudadanos gozan de los derechos políticos consignados en la Constitución y en las leyes, sin más limitaciones que las que se establezcan por razones de edad. Entre otros, tenemos: derecho de elegir y de ser elegido, derecho de optar a cargos públicos, derecho de constituir de trabajadores en la ciudad y en el campo, de las mujeres, de los jóvenes, de los productores agropecuarios, de los artesanos, de los profesionales, de los técnicos, de los intelectuales, de los artistas, de los religiosos y de los pobladores de la Costa Atlántica nicaragüense; derecho de hacer peticiones, de efectuar reuniones pacíficas, de concentración, de manifestación y de movilización; derecho de organizarse.
- ✓ **Derechos sociales.** Están ligados a la educación, vivienda, salud. En nuestra Constitución existe un apartado especial relacionado con el derecho de la familia, así como un apartado específico referido a los derechos laborales. Entre otros derechos sociales tenemos: derecho a la educación y a la cultura, a la salud, al

medio ambiente sano, a la seguridad social; derecho de los nicaragüenses de estar protegidos contra el hambre; derecho a una vivienda digna, al deporte, a la información veraz; derechos de informar y de manifestar nuestras creencias religiosas o privadas. En esta Parte Dogmática hacemos referencia a lo que se le llama Declaración de Derechos, consignada en el cuerpo constitucional.

- ✓ **Derechos económicos.** Están referidos a los derechos de propiedad, al sistema económico, a la participación y a la distribución de la riqueza, reforma agraria, política fiscal, presupuesto, etc.

b.1. Derechos individuales

Nuestra Constitución tiene contemplados los derechos individuales, por lo que es necesario conocer un poco de ellos:

Los derechos individuales y las libertades públicas han sido clasificados de diferentes maneras por los tratadistas de la materia, atendiendo a diversos criterios, pero en esencia todas las clasificaciones coinciden en cuanto hacen su identificación. Por nuestra parte, buscando una mayor claridad, y teniendo en cuenta su naturaleza, hemos decidido clasificar estos derechos --que constan del Arto. 23 al 88 de la Constitución Política de Nicaragua-- en dos grupos:

1. Derecho a la personalidad
2. Derecho a la libertad

De cada grupo se desprenden las correspondientes libertades públicas, cuyo respeto se exige por parte de los gobernantes para poder hacerlos efectivos.

b.1.1 Derecho a la personalidad

La categoría referida a los derechos a la personalidad, como los denominan algunos autores, se suele reservar a aquellos derechos subjetivos que se consideran absolutamente indispensables para que el ser humano sea reconocido como persona, y en cuanto tal, titular de los demás derechos inherentes a esta calidad.

Estos derechos son esenciales, y sin ellos los demás no pueden ejercerse. Coexisten con su titular y no pueden ser transmisibles ni renunciables, ni enajenables ni prescriptibles. Ellos son:

b.1.1.1. Derecho a la vida

Es considerado, por su naturaleza, como el primero de los derechos de la persona; es un derecho natural, básico en toda sociedad civilizada. Su protección es absoluta en todo ordenamiento constitucional, sobre todo si ese ordenamiento responde a un régimen democrático. Es así como debe señalarse, entre las obligaciones fundamentales de los gobernantes, la de proteger la vida de los ciudadanos.

El Arto. 23 de nuestra Constitución Política establece: “El Derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana, en Nicaragua no hay pena de muerte”.

Del derecho a la vida se es titular por el simple ejercicio de la vida, antes de ser jurídicamente persona, es decir, antes de haber franqueado la puerta de acceso al mundo del Derecho.

No obstante, la pena de muerte ha sido consagrada en muchos estados de Derecho, para delitos calificados como atroces. En Inglaterra y en Francia, por ejemplo, existió hasta hace muy poco, y en muchos estados de los Estados Unidos todavía existe bajo formas diversas. La polémica sobre su justificación sigue viva, y aflora cada vez que se produce una ejecución. Sea como fuere, el problema de restablecer o de prohibir la pena de muerte es más de índole penal que constitucional; de ahí que se haya criticado, y no sin razón, el que las constituciones se ocupen de este tema. Como se señaló, es la primera vez en la historia constitucional que se prohíbe la pena de muerte sin excepción alguna.

b.1.1.2. El derecho a la integridad física

Este derecho nace y muere con la persona, y, de cierta manera, va más allá de la muerte. Tiene por objeto proteger la integridad corporal del individuo, que es parte sustancial de su existencia como persona. De ahí que las legislaciones modernas en las sociedades civilizadas impongan castigos severos a delitos como la mutilación, la castración, la desfiguración del rostro, la privación de la vista o

del habla, o, en general, a los atentados contra el cuerpo humano que dejen huella perdurable. También --aunque en menor escala-- se sancionan las lesiones que se causan por agresiones físicas o aun por accidentes involuntarios.

El derecho a la integridad física es un derecho complementario del derecho a la vida, pero es un derecho autónomo que se diferencia de este último. Se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Arto. 5: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. La tortura ha sido en la historia práctica corriente, no sólo en las sociedades primitivas y salvajes, sino también en los regímenes despóticos y aun, aunque encubierta, en sociedades modernas, supuestamente civilizadas. En nuestra Constitución, el derecho a la integridad física se establece en el Arto. 36.⁹

Durante largas y duras épocas, la tortura fue práctica institucionalizada; todos los regímenes, en mayor o menor escala, hicieron uso de ella; inclusive la Iglesia la utilizó, aunque por medio del brazo secular, en épocas de la Inquisición. Hoy se reconoce que la tortura es el peor atentado contra el derecho a la integridad física, agravada por la premeditación y la alevosía que la acompañan, y por la indefensión en que se coloca su víctima.

Pero la tortura no sólo es cometida por los gobiernos o autoridades. También los particulares practican este abominable crimen, cuando someten a una persona a tratos crueles, inhumanos, degradantes, así, un niño es torturado cuando se le castiga con excesivo rigor, una mujer es torturada cuando se le somete a golpes por parte de su cónyuge, o un hombre cualquiera es torturado cuando, si está indefenso, se actúa con violencia física contra él. La prohibición cobija tanto a los gobernantes como a los particulares.

Decimos que la protección de la integridad física va más allá de la muerte del individuo: la mutilación de cadáveres es delito contemplado también en la mayoría de las legislaciones, al igual que en la nuestra. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha extendido la práctica de la donación de órganos, en virtud de la cual, con fines

⁹ Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, a procedimientos, a penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la Ley.

altruistas, una persona, de manera voluntaria y expresa, puede donar alguno de sus órganos vitales para que le sea extraído después de su muerte y transplantado a otro ser vivo.

b.1.1.3. Derecho a la honra

El Arto. 26 de la Constitución Política, en su inciso 3 establece: “Que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y reputación”.

Después de la vida y la integridad física, la honra debe ser el máspreciado valor para un ser humano, para muchos, inclusive, vale más la honra que la vida, y no vacilan en ofender ésta para defender aquélla. La honra es el sentimiento o la conciencia de la propia dignidad, y es también el más valioso atributo que una persona puede tener frente a las demás; de su reconocimiento depende en alto grado la estima que se tenga hacia esa persona. De ahí que la honra deba ser respetada no sólo por los demás, sino por la propia persona. Un individuo atenta contra su honra cuando comete actos que puedan mancharla injustamente, a través de delitos como la calumnia, la injuria o la difamación.

El derecho a la honra, que garantiza la integridad física de una persona, está celosamente protegido en todas las legislaciones modernas, a través de las sanciones previstas contra la calumnia, la injuria y la difamación. La calumnia consiste en divulgar, por cualquier medio, falsas imputaciones contra una persona, las cuales por su carácter de delito pueden involucrarla penalmente, o por su carácter deshonroso o inmoral pueden exponerla a la animadversión o al escarnio público. La injuria consiste en atacar el honor, la reputación o la dignidad de una persona, bien sea directa o indirectamente, o en divulgar con fines malévolos sus faltas o vicios privados.

b.1.2. Derecho a la libertad

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como antes se vio, comienza proclamando “que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”, y en su Arto. 4 expresa que la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro. De ello se desprende que ésta no es un derecho absoluto, sino que tiene sus límites en la libertad de los demás, límites que según el

mismo artículo no pueden ser determinados sino por la Ley. El Arto. 5 de la Declaración complementa este principio, al decir que todo aquello que no esté prohibido por la Ley no puede ser impedido.

La libertad puede ejercerse en distintas direcciones, siempre en busca de la realización integral del ser humano y de su legítimo desarrollo dentro de la sociedad. Este derecho comprende varias categorías:

b.1.2.1. La libertad individual o física

Consiste en la posibilidad de acción física que debe tener toda persona. El profesor Collard la define como “el estado del hombre que no está arrestado ni detenido, quien goza por lo mismo de la posibilidad de ir y de venir”. Se trata, pues, de una libertad esencial que debe gozar de la protección de las autoridades en un Estado de Derecho, aunque con las limitaciones que luego señalaremos. Ella se hace efectiva para todos, a través de disposiciones como las que prohíben la esclavitud,¹⁰ las que protegen contra la detención arbitraria,¹¹ y las que garantizan la libertad de circulación.¹²

La esclavitud es el más grave atentado contra la libertad individual o física, la forma más aberrante de vulnerar este derecho natural. Ella se ha practicado, por desgracia, a través de todos los tiempos y en todas las sociedades. En la época actual, si bien está expresamente prohibida en todas las legislaciones civilizadas, aún se dan formas de esclavitud, aunque solapadas, sobre todo en regiones subdesarrolladas del mundo. El Arto. 4° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece la prohibición expresamente: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”. Igual prohibición hace el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, aprobado en 1966. En nuestra Constitución, en el Arto. 40 se establece que nadie será sometido a servidumbre. La esclavitud y la trata de cualquier naturaleza están prohibidas en todas sus formas.

¹⁰ La Constitución nicaragüense en su Arto. 40 establece lo siguiente: nadie será sometido a servidumbre. La esclavitud y la trata de cualquier naturaleza están prohibidas en todas sus formas.

¹¹ La Constitución nicaragüense en su Arto. 33 señala que nadie puede ser sometido a detención arbitraria ni ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la ley con arreglo a un procedimiento legal.

¹² La Constitución nicaragüense en su Arto. 31 expresa que los nicaragüenses tienen derecho a circular y a fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y a salir libremente del país.

Para que una detención ordinaria sea procedente, es necesario que reúna cuatro requisitos básicos:

- Mandamiento escrito. Con este requisito se busca que el funcionario que ordene la detención precise los fundamentos legales de tal decisión; se exceptúa el caso de flagrante delito, en el cual el delincuente cogido *in fraganti* puede ser aprehendido y llevado ante la autoridad competente por cualquier persona.
- Orden de autoridad competente. El mandamiento de detención debe proceder, por fuerza, de funcionario facultado expresamente por la Constitución o la Ley para tomar tal decisión, conforme la competencia que le ha sido asignada.
- Motivos previamente definidos por las leyes. Es un principio universal el de que nadie puede ser castigado por motivos que no hayan sido previamente definidos por la ley penal, ni sentenciado a penas que tampoco hayan sido previamente establecidas: *Nullum crimen, nulla poena sine lege previa*. Este principio ha sido ratificado tanto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Arto. 11) como por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Arto. 15).

Lo antes señalado está claramente establecido en la Constitución Política vigente en su Arto. 33. Una persona detenida debe gozar, en todo caso, de las garantías procesales básicas, como son el derecho a la defensa, el derecho a no ser condenado sin haber oído y vencido en el juicio, el que el proceso se lleve a efecto con la plenitud de las formalidades legales, y ante juez competente. Así mismo, se incluye como principio protector de la libertad individual el que nadie pueda ser obligado a declarar contra sí mismo o contra sus parientes cercanos, ya sea por consanguinidad o por afinidad. Este principio busca evitar que se utilicen métodos de tortura física o mental con el fin de obtener confesión, o de comprometer a terceros allegados al detenido.

Las garantías mínimas del debido proceso están establecidas en el Arto. 34 Cn.

Arto. 34: Todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a las siguientes garantías mínimas:

- ✓ A que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme la ley.
- ✓ A ser juzgado sin dilaciones por tribunal competente establecido por la ley. No hay fuero atractivo. Nadie puede ser sustraído de su juez competente ni llevado a jurisdicción de excepción.
- ✓ A ser sometido al juicio por jurados en los casos determinados por la ley. Se establece el recurso de revisión.
- ✓ A que se garantice su intervención y defensa desde el inicio del proceso, y a disponer de tiempo y de medios adecuados para su defensa.
- ✓ A que se le nombre defensor de oficio cuando en la primera intervención no hubiera designado defensor; o cuando no fuere habido, previo llamamiento por edicto. El procesado tiene derecho a comunicarse libre y privadamente con su defensor.
- ✓ A ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado por el tribunal.
- ✓ A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge o compañero en unión de hecho estable, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni a confesarse culpable.
- ✓ A que se le dicte sentencia dentro de los términos legales en cada una de las instancias del proceso.
- ✓ A recurrir ante un tribunal superior a fin de que su caso sea revisado cuando hubiese sido condenado por cualquier delito.
- ✓ A no ser procesado nuevamente por el delito por el cual fue condenado o absuelto mediante sentencia firme.
- ✓ A no ser procesado ni condenado por acto u omisión que, al tiempo de cometerse, no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. Se prohíbe dictar leyes proscriptivas o aplicar al reo penas o tratos infamantes.

El proceso penal deberá ser público. El acceso de la prensa y del público en general podrá ser limitado, por consideraciones de moral y de orden público.

El ofendido será tenido como parte en los juicios, desde el inicio de los mismos y en todas sus instancias

Pero la detención arbitraria no sólo puede provenir de las autoridades, sino también de particulares. Es el caso típico del secuestro, considerado por ello como uno de los más abominables delitos y uno de los más graves atentados contra la libertad individual, por lo cual merece una de las sanciones más severas.

b.1.2.2. Libertad de expresión

El Arto. 30 Cn. señala el derecho que tiene toda persona de expresar libremente su pensamiento en público o en privado de divulgarlo, de opinar, de propalar informaciones veraces a través de los diversos medios de comunicación social: diarios, semanarios, revistas, libros, radio, televisión, cine, carteles, propaganda y publicidad escrita o hablada, u hojas volantes, así como a través de los medios de expresión artística. La libertad de expresión ha sido considerada como una de las más importantes libertades públicas.

De ahí que Mirabeau dijera que se trata de una libertad sin la cual otras no pueden ser conquistadas. Ella fue expresamente reconocida por la Declaración francesa de 1789, Arto. 11, “como uno de los preciosos derechos del hombre”, y luego por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que estableció que “nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones”, y que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Empero, esta libertad tampoco es, en modo alguno, absoluta, por el contrario, impone deberes y responsabilidades muy grandes y está sujeta a las limitaciones impuestas por la Ley, con el objeto de salvaguardar el orden público, la moralidad y la honra de los ciudadanos, cuando ésta se vea afectada por su utilización abusiva.

b.1.2.3. Libertades espirituales

Las libertades espirituales son las que le permiten al hombre profesar creencias religiosas y exteriorizar su fe a través de las distintas manifestaciones de culto. Ellas han sido reconocidas por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y por la Declaración Universal de los Derechos Civiles y Políticos,

así: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye la libertad de tener o adoptar la religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.

Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar una religión o no. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos ni a ser obligado a declarar su credo, ideología o creencias.¹³

El Arto. 29 señala claramente cuáles son las libertades espirituales que la Constitución protege, es decir, la libertad de conciencia, la libertad de religión y la libertad de culto

Como se verá, estas libertades también pueden estar sujetas a determinadas limitaciones, por tanto, tampoco pueden considerarse absolutas, a excepción, quizá, de la libertad de conciencia.

La libertad de conciencia consiste en la facultad de profesar, de elegir o de cambiar alguna religión o creencia, siempre que se desee. Es una libertad que se ejerce en el fuero interno de la persona y que no requiere de manifestaciones externas; gracias a ella el individuo se reserva el derecho a creer, y, en el primer caso, de creer lo que su conciencia le dicte, sin que pueda ser objeto de ninguna especie de coerción o cortapisa.

Tal vez ésta sea, por su naturaleza misma, la única libertad que pueda considerarse como absoluta, ya que como se ha dicho, pertenece al fuero interno de la persona. Sin embargo, puede estar sujeta a presiones externas, derivadas del medio ambiente en que se vive.

Sin embargo, en ningún caso la libertad de conciencia puede ser objeto de limitaciones legales o constitucionales, razón por la cual la consideramos como absoluta. Algunos autores opinan que, por esta razón, no es necesario que estas constituciones garanticen esta

¹³ Arto. 29, Constitución Política de Nicaragua, 1987.

libertad, aunque muchas lo hacen, como es el caso de la Constitución nicaragüense: “Toda persona tiene libertad de conciencia...”

La libertad religiosa se desprende de la facultad que tiene toda persona para expresar públicamente o no sus creencias religiosas, cualesquiera que sean, sin que por ello sea molestada o impedida de hacerlo, o sea perseguida, u objeto de discriminación de alguna especie. El hecho de tener una religión o de no poseer ninguna no puede ser causa para establecer diferencias legales o sociales entre las personas. Tampoco se puede obligar a alguien a profesar una religión en la que no cree, o hacer que manifieste en público su pertenencia a ella.

b.1.2.4.Libertades sociales

Existen también las llamadas libertades sociales. En la Constitución nicaragüense se ha hecho indispensable la consagración de éstas, es decir, aquellas que permiten a las personas y a los grupos establecer relaciones con otros individuos o grupos, con el fin de satisfacer determinadas necesidades vitales, en los campos político, económico, social o cultural. Constitucionalmente, tenemos como libertades sociales:

1. La libertad de trabajo
2. La libertad de reunión

b.1.2.5. Libertad de trabajo

Nuestra Constitución Política tiene definida la libertad de trabajo más que como una libertad, como un derecho que los nicaragüenses poseen, acorde con su naturaleza humana: Arto. 58 Cn. Esto se refiere a la facultad que tiene toda persona de escoger profesión u oficio, de asegurarse la subsistencia para sí misma y para su familia, mediante el ejercicio de cualquier actividad productiva que no sea contraria a la Ley, a la moralidad, a la salubridad o al orden público.

Esta libertad fundamental ha sido reconocida universalmente. Implica que nadie puede ser obligado a ejecutar trabajos forzosos, y que toda persona puede ganarse la vida mediante la realización de labores acordes con su capacidad, vocación, preparación,

experiencia o gusto, siempre y cuando ellas no atenten contra la Ley, el orden público o las buenas costumbres.

b.1.2.6. Libertad de reunión

La libertad de reunión¹⁴ consiste en la facultad que tienen las personas de poder congregarse de manera transitoria y con fines pacíficos y lícitos, sea en recintos públicos o privados. A nadie debe, pues, en principio, impedírsele que se reúna con otros, siempre y cuando la reunión no sea con carácter permanente. Se prohíbe, sí, aquellas reuniones que deriven en motín o asonada, que pongan en peligro el orden público y los derechos de los demás ciudadanos.

Esta libertad fue consagrada originalmente en la Constitución francesa de 1791, en los siguientes términos: “La Constitución garantiza como derechos naturales y civiles... la libertad a los ciudadanos de reunirse pacíficamente y sin armas, cumpliendo para ello las leyes de la Policía” (Arto. 2). Actualmente la proclaman la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Arto. 20), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por las leyes que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público”.

b.1.3. Derecho a la seguridad

De poco o nada sirve la libertad, si no se tiene seguridad. Es ésta la condición a partir de la cual las libertades pueden hacerse efectivas. De ahí que, como ya se vio, la necesidad de protección aparece como uno de los factores determinantes para la formación de la estructura estatal, y la protección, por tanto, como la primera de las funciones asignadas a los agentes del poder público. Existe, pues, un derecho a la seguridad, reconocido expresamente ya en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en 1766, al decir que “el pueblo tiene derecho a organizar sus poderes en forma que ofrezcan las mayores posibilidades de alcanzar su felicidad y seguridad”; luego, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, al establecer perentoriamente que “el fin de toda

¹⁴Arto. 54 Cn.: se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley.

asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre”, y señalar, entre esos derechos, el de la seguridad, al lado de la libertad, de la propiedad y de la resistencia a la opresión

El Arto, 26 Cn. establece que toda persona tiene derecho a su vida privada y a la de su familia, a la inviolabilidad de su domicilio, de su correspondencia y de sus comunicaciones de todo tipo.

Inviolabilidad del domicilio.

La inviolabilidad del domicilio es la primera garantía tendiente a proteger el derecho que toda persona tiene a su vida privada, ya que ésta se desenvuelve, fundamentalmente, dentro del ámbito de su residencia. Pero el concepto de domicilio se extiende no sólo a la vivienda del individuo y de su familia, sino que comprende también el lugar donde la persona trabaja, estudia, o desarrolla actividades particulares, así como donde se hospeda de manera transitoria, como es el caso de los hoteles, pensiones o residencias temporales.

El domicilio no puede ser objeto de requisa o de registro sino mediante la realización de formalidades previas, como son el mandamiento escrito de autoridad competente, por motivos previamente establecidos en las leyes, y observando la plenitud de las formalidades legales pertinentes. En casos excepcionales, por razones de orden público, la autoridad puede penetrar en el domicilio particular sin el cumplimiento de estos requerimientos, como sucede, por ejemplo, cuando se persigue a un delincuente cogido in fraganti, y éste busca refugio en el domicilio propio o ajeno.¹⁵ Por lo demás, la inviolabilidad del domicilio no sólo se refiere a la autoridad, sino también a los particulares, a quienes les está prohibido penetrar en domicilio ajeno, sin consentimiento del dueño.

Inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones de todo tipo

Violar la correspondencia equivale a violar la intimidad de la persona, y constituye, por tanto, un atentado contra la seguridad personal. Por correspondencia se entiende no sólo los mensajes escritos confiados a

¹⁵ Arto. 26, inciso d) Constitución Política de Nicaragua 1987.

los correos públicos --como las cartas o las tarjetas--, sino también los mensajes telegráficos, es decir, aquellos enviados cablegráficamente o vía télex, los papeles privados y aun las comunicaciones telefónicas. Sólo en casos excepcionales la correspondencia, en cualquiera de sus formas, puede ser interceptada por la autoridad, por ejemplo, como se había dicho, en la búsqueda de pruebas judiciales, en la tasación de impuestos o en la intervención del Estado para impedir irregularidades en el manejo económico. En estos casos son, sobre todo, los libros de contabilidad, las facturas comerciales, los recibos, extractos bancarios y documentos análogos, los que son objeto de interceptación y examen por parte de las autoridades competentes.

b.1.3.1 Derecho a la seguridad social

La seguridad social tiene alcances muy amplios. A diferencia de la seguridad económica, que busca amparar el riesgo del desempleo o la falta de oportunidad de trabajo, la seguridad social busca cubrir todo riesgo contra la imposibilidad parcial o total de producir; se le considera por eso como una garantía de subsistir, al menos de forma decorosa.

Entre tales riesgos se encuentran tanto los propiamente laborales, como los accidentes de trabajo o las enfermedades derivadas de la profesión o el oficio; la maternidad, la invalidez de origen no profesional, la vejez y la muerte; los riesgos familiares, o la escasa remuneración o la falta de capacitación profesional. Todos estos riesgos pueden conducir a una situación de pobreza absoluta y generar, por tanto, graves tensiones sociales. Por ello se ha hecho indispensable que el Estado reconozca expresamente el derecho a la seguridad social,¹⁶ que, desde luego, lleva implícito un alcance económico.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Arto. 22 proclamaba este derecho así: “Toda persona como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”. Por su parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Arto. 9, los estados signatarios “reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”. Algunas de las nuevas constituciones han reconocido ya expresamente este derecho.

¹⁶ Arto. 61 Cn. de Nicaragua. El Estado garantizará a los nicaragüenses el derecho a la seguridad social para su protección integral frente a las contingencias sociales de la vida y el trabajo, en la forma y condiciones que determine la ley.

En los estados modernos se busca garantizar, efectivamente, el derecho a la seguridad social, a través de las instituciones del Seguro Social o de previsión social, o de mecanismos legales que busquen amparar a un número cada vez mayor de personas contra los riesgos que atentan contra la seguridad, caso concreto de Nicaragua.

De todo el estudio que hemos realizado, entre los principales derechos establecidos en nuestra Constitución están los llamados derechos económicos, que se encuentran de igual forma en la parte Dogmática de la Constitución. Entre otros, están la economía nacional, la reforma agraria y las finanzas públicas.

b.2. Derechos políticos

En nuestra Constitución se da la categoría de ciudadano a los nicaragüenses que hubieran cumplido dieciséis años. Sólo los ciudadanos gozan de los derechos políticos consignados en la Constitución y en las leyes, sin más limitaciones que las que se establezcan por razón de la edad.

Se ha concedido la ciudadanía a los nacionales más jóvenes, es decir, a partir de los dieciséis años. Estos derechos ciudadanos pueden ser suspendidos por la imposición de pena corporal grave o penas accesorias específicas, y por sentencia ejecutoriada de interdicción civil.

Se establece la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos, en el ejercicio de los mismos y en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades. Existe igualdad absoluta entre el hombre y la mujer.

Es obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social del país.

En el Arto. 49 se establece el derecho de asociación: “El derecho de asociación es un derecho que es consustancial al Estado y a la democracia como forma de gobierno. En nuestro país, el derecho de asociación es establecido como un derecho constitucional por vez primera en la Constitución de 1893, que en su Arto. 52 dispone que se garantiza la libertad de asociación para cualquier objeto

lícito, sea éste religioso, moral o científico. El derecho comprende tanto el asociarse como la libertad de no pertenecer a la asociación u organización de que se trate. En nuestro país, los partidos políticos adquieren su personalidad jurídica mediante resolución del Consejo Supremo Electoral, las asociaciones sin fines de lucro adquieren la personería jurídica ante la Asamblea Nacional, las asociaciones sindicales deben inscribirse en el Registro de Asociaciones Sindicales del Ministerio del Trabajo.¹⁷

Seguido del Derecho de Asociación está el derecho ciudadano de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal. Este derecho está reconocido en el Arto. 50 Cn. Por medio de la ley se garantizará la participación efectiva del pueblo.

Otro de los derechos ciudadanos es el de elegir y ser elegidos en elecciones periódicas, y a optar a cargos públicos, salvo las limitaciones que la misma ley contempla.

Se establece el derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas, en forma individual o colectiva, a todos los poderes del Estado.

El derecho de reunión pacífica está dispuesto en el Arto. 53 de la Constitución: La primera Constitución que reconoció este derecho fue la Constitución de 1826 en su Arto. 14, que establecía: “Tampoco podrán impedirse, si no es en el mismo caso (refiriéndose al caso de tumulto, rebelión o ataque con fuerza armada a las autoridades constituidas), las reuniones populares que tengan por objeto algún placer honesto, discutir sobre política o examinar la conducta pública de los funcionarios”.

Nuestro Constituyente se inclinó por distinguir este derecho que podríamos considerar se ejerce en locales cerrados, de la concentración, como el derecho de permanecer en un sitio abierto, o la manifestación como la prerrogativa de movilizarse en la vía pública. El derecho de manifestación es por vez primera referido de forma expresa en la Constitución de 1939, y el de reunirse en sitio público (concentración), particularmente en el Arto. 125 de la Constitución de ese año.”¹⁸

En el Arto. 55 de la Constitución Política se establece el derecho de organizarse o afiliarse a partidos políticos para participar, ejercer u optar al poder.

¹⁷ Derecho Constitucional 2, Módulo Autoformativo número 10, Mauro Ampié Vílchez, XEROX, UCA, marzo 2004.

¹⁸Ibid.

b.3. Derechos sociales

La Constitución señala en su Arto. 116, que la educación tiene como objetivo la formación plena e integral del nicaragüense, dotándole de una conciencia crítica, científica y humanista, desarrollando su personalidad y el sentido de su dignidad, capacitándole para asumir las tareas de interés común que demanda el progreso de la nación.

La educación es considerada como factor fundamental para la transformación y el desarrollo del individuo y de la sociedad.

La educación en Nicaragua, según la Constitución, debe tener las siguientes características:

- ✓ Ser un proceso único, democrático, creativo y participativo que vincula la teoría con la práctica, el trabajo manual con el intelectual, y promueve la investigación científica.
- ✓ Fundamentarse en valores nacionales, en el conocimiento de nuestra historia, de la realidad, de la cultura nacional y universal, y en el desarrollo constante de la ciencia y de la técnica.
- ✓ Cimentar los valores propios del nuevo nicaragüense, de acuerdo con los principios establecidos en la Constitución, cuyo estudio deberá ser promovido.
- ✓ Promocionar a la familia, a la comunidad y al pueblo, y garantizar el apoyo de los medios de comunicación.
- ✓ Ser libre e igual para todos los nicaragüenses, quienes deben tener acceso a ella. La enseñanza primaria es gratuita y obligatoria en los centros del Estado. La enseñanza secundaria es gratuita en los centros del Estado, sin perjuicio de las contribuciones voluntarias que puedan hacer los padres de familia. Nadie podrá ser excluido en ninguna forma de un centro estatal por razones económicas.
- ✓ Ser laica.
- ✓ Dar oportunidades a los adultos para educarse y desarrollar habilidades por medio de programas de capacitación y formación. El Estado continuará sus programas educativos para suprimir el analfabetismo.
- ✓ Mantener la autonomía universitaria: académica, financiera, orgánica y administrativa, de acuerdo con la ley, eximiendo a las universidades y centros de educación técnica de toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, regionales y municipales. De igual forma, la Constitución establece la

prohibición de intervenir, expropiar o embargar los bienes de los centros de Educación Superior, excepto cuando se trate de obligaciones que tengan su origen en contratos civiles, mercantiles o laborales.

- ✓ Respetar la libertad de cátedra, la cual protege a los docentes universitarios de toda injerencia tanto en el ámbito de la enseñanza como en el campo de la investigación. Este derecho es oponible tanto ante una institución pública como ante cualquier institución privada. Como todo derecho, también la libertad de cátedra tiene sus límites, en este caso, ante la existencia de un ideario del centro para el cual se prestan los servicios cabe el respeto, sin que sea oponible la libertad de cátedra para justificar ataques directos o velados al ideario de la institución.
- ✓ Respetar la creación artística y cultural, que es libre e irrestricta.
- ✓ Formar y capacitar en todos los niveles y especialidades al personal técnico y profesional necesario para el desarrollo y transformación del país.
- ✓ Preservar el respeto por los pueblos indígenas y por las comunidades étnicas de la Costa Atlántica, quienes tienen derecho, en su región, a una educación intercultural en su lengua materna de acuerdo con la ley.
- ✓ Procurar que los centros privados dedicados a la enseñanza funcionen en todos los niveles, sujetos a los preceptos establecidos en la Constitución.
- ✓ Velar para que los aportes que el Estado establece a las universidades y centros de educación técnica superior --el seis por ciento anual del Presupuesto General de la República-- se distribuya de acuerdo con la ley. Asimismo, los aportes adicionales que el Estado otorgue para gastos extraordinarios de dichos centros de estudio.

Necesariamente, para promover la enseñanza de la Constitución contamos con la Ley de Promoción de los Derechos Humanos y de la Enseñanza de la Constitución Política, Ley No. 201, publicada en La Gaceta, No. 179, del 26 de septiembre de 1995, que establece el primer lunes del mes de septiembre de cada año, como el Día de la Constitución Política de Nicaragua.

b.4. Los derechos de las comunidades de la Costa Atlántica

En la historia constitucional nicaragüense no existe una norma similar a ésta. La inclusión de las comunidades de la Costa Atlántica está en un capítulo expresamente dedicado a garantizar los derechos de éstas. Son definidas en el Arto. 89 Cn. como parte indisoluble del pueblo nicaragüense, y como tal gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones.

Las comunidades del Atlántico tienen los siguientes derechos:

- ✓ La preservación y desarrollo de su identidad cultural en la unidad nacional.
- ✓ El poder dotarse de sus propias formas de organización social.
- ✓ La administración de sus asuntos locales conforme con sus tradiciones.
- ✓ La preservación y uso de sus lenguas, el uso y disfrute de sus aguas, bosques y tierras comunales.

El Estado, según el Arto. 91 Cn., tiene la obligación de dictar leyes destinadas a promover acciones que aseguren que ningún nicaragüense será objeto de discriminación por razón de su lengua, cultura u origen.

La garantía constitucional de esas formas comunales de propiedad, así como el goce, uso y disfrute de sus aguas y bosques por las comunidades de la Costa Atlántica, supone que el derecho a preservar su identidad no es una proclamación teórica, sino que éste tiene que contar con los medios de vida necesarios, y sin los cuales estos derechos no podrían ser posibles. Para ello se cuenta con lo consignado en la Constitución Política, la Ley 28, y demás leyes de la República.

b.5. Defensa nacional

El Título V de nuestra constitución está dedicado a la Defensa nacional, desarrollando disposiciones relativas a dos instituciones Nacionales de carácter profesional, apartidista, apolítica, obediente y no deliberante: el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional.

El Arto. 92 define al Ejército de Nicaragua como "...la institución armada para la defensa de la soberanía, de la independencia y de la integridad territorial. Sólo en casos excepcionales el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá, en apoyo a la Policía Nacional, ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua cuando la estabilidad de la República estuviera amenazada por grandes desórdenes internos, calamidades o desastres naturales...."

El Arto. 95 establece que estará sometido a la autoridad civil que será ejercida directamente por el Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, o a través del ministerio correspondiente.

La Policía Nacional es definida por el Arto. 97 como un cuerpo armado de naturaleza civil cuya misión es garantizar el orden interno, la seguridad de los ciudadanos, la prevención y persecución del delito y los demás que la ley le señale. Estará sometida a la autoridad civil que será ejercida por el Presidente de la República a través del ministerio correspondiente.

El Arto. 94 establece que los miembros del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional, no podrán desarrollar actividades políticas partidistas ni desempeñar cargo alguno en organizaciones políticas. Tampoco podrán optar a cargos públicos de elección popular, si no hubieren renunciado de su calidad de militares o de policías en servicio activo por lo menos un año antes de las elecciones en las que pretendan participar.

b.6. Economía nacional, reforma agraria y finanzas públicas

Economía nacional

La función principal del Estado en la economía es desarrollar materialmente el país, suprimir el atraso y la dependencia heredados, mejorar las condiciones de vida del pueblo y realizar una distribución cada vez más justa de la riqueza (Arto. 98 Cn.).

El Estado es responsable de promover el desarrollo integral del país, y como tal le corresponde garantizar los intereses y las necesidades particulares, sociales, sectoriales y regionales de la nación. Es

responsabilidad del Estado proteger, fomentar y promover las formas de propiedad y de gestión económica y empresarial privada, estatal, cooperativa, asociativa, comunitaria y mixta, para garantizar la democracia económica y social.

En este capítulo, entre otras cosas, se establece que:

- Los bancos estatales y otras instituciones financieras del Estado serán instrumentos financieros de fomento, inversión y desarrollo, y diversificarán sus créditos con énfasis en los pequeños y medianos productores. Le corresponde al Estado garantizar su existencia y funcionamiento de manera irrenunciable.
- El Estado garantiza la libertad de empresa y el establecimiento de bancos y otras instituciones financieras, privadas y estatales (Arto. 99 Cn.).
- Los trabajadores y demás sectores productivos tienen el derecho de participar en la elaboración, ejecución y control de los planes económicos.
- Los recursos naturales son patrimonio nacional. La preservación del ambiente y la conservación, desarrollo y explotación racional de los recursos naturales le corresponde al Estado, para lo cual se le permite celebrar contratos de explotación racional de los mismos.
- El Estado garantizará la coexistencia democrática de las formas de propiedad pública, privada, cooperativa, asociativa y comunitaria como parte de la economía mixta estarán supeditadas a los intereses superiores de la nación y cumplirán una función social.

Reforma agraria

La reforma agraria es definida como el instrumento fundamental para la democratización de la propiedad y para la justa distribución de la tierra, como un medio que constituye parte esencial para la promoción, la estrategia global de la reconstrucción ecológica, y el desarrollo económico sostenible del país. La reforma agraria tendrá en cuenta la relación tierra-hombre, socialmente necesaria; también garantizará las propiedades a los campesinos beneficiarios de acuerdo con la ley.

Este artículo fue objeto de reforma, ya que originalmente el texto aprobado en 1987 consideraba la reforma agraria como un medio estratégico para las transformaciones revolucionarias, para el desarrollo nacional y el progreso social de Nicaragua; se planteaba que el Estado garantizaría el desarrollo nacional de la reforma agraria para dar cumplimiento pleno a las reivindicaciones históricas campesinas. Este pensamiento fue sustituido por las reformas a la Constitución de 1995.

Finanzas públicas

Las finanzas Públicas quedan reguladas en el Título VI, Capítulo III de nuestra Constitución Política.

El Arto. 112 establece claramente: “La Ley de Presupuesto General de la República tiene vigencia anual, y su objeto es regular los ingresos y egresos ordinarios y extraordinarios de la administración pública. La ley determinará los límites de gastos de los órganos del Estado, y deberá demostrar las distintas fuentes y destinos de todos los ingresos y egresos, los que serán concordantes entre sí.

La Asamblea Nacional podrá modificar el proyecto de Presupuesto enviado por el Presidente de la República, pero no se puede crear ningún gasto extraordinario sino por ley, y mediante creación y fijación, al mismo tiempo, de los recursos para financiarlos. La Ley de Régimen Presupuestario regulará esta materia.

Toda modificación al Presupuesto General de la República que suponga aumento o disminución de los créditos, disminución de los ingresos o transferencias entre distintas instituciones, requerirá de la aprobación de la Asamblea Nacional. La Ley Anual de Presupuesto no puede crear tributos”.

Otra disposición contemplada en este capítulo es la potestad de crear, aprobar, modificar o suprimir tributos que corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional. La facultad de formular el proyecto de Ley Anual de Presupuesto corresponde al Presidente de la República, debiéndolo someter para su discusión y aprobación a la Asamblea Nacional.

9. Parte Orgánica de la Constitución

a. Introducción

En la Parte Orgánica de nuestra Constitución Política, es donde están establecidas las normas relativas a la organización del Estado.

En toda Constitución se consagran, en sus lineamientos esenciales, las normas que defienden al Estado, la forma que adopta, su sistema de gobierno y su régimen político; su división territorial, la población, nacionalidad y ciudadanía, las que determinan la titularidad del poder público; su distribución en ramas u órganos; los procedimientos para la designación de los gobernantes y atribuciones; las reglas sobre el ejercicio del poder; los controles y limitaciones a que están sometidos los gobernantes; los términos de su mandato en general, y las condiciones bajo las cuales debe organizarse el Estado y ejercer el poder soberano. A esto es a lo que llamamos Parte Orgánica de la Constitución.

Burdeau dice que existe un conformismo constitucional que hace a la Constitución un texto “estereotipado”, que no tiene sino una lejana relación con la vida política real, y sigue diciendo, que “hay tabúes constitucionales, falsas ventas en la fachada de los textos, mientras los verdaderos motores de la vida política se pasan en silencio”.

La Parte Orgánica regula los órganos y poderes del Estado, así como el procedimiento de creación, de modificación y de extinción de las normas. Aquí el orden de instituciones y poderes del Estado varía sensiblemente de unas constituciones a otras.

De acuerdo con una explicación clásica de Jellinek, la Parte Orgánica de la Constitución comprende:

- Los principios en los que se enuncian y designan los órganos supremos del Estado.
- Las reglas que establecen los modelos de elegir, designar o crear tales órganos supremos.
- Los preceptos que regulan las relaciones entre los organismos indicados.
- Las normas que establecen las funciones o el círculo de acción de cada uno de los órganos del poder supremo.

La Parte Orgánica de nuestra Constitución Política la ubicamos del Título VIII al Título XI. Ésta es la segunda parte de ella, en donde están establecidas las normas relativas a la organización del Estado.

En toda Constitución se consagran, en sus lineamientos esenciales, las normas que defienden al Estado, la forma que adopta, su sistema de gobierno y su régimen político, su división territorial, la población, nacionalidad, ciudadanía; las que determinan la titularidad del poder público, su distribución en ramas u órganos, los procedimientos para la designación de los gobernantes y sus atribuciones, las reglas sobre el ejercicio del poder, los controles y limitaciones a que están sometidos los gobernantes, los términos de su mandato... en general, las condiciones bajo las cuales debe organizarse el Estado y ejercer el poder soberano. A esto es a lo que llamamos Parte Orgánica de la Constitución.

Ésta regula los órganos y poderes del Estado, así como el procedimiento de creación, de modificación y de extinción de las normas. Aquí el orden de las instituciones y de los poderes del Estado varía sensiblemente de unas constituciones a otras.

El principio de organización está contenido en la doctrina de la llamada división de poderes, o en el sistema de frenos y contrapesos.

El Título VIII está dedicado a la forma de organización y funciones de cada uno de los poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral.

La división de poderes¹⁹ se plantea con independencia entre sí, pero coordinados entre sí, y, sobre todo, subordinados a los intereses de la Nación, y a lo establecido en la presente Constitución.

¹⁹ En el derecho moderno se ha planteado la división del Estado en tres grandes poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y en algunos casos específicos el Poder Electoral como cuarto poder. La división de poderes produce en su sentido puro la legitimación de la actividad de los gobernantes, y es necesaria para desconcentrar el poder, despersonalizarlo e institucionalizarlo, para que no exista un poder único absoluto, sino que haya un sistema de contrapoderes que lo equilibren, y donde un poder controle al otro.

La Nación se define como un ESTADO SOCIAL DE DERECHO²⁰ (Arto. 129 Cn.).

b. Principios y fundamentos que rigen el Estado Social de Derecho

Los principios generales contenidos en el texto constitucional resultan ser mucho más amplios, y establecen una serie de obligaciones a los funcionarios públicos que desempeñan cargos de importancia en el Estado, en lo que parece ser un objetivo claro: el de establecer una administración pública eficaz y responsable (Artos. 130 y 131 Cn.).

Para ello, los funcionarios tendrán que cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentar una declaración de probidad.
- Prohibir autorizarles concesiones o ventajas.
- Contratar a título personal con el Estado. Si esto no se cumpliera existe la posibilidad de retirar la inmunidad a los funcionarios que incurran en estas conductas.
- No actuar como apoderados o gestores de empresas públicas o privadas nacionales o extranjeras, en contrataciones de éstas con el Estado.
- Inhibirse del ejercicio de cargos públicos según parentesco.
- Rendir informes --de forma obligatoria-- sobre su trabajo y actividades oficiales, así como escuchar, atender y resolver los problemas que se les planteen.
- Asumir la función pública a favor de los intereses del pueblo, y la responsabilidad patrimonial del Estado por las lesiones que causen en el ejercicio de sus cargos, cuando esas lesiones las sufran los particulares.
- Ser responsables por la violación a la Constitución, por la falta de probidad y por cualquier otro delito en el desempeño de sus funciones.
- Prohibir que las funciones civiles sean militarizadas.

²⁰ Diccionario Electoral/IIDH Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1 ed. San José, Costa Rica, Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), 1998, p. 283. El Estado Social de Derecho comporta la fusión de tres elementos: Estado, Derecho y Sociedad. Los antecedentes, pues, tendrían en principio que reportarse al significado de cada uno de ellos, empero el concepto jurídico político que sirve como antecedente inmediato al Estado Social de Derecho es el Estado de Derecho. Aunque en rigor podría hablarse de Estado de Derecho siempre que la acción estatal se someta a normas jurídicas, el uso más riguroso de la expresión se desarrolló durante el liberalismo, y encontró, entre sus fuentes filosóficas, la obra de Kant. Así, el Estado de Derecho resulta el límite impuesto a la acción estatal para la salvaguardia de la acción individual.

Es a partir del Capítulo II del Título VIII de la organización del Estado que comenzaremos el análisis de la división de los poderes, que comprende del Arto. 132 al 143 de la Constitución Política de Nicaragua.

c. Poder Legislativo

En Nicaragua, de la Constitución de 1838 hasta la de 1905, el Poder Legislativo lo constituía una Asamblea Legislativa, compuesta por diputados electos por el pueblo. A partir de la Constitución de 1911 hasta la de 1974, el Poder Legislativo lo constituyó un Congreso Nacional, compuesto por dos cámaras: la de senadores (electos por circunscripción nacional) y la de diputados (electos por circunscripción departamental), es decir, nos encontramos con un Congreso bicameral.

En los criterios para la formación del Congreso Nacional se tomaba muy en cuenta la edad, ya que sólo podían ser senadores los ciudadanos que tuvieran mayoría de edad, aunque los diputados podían ser menores. Esto, con la intención de mantener integradas dos generaciones. El Poder Legislativo, constituido por dos cámaras, tiene su crítica hoy, en el sentido de que en el proceso legislativo es muy difícil, pues se torna anacrónico y lento.

La ventaja que encontramos es que esta forma de integrar el Congreso surge con la intención de fortalecer al Poder Legislativo frente a poderes ejecutivos fuertes.

La actual Constitución --ya con sus reformas-- no varió en nada su manera de integrar al Legislativo, es decir, hay una sola denominación: diputados. La tendencia moderna es que esto se mantenga igual, por lo tanto, no hay mucho que aportar.

En la actualidad, el Poder Legislativo lo ejerce la Asamblea Nacional por delegación y mandato del pueblo (Arto. 132 Cn.).

c.1. Organización

La Asamblea Nacional está integrada por 90 diputados con sus respectivos suplentes: 20 nacionales y 70 departamentales y de

las regiones autónomas. También forman parte como diputados propietario y suplente, respectivamente, el ex Presidente de la República y el ex Vicepresidente, electos por el voto popular directo en el período inmediato anterior; y como diputados propietario y suplente, los candidatos a presidente y vicepresidente que participaron en las elecciones correspondientes y obtuvieron el segundo lugar. En total, con la inclusión del ex presidente y del ex vicepresidente, y de los candidatos que obtuvieron el segundo lugar, la Asamblea Nacional cuenta con 92 diputados.

La Constitución Política establece una serie de requisitos para ser diputado, entre ellos:

1. Ser nacional de Nicaragua. Si se hubiese adquirido otra nacionalidad haber renunciado a ella por lo menos cuatro años antes de confirmarse la elección. Este requisito también es válido, como veremos con posterioridad, para optar a la Presidencia de la República y para todos los cargos de elección popular.
2. No tener ninguna causa penal ni civil en el momento de la elección, es decir, tener pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
3. Tener veintiún años de edad.
4. Haber residido de forma permanente en el país los cuatro años anteriores a la elección, salvo que en ese período, para el caso de quienes optan a una diputación, hubiesen estado cumpliendo misiones diplomáticas, trabajando en organismos internacionales o estudiando.

También constitucionalmente se señalan los motivos por los cuales no se puede ser candidato a diputados, ni propietarios ni suplentes. Están inhibidos:

1. Todos los funcionarios públicos electos por la Asamblea Nacional, así como el Procurador y el Subprocurador General de Justicia, y los alcaldes, a menos que renuncien al cargo doce meses antes de la elección.

2. Los ministros de cualquier culto religioso, salvo que hubieran renunciado a su ejercicio al menos doce meses antes de la elección.

c.2. Principales atribuciones

Las principales atribuciones del Poder Legislativo son: legislar, controlar y representar. Para nuestro estudio, seguiremos esta división en las atribuciones que la Constitución Política y las leyes establecen al Poder Legislativo.

c.2.1. Función de legislar

- ✓ Elaborar y aprobar las leyes y decretos, así como reformar y derogar las existentes.
- ✓ Interpretación auténtica de la ley.
- ✓ Conocer, discutir y aprobar el Proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la República.
- ✓ Aprobar o rechazar los instrumentos internacionales celebrados con países u organismos sujetos de Derecho Internacional.
- ✓ Determinar la división política administrativa del territorio nacional.
- ✓ Dictar o reformar su estatuto y reglamento interno.
- ✓ Crear, aprobar, modificar o suprimir tributos y aprobar los planes de arbitrio municipal.
- ✓ Aprobar, rechazar o modificar el decreto ejecutivo que declara el Estado de Emergencia.
- ✓ Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias.
- ✓ Aprobar las modificaciones al Presupuesto General de la República, que supongan aumento o modificaciones, disminución de los ingresos o transferencias entre distintas instituciones.

- ✓ Aprobar los decretos legislativos de convocatoria a plebiscito y referendos.
- ✓ Aceptar y rechazar los vetos parciales o totales a los proyectos de ley.
- ✓ Crear órdenes honoríficas y distinciones de carácter nacional.
- ✓ Recibir en sesión solemne al Presidente y Vicepresidente de la República, para escuchar el informe anual.
- ✓ Conceder pensiones de gracia y honores a servidores distinguidos de la Patria y de la Humanidad.
- ✓ Aprobar todo lo relativo a los símbolos patrios.
- ✓ Crear y otorgar sus propias órdenes de carácter nacional.

c.2.2. Función de controlar

- ✓ Solicitar informes a los ministros y viceministros de Estado, Procurador y Subprocurador General de Justicia, presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales.
- ✓ Conocer y decidir sobre las faltas definitivas de los diputados ante la Asamblea Nacional.
- ✓ Conocer y admitir las renunciaciones y resolver sobre la destitución de los funcionarios antes mencionados.
- ✓ Elegir su Junta Directiva.
- ✓ Crear comisiones permanentes, especiales y de investigación.
- ✓ Conocer y hacer recomendaciones sobre las políticas y planes de desarrollo económico y social del país.
- ✓ Autorizar la salida del territorio nacional al Presidente de la República cuando su ausencia sea mayor de quince días, y la del Vicepresidente cuando ésta se produzca.

- ✓ Recibir de las autoridades judiciales o directamente de los ciudadanos las acusaciones o quejas presentadas en contra de los funcionarios que gozan de inmunidad.
- ✓ Autorizar o negar la salida de tropas del territorio nacional.
- ✓ Recibir anualmente los informes del Presidente del Consejo Superior de la Contraloría, del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, del Fiscal General de la República, del Superintendente de Bancos y del Presidente del Banco Central de Nicaragua.
- ✓ Ratificar los nombramientos hechos por el Presidente de la República a los ministros y viceministros de Estado, Procurador y Subprocurador General de la República, jefes de misiones diplomáticas, y presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales.
- ✓ Autorizar o negar la solicitud del Gobierno de la República para permitir el tránsito o estacionamiento de naves, aeronaves y maquinarias extranjeras militares para fines humanitarios.

c.2.3. Función de representación

- ✓ Llenar las vacantes definitivas del Presidente y del Vicepresidente cuando éstas se produjeran simultáneamente.
- ✓ Conceder indultos y amnistías.
- ✓ Otorgar y cancelar la personalidad jurídica a las asociaciones civiles.
- ✓ Elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como a igual número de conueces.
- ✓ Elegir a los magistrados propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral.
- ✓ Elegir:
 - Al Superintendente y al Vicesuperintendente General de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.
 - Al Fiscal General de la República y al Fiscal General Adjunto.

- A los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República.
- Al Procurador y al Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos.
- Al Superintendente y a los intendentes de Servicios Públicos.
- Al Director y al Subdirector del Instituto de Servicios Públicos.
- Al Director y al Subdirector del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural.

Todos estos funcionarios serán elegidos por un período de cinco años y gozarán de inmunidad.

Para la toma de decisiones, en la Asamblea Nacional es necesaria la votación. En este cuadro analizaremos las diferentes votaciones que para determinados actos realiza el Plenario, máximo órgano de la Asamblea Nacional.

Nombramientos	Total de votos válidos
Privación de la inmunidad al Presidente de la República. <i>Arto. 143 segundo párrafo Ley Orgánica de la Asamblea Nacional.</i>	Dos tercios: 62 diputados, mayoría calificada.
Privación de inmunidad a funcionarios públicos. <i>Arto. 143 Ley Orgánica de la Asamblea Nacional.</i>	Al menos la mitad más uno de los diputados presentes, mayoría absoluta.
Comparecencia de un funcionario público. <i>Arto. 146 Ley Orgánica de la Asamblea Nacional.</i>	Con un mínimo de cinco diputados de la Asamblea Nacional.

Solicitud de interpelación de un funcionario público. <i>Arto. 149 Ley Orgánica de la Asamblea Nacional.</i>	La solicitud podrá ser presentada por jefes de bancada que representen al menos un tercio de los diputados en ejercicio.
Interpelación de los funcionarios públicos. <i>Arto. 150 Ley Orgánica de la Asamblea Nacional.</i>	Aprobada la solicitud de interpelación con la mayoría absoluta de los diputados presentes.
Elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. <i>Arto. 138 Constitución Política de Nicaragua, numeral 7.</i>	60% de diputados, es decir, 56 diputados, mayoría calificada.
Elección de conjueces. <i>Arto. 138 Constitución Política de Nicaragua, último párrafo.</i>	60% de diputados, es decir, 56 diputados, mayoría calificada.
Elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral. <i>Arto. 138 numeral 8, Constitución Política de Nicaragua.</i>	60% de diputados, es decir, 56 diputados, mayoría calificada.
Elección de Superintendente y de Vicesuperintendente General de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. <i>Arto. 138, numeral 9 inco a), Constitución Política de Nicaragua.</i>	60% de diputados, es decir, 56 diputados, mayoría calificada.
Elección del Fiscal General y del Fiscal General Adjunto de la República. <i>Arto. 138, numeral 9, inco b), Constitución Política de Nicaragua.</i>	60% de diputados, es decir, 56 diputados, mayoría calificada.

Consejo Superior de la Contraloría General de la República. <i>Arto. 138, numeral 9, inco c), Constitución Política de Nicaragua.</i>	60% de diputados, es decir, 56 diputados, mayoría calificada.
Procurador y Subprocurador de Derechos Humanos. <i>Arto. 138, numeral 9, inco d), Constitución Política de Nicaragua.</i>	60% de diputados, es decir, 56 diputados mayoría calificada.
Ratificación del nombramiento hecho por el Presidente de la República a los ministros, viceministros de Estado, Procurador y Subprocurador General de la República, jefe de misiones diplomáticas, y Presidente o directores de entes autónomos y gubernamentales. <i>Arto. 138, numeral 30, Constitución Política de la República de Nicaragua.</i>	Ratificación en quince días hábiles y con el voto favorable del 60% del total de diputados. El nombramiento sólo se considera firme si la Asamblea Nacional lo ratifica, de lo contrario, el Presidente de la República deberá proceder a un nuevo nombramiento en un plazo de treinta días hábiles.
Quórum de Ley para las sesiones de la Asamblea Nacional. <i>Arto. 28, Ley Orgánica de la Asamblea Nacional.</i>	La mitad más uno: 47 diputados que la integren en mayoría absoluta.
Proyecto de Ley, decreto, resolución, acuerdo y declaración. <i>Arto. 89 Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, parte final.</i>	Mayoría simple.

Rechazo al veto total de una ley. <i>Arto. 143 Constitución Política de Nicaragua.</i>	Rechazo al veto total con un número de votos que exceda la mitad del total de diputados, mayoría absoluta.
Veto parcial. <i>Arto. 143 Constitución Política de la República de Nicaragua.</i>	Rechazo al veto parcial con un número de votos que exceda la mitad de sus miembros, mayoría absoluta.
Iniciativa de reforma parcial. <i>Arto. 116 Ley Orgánica de la Asamblea Nacional.</i>	Un tercio del total de los diputados (31).
Iniciativa de reforma total. <i>Arto. 118 Ley Orgánica de la Asamblea Nacional.</i>	La Iniciativa de Reforma Total de la Constitución deberá contar con la firma favorable de la mitad más uno (47) de los diputados.
Aprobación de la Iniciativa de Reforma Total a la Constitución Política. <i>Arto. 118 Ley Orgánica de la Asamblea Nacional.</i>	Dos terceras partes del total de los diputados (62), mayoría calificada.
Reforma o aprobación de la Ley de Municipios. <i>Arto. 111 Ley Orgánica de la Asamblea Nacional.</i>	La mitad más uno del total de los diputados (47), mayoría absoluta.
Ley de Autonomía de las Comunidades de la Costa Atlántica. Dicha Ley para su aprobación y reforma requerirá de la mayoría establecida para la reforma a las leyes constitucionales. <i>Arto. 181 Constitución Política de la República de Nicaragua.</i>	60% de los diputados: 56, mayoría calificada.

Según la Ley No. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, en su Arto. 4, se denomina como:

- **Mayoría simple:** el voto en un mismo sentido de más de la mitad de los diputados presentes en una sesión, siempre que exista quórum de ley.
- **Mayoría absoluta:** el voto en un mismo sentido de más de la mitad del total de diputados que integran la Asamblea Nacional.
- **Mayoría calificada:** la que exige un porcentaje especial de votos en un mismo sentido del total de diputados que integran la Asamblea Nacional. Puede ser la mitad más uno, dos tercios, o el sesenta por ciento del total de diputados.
- **Mayoría relativa:** la que consta del mayor número de votos en un mismo sentido entre más de dos mociones excluyentes, siempre que exista quórum de ley.

c.3. El Proceso de Formación de la Ley

En el Poder Legislativo, es decir, en la Asamblea Nacional de Nicaragua, es donde se toman las decisiones más importantes que afectan nuestra vida diaria.

Entre sus principales responsabilidades está el Proceso de Formación de la Ley.

Las constituciones modernas incluyen con rango constitucional el procedimiento que debe seguirse para la aprobación de las diferentes leyes, la violación del procedimiento puede ser objeto de un recurso de fallo positivo al mismo, y deja sin efecto la Ley aprobada inconstitucionalmente.

La Constitución de 1987 no establecía en su articulado tal apartado, sino que estaba regulado en el Estatuto y Reglamento de la Asamblea Nacional.

Con las reformas constitucionales se establece, aún incompleto, de manera general, el procedimiento de formación de la Ley, el cual completó la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, Ley 606.

Hay que destacar que en la Constitución de 1974 se encontraba de manera amplia y pormenorizada este procedimiento.

Ésta es su responsabilidad por excelencia. Se puede afirmar que en Nicaragua se podrán identificar propiamente como leyes todas aquellas disposiciones normativas, que, habiendo sido propuestas por los sujetos legitimados para tal fin (Arto. 140 Cn.), hayan sido dictaminadas por las comisiones parlamentarias correspondientes (Arto. 141 numeral 4.), y discutidas y aprobadas en lo general y en lo particular por la Asamblea Nacional (Arto. 141 numeral 7); y que hayan sido sancionadas, promulgadas y publicadas por el Presidente de la República, o, en su caso, hayan sido mandadas a publicar por el Presidente del Parlamento (Arto. 141 numeral 8). Por regla general, tal publicación será en La Gaceta, Diario Oficial, y en su caso en algún medio de circulación nacional sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta.

Comenzaremos nuestro estudio afirmando que en un Estado de Derecho la ley es obligatoria para todos. La ley en sentido amplio es lo que produce o contiene normas de Derecho Objetivo. Definida así, toda fuente del derecho es ley. En sentido estricto, la ley es una fuente específica del Derecho, con características constitucionales bien definidas: es el máximo instrumento ordinario de la expresión de la voluntad política, sólo subordinada a la Constitución Política.

A partir de la definición de la ley, iniciaremos el estudio acerca del Proceso de Formación de la Ley en Nicaragua.

- **Quórum de ley**

Antes de iniciar el estudio concreto del Proceso de Formación de la Ley, se deben realizar algunas precisiones procedimentales. En primer lugar, se debe tener claro que para considerar legalmente válidas las sesiones de la Asamblea Nacional, se requiere en ellas de la presencia de un determinado número de diputados, es decir, el

cumplimiento de un quórum, el cual ha sido fijado por el Arto. 141 de la Constitución Política.

El quórum se constituye con la presencia de la mitad más uno de los parlamentarios (en este período la Asamblea Nacional está integrada por 92), por lo que en la actualidad se necesitan 47 diputados para que la sesión sea válida. De no cumplir con este número al inicio de las sesiones parlamentarias o durante cualquier momento de la sesión, ésta deberá ser suspendida hasta una próxima convocatoria.

- **Requisitos para la presentación de un anteproyecto de ley o iniciativa de ley**

La iniciativa es el documento formal con una propuesta de ley o decreto, que los órganos facultados por la Constitución Política presentan ante la Asamblea Nacional. Toda iniciativa de ley, cualquiera que sea su autor entre los sujetos legitimados para realizarla, debe ser acompañada de su correspondiente exposición de motivos, fundamentación firmada por el proponente²¹ y el texto del articulado, ante la Secretaría de la Asamblea Nacional, en original y tres copias, la cual dará inicio al proceso de formación de tal anteproyecto de ley.

- **Dictamen**

Todas las iniciativas de ley, una vez que han sido leídas ante el pleno de la Asamblea Nacional, deben realizar un trámite que se inicia con el envío del anteproyecto de ley para ser dictaminado por una o varias de las comisiones parlamentarias correspondientes, en razón de la materia que se pretenda regular, ya sean estas comisiones permanentes o especiales.²²

²¹Arto. 140 Cn., y Arto. 91 LOPL. El derecho a presentar iniciativa de Ley y de decretos corresponde a los diputados y al Presidente de la República, y en materia de su competencia a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo Supremo Electoral, a los diputados ante el Parlamento Centroamericano, por el Estado de Nicaragua; a los consejos regionales autónomos y a los concejos, a los ciudadanos con el respaldo de cinco mil firmas, exceptuando las leyes orgánicas tributarias o de carácter internacional, y las de amnistía e indulto.

²² Existen tres tipos de comisiones según la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua: las permanentes, las especiales y la de investigación. Las comisiones permanentes son: Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos; Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos; Comisión de Asuntos Exteriores; Comisión de Producción, Economía y Presupuesto; Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Medios de Comunicación Social; Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales; Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos; Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia; Comisión de Población, Desarrollo y Municipios; Comisión de Turismo y Comisión de Modernización.

Por regla general, tales comisiones están formadas en proporciones similares a la representación de los grupos parlamentarios en el pleno de la Asamblea Nacional; así se explica que se puedan dar dos posibilidades en la preparación y elaboración de un dictamen.

Si se logra un consenso en la comisión dictaminadora se presentará a la Secretaría de la Asamblea Nacional el dictamen de consenso; si no se alcanza tal consenso, se realiza una votación interna de donde surge un dictamen de mayoría, y, es probable, uno de minoría (la existencia de un dictamen de mayoría no significa que necesariamente deba existir un dictamen de minoría), en ambos casos, dichos dictámenes deberán ser presentados a la Secretaría.

De ser rechazado el dictamen de mayoría por el pleno de la Asamblea Nacional, se presentará el dictamen de minoría para su discusión. Esto será explicado con más detalle cuando analicemos el procedimiento de aprobación de los proyectos de ley por parte del pleno del Parlamento.

Como paso final de esta primera etapa, una vez realizado el estudio y el respectivo dictamen por las comisiones, deberán entregar el anteproyecto de ley a la Secretaría de la Asamblea Nacional.

- **Procedimiento, trámite y plenario**

Una vez iniciada la sesión parlamentaria con el quórum correspondiente, se procede a leer el dictamen, ya sea éste de consenso o de mayoría, ante el pleno de la Asamblea Nacional, y posteriormente se inicia lo que se denomina en el Derecho Parlamentario nicaragüense, la discusión o debate “en lo general” del anteproyecto de ley.

Se discute acerca de la idoneidad, oportunidad, alcances, objetivos y efectos del anteproyecto, y en el caso de obtener los votos suficientes, aprueban en lo general el proyecto de ley. En el caso de que éste fuera rechazado, de existir un dictamen de minoría, éste deberá ser leído ante el pleno y realizar su discusión en lo general de la misma forma que el anterior dictamen. En cualquiera de las hipótesis anteriores, si el dictamen debatido fuese rechazado por el pleno, tal anteproyecto de ley no se podrá presentar de nuevo a discusión parlamentaria hasta la siguiente legislatura (Arto. 141 numeral 12 Cn.).

En el supuesto de que haya sido aprobado el dictamen en lo general (ya sea de consenso, por mayoría o por minoría) se procede a lo que en el Derecho Parlamentario nicaragüense se denomina la discusión y aprobación, en su caso, “en lo particular”; esto quiere decir que se discuten, modifican y aprueban uno por uno, cada uno de los artículos del proyecto de ley, pudiéndose incluso incorporar nuevos artículos.

Según lo establecido en el Arto. 141 numeral 6 de la Constitución Política, en el caso de los debates de proyectos de códigos o de leyes extensas, siempre que lo considere así el pleno del Parlamento, dicha discusión en “lo particular” se podrá realizar ya no artículo por artículo, sino capítulo por capítulo.

Es importante señalar que de acuerdo con lo prescrito por el Arto. 141 numeral 2, existe un requisito especial para la aprobación parlamentaria de cualquier proyecto de ley, ya sea ésta en lo general o en lo particular; dicho requisito es que para la aprobación por voto favorable de la “mayoría absoluta” de los diputados presentes --ello sin perjuicio de aquellos casos en los que se requiere también por mandato constitucional-- se demanda de una mayor cantidad de votos favorables de las denominadas mayorías cualificadas, o dicho en otras palabras, se requiere del voto favorable del 60% de los diputados, en ciertos casos, como, por ejemplo, para la reforma parcial a la Constitución Política.

Este tipo de aprobación de la ley en el Derecho Parlamentario nicaragüense significa una clara limitación al principio básico general de las mayorías en la función legislativa, en el sentido de que no basta para la aprobación de una ley la obtención de los votos favorables a la misma, que sean suficientes para superar a los desfavorables, sino que los primeros deberán ser siempre iguales o superiores a la mitad más uno de los diputados presentes (Arto. 141 numeral 2 Cn.).

Continuando con el procedimiento de elaboración de la ley, una vez que se ha cumplido con todos los requisitos, procedimientos y trámites antes señalados, y aprobado el proyecto de ley, se continúa este proceso con un trámite que es propio de la forma de gobierno de régimen presidencialista: la sanción o veto presidencial.

- **Aprobación (sanción o veto presidencial)**

El proyecto de ley discutido y aprobado por la Asamblea Nacional es remitido al Presidente de la República para que éste finalice el proceso de formación de la ley. El mandatario tiene la facultad de aprobar el proyecto de ley, o bien, de vetarlo, ya sea parcial o totalmente, dentro de los quince días siguientes a su recibo. Si no ejerciere esta facultad ni sancionara, el presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la ley en cualquier medio de difusión nacional escrito.

Están exentas de este último trámite (la intervención del Poder Ejecutivo) las denominadas leyes constitucionales, es decir: la Ley de Amparo, la Ley Electoral y la Ley de Emergencia, aspecto que las diferencia de forma esencial de los otros dos tipos de leyes: las orgánicas y las ordinarias.

Por regla general, las leyes aprobadas por el Parlamento y sancionadas por el Presidente de la República (ya sean éstas orgánicas u ordinarias, o en su caso leyes constitucionales, mandadas a publicar directamente por la propia Asamblea Nacional), entran en vigor a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, a menos que las mismas leyes establecieran en sus disposiciones alguna otra cosa, como podría ser la “*vacatio legis*”, o la entrada en vigor a partir de su publicación en cualquier medio de difusión nacional escrito, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta.

Dentro de las reformas parciales a la Constitución Política, el Arto. 143 establece que en caso de que un proyecto de ley sea vetado total o parcialmente, deberá regresar con la expresión de los motivos del veto a la Asamblea Nacional. Si el veto es total, ésta podrá rechazarlo con un número de votos que exceda la mitad del total de diputados, en cuyo caso el presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la ley.

En el caso de que el veto fuera parcial, éste deberá contener la expresión de motivos de cada uno de los artículos vetados. La comisión correspondiente deberá dictaminar sobre cada uno de éstos. La Asamblea Nacional, con un número de votos que exceda la mitad de sus miembros, podrá rechazar el veto de cada artículo, en cuyo caso el presidente del Parlamento mandará a publicar la ley. Al modo de conclusión, se puede afirmar que en Nicaragua se podrán

identificar propiamente como “leyes” todas aquellas disposiciones normativas que, habiendo sido propuestas por los sujetos legitimados para tal fin (Arto. 140 Cn.), hayan sido dictaminadas por las comisiones parlamentarias correspondientes (Arto. 141 numeral 4) y discutidas y aprobadas en lo general y en lo particular por la Asamblea Nacional (Arto. 141 numeral 7); y que hayan sido sancionadas, promulgadas y publicadas por el Presidente de la República, o, en su caso, mandadas a publicar por el Presidente del Parlamento (Arto. 141 numeral 8). Por regla general, tal publicación será en La Gaceta, Diario Oficial, y o en algún medio escrito de circulación nacional, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta.

d. Poder Ejecutivo

d.1. Organización

Siempre, en la mayoría de las constituciones políticas, este Poder ha estado representado por el Presidente de la República, y compuesto a su vez por los ministros que éste nombre. El Presidente representa a la Nación y al Estado, de tal manera que no hay discusión al respecto. Sin embargo, estudiaremos este Poder a la luz de los siguientes aspectos: requisitos para ser Presidente, limitaciones y prohibiciones.

En la Constitución de 1858 se establecen como disposiciones relevantes que el que no era padre de familia, o no tenía 30 años y no poseía un capital de bienes de al menos 4,000 pesos, no podía ser Presidente de la República. Así también, esta Constitución establecía la prohibición de la reelección, y que sólo por la vía constitucional se ascendía al poder.

En la Constitución de 1893, en su Arto. 159, se prohíbe la reelección del Presidente y de quien lo sustituyera.

En la Constitución de 1905 y en la de 1911 no se estableció limitante alguna, sin embargo, en la Constitución de 1905 lo que se denota es una excesiva centralización de poder del Presidente. Se ha llegado a confirmar que fue la Constitución Política que más poderes, atribuciones y funciones le dio al mandatario, esto lo podemos observar en el Arto. 80, donde se le establecen 41 atribuciones de fondo.

En las constituciones de 1939, 1948, 1950 y 1974, se prohíbe nuevamente la reelección del Presidente, es más, la de 1950 establecía en su Arto. 186: “No podrá ser electo Presidente para el siguiente período el que haya ejercido la Presidencia de la República, tampoco pueden ser electos los presidentes que ejerzan transitoria o accidentalmente en los últimos seis meses del período.”

Los parientes del Presidente de la República dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad no pueden optar por la Presidencia. El militar que haya estado en servicio activo seis meses antes, los caudillos, los jefes de golpes de Estado, o de cualquier movimiento armado.

Lo de las inhibiciones por parentesco y la no reelección lo encontramos de igual manera en la Constitución de 1974.

La Constitución actual, ya con sus reformas, acogió estas limitaciones. Es más, limitó también a los alcaldes y a los ministros en ejercicio de sus cargos, a no ser que renunciaran a los mismos un año antes de las elecciones.

Los períodos presidenciales en la historia constitucional han variado:

1838	2 años
1858-1893	4 años
1911	4 años
1939	6 años
1948	6 años
1950	6 años
*Reforma 1962	4 años
1974	6 años
1987	6 años
1995	5 años

Al respecto, debemos comentar las ventajas o desventajas de tener un alto período o un bajo período.

En primer lugar, tener un largo período (6 años) implica una carga política muy pesada para un gobierno que vive, en el caso de América Latina, sumergido en crisis económicas que se van acrecentando cada vez más.

En segundo lugar, menos de cuatro años se considera muy poco, porque ese tiempo no permite a ningún gobierno desarrollar ni evaluar el cumplimiento del programa político con el cual llegó al poder; además, que se viviría constantemente en elecciones, las cuales tienen un alto costo económico para el país.

La tendencia en América Latina es que se mantenga el período presidencial de cinco años.

En la actualidad, el Poder Ejecutivo --regulado en el Título VIII, Artos. 144 al 153-- lo detenta el Presidente de la República, quien es “Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe supremo del Ejército de Nicaragua”.

Es importante hacer mención de que el Presidente es Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, en tanto el poder militar está subordinado al poder civil representado en la persona del Presidente de la República.

El Presidente y el Vicepresidente son electos por medio del sufragio universal, igual, directo, libre y secreto. Serán elegidos quienes obtengan la mayoría relativa de al menos el cuarenta por ciento de los votos válidos, salvo el caso de aquellos que habiendo obtenido un mínimo del treinta y cinco por ciento de los votos válidos superen a los candidatos que obtuvieron el segundo lugar por una diferencia mínima de cinco puntos porcentuales. Si ninguno de los candidatos alcanzare el porcentaje para ser electo, se realizará una segunda vuelta, únicamente entre los candidatos que hubiesen obtenido los dos primeros lugares, y serán electos los que obtengan el mayor número de votos.

d.2. Principales atribuciones

Las principales atribuciones y funciones encomendadas a este Poder son, entre otras:

- ✓ Hacer cumplir la Constitución y las leyes, y hacer que los funcionarios bajo su dependencia las cumplan.
- ✓ Representar a la nación.

- ✓ Ejercer la facultad de iniciativa de ley y el derecho al veto.
- ✓ Nombrar y remover a los ministros y viceministros de Estado, Procurador y Subprocurador General de la República, directores de entes autónomos y gubernamentales, y jefes de misiones diplomáticas.
- ✓ Solicitar a la Asamblea Nacional la convocatoria a sesiones extraordinarias durante el período de receso.
- ✓ Dirigir las relaciones internacionales del país.
- ✓ Decretar y poner en vigencia decretos ejecutivos.
- ✓ Elaborar el proyecto de Ley del Presupuesto General de la República.
- ✓ Decretar y poner en vigencia la suspensión de derechos y garantías en los casos previstos por esta Constitución.
- ✓ Reglamentar las leyes que lo requieran en un plazo no mayor de sesenta días.
- ✓ Otorgar órdenes honoríficas.
- ✓ Organizar y dirigir el gobierno.
- ✓ Dirigir la economía del país, determinando la política y el programa económico social.²³
- ✓ Proponer a la Asamblea Nacional listas o ternas, en su caso, de candidatos para la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, de magistrados propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral, de miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, del Superintendente y del Vicesuperintendente General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, del Fiscal General de la República²⁴ y del Fiscal

²³ En este inciso se crea el Consejo Nacional de Planificación Económica (Conpes), que le sirve de apoyo para dirigir la política económica y social del país.

²⁴ Éste tiene a su cargo la función acusadora y la representación de los intereses de la sociedad y de la víctima del delito en el proceso penal. Fue creada mediante la Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley 346, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 196, de 2000.

General Adjunto. Proponer candidatos para Director y Subdirector el Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural. Todos estos funcionarios serán elegidos por un período de cinco años.

- ✓ Presentar a la Asamblea Nacional, personalmente o por medio del vicepresidente, el informe anual y otros mensajes especiales.
- ✓ Proporcionar a los funcionarios del Poder Judicial el apoyo necesario para hacer efectivas sus providencias sin demora alguna.

Del veto presidencial podemos decir que es la facultad constitucional que tiene el Presidente para poder oponerse a la sanción, publicación y promulgación de una Ley que le ha sido enviada por el Legislativo.

e. La Contraloría General de la República

La Contraloría General de la República es regulada constitucionalmente en el Capítulo IV-del Título VIII, dedicado a la Organización del Estado. El arto. 154 Cn. lo define como el Organismo Rector del sistema de control de la Administración Pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado. Está dirigida por el Consejo Superior de la Contraloría General de la República, el cual está integrado por cinco miembros propietarios y tres suplentes, electos por la Asamblea Nacional para un período de cinco años, dentro del cual gozan de inmunidad.

La Contraloría se caracteriza, según el Arto. 156 Cn. por ser un órgano independiente, sometido solamente al cumplimiento de la Constitución y las leyes. Goza de autonomía funcional y administrativa. El Arto. 156 establece en su último párrafo que “El Presidente y el Vicepresidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República serán elegidos por los miembros del Consejo Superior de entre ellos mismos, por mayoría de votos y por el período de un año, pudiendo ser reelectos. El Presidente del Consejo Superior de la Contraloría o quien éste designe, informará de la gestión del organismo a la Asamblea Nacional cada año o cuando ésta lo solicite; este acto lo realizará personalmente el Presidente o el designado.”

e.1. Atribuciones de la Contraloría General de la República

Según el Arto. 155 Cn. a la Contraloría General de la República le corresponden las siguientes funciones:

- 1) Establecer el sistema de control que de manera preventiva asegure el uso debido de los fondos gubernamentales.
- 2) Controlar de manera sucesiva la gestión del Presupuesto General de la República.
- 3) Controlar, examinar y evaluar la gestión administrativa y financiera de los entes públicos, de los subvencionados por el Estado, y de las empresas públicas o privadas con participación de capital público.

f. El Poder Judicial

f.1. Organización

Todas las constituciones políticas han sido idénticas en establecer que el Poder Judicial descansa en una Corte Suprema de Justicia, y que a su vez está integrado por sus magistrados, jueces y tribunales de Justicia.

En la historia constitucional, hay algunos principios que han guiado el actuar del Poder Judicial.

La Constitución de 1939, Arto. 265, establece que los jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones, que no están sometidos más que a la Constitución Política y a las leyes. Este principio, desde el punto de vista doctrinal, responde a la imparcialidad que deben tener los jueces en la impartición de justicia.

En la Constitución de 1950, Arto. 214, se establece la composición de la Corte Suprema de Justicia, que era de siete magistrados. Dos de ellos correspondían al partido de la minoría. Aquí vemos claramente una concepción totalmente política.

Los diferentes criterios que han privado para el nombramiento de los magistrados han sido variables. La Constitución de 1948 en su Arto. 201 establecía que para ser magistrado se requería:

- ✓. Ser varón
- ✓. Mayor de 40 años
- ✓. Nacido en Nicaragua
- ✓. De padre o madre nicaragüense
- ✓. Abogado de instrucción y de moralidad notorias
- ✓. Haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años

Sólo en la Constitución de 1893 se contempló la elección de los magistrados mediante el voto directo y secreto. Esto se suprimió con la reforma de 1896.

En la actual Constitución ya reformada se establecen claramente las calidades para ser magistrados: su período es de 5 años, debe ser abogado y de conducta notoria, y haber ejercido la profesión por lo menos durante diez años.

Esta reforma que sufrió el Poder Judicial es muy importante para la seguridad ciudadana y para la impartición eficiente de la justicia. Está acorde con los preceptos establecidos en las anteriores constituciones. La tendencia moderna es mantener esta redacción.

El Poder Judicial está regido por principios que nos indica nuestra doctrina, uno de ellos es el Principio de Imparcialidad, por el cual todos los conflictos deben resolverse con base en la Ley, en lo alegado y lo probado, sin parcializarse por ninguna razón.

Además, la instauración de un Poder Judicial implica una justicia inconstitucionalizada, que sustituya a la justicia o venganza personal.

El Poder Judicial conoce de tres tipos de conflictos:

- ✓ Entre el Estado y un individuo.
- ✓ Entre los poderes del Estado.
- ✓ Entre los particulares.

Juega, este Poder, un papel fundamental en el control constitucional, en lo referido:

- ✓ al ejercicio del poder del Estado, sus autoridades y funcionarios, para que actúen apegados a la Ley y a la Constitución.

- ✓ A la constitucionalidad de las leyes, actos administrativos, libertad y seguridad personal.
- ✓ Al mantenimiento y restablecimiento de la supremacía de la Constitución.
- ✓ Al poder del Estado en defensa de la supremacía de la Constitución y de los derechos de los ciudadanos frente al poder del Estado.

En la actualidad, el Poder Judicial lo constituyen los tribunales de Justicia, cuyo máximo órgano es la Corte Suprema de Justicia, compuesta por dieciséis magistrados electos por la Asamblea Nacional.

Ya que la justicia emana del pueblo, los tribunales la imparten en su nombre y por su delegación.

f.2. Principales atribuciones

Son atribuciones del Poder Judicial:

- 1) Organizar y dirigir la administración de Justicia. Esta función es la que asigna a la Corte Suprema de Justicia su naturaleza propia respecto de los demás poderes del Estado, y a ella obedece su denominación.
- 2) Conocer y resolver los recursos ordinarios y extraordinarios que se presenten contra las resoluciones de los Tribunales de Justicia de la República, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley.
- 3) Conocer y resolver los recursos de amparo por violación de los derechos establecidos en la Constitución, de acuerdo con la Ley de Amparo.
- 4) Conocer y resolver los recursos por inconstitucionalidad de la ley.
- 5) Nombrar y destituir con el voto favorable de las tres cuartas partes de sus miembros a los magistrados de los Tribunales de Apelaciones.

- 6) Resolver sobre las solicitudes de extradición de ciudadanos de otros países y denegar las de los nacionales. De conformidad con el Arto. 43 de la Constitución, no existe extradición para los nicaragüenses.
- 7) Nombrar o destituir a los jueces, médicos forenses y registradores públicos de la propiedad inmueble y mercantil de todo el país, de conformidad con la Constitución y la Ley. El Instituto de Medicina Legal constituye un cuerpo al servicio de la Administración de Justicia y está a la orden inmediata de los jueces y Tribunales.

Los registros de la Propiedad Inmueble y Mercantil están establecidos en cada uno de los departamentos y regiones autónomas del país. Existe uno en cada cabecera departamental, y uno para cada una de las regiones autónomas.

- 8) Extender autorización para el ejercicio de las profesiones de abogado y notario, lo mismo que suspenderlos y rehabilitarlos de conformidad con la ley.
- 9) Conceder autorización para la ejecución de sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros, denominada Exequátur.
- 10) Conocer y resolver los conflictos administrativos surgidos entre los organismos de la administración pública, y entre éstos y los particulares.
- 11) Conocer y resolver los conflictos que surjan entre los municipios, o entre éstos y los organismos del gobierno central.
- 12) Conocer y resolver los conflictos de competencia y constitucionalidad entre los poderes del Estado.
- 13) Conocer y resolver los conflictos de constitucionalidad entre el gobierno central y los gobiernos municipales y de las regiones autónomas de la Costa Atlántica.
- 14) Dictar su reglamento interno y nombrar al personal de su dependencia.

- 15) Las demás atribuciones que le confieran la Constitución y las leyes.

Pero a estas atribuciones se le agregan otras, que podían ser firmadas, sin ninguna duda, por cualquier Tribunal Constitucional europeo. A saber:

El Poder Judicial es el encargado de resolver los conflictos entre el Estado y un ciudadano, conflicto entre poderes y conflictos entre los particulares. Ejerce el control constitucional del actuar del Estado, de sus poderes y de sus funcionarios.

La institución orgánica de este Poder la representa la Corte Suprema de Justicia, compuesta por magistrados, tribunales de apelaciones y jueces, entre otros.

g. Poder Electoral

g.1. Organización

Su función primordial es organizar, dirigir y vigilar las elecciones, plebiscitos y referendos. El Poder Electoral está integrado por el Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales subordinados.

Es a partir de la Constitución de 1974 que se introduce el Poder Electoral como cuarto poder del Estado. Esto se ha mantenido hasta la actual Constitución. Según el Arto. 70 de la Constitución, El Consejo Supremo Electoral está integrado por siete magistrados propietarios y tres suplentes, elegidos por la Asamblea Nacional. Los miembros del Consejo Supremo Electoral elegirán de entre ellos al Presidente y al Vicepresidente del mismo. Su período será de un año, pudiendo ser reelegidos.

g.2. Atribuciones del Consejo Supremo Electoral

El Consejo Supremo Electoral está facultado para:

- 1) Organizar y dirigir las elecciones, plebiscitos o referendos que se convoquen de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en la ley.

- 2) Nombrar a los miembros de los demás organismos electorales, de acuerdo con la ley.
- 3) Elaborar el calendario electoral.
- 4) Aplicar las disposiciones constitucionales y legales referentes al proceso electoral. Velar por el cumplimiento de dichas disposiciones por parte de los candidatos que participen en las elecciones generales y municipales.
- 5) Conocer y resolver en última instancia de las resoluciones que dicten los organismos electorales subordinados y de las reclamaciones e impugnaciones que presenten los partidos políticos.
- 6) Dictar, de conformidad con la ley de la materia, las medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de plena garantía.
- 7) Demandar a los organismos correspondientes condiciones de seguridad para los partidos políticos participantes en las elecciones.
- 8) Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las elecciones, plebiscitos y referendos, y hacer la declaratoria definitiva de los resultados.
- 9) Dictar su propio reglamento.
- 10) Organizar bajo su dependencia el Registro Central del Estado Civil de las Personas, la cedulaación ciudadana y el padrón electoral.
- 11) Otorgar la personalidad jurídica como partidos políticos a las agrupaciones que cumplan los requisitos establecidos en la ley.
- 12) Cancelar la personalidad jurídica de los partidos políticos que no tengan al menos un cuatro por ciento del total de votos válidos en las elecciones de autoridades generales, y cancelar o suspender la misma en los otros casos que regula la ley de la materia.

- 13) Vigilar y resolver los conflictos sobre la legitimidad de los representantes y directivos de los partidos políticos, y sobre el cumplimiento de disposiciones legales que se refieran a éstos, a sus estatutos y a sus reglamentos.
- 14) Las demás que le confieran la Constitución y las leyes.

De las resoluciones del Consejo Supremo en materia electoral no habrá recurso alguno, ordinario ni extraordinario.

Los magistrados del Consejo Supremo Electoral, propietarios y suplentes, tomarán posesión de sus cargos ante el Presidente de la Asamblea Nacional, previa promesa de ley.

Creado específicamente para resolver el problema del poder por medio de las elecciones, evita situaciones de hecho en el poder, y coadyuva a la institucionalización del mismo.

h. La División Político Administrativa

h.1. Poder Local

El territorio nacional se divide en departamentos, regiones autónomas de la Costa Atlántica y municipios. En la reforma constitucional de 1995, no existen las antes designadas “Regiones”, intento de descentralización que tuvo como consecuencia un desarrollo desigual de los departamentos que conformaban la región.

Conforme lo establece el Arto. 176 Cn. el municipio es la unidad base de la división político administrativa del país.

En la actualidad, Nicaragua consta de quince departamentos, dos regiones autónomas y 153 municipios.

h.1.1. Régimen Autonómico

Según el Arto. 175 Cn.: “Los municipios gozan de autonomía política, administrativa y financiera. La administración y el gobierno de los mismos corresponden a las autoridades municipales.

La autonomía no exime ni inhibe al Poder Ejecutivo ni a los demás poderes del Estado de sus obligaciones y responsabilidades con los municipios. Se establece la obligatoriedad de destinar un porcentaje suficiente del Presupuesto General de la República a los municipios del país, el que se distribuirá priorizando a aquellos con menos capacidad de ingresos. El porcentaje y su distribución serán regulados por la ley”

h.1.2.Municipalidades

El Arto. 177 Cn. establece que los gobiernos municipales tienen competencia en materias que incidan en el desarrollo socioeconómico de su circunscripción, así como en los contratos de explotación racional de los recursos naturales ubicados en el municipio respectivo.

El Estado solicitará y tomará en cuenta la opinión de los gobiernos municipales antes de autorizar las mismas.

El Arto. 177 Cn. concluye especificando aspectos que debe incluir la Ley de Municipios.

Existe un procedimiento que la misma Constitución establece en su Arto. 178, para la elección de las autoridades municipales:

El alcalde, el vicealcalde y los concejales son elegidos por el pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, de conformidad con la ley. Son electos alcalde y vicealcalde los candidatos que obtengan la mayoría relativa de votos.

Los concejales serán elegidos por representación proporcional, de acuerdo con el cociente electoral.

El alcalde y el vicealcalde sólo podrán ser reelectos por un período. La reelección del alcalde y del vicealcalde no podrá ser para el período siguiente.

Existen en la Constitución requisitos para poder ser alcalde:

- a. Ser nacional de Nicaragua.
- b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
- c. Haber cumplido veintiún años.

No pueden ser candidatos a alcalde, los ministros y viceministros de Estado, a menos que hayan renunciado a sus cargos doce meses antes de la elección. Podrán los alcaldes y vicealcades perder su condición por las siguientes causas:

- Renuncia al cargo.
- Muerte.
- Condena mediante sentencia firme a pena de privación de libertad o de inhabilidad para ejercer el cargo, por delito que merezca pena más que correccional por un término igual o mayor al resto de su período.
- Abandono de sus funciones durante sesenta días continuos.
- Por obtener concesión por parte del Estado o por ser apoderado de empresas nacionales o extranjeras en contrataciones de éstas con el Estado.
- Por incumplimiento de la obligación de declarar los bienes ante la Contraloría al momento de la toma de posesión del cargo.
- Por haber sido declarado incurso de malos manejos de los fondos de la Alcaldía, según resolución de la Contraloría.

El artículo último de este Capítulo afirma la obligación del Estado de promover el desarrollo integral y armónico de las diversas partes del territorio nacional (Arto. 179).

h.2. Comunidades de la Costa Atlántica

h.2.1. Régimen Autonómico

El Arto. 180 Cn. establece “Las comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de vivir y desarrollarse bajo las formas de organización social que corresponden a sus tradiciones históricas y culturales.

El Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de sus formas de propiedad comunal y la libre elección de sus autoridades y diputados.

Asimismo, garantiza la preservación de sus culturas, lenguas, religiones y costumbres”.

10. Supremacía de la Constitución

El capítulo referido a la supremacía de la Constitución Política inicia haciendo referencia a que la Constitución se configura como fuente suprema del ordenamiento jurídico, con valor normativo, al que está sometido el resto de las leyes. Por eso decimos que la Constitución es la ley de leyes.

También como parte de la Constitución están las leyes constitucionales, las que se definen como aquellas que sin ser Constitución están equiparadas a las disposiciones constitucionales y se les reconoce igual rango.

Nuestra norma fundamental reconoce para determinadas leyes, por la importancia de las materias que regulan, el rango de normas constitucionales. Éstas se consideran como una especie de prolongación de la Constitución. Son leyes constitucionales: la Ley de Amparo, la Ley Electoral y la Ley de Emergencia que se dicten bajo la vigencia de la Constitución Política de Nicaragua, según lo establece su Arto. 184.

Ley de Amparo. En ella se establecen los recursos que garantizan que la Constitución sea respetada: el Recurso de Amparo, el Recurso de Inconstitucionalidad, y el Recurso de Exhibición Personal.

Ley Electoral. Rige el proceso electoral y garantiza a todos los partidos políticos la posibilidad de acceder al poder en procesos electorales que se celebran periódicamente. Vigila la alternabilidad en el poder como condición básica de la democracia.

Ley de Emergencia. Regula las situaciones calificadas por ella misma como de emergencia, justificando la suspensión de determinados derechos y garantías que forman parte de la persona que se halla bajo la jurisdicción del Estado nicaragüense.

El Arto. 185 Cn. establece que el Presidente de la República en Consejo de Ministros podrá decretar, para la totalidad o parte del territorio nacional y por tiempo determinado prorrogable, la suspensión de derechos y garantías de los nicaragüenses, decisión por la que el gobierno, por una razón justificable, ya sea de índole económica, para la seguridad de la nación o en casos de catástrofe

nacional, deja sin efecto, temporalmente, ciertos derechos y garantías constitucionales. Hay que hacer mención de que no todos los derechos y garantías quedan suspensos. El Arto. 186 Cn. establece cuáles derechos y garantías, por ningún motivo, pueden ser suspendidos, es decir, que los que no están establecidos en este artículo quedan suspensos una vez que el decreto presidencial es aprobado por la Asamblea Nacional.

Derechos y garantías que no pueden ser suspendidos:

- ✓ El derecho a la vida. Arto. 23 Cn.
- ✓ Los deberes para con la familia, la comunidad, la patria y la humanidad, y los límites generales a los derechos que son los derechos de los demás, la seguridad de todos y las justas exigencias del bien común. Arto. 24 Cn.
- ✓ El reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídica. Arto. 25 numeral 3 Cn.
- ✓ El respeto de su honra y reputación. Arto. 26 numeral 3 Cn.
- ✓ Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección, no habrá discriminación por motivo de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social. Arto. 27 Cn.
- ✓ Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión, nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar esos derechos ni ser obligada a declarar su credo, ideología o creencias. Arto. 29 Cn.
- ✓ Haber tratado con el debido respeto la dignidad inherente al ser humano. Una vez cumplida la pena impuesta, nadie deberá continuar detenido después de dictarse la orden de excarcelación. Los organismos correspondientes deben procurar que procesados y condenados guarden prisión en centros diferentes. Arto. 33 numeral 2.1 parte final, y los numerales 3) y 5).

- ✓ Todos los procesados tienen derecho en igualdad de condiciones a las siguientes garantías mínimas: a ser considerados inocentes mientras no se pruebe lo contrario, a ser sometidos al juicio por jurados en los casos determinados por la ley; se establece el recurso de revisión; a que se les garantice su intervención y defensa desde el inicio del proceso, y de disponer de tiempo y de medios adecuados para su defensa; a que se les nombre defensor de oficio cuando no lo designen en la primera intervención, o cuando no fuere habido previo llamamiento por edicto; el procesado tiene el derecho a comunicarse libre y privadamente con su defensor; a ser asistido de manera gratuita por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado por el tribunal; a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge o compañero en unión de hecho estable, o contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni confesarse culpable; a recurrir ante un tribunal superior a fin de que su caso sea revisado; a no ser procesado de nuevo por el delito por el cual fue condenado o absuelto mediante sentencia firme, y a no ser procesado ni condenado por acto u omisión que, al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley, así como la prohibición de dictar leyes proscriptivas o aplicar al reo penas o tratos infamantes. El proceso penal debe ser público, el acceso de la prensa y del público en general podría ser limitado; por consideraciones de moral y de orden público, el ofendido será tenido como parte en los juicios, desde el inicio de los mismos y en todas las instancias. Arto. 34, exceptuando los numerales 2 y 8 Cn.
- ✓ Los menores no pueden ser objeto de juzgamiento ni sometidos a procedimiento judicial alguno. Los menores transgresores no pueden ser conducidos a los centros de readaptación penal, y serán atendidos en centros bajo la responsabilidad del organismo especializado. Arto. 35 Cn.
- ✓ Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación a este derecho constituye delito y será penado por la ley. Arto. 36 Cn.

- ✓ La pena no trasciende de la persona del condenado. No se impondrá pena o penas que aisladamente o en conjunto duren más de treinta años. Arto. 37 Cn.
- ✓ La ley no tiene efectos retroactivos, excepto en materia penal, cuando favorezca al reo. Arto. 38 Cn.
- ✓ En Nicaragua, el sistema penitenciario es humanitario, y tiene como objetivo fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la sociedad. Por medio del sistema progresivo, promueve la unidad familiar, la salud, la superación educativa, cultural, y la ocupación productiva con remuneración salarial para el interno. Las penas tienen un carácter reeducativo. Las mujeres condenadas guardaran prisión en centros penales distintos a los de los hombres, y se procurará que los guardas sean del mismo sexo. Arto. 39 Cn.
- ✓ Nadie será sometido a servidumbre, la esclavitud y trata de cualquier naturaleza están prohibidas en todas sus formas. Arto. 40 Cn.
- ✓ Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad competente por incumplimiento de deberes alimentarios. Es deber de cualquier ciudadano nacional o extranjero pagar lo que adeuda. Arto. 41 Cn.
- ✓ En Nicaragua se reconoce y garantiza el derecho de refugio y de asilo, que amparan únicamente a los perseguidos por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos. La ley determinará la condición de asilado o refugiado político de acuerdo con los convenios internacionales ratificados por Nicaragua. En caso de que se resolviera la expulsión de un asilado, nunca podrá enviarse a un país donde fuese perseguido. Arto. 42 Cn.
- ✓ En Nicaragua no existe extradición por delitos políticos o comunes conexos con ellos, según calificación nicaragüense. La extradición por delitos comunes está regulada por la ley y los tratados internacionales. Los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional. Arto. 43. Cn.
- ✓ Se garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción. En virtud de

la función social de la propiedad, este derecho está sujeto, por causa de utilidad pública o de interés social a las limitaciones que en cuanto a su oficio le impongan las leyes. Los bienes inmuebles mencionados en el párrafo primero pueden ser objeto de expropiación de acuerdo con la ley, previo pago en efectivo de justa indemnización. Tratándose de la expropiación de latifundios incultivados, para fines de reforma agraria, la ley determinará la forma, cuantificación, plazos de pagos e intereses que se reconocerán en concepto de indemnización.

Se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos. Arto. 44 Cn.

- ✓ En el territorio nacional, toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos, y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Arto. 46.
- ✓ Son ciudadanos los nicaragüenses que hubieran cumplido dieciséis años de edad. Sólo los ciudadanos gozan de los derechos políticos consignados en la Constitución y en las leyes, sin más limitaciones que las que se establezcan por razones de edad. Los derechos ciudadanos se suspenden por imposición de pena corporal grave o penas accesorias específicas, y por sentencia ejecutoriada de interdicción civil. Arto. 47.
- ✓ Se establece la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos; en el ejercicio de los mismos y en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, existe igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. Es obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social del país. Arto. 48.

- ✓ Los ciudadanos tienen derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal. Por medio de la ley se garantizará, nacional y localmente, la participación efectiva del pueblo. Arto. 50.
- ✓ Los ciudadanos tienen derecho a elegir y a ser elegidos en elecciones periódicas y a optar a cargos públicos, salvo las limitaciones contempladas en la Constitución Política. Es deber del ciudadano desempeñar los cargos de jurado y otros de carácter concejil, salvo excusa calificada por la Ley. Arto. 51.
- ✓ El Estado prestará atención especial en todos sus programas a los discapacitados y a los familiares de caídos y víctimas de guerra en general. Arto. 56.
- ✓ Los nicaragüenses tienen el derecho al trabajo acorde con su naturaleza humana. Arto. 57
- ✓ Los nicaragüenses tienen derecho a la educación y a la cultura. Arto. 58.
- ✓ Los nicaragüenses tienen derecho, por igual, a la salud. El Estado establecerá las condiciones básicas para su promoción, protección, recuperación y rehabilitación. Corresponde al Estado dirigir y organizar los programas, servicios y acciones de salud y promover la participación popular en defensa de la misma. Los ciudadanos tienen la obligación de acatar las medidas sanitarias que se determinen. Arto. 59.
- ✓ Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable. Es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos naturales. Arto. 60.
- ✓ El Estado garantiza a los nicaragüenses el derecho a la seguridad social para su protección integral frente a las contingencias sociales de la vida y el trabajo, en la forma y condiciones que determine la ley. Arto. 61.
- ✓ El Estado procurará establecer programas en beneficio de los discapacitados para su rehabilitación física, psicosocial y profesional, y para su ubicación laboral. Arto. 62.

- ✓ Es derecho de los nicaragüenses estar protegidos contra el hambre. El Estado promoverá programas que aseguren una adecuada disponibilidad de alimentos y una distribución equitativa de los mismos. Arto. 63.
- ✓ Los nicaragüenses tienen derecho a una vivienda digna, cómoda y segura que garantice la privacidad familiar. El Estado promoverá la realización de este derecho. Arto. 64.
- ✓ Los nicaragüenses tienen derecho al deporte, a la educación física, a la recreación y al esparcimiento. El Estado impulsará la práctica del deporte y de la educación física mediante la participación organizada y masiva del pueblo, para la formación integral de los nicaragüenses. Esto se realizará con programas y proyectos especiales. Arto. 65.
- ✓ El derecho de informar es una responsabilidad social y se ejerce con estricto respeto a los principios establecidos en la Constitución. Arto. 67.
- ✓ Los medios de comunicación, dentro de su función social, deberán contribuir al desarrollo de la nación. Arto. 68.
- ✓ Todas las personas, individual o colectivamente, tienen derecho a manifestar sus creencias religiosas en privado o en público, mediante el culto, las prácticas y su enseñanza. Nadie puede eludir la observancia de las leyes, ni impedir a otros el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, invocando creencias o disposiciones religiosas. Arto. 69.
- ✓ La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de ésta y del Estado. Arto. 70.
- ✓ Es derecho de los nicaragüenses constituir una familia. Se garantiza el patrimonio familiar, que es inembargable y exento de toda carga pública. La niñez goza de protección especial y de todos los derechos que su condición requiere, por lo cual tiene plena vigencia la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña. Arto. 71.

- ✓ El matrimonio y la unión de hecho estable están protegidos por el Estado; descansan en el acuerdo voluntario del hombre y la mujer, y podrán disolverse por mutuo consentimiento o por la voluntad de una de las partes. La ley regulará esta materia. Arto. 72.
- ✓ Las relaciones familiares descansan en el respeto, solidaridad e igualdad absoluta de derechos y responsabilidades entre el hombre y la mujer. Los padres deben atender el mantenimiento del hogar y la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común, con iguales derechos y responsabilidades. Los hijos, a su vez, están obligados a respetar y ayudar a sus padres. Estos deberes y derechos se cumplirán de acuerdo con la legislación de la materia. Arto. 73.
- ✓ El Estado otorga protección especial al proceso de reproducción humana. La mujer tendrá protección especial durante el embarazo, y gozará de licencia con remuneración salarial y prestaciones adecuadas de seguridad social. Nadie podrá negar empleo a las mujeres aduciendo razones de embarazo ni despedirlas durante éste o en el período post-natal; todo de conformidad con la ley. Arto. 74.
- ✓ Todos los hijos tienen iguales derechos. No se utilizarán designaciones discriminatorias en materia de filiación. En la legislación común, no tienen ningún valor las disposiciones o clasificaciones que disminuyan o nieguen la igualdad de los hijos. Arto. 75.
- ✓ El Estado creará programas y desarrollará centros especiales para velar por los menores; éstos tienen derecho a las medidas de prevención, protección y educación, que su condición requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Arto. 76.
- ✓ Los ancianos tienen derecho a medidas de protección por parte de la familia, de la sociedad y del Estado. Arto. 77.
- ✓ El Estado protege la paternidad y maternidad responsables. Se establece el derecho de investigar la paternidad y la maternidad. Arto. 78.

- ✓ Se establece el derecho de adopción en interés exclusivo del desarrollo integral del menor. La ley regulará esta materia. Arto. 79.
- ✓ El trabajo es un derecho y una responsabilidad social. El trabajo de los nicaragüenses es el medio fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad, de las personas, y es fuente de riqueza y prosperidad de la nación. El Estado procurará la ocupación plena y productiva de todos los nicaragüenses, en condiciones que garanticen los derechos fundamentales de la persona. Arto. 80.
- ✓ Los trabajadores tienen derecho de participar en la gestión de las empresas, por medio de sus organizaciones y de conformidad con la ley. Arto. 81.
- ✓ Los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que les aseguren, en especial:
 - Salario igual por trabajo igual en idénticas condiciones, adecuado a su responsabilidad social, sin discriminaciones por razones políticas, religiosas, raciales, de sexo o de cualquier otra clase, que les asegure un bienestar compatible con la dignidad humana.
 - Ser remunerado en moneda de curso legal en su centro de trabajo.
 - La inembargabilidad del salario mínimo y de las prestaciones sociales, excepto para protección de su familia y en los términos que establezca la ley.
 - La integridad física, la salud, la higiene y la disminución de los riesgos profesionales para hacer efectiva la seguridad ocupacional del trabajador.
 - Jornada laboral de ocho horas, descanso semanal, vacaciones, remuneración por los días feriados nacionales y salario por décimo tercer mes, de conformidad con la ley.
 - Estabilidad en el trabajo conforme la ley, e igual oportunidad de ser promovido, sin más limitaciones que los factores de tiempo, servicio, capacidad, eficiencia y responsabilidad.
 - Seguridad social para protección integral y medios de subsistencia en casos de invalidez, vejez, riesgos profesionales, enfermedad y maternidad; y a sus familiares

en casos de muerte, en la forma y condiciones que determine la ley. Arto. 82.

- ✓ Se prohíbe el trabajo de los menores, en labores que puedan afectar su desarrollo normal o su ciclo de instrucción obligatoria. Se protegerá a los niños y adolescentes contra cualquier clase de explotación económica y social. Arto. 84.
- ✓ Los trabajadores tienen derecho a su formación cultural, científica y técnica; el Estado la facilitará mediante programas especiales. Arto. 85.
- ✓ En Nicaragua existe plena libertad sindical. Los trabajadores se organizarán voluntariamente en sindicatos, y éstos podrán constituirse conforme lo establece la ley. Ningún trabajador está obligado a pertenecer a determinado sindicato ni a renunciar al que pertenezca. Se reconoce la plena autonomía sindical y se respeta el fuero sindical. Arto. 87.
- ✓ Las comunidades de la Costa Atlántica son parte indisoluble del pueblo nicaragüense y, como tal, gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones. Las comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de preservar y desarrollar su identidad cultural en la unidad nacional; dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones. El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las comunidades de la Costa Atlántica. Igualmente, reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales. Arto. 89.
- ✓ Las comunidades de la Costa Atlántica tienen derecho a la libre expresión y preservación de sus lenguas, arte y cultura. El desarrollo de su cultura y sus valores enriquece la cultura nacional. El Estado creará programas especiales para el ejercicio de estos derechos. Arto. 90.
- ✓ El Estado tiene la obligación de dictar leyes destinadas a promover acciones que aseguren que ningún nicaragüense sea objeto de discriminación por razón de su lengua, cultura y origen. Arto. 91.

11. Control constitucional

Nuestra Constitución Política establece como control constitucional los recursos regulados por la Ley de Amparo vigente, Ley No. 49, publicada en La Gaceta, No. 241, del 20 de diciembre de 1988. Ésta constituye la reglamentación constitucional del Título X, Capítulo II de nuestra Constitución Política, titulado: “Control Constitucional” (Artos. 187 al 190).

El control constitucional está integrado por:

El Recurso por Inconstitucionalidad: contra toda ley, decreto o reglamento que se oponga a lo prescrito por la Constitución Política, el cual podrá ser interpuesto por cualquier ciudadano.

El Recurso de Amparo: en contra de toda disposición, acto o resolución, y, en general, en contra de toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política.

El Recurso de Exhibición Personal: a favor de aquellos cuya libertad, integridad física y seguridad, sean violadas o estén en peligro de serlo.

Antes de comenzar nuestro estudio de las leyes constitucionales es necesario detenernos para hablar del control constitucional, para ello tenemos que referirnos de manera general a lo que se plantea como sistema jurídico, y dentro del mismo se conoce como la Jerarquía de las Leyes.

Como éste es el mecanismo en virtud del cual el ordenamiento jurídico impone el marco jerárquico de seguimiento aceptado consensualmente para toda la estructura normativa de nuestra sociedad, funciona bajo premisas procesales de mecanismos de control a través de los recursos que con anterioridad mencionamos, que son el Recurso por Inconstitucionalidad, el Recurso de Amparo, y el Recurso de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal.

El sistema jurídico es la forma en que está organizado y funciona el derecho de una sociedad. Esta organización es la expresión legal del sistema económico y político social existente. Un sistema jurídico implica, entre otras cosas:

- La organización jurídica del Estado, sus poderes y competencias (Título VIII Cn.).
- Los derechos y garantías existentes (Título IV Cn.).
- Un orden jurídico al cual deben sujetarse todos (Título X, artos. 182 al 184).
- Un conjunto de procedimientos jurídicos y órganos competentes para resolver los conflictos jurídicos existentes entre particulares o entre particulares y el Estado.
- Mecanismos jurídicos, instancias por medio de las cuales se va a garantizar el cumplimiento del orden público y el control de la legalidad (Título V y Cap. II Cn.).

La Jerarquía de las Leyes debemos considerarla como un tema fundamental en toda la concepción lógica con que funciona el sistema jurídico, es decir, el Derecho. Esta teoría fue planteada por Hans Kelsen (1881), a quien se considera su máximo exponente.

Podemos afirmar que la defensa de la Constitución se realiza desde cuatro aspectos (cuatro tipos básicos de defensa):

- Control global. Se practica manteniendo la supremacía constitucional, y protege su vigencia y efectividad (garantiza el cumplimiento de la norma). La Constitución se defiende a través de la defensa de instituciones estatales y principios fundamentales, y la forma de Estado o de gobierno se establece en la Constitución.
- Aspecto militar. Se plantea defendiendo desde la integridad territorial, independencia, autodeterminación y soberanía básica. Esta defensa es ejercida de acuerdo con la Constitución por el Ejército de Nicaragua y el pueblo en armas. Se ejerce para mantener la vigencia y efectividad de las normas constitucionales, sus principios fundamentales.
- Aspecto diplomático. La vigencia y efectividad de la Constitución se puede realizar también a través de foros internacionales (ONU, OEA, etc.) donde se defiende la soberanía y autodeterminación de la Constitución.

- Vía institucional. La efectúa el Estado por medio de los distintos órganos y normas jurídicas establecidas para la defensa de la Constitución; hay diferentes normativas referentes al mantenimiento del orden público como órgano encargado de conservar éste (leyes que penalización externas, por ejemplo, el Código Penal); normas de derecho internacional, dictadas por órganos establecidos en el Derecho Internacional, por ejemplo, el Consejo de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, donde los estados pueden acudir y ejercer acciones de defensa de su constitucionalidad.

También existen diferentes tipos de controles a la constitucionalidad implementados en algunos sistemas. Hablaremos de dos tipos de controles: el sistema “americano” y el sistema austriaco kelseniano.

Sistema “americano” (judicial review)²⁵

Fundamentalmente, surge del debate constitucional en los Estados Unidos que dio origen a dicho Estado Federal. Este sistema se basa en la desconcentración de los órganos habilitados para ejercer el control de la constitucionalidad. Ésta es una atribución que se le otorga a cualquier juez, quien podrá revisar la adecuación de las normas que le llegan para su aplicación a las normas constitucionales. La dimensión constitucional puede hallarse presente en todos los litigios, cualquiera que sea su naturaleza, y no precisa de un tratamiento específico.

Sistema austriaco kelseniano

Es el planteamiento de los constitucionalistas europeos, por el cual el control de constitucionalidad se ejerce de forma concentrada, al otorgarse a un órgano especializado (Tribunales Constitucionales) la atribución en exclusiva de dicho control. Este modelo europeo no podría entenderse sin la presencia de Kelsen, pues con sus trabajos y el proyecto de Constitución austriaca de 1920, hizo nacer un nuevo sistema de control diferente del llamado “americano”.

En este modelo se distingue claramente entre lo contencioso constitucional y lo contencioso ordinario: lo primero es competencia

²⁵ Véase El Valor de la Constitución, Roberto L. Blanco Valdés, Capítulo 3. Alianza Editorial, Madrid, 1994.

exclusiva de un órgano especialmente creado para ejercer tal jurisdicción constitucional.

A continuación, estudiaremos las leyes a las que nuestra Constitución Política les otorga rango constitucional, establecidas en el Arto. 184 Cn.

a. Leyes Constitucionales

a.1 Ley de Amparo

La Ley de Amparo vigente es la Ley No. 49, publicada en La Gaceta No. 241, del 20 de diciembre de 1988.

La Ley de Amparo ha sido reformada por la Ley 205 publicada en La Tribuna del 30 de noviembre de 1995, que reformó los Artos. 6 y 51 de la Ley de Amparo, previendo que no procede el recurso de inconstitucionalidad contra la Constitución y sus reformas, excepto cuando estando en vigencia se alegue la existencia de vicios de procedimiento en su tramitación, discusión y aprobación.

También la reforma estableció que contra las resoluciones dictadas en materia electoral no procede el Recurso de Amparo.

La Ley de Amparo vigente es la octava Ley de Amparo de nuestra historia. La primera data de 1894; la segunda, de 1911; la tercera, de 1939; la cuarta, de 1948; la quinta, de 1950; la sexta, de 1974, y la séptima, de 1980. Dichas leyes, en general, han coincidido con el año en el que se han aprobado las constituciones de nuestra historia.

La actual Ley de Amparo consta de 86 artículos agrupados en cinco Títulos. Dicha ley establece la regulación de tres recursos, los cuales definimos al inicio de nuestro estudio: el Recurso por Inconstitucionalidad, el Recurso de Amparo y el Recurso de Exhibición Personal.

Nuestro estudio se centrará en el proceso de interposición, tramitación y sentencia de cada uno de los recursos establecidos en la Ley de Amparo.

a.1.1. El Recurso por Inconstitucionalidad

Regulado en los Artos. 2 al 22 de la Ley de Amparo.

Interposición del recurso

El recurso puede ser interpuesto por cualquier ciudadano o ciudadanas, ya sea de manera personal o por apoderado especialmente facultado para ello. En este caso, el poder deberá ser otorgado ante Notario Público domiciliado en Nicaragua.

Cuando una ley, decreto o reglamento, y en general cuando cualquier acto normativo de rango inferior a la Constitución se oponga a lo prescrito en ella, el recurso de inconstitucionalidad no procede contra la Constitución y sus reformas, excepto cuando estando en vigencia se alegue la existencia de vicios de procedimiento en su tramitación, discusión y aprobación.

Se recurre en contra de quien lo emitió, quien conoce y resuelve es el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Se interpone dentro de 60 días, después de su entrada en vigencia, por escrito, en papel sellado de Ley, dirigido a la CSJ; se presenta en la Secretaría de la Sala Constitucional copias suficientes en papel común, una a la Procuraduría y otra al funcionario recurrido. Existen, según el Arto. 11 de la Ley, requisitos formales que tienen que ser llenados para la interposición del mismo:

1. Nombres, apellidos y generales de ley del recurrente.
2. Nombres y apellidos del funcionario o titular del órgano en contra de quien fuera interpuesto.
3. La Ley, decreto o reglamento impugnado, la fecha de su entrada en vigencia, y la disposición o disposiciones especiales que se opongan a la Constitución, determinando las normas que se consideren violadas o contravenidas.
4. Una exposición fundamentada de los perjuicios directos o indirectos que la ley, decreto o reglamento le cause o pudiere causarle.
5. La solicitud expresa para que se declare la inconstitucionalidad de la ley, decreto o reglamento o partes de la misma.
6. Señalamiento de casa conocida para notificaciones.

En caso de omisiones, la Corte Suprema de Justicia concederá al recurrente un plazo de cinco días para que llene éstas, de forma que se anotaren en el escrito de interposición del recurso. Si el recurrente deja pasar ese plazo, el recurso se tendrá por no interpuesto.

Tramitación

El Capítulo II referente a la Tramitación del Recurso establece en el Arto. 14 que “...Interpuesto en forma el Recurso por Inconstitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia se pronunciará dentro de quince días sobre la admisibilidad del mismo con base en los artículos 6, 10, 11, 12, 13 y 19 de la presente ley, rechazándolo de plano o mandando seguir el procedimiento”

En concordancia con lo anterior, el Arto 15 dispone que una vez admitido, la CSJ pedirá informe al funcionario en contra de quien se interpone, el que deberá rendirlo dentro de quince días de recibida la notificación correspondiente, pudiendo alegar todo lo que tenga a bien.

Si por cualquier circunstancia, la Corte Suprema necesitare datos que no aparezcan en el proceso para resolver el recurso, dictará las providencias que estime necesarias para obtenerlos, dándole intervención al recurrente, al funcionario y a la Procuraduría General de Justicia (Arto. 16).

El Arto. 17 establece que “Transcurrido el término para que el funcionario rinda su informe, y una vez practicadas las diligencias especiales, si fuera el caso, con el informe o sin él, la Corte Suprema de Justicia dará audiencia por seis días a la Procuraduría para que dictamine el recurso. Pasado este término, con el dictamen o sin él, la Corte Suprema de Justicia dentro de sesenta días dictará la sentencia correspondiente, pronunciándose sobre la inconstitucionalidad alegada”.

Sentencia

El Arto. 18 de la Ley de Amparo dispone que “La declaración de inconstitucionalidad tendrá por efecto a partir de la sentencia que lo establezca, la inaplicabilidad de la ley, decreto o reglamento, o las

disposiciones impugnadas de los mismos si la inconstitucionalidad fuere parcial. La Corte Suprema de Justicia, previa notificación de las partes, enviará copia de la sentencia a los demás poderes del Estado para su conocimiento, y la mandará publicar en La Gaceta, Diario Oficial.”

En este sentido, la sentencia que resuelva el recurso producirá cosa juzgada en forma general en cuanto a los puntos declarados constitucionales o inconstitucionales.

La ley constitucional dispone que cuando se recurra solamente contra parte o partes de los citados cuerpos normativos, el Tribunal podrá pronunciarse de oficio, específicamente sobre el resto de los mismos.

En lo referente a la Inconstitucionalidad, en casos concretos el Arto. 20 de la Ley de Amparo estima que: “El recurrente de Casación o de Amparo puede alegar la inconstitucionalidad de la ley, decreto o reglamento que se le haya aplicado. Si resultare ser cierta la inconstitucionalidad alegada, la Corte Suprema, además de casar la sentencia o de amparar al recurrente, declarará la inconstitucionalidad de la ley, decreto o reglamento aplicado.

Cuando por sentencia firme, en los casos que no hubiere casación hubiese sido resuelto un asunto con declaración expresa de inconstitucionalidad de alguna ley, decreto o reglamento, el funcionario judicial o tribunal en su caso deberá remitir su resolución a la Corte Suprema de Justicia. Si ésta ratifica la inconstitucionalidad de la ley, decreto o reglamento procederá a declarar su inaplicabilidad de acuerdo con la presente ley (Arto. 21).

a.1.2. El Recurso de Amparo

Regulado en los Artos. 23 al 51 de la Ley de Amparo.

Interposición

El Recurso de Amparo sólo puede interponerse por parte agraviada, y procede contra toda acción u omisión de autoridad o agentes de autoridad que lesionen o transgredan los derechos y garantías consagrados en la Constitución.

En el ámbito protector del Amparo se incluyen así, tanto las lesiones y omisiones como la amenaza y perpetración de la lesión de un derecho reconocido constitucionalmente.

El recurso se interpone ante el Tribunal de Apelaciones de la circunscripción correspondiente o ante la Sala Civil del mismo, en el caso de que se encuentre dividido en Salas.

Entre los legitimados para recurrir de amparo están las personas naturales y las jurídicas, los nacionales y los extranjeros. El Tribunal de Apelaciones revisa si el recurso llena los requisitos establecidos en la ley, y en caso de detectar omisiones manda a llenarlas, concediendo un plazo de cinco días. Si las omisiones no fueron llenadas el recurso se tendrá como no interpuesto.

El Tribunal de Apelaciones conoce del recurso hasta la suspensión del acto, inclusive. Mandará a las partes a personarse dentro del término de tres días hábiles ante la Corte Suprema de Justicia. Si las partes no se personan, el recurso será declarado desierto.

El recurso tiene los siguientes requisitos formales a ser llenados:

1. Nombre, apellidos y generales de ley del agraviado y de la persona que lo promueva en su nombre.
2. Nombre, apellidos y cargos de funcionarios, autoridades o agentes de los mismos contra quienes se interpone el recurso.
3. Disposición, acto, resolución, acción u omisión contra los cuales se reclama, incluyendo si la ley, decreto o reglamento a juicio del recurrente fuere inconstitucional.
4. Las disposiciones constitucionales que el reclamante estima violadas.
5. El recurso podrá interponerse personalmente o por apoderado especial facultado para ello.
6. El haber agotado los recursos ordinarios establecidos por la ley, o no haberse dictado resolución en la última instancia dentro del término que la ley respectiva señala.
7. Señalamiento de casa conocida en la ciudad sede del Tribunal para subsiguientes notificaciones.

El Recurso de Amparo se interpondrá dentro del término de treinta días, que se contarán desde que se haya notificado o comunicado legalmente al agraviado, la disposición, acto o resolución. En todo caso, este término se aumentará en razón de la distancia. También podrá interponerse el recurso desde que la acción u omisión haya llegado a su conocimiento (Arto. 26).

Los requisitos de forma que debe cumplir son entre otros: interponerlo por escrito, en papel común, con copias suficientes para las autoridades señaladas como responsables y para la Procuraduría General de Justicia.

Dentro de los tres días de interpuesto en forma el recurso, el Tribunal, de oficio o a solicitud de parte, deberá decretar la suspensión del acto contra el cual se reclama o denegarla en su caso.

Existen dos tipos de suspensiones: la de oficio²⁶ y a solicitud de parte.²⁷

Sentencia

El Arto. 45 establece que la sentencia debe ser razonada, con fijación clara del acto o actos reclamados, indicación de los fundamentos legales en que se apoya para declarar la legalidad o ilegalidad del acto reclamado y de los puntos resolutivos del mismo, señalándose en ellos con claridad y precisión el acto o los actos por los que se concede o deniega el Amparo.

Al tenor del Arto. 46 de la Ley de Amparo se establecen los efectos que puede producir la sentencia: cuando el acto o actos reclamados sean de carácter positivo, la sentencia que concede el Amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de los derechos transgredidos, restableciendo las cosas al estado que tenían antes de la trasgresión; cuando el acto o actos reclamados sean de carácter negativo, el efecto del Amparo será obligar a las autoridades o a los funcionarios

²⁶ Cuando se trate de algún acto que de llegar a consumarse haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. Cuando sea notoria la falta de jurisdicción o competencia de la autoridad, funcionario o agente contra quien se interpusiere el recurso. Cuando el acto sea de aquellos que ninguna autoridad puede ejecutar legalmente (Arto 32).

²⁷ Cuando la suspensión no cause perjuicio al interés general ni se contravengan disposiciones de orden público. Cuando los daños y perjuicios que pudieren causarse al agraviado con su ejecución sean de difícil reparación a juicio del Tribunal. Cuando el reclamante otorgare garantía suficiente para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que la suspensión pudiere causar a terceros, si el amparo fuere declarado sin lugar. (Arto 33)

responsables a que actúen en el sentido de respetar la ley o garantía de que se trate, y de cumplir por su parte lo que la misma exija.

La Corte Suprema de Justicia debe dictar sentencia dentro de los cuarenta y cinco días posteriores a la recepción de las diligencias (Arto 47).

a.1.3. Recurso de Exhibición Personal

Regulado en los Artos. del 52 al 77 de la Ley de Amparo.

Interposición

La Ley de Amparo autoriza para interponer este recurso a cualquier habitante de la República, ya sea por escrito, carta, telegrama o verbalmente. De los tres recursos establecidos en la Ley de Amparo éste es, sin duda alguna, el que menos requiere de solemnidad para su interposición, ya que la misma ley establece que puede ser hasta de forma verbal.

Éste podrá interponerse: en contra del funcionario o autoridad responsable, representante o funcionario de la entidad o institución que ordene la violación o la cometa; en contra del agente ejecutor; en contra de todos los anteriores; en contra del particular que restrinja la libertad personal.

En el caso de detención ilegal, se interpone ante el Tribunal de Apelaciones respectivo o ante la Sala Penal del mismo, donde estuviere dividido en Salas.

En el caso de actos restrictivos de la libertad realizados por particulares, son la autoridad competente los jueces de Distrito para lo Criminal respectivos.

Podrá interponer en cualquier tiempo, aun en Estado de Emergencia, mientras subsista la privación ilegal de la libertad personal o la amenaza de la misma. Todos los días y horas son hábiles para este fin.

Dentro de los requisitos para la interposición del recurso, el peticionario, al interponer el Recurso de Exhibición Personal, debe expresar los hechos que lo motivan, el lugar en que se encuentra el

detenido, si se supiere, y el nombre o cargo del que ejerce la autoridad o del funcionario representante o responsable de la entidad o institución que ordenó la detención, si se supiere. La petición puede hacerse en papel común, por telegrama, carta y aun verbalmente, levantándose en este último caso el acta correspondiente.

Tramitación

Introducida en forma la petición ante el Tribunal de la jurisdicción donde se encuentre el favorecido por el recurso, el Tribunal decretará la Exhibición Personal y nombrará Juez Ejecutor, que podrá ser cualquier autoridad o empleado del orden civil, o un ciudadano, de preferencia abogado, de notoria honradez e instrucción, procurando que el nombramiento no recaiga en funcionarios del Poder Judicial. También dicho recurso podrá ser interpuesto en caso de amenaza de detención, expresando en qué consiste la amenaza, debiendo en todo caso ser real, inmediata, posible y realizable.

Presentado en forma el Recurso de Exhibición Personal, el Tribunal solicitará a la autoridad en contra de quien se dirige el recurso que rinda informe en el término de veinticuatro horas; con dicho informe o sin él, el Tribunal decidirá admitir o rechazar dicho recurso. En caso de que lo admitiera se deberá proceder de conformidad con lo dispuesto en el caso del recurso interpuesto, ante detención ilegal, en lo que sea aplicable.

En el caso de que el Tribunal de Apelaciones rechace el recurso, el perjudicado puede recurrir de Queja ante la Corte Suprema de Justicia, y de lo resuelto por ésta no habrá recurso alguno.

La figura o cargo de Juez Ejecutor se establece a partir del Arto. 59 de la Ley, estableciéndose que el cargo es gratuito y obligatorio. Éste no podrá ser ejercido sólo por imposibilidad física o implicancia comprobada. Fuera de estas dos excepciones se le aplicará una multa de hasta el 25% de su salario o ingreso mensual, sin perjuicio de ser juzgado por desobediencia.

El Juez Ejecutor tendrá que proceder de inmediato a cumplir cargo, dirigiéndose a la autoridad o persona contra quien se hubiere expedido el auto de exhibición, quien recibirá al Juez Ejecutor, sin hacerlo guardar antesala. Procederá a intimarlo a que exhiba en el acto a la persona agraviada, que muestre el proceso si lo hubiere, o que

explique, en caso contrario, los motivos de la detención, indicando la fecha de ella, todo lo cual deberá hacerlo constar en Acta.

Éste puede exigir la exhibición de la persona detenida a la autoridad o al funcionario que la tenga directamente bajo su custodia, aunque estuviere a la orden de otro funcionario o autoridad, sin perjuicio de continuar con los trámites del recurso.

El Juez Ejecutor, en presencia del proceso o sin él, de las explicaciones del intimado y de las disposiciones legales, procederá según las reglas siguientes:

1. Si la persona estuviere a la orden de autoridad que no es la facultada para conocer del caso, podrá ordenar su libertad o que pase de inmediato a la autoridad competente.
2. Si la persona estuviere detenida a la orden de una autoridad competente, pero el término de ley se hubiere excedido, ordenará por auto que el detenido pase inmediatamente a la orden de la autoridad que corresponda o que sea puesto en libertad.
3. Si el que tiene bajo su custodia a otro fuese la autoridad competente, pero no hubiere iniciado el proceso o no hubiere proveído el auto de detención en el término de ley del puesto a su orden, o no hubiere dictado el auto de prisión en el término legal, el Juez Ejecutor mandará por auto a ponerlo en libertad bajo fianza de la haz otorgada al pie del acta ante el mismo Juez Ejecutor.
4. Si el que está bajo custodia, lo es por sentencia condenatoria firme, el Juez Ejecutor decretará por auto que el detenido continúe en tal condición por el término legal, pero si hubiere cumplido la condena, el Juez Ejecutor mandará por auto ponerlo inmediatamente en libertad.
5. Si se tratara de sentencia judicial cumplida según el reo, por compensaciones legales, será necesario que esté liquidada la pena para que pueda ordenar su libertad. El Juez Ejecutor ordenará tal liquidación.

6. Si el interno sufre diferente pena o más de las contempladas por la ley o sentencia, según el caso, o estuviere incomunicado contra lo que ellas previenen, el Juez Ejecutor está en la obligación de dictar dentro de la ley todas las medidas de seguridad que sean indispensables a favor del detenido o del que estuviere amenazado de serlo ilegalmente.

a.2. Ley de Emergencia

Estado de Emergencia. Llamado también Estado de Sitio o Ley Marcial

Estado de Emergencia. Lo definimos como un Estado de Excepción en donde el Poder Ejecutivo puede suspender sin cabida a recurso o control alguno los derechos y garantías de los ciudadanos establecidos en la Constitución, para repeler, controlar o resolver situaciones de carácter militar, economicosocial, y catástrofes naturales de la nación.

El Arto. 185 Cn. establece: “El Presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar, para la totalidad o parte del territorio nacional y por tiempo determinado y prorrogable, la suspensión de derechos y garantías, cuando así lo demanden la seguridad de la Nación, las condiciones económicas, o en caso de catástrofe nacional”.

El Presidente en estos casos controla el poder de manera total, por ejemplo: controla el orden público, impide actos o manifestaciones políticas o públicas, controla los medios radiales, televisivos, etc.

También las telecomunicaciones y correos, ordena allanamientos, decreta arrestos o detenciones, priva de la libertad de circulación, crea tribunales militares especiales, ocupa empresas, cierra las mismas, interviene bancos y sus cuentas, y ocupa para fines militares bienes muebles o inmuebles de los particulares, entre otros.

Es a partir de la Constitución Política de 1911, que se le da reconocimiento de ley con rango constitucional. a la Ley de Emergencia, denominada entonces Ley Marcial.

Cabe señalar que todas las constituciones, hasta la de 1974, denominaron la Ley Marcial como Ley Constitucional. La suspensión de derechos y garantías estaba prevista como una posibilidad para situaciones excepcionales o de emergencia que pusieran en peligro la vida y estabilidad de la nación.

En los considerandos de la Ley, se define el Estado de Emergencia como el mecanismo excepcional del pueblo nicaragüense para posibilitar la defensa de la vida, de la soberanía, de la Constitución Política y de las autoridades libremente electas.

También señalan los considerandos, que el objetivo de decretar un Estado de Emergencia es asegurar el funcionamiento de la institucionalidad del país y el ejercicio de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política, cuando éstos se encuentren amenazados y no sea posible garantizar su vigencia con los métodos ordinarios.

En varias ocasiones se han suspendido los derechos y garantías de los nicaragüenses. Dada la situación de imperiosa necesidad de esos momentos, podemos citar los siguientes: por emergencia alimentaria para la Región Autónoma del Atlántico Norte, cuando debido a las inundaciones causadas por las altas precipitaciones pluviales, la zona ha quedado sin alimentos; en el caso del huracán Juana. También se ha declarado Estado de Emergencia cuando se han suspendido parcialmente derechos y garantías en ciertos municipios del país.

El Decreto que el Presidente de la República dicta, debe expresar:

1. Los motivos en que se funda el Estado de Emergencia.
2. Los derechos y garantías que se suspenden.
3. Si rige para todo el territorio nacional o para parte de él.
4. El tiempo de duración.

El decreto de suspensión de derechos y garantías constitucionales pondrá en vigencia el Estado de Emergencia a partir de su publicación por cualquier medio de comunicación colectiva.

La constitución política establece en el Arto. 150, inciso 9, que el Presidente debe remitir dicho decreto a la Asamblea Nacional para su aprobación, modificación o rechazo en un plazo de 72 horas; la

Ley de Emergencia anterior disponía un plazo de cuarenta y cinco días, pero ésta fue reformada por la Ley 192.

Cuando el decreto no fuera enviado en el plazo de las 72 horas para su ratificación por la Asamblea Nacional, perderá su vigencia, y se restablecerán plenamente los derechos y garantías suspendidos sin necesidad de nueva disposición.

La misma ley establece que al desaparecer las causas que motivaron el Decreto de Suspensión, el Presidente debe derogarlo, comunicándolo a la Asamblea Nacional.

Habiendo cesado la vigencia del Decreto, el Presidente de la República en un plazo no mayor de 45 días, tiene que presentar un informe por escrito, a la Asamblea Nacional, de las providencias tomadas durante el Estado de Emergencia.

En cualquiera de los casos de reforma, prórroga o derogación del decreto de Emergencia, el Presidente de la República deberá informarlo al Secretario General de Naciones Unidas y al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, conforme lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Arto. 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El Presidente de la República podrá ejercer las siguientes facultades:

1. Dictar las medidas preventivas necesarias para asegurar el orden público y la seguridad de la nación, las que serán puestas en conocimiento de la nación por cualquier medio de comunicación.
2. Impedir la realización de actos que contravengan lo dispuesto por el decreto, cuando atenten contra el orden público o contra la seguridad de la nación.
3. Suspender las transmisiones radiales o televisivas, proyecciones de cine, videos o representaciones teatrales, órganos impresos o escritos y cualquier otro medio de comunicación colectiva, cuando ello fuere necesario para el

mantenimiento del orden público y la seguridad de la nación, por el tiempo que juzgue necesario.

4. Incautar las piezas, ejemplares y otros efectos que puedan preparar, coadyuvar o constituir delitos, o actos contrarios a la preservación del orden público y de la seguridad de la nación.
5. Intervenir las comunicaciones postales, telefónicas, telegráficas, de télex, de radioaficionados, y de toda clase. Dicha intervención sólo podría ser efectuada si es absolutamente necesaria para el esclarecimiento de hechos presuntamente delictivos, y para preservar el orden público y la seguridad de la nación.
6. Otorgar salvoconducto y exigir su presentación como documento indispensable para circular en zonas o regiones que al efecto se determine.
7. Decretar el arresto domiciliario de las personas que considere peligrosas o sospechosas de atentar contra el orden público de la seguridad de la nación.
8. Ordenar en forma escrita el allanamiento del domicilio u oficina de cualquier persona natural o jurídica, cuando se considere necesario para la preservación del orden público o de seguridad de la nación.
9. Dictar con carácter preventivo órdenes de detención.
10. Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.
11. Impedir la salida del país y prohibir la entrada al mismo, de personas que se consideren sospechosas o peligrosas de atentar contra el orden público o contra la seguridad de la nación.
12. Prohibir la circulación o permanencia de personas o vehículos, en horas y lugares determinados, y exigir a los que se desplacen por esos lugares su identificación personal.

13. Adjudicar a la jurisdicción militar las competencias para conocer con exclusividad de los delitos que por decreto determine.

En caso de suspensión de los derechos y garantías por razón de las condiciones económicas imperantes, el Presidente de la República podrá:

1. Ocupar temporalmente las empresas de producción y comercialización de cualquier índole, que afecten el consumo interno y la exportación.
2. Ocupar temporalmente todos los bienes afectos a la producción y comercialización de bienes de consumo nacional y de exportación.
3. Las contempladas en los numerales 1, 2, 3, 9 y 10 del supuesto cuando se ve amenazada la seguridad de la nación.

En caso de que se tratase de una catástrofe nacional o de guerra, además de todas las facultades anteriores, el Presidente podrá:

1. Intervenir o controlar toda clase de vehículos, transportes y la carga de los mismos.
2. Ocupar temporalmente la propiedad mueble o inmueble de cualquier persona natural o jurídica que se considere necesaria, extendiéndose constancia de su estado a la fecha de ocupación y desocupación, a los efectos de indemnizar al propietario por las pérdidas que correspondieren.

a.3. Ley Electoral

La Ley Electoral es la Ley No. 331, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 16, del 24 de enero de 2000. Su cuerpo normativo consta de 197 artículos agrupados en 15 Títulos. El Título I trata de las elecciones; el Título II regula lo concerniente al Poder Electoral; el Título III establece lo relativo a los fiscales; el Título IV se ocupa de los ciudadanos; el Título V, de los partidos políticos; el Título VI, de la presentación de los candidatos; el título VII se ocupa de la campaña electoral; el Título VIII, de la votación; el Título IX, del plebiscito y del

referendo; el Título X, de las circunscripciones electorales; el Título XI, del resultado de las elecciones; el Título XII, de los errores y nulidades; el Título XIII, de la proclamación de los electos; el Título XIV, de los delitos electorales; y el Título XV contiene disposiciones generales. La Ley Electoral define claramente las materias que regula, entre las cuales están:

1. Los procesos para las elecciones del Presidente y del Vicepresidente de la República, de los diputados ante la Asamblea Nacional, de los diputados ante el Parlamento Centroamericano, de los miembros de los Consejos de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, de los alcaldes y vicealcaldes, y de los miembros de los Concejos.
2. Las consultas populares: plebiscitos o referendos que se convoquen en su oportunidad.
3. El ejercicio del derecho ciudadano de organizar partidos políticos o afiliarse a ellos con la finalidad de participar, optar y ejercer el poder.
4. La obtención y cancelación de la personalidad jurídica de los partidos políticos y la resolución de sus conflictos.
5. El derecho ciudadano de constituir partidos políticos regionales para participar en las elecciones de las regiones autónomas de la Costa Atlántica.
6. Lo relativo al funcionamiento administrativo de los organismos del Poder Electoral.

El Poder Electoral está integrado por los siguientes organismos:

El Consejo Supremo Electoral: integrado por siete magistrados y tres suplentes, elegidos por la Asamblea Nacional de listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por los diputados ante la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes.

Se elegirá a cada magistrado con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los diputados ante la Asamblea Nacional.

El plazo para presentar las listas será de quince días contados a partir de la convocatoria para dicha elección por la Asamblea Nacional. Si no hubiere lista presentada por el Presidente de la República, bastarán las propuestas por los diputados ante la Asamblea Nacional.

Los magistrados del Consejo Supremo Electoral elegirán dentro de su seno al Presidente y Vicepresidente del mismo. Su periodo será de un año, pudiendo ser reelectos.

Los magistrados suplentes no ejercerán ningún cargo administrativo en el Poder Electoral, sus funciones serán exclusivamente para suplir la ausencia temporal de cualquier Magistrado Propietario, quien señalará al que lo suplirá durante su ausencia.

Los Consejos Electorales se constituyen para la organización y estructura electoral en cada departamento y en las regiones autónomas, los Consejos Electorales serán integrados de ternas que para tal efecto envíen los representantes legales de los partidos políticos o alianza de partidos. En la primera sesión de los Consejos Electorales Departamentales o Regionales, éstos deberán solicitar a las organizaciones políticas, las ternas para la integración de los Consejos Electorales Municipales. Para ello, el Consejo Supremo Electoral tomará en cuenta el pluralismo político establecido en la Constitución Política, y no podrá recaer más de un nombramiento en un mismo partido político en cada Consejo Electoral.

Los partidos políticos dispondrán de un plazo de quince días a partir de la notificación para presentar sus propuestas, y si no lo hicieren el Consejo Supremo Electoral procederá a su nombramiento.

Los Consejos Electorales Municipales se organizan por cada municipio del país. Son nombrados por el Consejo Supremo Electoral.

Las Juntas Receptoras de Votos son las organizaciones o instancias ante quienes la ciudadanía ejerce su derecho al voto. Por cada JRV, deberá asistir un máximo de cuatrocientos electores.

Es a partir del Arto. 30 que se establecen los Derechos Electorales del Ciudadano, en este caso, la Ley Electoral se refiere exclusivamente al derecho al sufragio y no al derecho de postularse para un cargo de elección popular.

Se establece de conformidad con el Arto. 47 Cn. que son ciudadanos los nicaragüenses que hubieren cumplido dieciséis años de edad. Sólo los ciudadanos gozan de los derechos políticos consignados en la Constitución y en las leyes, sin más limitaciones que las que se establezcan por razones de edad pero, además, deben inscribirse en los Registros Electorales o estar inscritos en el Padrón Electoral permanente y seguir los procedimientos establecidos por la Ley Electoral y las regulaciones del Consejo Supremo Electoral.

Para los partidos políticos se establecen derechos y deberes. Tal como lo define la Ley Electoral, los partidos políticos son personas jurídicas de derecho público constituidas por ciudadanos nicaragüenses. Tienen sus propios principios, programas políticos y fines. Se rigen por sus estatutos y reglamentos, y están sujetos a la Constitución y a las leyes. Los derechos que reconoce la Ley Electoral para los partidos políticos incluyen el de organizarse libremente en todo el territorio nacional, difundir sus principios y programas políticos, hacer proselitismo, dictar sus propios estatutos y reglamentos, opinar sobre los asuntos públicos con sujeción a las leyes, nombrar y sustituir en cualquier tiempo a sus representantes ante los organismos electorales, presentar candidatos en las elecciones, tener su propio patrimonio, constituir alianzas, realizar reuniones y manifestaciones públicas, recaudar los fondos necesarios para su funcionamiento, el derecho a acreditar su Directiva Nacional como observadores oficiales en cualquier órgano de todo proceso electoral.

Los deberes de los partidos políticos según la Ley Electoral son:

- 1) Cumplir con la Constitución Política y las leyes.
- 2) Garantizar la mayor participación democrática en los procesos de elección de sus autoridades y de candidatos para las diferentes elecciones en que participen como partido político. En la selección del proceso de elección prevalecerá aquel que permita el mayor cumplimiento de este deber.
- 3) Ser transparentes y probos en la administración de su patrimonio económico, mandando a publicar anualmente sus estados financieros y enviando copia del mismo al Consejo Supremo Electoral.
- 4) Cumplir con las resoluciones del Consejo Supremo Electoral.

5) Impulsar y promover la vigencia de los derechos humanos en lo político, económico y social.

6) Presentar al Consejo Supremo Electoral la integración de sus Órganos Nacionales, Departamentales y Municipales en su caso; la revocación de los mismos, así como la modificación de sus estatutos y reglamentos.

7) Responder por las actuaciones que realicen en el marco de las alianzas que constituyan con otros partidos políticos y de las actuaciones específicas que realicen con ellos.

8) Participar, bajo pena de perder su personalidad jurídica si no lo hicieren, en todas las elecciones contempladas en el Arto. 1º. de la presente Ley; a través de la presentación de las respectivas candidaturas.

El requisito que la Ley Electoral establece para los partidos políticos es el poseer personalidad jurídica, para obtenerla, los interesados deben llenar los siguientes requisitos:

1. Escritura Pública en la que se constituye la agrupación política.
2. El nombre del partido que desean constituir y el emblema que lo diferenciará con claridad de los demás partidos políticos legalmente existentes.

La ley define causales por las que se puede dar la cancelación de un partido político, como son: el no cumplimiento con la Constitución Política y las leyes, no garantizar la mayor participación democrática en los procesos de elección de sus autoridades y de candidatos para las diferentes elecciones en que participen como partido político; no ser transparentes y probos en la administración de su patrimonio económico, no mandando a publicar anualmente sus estados financieros, y el no envío de copia del mismo al Consejo Supremo Electoral, incumplir las resoluciones de éste, y no presentar al CSE en la integración de sus órganos nacionales, departamentales y municipales, En tal caso, se procedera a la revocación de los partidos politicos, así como a la modificación de sus estatutos y reglamentos. La violación a las disposiciones que sobre el origen y uso del financiamiento se establecen en esta Ley para los partidos políticos en cuanto a sus responsabilidades.

Además, puede darse la revocación a un partido político, por su autodisolución o por fusión con otro, por no participar en las elecciones que se convoquen, de conformidad con el Arto. 1° de la Ley Electoral, y en el caso de haber participado no haber obtener al menos el 4% del total de votos válidos de las elecciones nacionales, en el caso de que los partidos políticos vayan en alianzas electorales y la alianza no obtenga al menos un porcentaje de votos válidos equivalente del 4% multiplicado por el número de partidos que integran la alianza. En este caso, los partidos políticos pierden su personalidad jurídica y únicamente la conserva el partido bajo cuya bandera fue la alianza, siempre y cuando ésta obtenga el porcentaje establecido en el numeral anterior.

En el título VII, se establece todo lo referente a la propaganda electoral, la cual podemos definir como el conjunto de actividades organizadas y comunicativas realizadas por los candidatos y partidos, que tiene como propósito la captación de votos. Esta actividad está sujeta a normas y pautas de actuación que garanticen y permitan la igualdad de los competidores, la limpieza y transparencia del proceso electoral y la neutralidad de los poderes públicos. En muchos países estas campañas son financiadas, directa o indirectamente, por fondos públicos.

Sin embargo, en la legislación latinoamericana cada país tiene elementos particulares que definen a la campaña electoral, por ejemplo, en Nicaragua, se entiende por campaña electoral las actividades tanto de los partidos políticos como de las alianzas de partidos políticos encaminadas a obtener los votos de los ciudadanos, explicando sus principios ideológicos, sus programas políticos, sociales y económicos, y sus plataformas de gobierno, los que podrán realizar en cualquier lugar donde se concentren ciudadanos con derecho al voto.²⁸

La campaña electoral dura en dependencia de la elección de que se trate:

- ✓ Para las elecciones de Presidente y Vicepresidente, y diputados ante la Asamblea Nacional y ante el Parlamento Centroamericano, se establece una duración de setenta y cinco días.

²⁸ Manual de Ética y Campaña Electoral, Consejo Supremo Electoral, Agosto 2006, Managua, Nicaragua, América Central.

- ✓ Para las elecciones de los miembros de los Consejos Regionales, de los Concejos, alcaldes y vicealcaldes, se establece una duración de cuarenta y dos días.
- ✓ En caso de darse una segunda vuelta para la elección de Presidente y Vicepresidente, la campaña electoral tendrá una duración de veintiún días.
- ✓ Para los plebiscitos y referendos el período de propaganda será de treinta días.

Está prohibido difundir propaganda electoral con miras a dañar la integridad de los candidatos inscritos o que signifique un llamado a la abstención o a la violencia.

Existen prohibiciones y restricciones. Durante la campaña electoral, se puede observar prohibiciones absolutas, válidas sin ningún tipo de limitaciones, como prohibiciones relativas, cuya aplicación se limita a ciertas actividades, horarios etc.

Entre las prohibiciones absolutas tenemos:

1. El uso de los bienes propiedad del Estado para fines de proselitismo políticos (Arto. 107 p. 4to; 175 num. 8 L.E., y Arto. 8 del Reglamento de Ética Electoral).
2. La participación de los miembros de las Fuerzas Armadas y policías en la campaña electoral (Arto. 94 Cn.).
3. La propaganda electoral de carácter anónimo (Arto. 87, L.E.)
4. La propaganda electoral con miras a dañar la integridad de los candidatos o que signifique un llamado a la abstención o a la violencia (Arto. 87, 3er L.E.).
5. Emplear símbolos patrios en el contenido de la propaganda Electoral (Arto. 65 y 77 L.E. y Arto. 6 del Reglamento de Ética Electoral).

6. Prohibición de hacer propaganda electoral 72 horas antes de las votaciones (Arto. 97 L.E.).
7. Hacer propaganda política en escuelas, oficinas públicas, nacionales o municipales (Artos. 107p 4ta. y 175 num.9 L.E.; y Arto. 7 del Reglamento de Ética Electoral.).
8. La propaganda electoral, oral; escrita o televisiva que incurra en delitos electorales (Arto. 173 num. 2 y 3 L.E.; y Arto. 4 del Reglamento de Ética Electoral.).

Entre las prohibiciones relativas, tenemos:

1. A los funcionarios públicos, realizar propaganda electoral, mientras estén ejerciendo actividades propias de su cargo en días y horas laborales (Arto. 173 num. L.E., del Reglamento de Ética Electoral).
2. Ciertas actuaciones durante las manifestaciones políticas, tales como portar armas, colocar propaganda en propiedad privada sin autorización del dueño etc. (Arto. 11 del Reglamento de Ética Electoral).
3. El horario para la utilización de altavoces, durante la campaña electoral, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Especial de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

El plebiscito es definido por nuestra Ley Electoral como la consulta directa que se hace al pueblo sobre decisiones que dentro de sus facultades dicte el Poder Ejecutivo, y cuya trascendencia incida en los intereses fundamentales de la nación.

El referendo es el acto de someter directamente ante el pueblo leyes o reformas de carácter ordinario o constitucional para su ratificación.

La iniciativa del Decreto Legislativo de un plebiscito corresponde al Presidente de la República, o directamente al pueblo cuando éste así lo solicite con un número no menor de cincuenta mil firmas.

La iniciativa del Decreto Legislativo para un referendo corresponde a un tercio de los diputados ante la Asamblea Nacional, o directamente al pueblo cuando éste lo solicite con un número no menor de cincuenta mil firmas.

Las circunscripciones electorales

La elección del Presidente y Vicepresidente de la República se hará en circunscripción nacional.

La elección de los veinte diputados de carácter nacional, ante la Asamblea Nacional, y de los veinte diputados ante el Parlamento Centroamericano, se hará por circunscripción nacional.

La elección de setenta de los noventa diputados ante la Asamblea Nacional se hará por circunscripciones departamentales y de las regiones autónomas, de conformidad con la siguiente distribución:

Boaco	2 diputados
Carazo	3 diputados
Chinandega	6 diputados
Chontales	3 diputados
Estelí	3 diputados
Granada	3 diputados
Jinotega	3 diputados
León	6 diputados
Madriz	2 diputados
Managua	19 diputados
Masaya	4 diputados
Matagalpa	6 diputados
Nueva Segovia	2 diputados
Río San Juan	1 diputado
Rivas	2 diputados
Región Autónoma del Atlántico Sur	2 diputados
Región Autónoma del Atlántico Norte	3 diputados

En el Título XI de la Ley Electoral se establece que obtendrían el cargo de Presidente y Vicepresidente de la República los candidatos del partido o alianza de partidos que obtengan, con mayoría relativa, al menos el 40% de los votos válidos, salvo el caso de aquellos que habiendo obtenido un mínimo del 35% de los votos válidos, superen a los candidatos que obtuvieron el segundo lugar por una diferencia mínima de cinco puntos porcentuales.

Si ninguno de los candidatos alcanzare estos porcentajes, se realizará una segunda elección únicamente entre los candidatos que hubiesen obtenido el primero y el segundo lugar, y serán electos los que obtengan el mayor número de votos. Si hubiere renuncia de cualquiera de los candidatos a Presidente, en el período electoral entre la primera y en segunda elección, se declarará electo como Presidente de la República el candidato que permanezca en la contienda.

Los diputados por circunscripción nacional son electos, mediante el sistema de la representación proporcional por cociente electoral, de la siguiente manera:

Se obtendrá el cociente electoral nacional dividiendo el número total de votos válidos emitidos en el país para esta elección entre el número de escaños a elegirse, que son veinte.

Se asignará a cada organización tantos escaños como resulten de dividir su número de votos válidos entre el cociente electoral nacional.

Se declararán electos de cada lista los primeros candidatos a diputados propietarios junto a los suplentes, hasta alcanzar el número de escaños obtenidos por cada organización, mediante el cociente electoral nacional.

Los escaños que haga falta distribuir se asignarán a cada partido o alianza política de la siguiente manera:

Luego de la adjudicación anterior, se ordenarán de nuevo los votos obtenidos por cada partido de mayor a menor, y el siguiente escaño se asignará al partido que obtenga la media mayor, es decir, se dividirá el número de votos obtenidos en la primera operación más uno, asignando el escaño al partido que resulte con la media mayor.

En el caso de que la distribución de escaños no se complete se repetirá esta misma operación, pero ahora únicamente respecto del partido que obtuvo el escaño anterior, es decir, se divide el número total de sus votos entre el total de escaños asignados más uno, asignando el siguiente escaño al partido que resulte con la media mayor.

Los diputados por circunscripción departamental, y de las regiones autónomas son electos asignando inicialmente a cada organización política escaño por cociente electoral departamental o de las regiones autónomas, de conformidad con el siguiente procedimiento:

Se obtendrá el cociente electoral departamental o regional dividiendo el número total de los votos válidos emitidos para esta elección en la correspondiente circunscripción, entre los escaños a elegirse para la misma, excepto en las circunscripciones en donde se elija solamente a uno a dos diputados, para lo cual el cociente electoral se obtendrá dividiendo el total de votos válidos de la circunscripción entre los escaños a distribuirse más uno.

La Ley Electoral prevé que se asignará a cada partido político o alianza de partidos en cada circunscripción, tantos escaños como resulten de dividir su número de votos válidos entre el cociente electoral departamental o regional.

Para el caso de los diputados ante el Parlacén, el sistema que se utiliza es el empleado para los diputados nacionales; en el caso de la elección de alcaldes y vicealcaldes es el mayoritario, y en el caso de la elección de los miembros de los gobiernos regionales del Atlántico Norte y del Atlántico Sur, es el sistema proporcional por cociente electoral, de conformidad con sus respectivas circunscripciones.

CUARTA UNIDAD

REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN DE 1987

El procedimiento de reforma constitucional en el ordenamiento nicaragüense.

De la consideración de la Constitución, por un lado, como ley suprema, y por otro, como complejo normativo en el que se regulan las atribuciones y competencias del Estado, y se garantiza definitivamente a libertad del ciudadano, derivaría la idea de que tan impresionante conquista histórica ha de considerarse por necesidad, inmutable. Ya en la Edad Media, los grandes pactos entre el Rex y el Regnum, donde cabe situar los precedentes más claros del constitucionalismo moderno y donde se establecen las primeras limitaciones al poder y las primeras garantías de libertad, solían firmarse *in perpetuum rei memoriam*.²⁹

Son tres los aspectos que según Pedro de la Vega operan la reforma en la organización constitucional democrática y a los que conviene hacer referencia: en primer lugar, la reforma como un instrumento de adecuación entre la realidad jurídica y la realidad política, la necesidad de adecuar la realidad política a la realidad jurídica, lo que se presenta como la primera exigencia del sistema constitucional; en segundo lugar, hay que tener claro que esa adecuación de la Constitución a través de la reforma a la realidad política se debe producir sin quebrantamiento de la continuidad jurídica, es decir, la reforma como mecanismo de articulación de la continuidad jurídica del Estado: "...reformar la Constitución no significa el destruirla, sino simplemente acoplarla a la realidad histórica, sin que pierda su identidad como estructura conformadora del Estado. La destrucción de la Constitución es tarea que no corresponde al poder de revisión, sino al constituyente...",³⁰ y en tercer lugar, la reforma tendrá que ser la institución que avale las garantías en ella establecidas.

Las reformas son las transformaciones que se hace a una Constitución legalmente en vigencia. En nuestro caso, la fuente que regula el procedimiento de reforma en el ordenamiento nicaragüense está

²⁹ La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, Pedro de la Vega, Editorial Tecnos, pp. 53-54.

³⁰ Ibid.

regulada en el Capítulo III, Reformas Constitucionales, de los artículos 191 al 195 de nuestra Constitución.

Nuestra Carta Magna regula dos maneras para su reforma: parcial y total. La Asamblea Nacional está facultada para reformar parcialmente la Constitución Política (Arto. 191), y para conocer y resolver sobre la iniciativa de reforma total de la misma.

Reforma parcial

La iniciativa de la reforma parcial únicamente la tienen el Presidente de la República y un tercio de los diputados (31 diputados tienen que presentarla). Para la iniciativa, ésta debe señalar los artículos que se pretende reformar, con la expresión de motivos. En plenario se toma la decisión de enviarla a una comisión especial que dictaminará un plazo no mayor de 60 días.

El proyecto de reforma recibirá a continuación el trámite previsto para la formación de la ley. La iniciativa de reforma parcial deberá ser discutida en dos legislaturas.

Para la aprobación se requiere del 60% de los diputados (56). El Presidente promulgará, no tiene derecho al veto.

Reforma total

El procedimiento de reforma total se encuentra establecido de igual manera en la Norma Fundamental.

Las facultades para presentar la iniciativa de reforma total la tienen la mitad más uno de los diputados que integran la Asamblea Nacional. Esta iniciativa seguirá los mismos trámites establecidos para la reforma parcial.

Al aprobarse la iniciativa de reforma total, la Asamblea Nacional fijará un plazo para la convocatoria de elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente.

La Asamblea Nacional Legislativa conservará su mandato hasta la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.

Mientras no se apruebe la nueva Constitución, seguirá en vigencia la actual. No se puede quedar bajo un Estado acéfalo.

En el caso de la aprobación de la iniciativa de reforma total se requerirá de los dos tercios del total de los diputados.

A continuación, analizaremos cada una de las reformas parciales que ha tenido la actual Constitución Política de Nicaragua.

1. Reforma 1990. Aprobada 30 de enero de 1990, publicada en La Gaceta, No. 46, del 06-03-90

a. Objeto y contexto de la reforma

El Gobierno de Reconstrucción Nacional, conformado para dirigir al país luego del derrocamiento de la dinastía somocista, tenía la gran tarea de activar la economía. Sin embargo, la oposición de Estados Unidos a él, fue un gran impedimento. En 1981, el gobierno de Ronald Reagan inició un fuerte bloqueo económico y financió a grupos armados contrarrevolucionarios (“la contra”). La nueva guerra civil fue el escenario de las elecciones de noviembre de 1984, cuando ganó la presidencia Daniel Ortega Saavedra.

El 9 de enero de 1987 se promulgó la nueva Constitución Política. En agosto del mismo año, los presidentes centroamericanos adoptaron los llamados “Acuerdos de Esquipulas II”, con el fin de alcanzar una paz firme y duradera y la democratización del istmo. Para conseguir la paz, se solicitó a los gobiernos que apoyaban a movimientos armados antigubernamentales que cesaran su respaldo. Se llamó a un alto del fuego y se comprometieron a impedir el uso de sus territorios para acciones desestabilizadoras para otros gobiernos. En vías de consolidar la democracia, se comprometieron a celebrar elecciones libres.

El acuerdo suscrito señalaba: “...creadas las condiciones inherentes a toda democracia, deberán celebrarse elecciones libres, pluralistas y honestas, como expresión conjunta de los estados de Centroamérica para encontrar la reconciliación... Luego de efectuarse las elecciones para integrar el Parlamento Centroamericano deberán realizarse en cada país, con observadores internacionales e iguales garantías,

dentro de los plazos establecidos y los calendarios que deberán proponerse de acuerdo con las actuales constituciones políticas, elecciones igualmente libres y democráticas para el nombramiento de representantes populares en los municipios, los congresos y asambleas legislativas y la Presidencia de la República.”

En este contexto, la oposición de Nicaragua presentó la demanda de una reforma constitucional integral, que luego se convertiría en el Programa de Gobierno de la Unión Nacional Opositora (UNO). Ésta demandaba la Constituyente por considerar la Constitución de 1987 un instrumento jurídico-político propio de un Estado totalitario, por lo cual no era apropiada para sustentar una democracia auténtica e integral.

El 4 de agosto de 1989, el Presidente de Nicaragua suscribió un acuerdo con 18 partidos políticos, donde convinieron que las autoridades ejecutivas y legislativas que resultasen electas el 25 de febrero de 1990, tomaran posesión de sus cargos el 24 y el 25 de abril del mismo año, respectivamente.

Para el cumplimiento de estas disposiciones resultaba necesario reformar transitoriamente la Constitución. Su objetivo fundamental era anticipar en seis meses los comicios de ese año, recortando el período presidencial y de los representantes ante la Asamblea Nacional, para permitir la realización de las elecciones el 25 de febrero de 1990.

b. Artículos reformados

La “Reforma Constitucional para las elecciones del 25 de febrero de 1990”, aprobada el 30 de enero de 1990 y publicada en La Gaceta No. 46, del 6 de marzo de 1990, se caracterizó, tal como lo señala la misma Constitución, por ser aprobada en dos debates, en las sesiones ordinarias número 15, de 1989, y uno, de 1990.

Se reformó únicamente el artículo 201, primer párrafo, el que establece:

“Los representantes ante la Asamblea Nacional electos el 25 de febrero de 1990, serán instalados por el Consejo Supremo Electoral el 24 de abril de ese mismo año, para finalizar el período de los que

fueron elegidos el 4 de noviembre de 1984 y cumplir su período conforme el Arto. 136 Cn.

El presidente y vicepresidente de la República electos el 25 de febrero de 1990, tomaron posesión de sus cargos prestando la promesa de ley ante el Presidente de la Asamblea Nacional, el 25 de abril de ese mismo año, para finalizar el período de los que fueron elegidos el 4 de noviembre de 1984 y cumplir su período conforme el Arto. 136 Cn.”

2. Reforma 1990. Ley No. 115, publicada en La Gaceta, No. 226, del 23-11-90

Vale la pena hacer mención en nuestro estudio sobre las reformas constitucionales de 1990, específicamente a la Ley 115, la cual hacía mención a las faltas temporales del Presidente de la República, y establecía como tales, las ausencias de éste por un período mayor de tres meses. Esta reforma no entró en vigencia, ya que el texto constitucional no fue modificado, y la redacción de los artículos quedó como estaba originalmente.

En dichas reformas se estableció un período menor de tres meses para que el Presidente pudiera salir del país sin autorización.

También se estableció como falta temporal la imposibilidad manifiesta del Presidente de la República para ejercer su mandato.

Es en las reformas de 1995 donde se establece que el período para que el Presidente de la República pueda salir del país sin autorización es de 15 días. Para un período mayor que éste y menor de 30 días requerirá previa autorización de la Asamblea Nacional. Se estableció también en las reformas de 1995, como faltas temporales del Presidente de la República: la imposibilidad o incapacidad temporal manifiesta para ejercer el cargo, declarada por la Asamblea Nacional y aprobada por los dos tercios de los diputados.

3. Reforma de 1994. Ley No. 173, aprobada el 30-08-94

Los artículos que contenidos en la Ley No. 173 son:

Se reforma los Artos. 192 y 195 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial,

No. 5, del 09 de enero de 1987, los que se leerán así: “Artículo 192. La iniciativa de reforma parcial deberá señalar el o los títulos, capítulos y artículos, que se pretenden reformar, suprimir o adicionar con expresión de motivos. La iniciativa deberá ser enviada a una comisión especial que dictaminará en un plazo no mayor de sesenta días. El proyecto de reforma recibirá a continuación el trámite previsto para la formación de la ley. Artículo 195. La reforma de las Leyes Constitucionales se realizará de acuerdo con el procedimiento establecido para la reforma parcial de la Constitución.”

En la misma reforma se establecía que su entrada en vigencia era a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Por no haber promulgado ni mandado a publicar el Presidente de la República, en ese entonces Violeta Barrios de Chamorro, la Reforma Parcial a la Constitución Política, aprobada por la Asamblea Nacional el 23 de febrero de 1994, en acatamiento a lo dispuesto en los Artos. 142 y 192 Cn., en su carácter de Presidente de la Asamblea Nacional, Luis Humberto Guzmán Arias mandó a publicarla el 30 de agosto del mismo año.

Con fecha del 02 de noviembre de 1984, los doctores Max Hernández, y Leonel y José Blandón, introdujeron ante la Corte Suprema de Justicia un Recurso por Inconstitucionalidad contra la denominada Ley No. 173. Este recurso fue resuelto por Auto del 04 de mayo de 1995, razonando en el por cuanto “la Ley No. 173 a que hacen referencia los recurrentes, fue publicada en El Nuevo Diario del 06 de septiembre de 1994, y no en La Gaceta, Diario Oficial, como lo señala el mismo texto de la Ley, que en su Arto. 2 determina que la vigencia de la Ley será a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, hecho que no ha ocurrido hasta la fecha. Es un hecho a destacar, que hasta ahora ningún Presidente la ha mandado a publicar en La Gaceta, Diario Oficial, como lo manda la misma Ley. A 13 años de su aprobación, todavía está en un limbo jurídico.

4. Reforma de 1995. Ley No. 192, publicada en La Gaceta, No. 124, del 04-07-95

a. Objeto y contexto de la reforma

La Constitución de 1987 se caracteriza por establecer un régimen presidencialista tendiente a instaurar un número mayor de

facultades al Poder Ejecutivo; esto, en cierta forma, creaba un desequilibrio respecto de los demás poderes del Estado. En este sentido, el Presidente podía dictar decretos en materia fiscal, tenía facultad legislativa delegada para períodos de receso de la Asamblea Nacional, no tenía un plazo determinado para reglamentar las leyes que lo requerían, de tal manera que si en algún caso éste no estaba de acuerdo con las decisiones del Legislativo, podía abstenerse de reglamentar, etc.

Luego de las elecciones del 25 de febrero de 1990, en las cuales resultó electa la candidata de la Unión Nacional Opositora, Violeta Barrios de Chamorro, la demanda de dicho partido de una reforma total de la Constitución continuó siendo una constante en los primeros años de su gobierno. Se decidió la realización de una reforma parcial sustancial de la Constitución, promovida por diputados del Frente Sandinista y partidos que se habían separado de la UNO.

El propósito de estas reformas era contribuir al proceso de estabilización del país y del sistema político, en aras de perfeccionar el sistema democrático. Para esta tarea era necesario adecuar el ordenamiento jurídico constitucional, de tal manera que se efectuara una fuerte transferencia de poder del Ejecutivo hacia el Legislativo, y se lograra un mayor equilibrio entre los poderes del Estado.

La iniciativa presentada, en lo referente a materia dogmática, pretendía adaptar los principios fundamentales a las nuevas exigencias de la época, fortaleciendo los derechos ciudadanos frente al Estado para evitar intervenciones de éste en ámbitos de libertad. La propuesta de reforma en relación con la Parte Orgánica introducía cambios en la estructura del texto constitucional, asignando un capítulo dentro del Título VIII a la Procuraduría de los Derechos Humanos, al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía General de la Nación. Algunos de estos artículos fueron considerados como principios de un sistema parlamentarista, por lo que al final, los diputados decidieron reducir las facultades presidencialistas e introducir las reformas en la estructura ya existente.

Es importante destacar que dichas reformas, una vez aprobadas por el Legislativo, fueron vetadas por el Ejecutivo, lo que provocó un período de crisis institucional y trastornos políticos, y fue necesario

celebrar un diálogo entre representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Las conversaciones entre los actores políticos culminaron con la firma de un acuerdo político que permitía la aprobación de las reformas, y postergaba la ejecución de algunas de ellas hasta después de las elecciones de noviembre de 1996. Fue así como se promulgó la Ley No. 199, Ley Marco de Implementación de las Reformas Constitucionales, aprobada el 03-07-95, y publicada el 05-07-95, en La Gaceta, Diario Oficial, No. 125.

b. Artículos reformados

La Ley 192, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de Nicaragua, fue promulgada bajo la presidencia de Doña Violeta Barrios de Chamorro. En total, fueron 65 los artículos reformados en este período, 30 corresponden a la Parte Dogmática y 35 a la Parte Orgánica.

Respecto de la Parte Dogmática de la Constitución, los artículos que se reformaron fueron:

- Del Título I: Principios fundamentales de la Constitución Política, Capítulo Único, Artos. 1, 2, 4, y 5.
- Del Título IV: Derechos, Deberes y Garantías del pueblo nicaragüense:
 - Artos. 26, 28, 33, 34, 42 y 44 del Capítulo I: Derechos Individuales.
 - Arto. 51 del Capítulo II: Derechos Políticos.
 - Artos. 56 y 68 del Capítulo III: Derechos Sociales.
 - Arto. 71 del Capítulo IV: Derechos de la Familia.
- Artos. 92, 93, 94, 95, 96, 97 del Título V, Capítulo Único: Defensa Nacional.
- Del Título VI: Economía Nacional, Reforma Agraria y Finanzas Públicas:
 - Artos. 99, 104 y 105, Capítulo I: Economía Nacional.
 - Artos. 106 y 107 del Capítulo II: Reforma Agraria.

- Artos. 112, 113, 114, del Capítulo III: De las Finanzas Públicas.
- Del Título VII: Educación y Cultura, Capítulo Único, Artos. 121 y 125.

Dentro de las transformaciones principales introducidas en estos preceptos, se puede señalar que se introducen otras formas en que el pueblo puede ejercer el poder político además del sufragio, esto es a través del plebiscito y del referéndum. Suprime las ideas de un Estado anticolonialista y antiimperialista, y establece que Nicaragua fundamenta sus relaciones en la amistad y solidaridad con otros pueblos.

Aunque sigue consagrando el principio de inviolabilidad del domicilio, desarrolla una serie de excepciones al mismo. En lo referente a las garantías frente a la detención arbitraria, las reformas cambian el plazo para que el detenido sea puesto en libertad o en orden de autoridad competente, de 72 a 48 horas. Dentro de derechos del detenido, las reformas agregan que nadie puede ser sustraído de su juez competente ni llevado a jurisdicción de excepción. Continúan consagrando el derecho de un debido proceso y el principio de legalidad penal.

Hay que destacar que los nuevos preceptos consagran un mayor respeto a la propiedad privada, la cual cumple una función social, y sólo tiene limitaciones por orden de utilidad pública. Como manifestación de ese respeto a la propiedad es que se prohíbe la confiscación. Lo anterior implica un cambio radical de los preceptos originales que reconocían un derecho a una propiedad mínima, como medida suficiente para garantizar el desarrollo integral de los individuos.

Dentro de los deberes de los ciudadanos, se agrega el de asumir el cargo de jurado cuando así se requiera, y otros de carácter concejil. Protege de una forma más amplia la libertad de expresión al prohibir el decomiso de medios de comunicación. El derecho de constituir una familia se desarrolla más plenamente al garantizar el carácter inembargable del patrimonio familiar y la protección especial a la niñez y a la adolescencia. En cuanto a los derechos sociales, las

reformas establecieron que la educación primaria además de ser gratuita es obligatoria, y que la educación secundaria es gratuita, pudiendo haber contribuciones voluntarias.

Las reformas introdujeron un mayor desarrollo de los preceptos de la Defensa Nacional al sentar las bases de la institucionalización del Ejército Nacional como cuerpo armado para la defensa de la soberanía, independencia e integridad territorial, y de la Policía Nacional como cuerpo armado de naturaleza civil. Se eliminó de forma taxativa cualquier derecho del pueblo de armarse para la defensa, como se contemplaba en 1987.

En lo referente a la parte orgánica de la Constitución, se reformaron los siguientes artículos:

- Título VIII: De la Organización del Estado:
 - Artos. 132, 134, 136, 138, 140, 141 y 142 del Capítulo II : Poder Legislativo.
 - Artos. 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151 y 152 del Capítulo III: Poder Ejecutivo.
 - Artos. 154, 155 y 156 del Capítulo IV: De la Contraloría General de la República.
 - Artos. 159, 161, 162, 163 y 164 del Capítulo V: Poder Judicial.
 - Artos. 170, 171, 172 y 173 del Capítulo VI: Poder Electoral.
- Del Título IX: División Política Administrativa:
 - Artos. 175, 176, 177 y 178 del Capítulo I: De los Municipios.
 - Arto. 181 del Capítulo II: Comunidades de la Costa Atlántica.
- Del Título X :Supremacía de la Constitución, Capítulo Único, Arto. 185.

En materia orgánica puede afirmarse que el mayor logro de estas reformas fue el pasar de un poder presidencial fuerte, a un poder más equilibrado que propició la independencia y el fortalecimiento de las instituciones.

A manera de ejemplo, se puede decir que antes de las reformas el Contralor General era nombrado por el Presidente de la República, lo que le restaba poder e independencia a esta institución. Con la implementación de las reformas, el contralor es nombrado por la Asamblea Nacional. En este mismo sentido, antes de las reformas, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eran electos por la Asamblea Nacional entre ternas que enviaba el Presidente de la República. Con las reformas, los magistrados resultan electos con un 60% de los votos de los diputados a partir de listas que pueden presentar el Presidente, los diputados y la sociedad civil.

El número de magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia fue ampliado, quedando compuesta por doce magistrados, mientras que el Consejo Supremo Electoral quedó integrado por cinco.

Es válido recalcar que las reformas del 95 implicaron transferencias de poderes del Ejecutivo al Legislativo en distintos ámbitos, incluyendo el económico. En este sentido, se dispuso en materia tributaria que es atribución de la Asamblea Nacional crear, aprobar, modificar o suprimir tributos, tareas antes desempeñadas por el Ejecutivo.

Dentro de los aspectos innovadores de las reformas en relación con la Constitución original, podemos mencionar, entre otros, que los nuevos preceptos definen la nación nicaragüense como un Estado social de Derecho. Se establecen, además, una serie de regulaciones con respecto a los funcionarios públicos, que con anterioridad no existían, como por ejemplo: se establece que los funcionarios no obtengan ninguna concesión por parte del Estado; se menciona que si se priva de inmunidad al Presidente y al Vicepresidente, el órgano competente para procesarlos es la Corte Suprema de Justicia.

Las reformas constitucionales incorporan, además, una serie de inhibiciones e impedimentos para ser candidato a Presidente y Vicepresidente, entre las que resalta la inhibición por parentesco, rigiendo para este caso la prohibición del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Se incorpora, además, la responsabilidad patrimonial del Estado por las acciones u omisiones de funcionarios públicos en que resulten afectados los particulares.

Una de las transformaciones en el Poder Legislativo que es importante destacar es la ampliación de los requisitos para ser candidato a diputado, ya que las reformas exigen, además, haber residido o trabajado en forma continua en el país los dos años anteriores a la elección, y haber nacido o residido en los últimos dos años en el departamento por el cual desea ser electo. El período de los diputados se disminuye de seis a cinco años. Las reformas confirieron nuevas facultades al Legislativo, como por ejemplo: elegir Superintendente y Vicesuperintendente General de Bancos; autorizar o negar la salida de tropas del territorio nacional; aprobar, rechazar o modificar el decreto ejecutivo que declara la suspensión de derechos y garantías, y nombrar Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otras.

Otro aspecto importante es desarrollado en mayor medida por los nuevos preceptos es el proceso de formación de ley, el cual es descrito de una forma más completa en todas sus etapas. En lo referente a quiénes tienen iniciativa de ley, se faculta a los ciudadanos, siempre que esté respaldada la propuesta por un mínimo de cinco mil firmas. Así mismo, dentro de los órganos del Estado tradicionalmente facultados para presentar iniciativas, se amplía esta oportunidad a los Concejos y a los Consejos Regionales Autónomos.

La ampliación de los requisitos para ser funcionario público fue un cambio generalizado con estas reformas. En lo referente al Poder Ejecutivo, hay que recalcar que se exige para ser presidente obtener una mayoría relativa del 45% de votos válidos, ya que en la Constitución original no se había fijado un límite. Se agrega como requisito el haber residido o trabajado en forma continua en el país los cinco años anteriores a la elección.

En lo que respecta al Poder Judicial, los requisitos para ser magistrados también fueron complementados, exigiéndose no ser menor de 35 años y no ser mayor de 75; no haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía y del notariado por resolución judicial, y no ser militar en servicio activo. El período de los magistrados también fue objeto de reformas, ya que se amplió de seis a siete años. Se les atribuyó, además, el ejercicio de nuevas funciones, entre las que destaca la resolución de diversos conflictos, ya sea entre órganos de la administración pública, entre municipios, o entre éstos y los del

organismo central, o bien conflictos de competencia entre poderes del Estado.

Ley No. 199, Ley Marco de Implementación de las Reformas Constitucionales

Los diversos diferendos existentes en materia institucional por la aprobación de las reformas constitucionales de 1995, solamente pudieron resolverse a través de un acuerdo político suscrito entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, el 14 de junio de ese mismo año, el cual tuvo como principal testigo y garante al cardenal Miguel Obando y Bravo.

Por medio de esos acuerdos se pretendía propiciar un mayor fortalecimiento del proceso de institucionalización y de las relaciones armónicas entre los poderes del Estado. La médula de estos acuerdos radicaba en la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de una ley que estableciera un compromiso institucional sobre la forma de llevar a cabo la implementación de las reformas a la Constitución. Dicho acuerdo se materializó en la Ley. No. 199, del 3 de julio de 1995, denominada Ley Marco de Implementación de las Reformas Constitucionales.

Esta ley fue concebida como un instrumento de carácter temporal que pretendía enmarcar en el ordenamiento jurídico, los compromisos adquiridos en el Acuerdo Político. Dicha ley postergaba la ejecución de algunas de las reformas para después de las elecciones de 1996.

Se caracterizó, además, por ordenar la aprobación de una serie de leyes que garantizaran los diversos derechos contenidos en las reformas. Entre estas leyes podemos mencionar la Ley de Garantías Ciudadanas, Ley sobre la Propiedad, Ley de Patrimonio Familiar, Ley de Reforma Agraria, Ley General de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, el Código Tributario, así como una reforma a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, la cual debería ser consensuada con la comunidad universitaria.

La Ley Marco ordenó también que se reformaran una serie de leyes, entre las que destacan: Ley de Defensa de los Consumidores, Ley de Régimen Presupuestario, Ley Orgánica de la Contraloría General

de la República, Ley de Municipios y Ley de Emergencia, entre otras.

Esta Ley entró en vigencia el primero de enero de 1997, y no podía ser reformada antes de esa fecha, requiriendo para su aprobación por lo menos del 60% del total de miembros de la Asamblea Nacional.

5. Reforma 2000, Ley N°. 330, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua. Aprobada el 18-01-2000, publicada el 19-01-2000, en La Gaceta N° 13

a. Objeto y contexto de la reforma

La Ley 330 expresa textualmente en el Considerando, que el propósito primordial de esta reforma es "...dotar a las instituciones públicas que ella menciona de una mayor capacidad funcional y ampliar la composición de sus órganos de dirección para que las competencias y atribuciones que la propia Constitución y las leyes les confieren puedan ser ejercidas con más eficacia para que tenga como resultado una mejor atención a las necesidades y requerimientos de los ciudadanos..."³¹.

b. Artículos reformados

La Ley No. 330, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, fue aprobada bajo la presidencia de Arnoldo Alemán Lacayo. En total, fueron 18 los artículos reformados, mayoritariamente de la Parte Orgánica. Los cambios en la Parte Dogmática fueron mínimos, y se centraron en los límites territoriales y en la nacionalidad, lo que se ve reflejado en el Arto. 10 del Título II, Capítulo Único sobre el Estado, y en el Arto. 20 del Título III, Capítulo Único La Nacionalidad Nicaragüense.

Respecto de la Parte Orgánica, los artículos reformados son:

- Arto. 130 del Capítulo I, Principios Generales.
- Artos. 133, 134 y 138 del Capítulo II, Poder Legislativo, del Título VIII.
- Artos. 147, 150 y 152 del Capítulo III, Poder Ejecutivo, del Título VIII.

³¹ Ley No. 330, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 13.

- Artos. 154 y 156, del Capítulo IV, de la Contraloría General de la República, del Título VIII.
- Artos. 161, 162, 163 y 164 del Capítulo V, Poder Judicial, del Título VIII.
- Artos. 170, 171 y 173 del Capítulo VI, Poder Electoral, del Título VIII.

Como se puede constatar, las reformas están condensadas en la organización del Estado, en donde el aspecto trascendental es la ampliación del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral y de la Contraloría General de la República

En el caso de la Corte Suprema de Justicia, ésta queda conformada por 16 magistrados, y el Consejo Supremo Electoral por siete magistrados propietarios y tres suplentes. La Contraloría General de la República se convierte en un órgano colegiado conformado por cinco miembros propietarios y tres suplentes.

Otro aspecto a destacar es que, en virtud de las disposiciones de la Ley 330, se integran a la Asamblea Nacional como diputados propietarios y suplentes, respectivamente, el ex Presidente de la República y ex Vicepresidente, electos por el voto popular y directo en el período inmediato anterior. También forman parte como diputados propietario y suplente los candidatos a Presidente y Vicepresidente que participaron en la elección correspondiente, y obtuvieron el segundo lugar.

En materia electoral, las reformas establecieron que para alcanzar la Presidencia de la República, los candidatos a este cargo debían obtener como mayoría relativa al menos el 40% de votos válidos, salvo el caso de aquellos que obteniendo un mínimo de 35% de los votos válidos superen a los candidatos del segundo lugar por una diferencia mínima de 5%.

Las reformas establecieron, además, la cancelación de la personalidad jurídica de los partidos políticos que no obtuviesen al menos el 4% del total de votos válidos en elecciones de autoridades generales.

6. Reforma 2004. Ley No. 490, Ley que Reforma Parcialmente del Artículo 138, Inciso 12 Constitucional, publicado en La Gaceta, No. 132, del 7 de julio de 2004

Aprobación en primera legislatura el 19 noviembre de 2003

Aprobación en segunda legislatura el 15 de junio de 2004

a. Objeto y contexto de la reforma

Las reformas a la Constitución Política de 1995 contemplaron dentro de las atribuciones de la Asamblea Nacional el aprobar o rechazar los tratados, convenios, pactos, acuerdos y contratos internacionales de carácter económico, de comercio internacional, de integración regional, de defensa y seguridad, los que aumentan el endeudamiento externo o comprometan el crédito de la nación, y los que vinculan el ordenamiento jurídico del Estado.

Para ratificar estos instrumentos internacionales, el órgano legislativo tenía un plazo de 60 días perentorios. Vencido el plazo se tenían por aprobados. Sin embargo, esta disposición fue considerada por los representantes de este Poder como un límite de las atribuciones soberanas de la Asamblea Nacional, ya que la ratificación por omisión, prescrita en el párrafo segundo, del inciso 12 del artículo 138, resultaba desventajosa para el país en el campo internacional. Así queda señalado en la exposición de motivos de dicha ley: "... aceptar la prescripción de un plazo, para aprobar los instrumentos internacionales que pasarán a ser leyes nacionales, una vez aprobados por omisión por el mero transcurso de sesenta días, no se compagina con la seriedad y prudencia que debe pautar la aprobación de las leyes que regirán los destinos de Nicaragua..."

Los legisladores justificaban, además, que esta disposición debía ser eliminada para "...evitar que se pueda convertir en ley nacional un tratado que no ha sido considerado, estudiado, ni sometido a votación para su aprobación, y que además podría no tener aún una vigencia internacional, en los casos en que el tratado requiera depósito o intercambio de ratificaciones para su validez..."³²

³² La Ley N. 490. Ley que Reforma Parcialmente el Artículo 138, inciso 12 Constitucional, aprobada el 15 de junio de 2004, publicado en La Gaceta No. 132, del 07 de julio de 2004.

Con la aprobación de estas reformas, la Asamblea Nacional propiciaría un mayor fortalecimiento de sus facultades en la aprobación de instrumentos internacionales.

b. Artículos reformados

A través de la Ley 490 quedó reformado el artículo 138, inciso 12, en el que se establece como atribución de la Asamblea Nacional:

“Aprobar o rechazar los instrumentos internacionales celebrados con países u organismos sujetos de Derecho Internacional.

Dichos instrumentos internacionales solamente podrán ser dictaminados, debatidos, aprobados o rechazados en lo general, sin poder hacerles cambios o agregados a su texto. La aprobación legislativa les conferirá efectos legales, dentro y fuera de Nicaragua, una vez que hayan entrado en vigencia internacionalmente, mediante depósito o intercambio de ratificaciones o cumplimiento de los requisitos o plazos, previstos en el texto del tratado o instrumento internacional.”

7. Reformas de 2005, Ley 520, aprobada el 13 de enero de 2005

La Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de Nicaragua, Ley No. 520, aprobada durante el gobierno del presidente Enrique Bolaños, pretendía fortalecer las atribuciones del Poder Legislativo en relación con la ratificación, interpelación y destitución de funcionarios del Poder Ejecutivo, así como reformar los preceptos relativos al poder de veto del Presidente de la República.

Es en este sentido que los legisladores procedieron a realizar las siguientes reformas:

- Del Título VIII: De la Organización del Estado, Capítulo II: Poder Legislativo:
 - Arto. 138 numerales 4), 30) y 9).
 - Arto 143.

- Del Título VIII: De la Organización del Estado, Capítulo II: Poder Ejecutivo, Arto. 150 numeral 6).

Dentro de las principales transformaciones podemos mencionar que a partir de la implementación de las reformas, la Asamblea Nacional puede solicitar informes no sólo a ministros, viceministros y presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales (como estaba contemplado antes), sino que esta facultad se extiende al Procurador y al Subprocurador General de Justicia, y ésta es una obligación ineludible, y dispone, además, que la no comparecencia injustificada será causa de destitución.

La Asamblea puede, además, con votación calificada de 60% de los diputados, destituir al funcionario que considere no apto para el ejercicio del cargo.

Otro aspecto a destacar es en lo referente al nombramiento hecho por el Presidente de la República a los ministros y viceministros, Procurador y Subprocurador General de la República, jefes de misiones diplomáticas, y presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales. Sólo se considera un nombramiento firme hasta que sea ratificado en un plazo no mayor de 15 días, con el voto favorable del 60% del total de los diputados.

Las reformas adicionan que la Asamblea Nacional puede elegir con voto favorable del 60% del total de diputados, de listas propuestas por el Presidente y diputados, al superintendente y a los intendentes de servicios públicos, y director y subdirector del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural.

En lo relativo al veto, las reformas disponen que cuando éste sea parcial, debe contener la expresión de motivos de cada uno de los artículos vetados, y que es tarea de la comisión correspondiente dictaminar sobre cada uno de los artículos vetados. La Asamblea, con un número de votos que exceda la mitad de sus miembros, podrá rechazar el veto de cada artículo, en cuyo caso el Presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la ley.

8. Reforma 2005. Ley 521, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 28, del 18 de febrero de 2005

El Arto. 9 de la Constitución establece como mandato del Estado el privilegiar la Unidad Centroamericana y apoyar todos los esfuerzos para lograr la integración política y económica de América Central. En este sentido, el Parlamento Centroamericano juega un papel trascendental en los procesos de armonización legislativa y en la creación jurídica del Sistema de Integración Centroamericana. Para los legisladores, el Estado de Nicaragua no había otorgado a los diputados ante el Parlamento Centroamericano iniciativa de ley y de Decretos Legislativos, a pesar de que éstos han sido electos de forma universal, directa y secreta por el pueblo nicaragüense, y como tales son depositarios de la soberanía y voluntad popular.

Es en este sentido que nuestros legisladores consideraron conveniente otorgarle iniciativa de Ley y de Decretos Legislativos al Parlamento Centroamericano y a los diputados nicaragüenses que lo conforman, a través de la Ley No. 521, Ley de Reforma Parcial al Artículo 140 de la Constitución Política de Nicaragua.

Esta Ley fue aprobada el 13 de enero de 2005, y publicada en La Gaceta No. 35, del 18 de febrero de 2005. Se centró principalmente en reformar el artículo 140 del Capítulo II: Poder Legislativo, del Título VIII: De la Organización del Estado, de la Constitución Política.

A partir de esta reforma, se establece en el Arto. 40 que tienen iniciativa de ley:

- 1) Cada uno de los diputados ante la Asamblea Nacional, quienes además gozan del derecho de iniciativa de decretos, resoluciones y declaraciones legislativas.
- 2) El Presidente de la República,
- 3) La Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, los Consejos Regionales Autónomos y los Concejos, en materias propias de su competencia.
- 4) Los diputados ante el Parlamento Centroamericano por el Estado de Nicaragua. En este caso sólo tienen iniciativa de Ley y de Decretos Legislativos en materia de Integración Regional.
- 5) Los ciudadanos. En este caso la iniciativa deberá ser respaldada por un número no menor de cinco mil firmas. Se exceptúan las

leyes orgánicas, tributarias o de carácter internacional, y las de amnistías y de indultos.

9. Reforma 2005. Ley 527, aprobada el 15 de marzo de 2005

La Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política, Ley No. 527, aprobada durante el gobierno del presidente Enrique Bolaños, tenía como propósito reformar dos artículos constitucionales.

El primer artículo reformado fue el 68 Cn., en el cual se agregó al final del cuarto párrafo un enunciado que establece la reserva legal para la exención de toda clase de impuestos a materiales utilizados por medios de comunicación, como papel, maquinaria, equipo y refacciones. Establece, además, la misma reserva para la importación, circulación y venta de libros, folletos, revistas, materiales escolares y científicos, de enseñanza, diarios y otras publicaciones periódicas. Esta materia, por disposición constitucional, debe ser regulada por las leyes tributarias.

El segundo artículo reformado fue el 93 Cn., en el cual se suprimió del segundo párrafo la frase “y la policía”, y del párrafo tercero la frase “y policías”, con lo cual se define que los delitos y faltas estrictamente militares, cometidos por miembros del Ejército, serán conocidos por los Tribunales Militares establecidos por Ley. En el caso de delitos y faltas comunes que cometan militares, éstos serán conocidos por los Tribunales Comunes. Con lo anterior se precisó que los delitos militares sólo pueden ser cometidos por miembros del Ejército.

10. Ley Marco 2005. Ley No. 558 Ley Marco para la Estabilidad y Gobernabilidad del País

El 19 de octubre de 2005, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Marco, la cual tiene como precedente la Ley No. 199, Ley Marco de Implementación de las Reformas Constitucionales, aprobada en 1995, por medio de la cual se retrasaba la implementación de las reformas aprobadas ese mismo año.

Al igual que su predecesora, la Ley 558 tuvo como propósito primordial solucionar la crisis institucional ocasionada por los desacuerdos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, sobre la validez de las reformas

constitucionales contenidas en la Ley 520. De la firma del Acuerdo Político alcanzado entre ambos poderes, del cual fueron testigos el cardenal Miguel Obando y Bravo, y el embajador Dante Caputo, enviado personal del Secretario General de la OEA, se desprendió la necesidad de dictar una Ley Marco que permitiera restaurar la estabilidad y gobernabilidad del país.

El Considerando de la Ley 558 establece claramente en su inciso III “... Que motivados por el deseo de brindar a Nicaragua la estabilidad que requiere para alcanzar el desarrollo pleno en todos los ámbitos de la vida nacional, así como contribuir al proceso de institucionalización de la democracia, la Asamblea Nacional a través de los partidos políticos representados en ella y el Presidente de la República han alcanzado un Acuerdo Político, en el cual se han comprometido a establecer el mecanismo legal que decida sobre la implementación de la Ley No. 520, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política....”

La Ley 558 dispuso que la Ley 520 de Reforma Parcial a la Constitución, la Ley No. 511, Ley de la Superintendencia de los Servicios Públicos; la Ley No. 512, Ley Creadora del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural; la Ley de Seguridad Social, y las demás leyes y actos legislativos que se derivan de las mismas, quedaran suspensos en su aplicación hasta el 20 de enero de 2007, para que, las nuevas autoridades electas en 2006 aceptaran o rechazaran estas leyes.

Establece, además, que los funcionarios públicos nombrados por la Asamblea Nacional, en virtud de actos legislativos derivados de la Ley No. 520, y de otras leyes conexas, asumirán sus cargos a partir del 20 de enero de 2007. Para el período presidencial que concluía el 10 de enero de 2007, continuarían en pleno ejercicio de sus cargos las autoridades nombradas con anterioridad a la Ley. 520.

11. Ley N. 610, Ley de Reforma a la Ley No. 558, Ley Marco para la Estabilidad y Gobernabilidad del País

Se reforman los artículos 1 y 2 de la Ley No. 558, Ley Marco para la Estabilidad y Gobernabilidad del País, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 203, del 20 de octubre de 2005, los que se leerán así:

“Arto. 1.- La Ley No. 520, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua; la Ley No. 511, Ley de la Superintendencia de los Servicios Públicos; la Ley No. 512, Ley Creadora del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural; la Ley de Seguridad Social; así como las demás leyes y actos legislativos que se derivan de las mismas, se suspenden en su aplicación hasta el veinte de enero de dos mil ocho. El Presidente de la República y la Asamblea Nacional tendrán las facultades de aceptar o rechazar estas leyes antes de o hasta la fecha señalada.

Los funcionarios públicos nombrados por la Asamblea Nacional en virtud de actos legislativos derivados de la Ley No. 520, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, y de otras leyes conexas, asumirán sus cargos a partir del veinte de enero de dos mil ocho, salvo lo establecido en la parte final del párrafo anterior.”

“Arto. 2.-Continuarán en pleno ejercicio de sus cargos las autoridades nombradas por esta Asamblea Nacional en el Instituto Nicaragüense de Energía (INE).”

Arto. 2.-Se adiciona un artículo a la Ley No. 558, Ley Marco para la Estabilidad y Gobernabilidad del País, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 203, del 20 de octubre de 2005, el que se leerá así:

“Arto. 3.- Siendo que la presente Ley nace de un acuerdo político o consenso que tiene como uno de sus objetivos permitir la ampliación de las Reformas Constitucionales, a fin de impulsar la profundización de la institucionalidad democrática del país y el fortalecimiento del Estado de Derecho, y para darle cumplimiento a esa voluntad se crea una Comisión Especial integrada por miembros de las distintas bancadas de la Asamblea Nacional, en base a Resolución de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional en su próxima sesión, la que procederá a elaborar, sustentada en una amplia consulta, un anteproyecto de Reformas Constitucionales, que permita la adecuación de la actual Constitución al desarrollo democrático del país”.

Arto. 3.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio de comunicación social, sin perjuicio a su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

QUINTA UNIDAD

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA Y SUS REFORMAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

1. Constitución Política de la República de Nicaragua (1987)

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Hace saber al pueblo de Nicaragua que la Asamblea Nacional Constituyente ha consultado con el pueblo, discutido y aprobado la siguiente

CONSTITUCIÓN POLITICA PREAMBULO

NOSOTROS, representantes del pueblo de Nicaragua, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente. EVOCANDO La lucha de nuestros antepasados indígenas. El espíritu de unidad centroamericana y la tradición combativa de nuestro pueblo que, inspirado en el ejemplo del General JOSÉ DOLORES ESTRADA, ANDRÉS CASTRO Y ENMANUEL MONGALO, derrotó al dominio filibustero y la intervención norteamericana en la guerra nacional. La gesta antintervencionista de BENJAMÍN ZELEDÓN. Al general de hombres libres, AUGUSTO C. SANDINO, padre de la revolución popular y antiimperialista. La acción heroica de RIGOBERTO LÓPEZ PÉREZ, iniciador del principio del fin de la dictadura. El ejemplo de CARLOS FONSECA, el más alto continuador de la herencia de Sandino, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y jefe de la revolución. A todas las generaciones de Héroes y Mártires que forjaron y desarrollaron la lucha de liberación por la independencia nacional.

EN NOMBRE

Del pueblo nicaragüense; de todos los partidos y organizaciones democráticas, patrióticas y revolucionarias de Nicaragua; de sus hombres y mujeres; de sus obreros y campesinos; de su gloriosa

juventud; de sus heroicas madres; de los cristianos que desde su fe en DIOS se han comprometido e insertado en la lucha por la liberación de los oprimidos; de sus intelectuales patrióticos; y de todos los que con su trabajo productivo contribuyen a la defensa de la Patria.

De los que luchan y ofrendan sus vidas frente a la agresión imperialista para garantizar la felicidad de las nuevas generaciones.

Por la institucionalización de las conquistas de la Revolución y por la construcción de una nueva sociedad que elimine toda clase de explotación y logre la igualdad económica, política y social de los nicaragüenses y el respeto absoluto de los derechos humanos.

POR LA PATRIA, POR LA REVOLUCION
POR LA UNIDAD DE LA NACION Y POR LA PAZ

PROMULGAMOS LA SIGUIENTE

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

TÍTULO I PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Capítulo Único

Artículo 1. La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos, atentan contra la vida del pueblo. Es derecho del pueblo y deber de todos los ciudadanos, preservar y defender con las armas en la mano si es preciso, la independencia de la patria, la soberanía y la autodeterminación nacional.

Artículo 2. La soberanía nacional reside en el pueblo, fuente de todo poder y forjador de su propio destino. El pueblo ejerce la democracia decidiendo y participando libremente en la construcción del sistema económico, político y social que más conviene a sus intereses. El poder lo ejerce el pueblo directamente y por medio de sus representantes libremente elegidos de acuerdo al sufragio universal, igual, directo, libre y secreto.

Artículo 3. La lucha por la paz y por el establecimiento de un orden internacional justo, son compromisos irrenunciables de la nación nicaragüense. Por ello nos oponemos a todas las formas de dominación y explotación colonialista e imperialista y somos solidarios con todos los pueblos que luchan contra la opresión y la discriminación.

Artículo 4. El pueblo nicaragüense ha constituido un nuevo Estado para promover sus intereses y garantizar sus conquistas sociales y políticas. El Estado es el principal instrumento del pueblo para eliminar toda forma de sumisión y explotación del ser humano, para impulsar el progreso material y espiritual de toda la nación y garantizar que prevalezcan los intereses y derechos de las mayorías.

Artículo 5. El Estado garantiza la existencia del pluralismo político, la economía mixta y el no alineamiento. El pluralismo político asegura la existencia y participación de todas las organizaciones políticas en los asuntos económicos, políticos y sociales del país, sin restricciones ideológicas, excepto aquellas que pretendan el retorno al pasado o propugnen por establecer un sistema político similar.

La economía mixta asegura la existencia de distintas formas de propiedad: pública, privada, asociativa, cooperativa y comunitaria; todas deben estar en función de los intereses superiores de la nación y contribuir a la creación de riquezas para satisfacción de las necesidades del país y sus habitantes.

Nicaragua fundamenta sus relaciones internacionales en el principio del no alineamiento, en la búsqueda de la paz y en el respeto a la soberanía de todas las naciones; Por esto, se opone a cualquier forma de discriminación, es anticolonialista, antiimperialista, antirracista y rechaza toda subordinación de un Estado a otro Estado.

TÍTULO II

SOBRE EL ESTADO

Capítulo Único

Artículo 6. Nicaragua es un Estado independiente, libre, soberano, unitario e indivisible.

Artículo 7. Nicaragua es una república democrática, participativa y representativa. Son órganos de gobierno: El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Electoral.

Artículo 8. El pueblo de Nicaragua es de naturaleza multiétnica y parte integrante de la nación centroamericana.

Artículo 9. Nicaragua defiende firmemente la unidad centroamericana, apoya y promueve todos los esfuerzos para lograr la integración política y económica y la cooperación en América Central, así como los esfuerzos por establecer y preservar la paz en la región.

Nicaragua aspira a la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe, inspirada en los ideales unitarios de Bolívar y Sandino.

En consecuencia, participará con los demás países centroamericanos y latinoamericanos en la creación o elección de los organismos necesarios para tales fines

Este principio se regulará por la legislación y los tratados respectivos.

Artículo 10. El territorio nacional se localiza entre los océanos Atlántico y Pacífico y las repúblicas de Honduras y Costa Rica. Comprende las islas y cayos adyacentes, el suelo y el subsuelo, el mar territorial, las plataformas continentales, los zócalos submarinos, el espacio aéreo y la estratosfera.

Los límites precisos del territorio nacional se fijan por leyes y tratados.

Artículo 11. El español es el idioma oficial del Estado. Las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua también tendrán uso oficial en los casos que establezca la ley.

Artículo 12. La ciudad de Managua es la capital de la República y sede de los Poderes del Estado. En circunstancias extraordinarias, éstos se podrán establecer en otras partes del territorio nacional.

Artículo 13. Los símbolos patrios son: el Himno Nacional, la Bandera y el Escudo establecidos por la ley que determina sus características y usos.

Artículo 14. El Estado no tiene religión oficial.

TÍTULO III

LA NACIONALIDAD NICARAGÜENSE

Capítulo Único

Artículo 15. Los nicaragüenses son nacionales o nacionalizados.

Artículo 16. Son nacionales:

1) Los nacidos en el territorio nacional. Se exceptúan los hijos de extranjeros en servicio diplomático, los de funcionarios extranjeros al servicio de organizaciones internacionales o los de enviados por sus gobiernos a desempeñar trabajos en Nicaragua, a menos que optaren por la nacionalidad nicaragüense.

2) Los hijos de padre o madre nicaragüense

3) Los nacidos en el extranjero de padre o madre que originalmente fueron nicaragüenses, siempre y cuando lo solicitaren después de alcanzar la mayoría de edad o emancipación.

4) Los infantes de padres desconocidos encontrados en territorio nicaragüense, sin perjuicio de que, conocida su filiación, surta los efectos que proceden.

5) Los hijos de padres extranjeros nacidos a bordo de aeronaves y embarcaciones nicaragüenses, siempre que ellos lo solicitaren.

Artículo 17. Los centroamericanos de origen tienen derecho de optar a la nacionalidad nicaragüense, sin necesidad de renunciar a su nacionalidad y pueden solicitarla ante autoridad competente cuando residan en Nicaragua.

Artículo 18. La Asamblea Nacional podrá declarar nacionales a extranjeros que se hayan distinguido por méritos extraordinarios al servicio de Nicaragua.

Artículo 19. Los extranjeros pueden ser nacionalizados, previa renuncia a su nacionalidad y mediante solicitud ante autoridad competente, cuando cumplieren los requisitos y condiciones que establezcan las leyes de la materia.

Artículo 20. Ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad, excepto que adquiriera voluntariamente otra; tampoco perderá su nacionalidad nicaragüense cuando adquiriera la de otro país centroamericano o hubiera convenio de doble nacionalidad.

Artículo 21. La adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes.

Artículo 22. En los casos de doble nacionalidad se procede conforme los tratados y el principio de reciprocidad.

TÍTULO IV DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS DEL PUEBLO NICARAGÜENSE

Capítulo I Derechos Individuales

Artículo 23. El derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana. En Nicaragua no hay pena de muerte.

Artículo 24. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad, la patria y la humanidad.

Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común.

Artículo 25. Toda persona tiene derecho:

- 1) A la libertad individual.
- 2) A su seguridad.
- 3) Al reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica.

Artículo 26. Toda persona tiene derecho:

- 1) A su vida privada y a la de su familia.
- 2) A la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia y sus comunicaciones.
- 3) Al respeto de su honra y reputación.

El domicilio sólo puede ser allanado por orden escrita de juez competente o de autoridad expresamente facultada para ello; para impedir la comisión de un delito y para evitar daños a las personas o bienes, de acuerdo al procedimiento que prescriba la ley.

La ley fija los casos y procedimiento para el examen de documentos privados, libros contables y sus anexos cuando sea indispensable para esclarecer asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia o por motivos fiscales.

Las cartas, documentos y demás papeles privados sustraídos ilegalmente no producen efecto alguno en juicio o fuera de el.

Artículo 27. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivo de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social.

Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos que los nicaragüenses, con la excepción de los derechos políticos y los que establezcan las leyes; no pueden intervenir en los asuntos políticos del país.

El Estado respeta y garantiza los derechos reconocidos en la presente Constitución a todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sujetas a su jurisdicción.

Artículo 28. Los nicaragüenses que se encuentren temporalmente en el extranjero gozan del amparo y protección del Estado por medio de sus representaciones diplomáticas.

Artículo 29. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos ni a ser obligado a declarar su credo, ideología o creencia.

Artículo 30. Los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio.

Artículo 31. Los nicaragüenses tienen derecho a circular y a fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y a salir libremente del país.

Artículo 32. Ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe.

Artículo 33. Nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la ley y con arreglo a un procedimiento legal.

En consecuencia:

1) La detención sólo podrá efectuarse en virtud de mandamiento escrito de juez competente o de las autoridades que expresamente faculte la ley, salvo el caso de flagrante delito.

2) Todo detenido tiene derecho:

2.1.- A ser informado sin demora, en idioma o lengua que comprenda y en forma detallada, de las causas de su detención y de la acusación formulada en su contra; a que se informe a su familia de su detención; y también a ser tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

2.2.- A ser puesto ante autoridad expresamente facultada por la ley dentro del plazo máximo de setenta y dos horas.

3) Una vez cumplida la pena impuesta, nadie continuará detenido después de dictarse la orden de excarcelación por la autoridad competente.

4) Toda detención ilegal causa responsabilidad de parte de la autoridad respectiva.

5) Los organismos correspondientes procurarán que los procesados y los condenados guarden prisión en centros diferentes.

Artículo 34. Todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a las siguientes garantías mínimas:

- 1) A que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
- 2) A ser juzgado sin dilaciones por tribunal competente establecido por la ley.
- 3) A no ser sustraído de juez competente, excepto los casos previstos en esta Constitución y las leyes.
- 4) A que se garantice su intervención y defensa desde el inicio del proceso y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa.
- 5) A que se le nombre defensor de oficio cuando en la primera intervención no hubiera designado defensor; o cuando no fuere habido, previo llamamiento por edicto. El procesado tiene derecho a comunicarse libre y privadamente con su defensor.
- 6) A ser asistido gratuitamente por un interprete si no comprende o no habla el idioma empleado por el tribunal.
- 7) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge o compañero en unión de hecho estable, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni a confesarse culpable.
- 8) A que se le dicte sentencia absolutoria o condenatoria dentro de los términos legales, en cada una de las instancias correspondientes.
- 9) A recurrir ante un tribunal superior a fin de que su caso sea revisado cuando hubiere sido condenado por cualquier delito; y a no ser procesado nuevamente por el delito por el cual fue condenado o absuelto mediante sentencia firme.
- 10) A no ser procesado ni condenado por acto u omisión que, al tiempo de cometerse, no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley.

El proceso penal debe ser público, pero en casos de excepción, la prensa y el público en general podrán ser excluidos por consideraciones de moral, orden público, o seguridad nacional.

Artículo 35. Los menores no pueden ser sujetos ni objetos de juzgamiento ni sometidos a procedimiento judicial alguno. Los menores transgresores no pueden ser conducidos a los centros de readaptación penal y serán atendidos en centros bajo la responsabilidad del organismo especializado. Una ley regulará esta materia.

Artículo 36. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley.

Artículo 37. La pena no trasciende de la persona del condenado. No se impondrá pena o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de treinta años.

Artículo 38. La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando favorezca al reo.

Artículo 39. En Nicaragua, el sistema penitenciario es humanitario, y tiene como objetivo fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la sociedad. Por medio del sistema progresivo promueve la unidad familiar, la salud, la superación educativa, cultural y la ocupación productiva con remuneración salarial para el interno. Las penas tienen un carácter reeducativo.

Las mujeres condenadas guardarán prisión en centros penales distintos a los de los hombres, y se procurará que los guardas sean del mismo sexo.

Artículo 40. Nadie será sometido a servidumbre. La esclavitud y la trata de cualquier naturaleza están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 41. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente por incumplimiento

de deberes alimentarios. Es deber de cualquier ciudadano nacional o extranjero pagar lo que adeuda.

Artículo 42. En Nicaragua se garantiza el derecho de asilo a los perseguidos por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos.

La ley determinará la condición de asilado o refugiado político, de acuerdo con los convenios internacionales ratificados por Nicaragua. En caso se acordara la expulsión de un asilado, nunca podrá enviársele al país donde fuese perseguido.

Artículo 43. En Nicaragua no existe extradición por delitos políticos o comunes conexos con ellos, según calificación nicaragüense. La extradición por delitos comunes está regulada por la ley y los tratados internacionales.

Los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional.

Artículo 44. Los nicaragüenses tienen derecho a la propiedad personal que les garantice los bienes necesarios y esenciales para su desarrollo integral.

Artículo 45. Las personas cuyos derechos constitucionales hayan sido violados o estén en peligro de serlo, pueden interponer el recurso de exhibición personal o de amparo, según el caso, y de acuerdo con la Ley de Amparo.

Artículo 46. En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos, y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

Capítulo II

Derechos Políticos

Artículo 47. Son ciudadanos los nicaragüenses que hubieran cumplido dieciséis años de edad.

Sólo los ciudadanos gozan de los derechos políticos consignados en la Constitución y las leyes, sin más limitaciones que las que se establezcan por razones de edad.

Los derechos ciudadanos se suspenden por imposición de pena corporal grave o penas accesorias específicas y por sentencia ejecutoriada de interdicción civil.

Artículo 48. Se establece la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos; en el ejercicio de los mismos y en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, existe igualdad absoluta entre el hombre y la mujer.

Es obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social del país.

Artículo 49. En Nicaragua tienen derecho de constituir organizaciones los trabajadores de la ciudad y del campo, las mujeres, los jóvenes, los productores agropecuarios, los artesanos, los profesionales, los técnicos, los intelectuales, los artistas, los religiosos, las Comunidades de la Costa Atlántica y los pobladores en general, sin discriminación alguna, con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones según sus propios intereses, y participar en la construcción de una nueva sociedad.

Estas organizaciones se formarán de acuerdo a la voluntad participativa y electiva de los ciudadanos, tendrán una función social y podrán o no tener carácter partidario, según su naturaleza y fines.

Artículo 50. Los ciudadanos tienen derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal. Por medio de la ley se garantizará, nacional y localmente, la participación efectiva del pueblo.

Artículo 51. Los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos en elecciones periódicas y optar a cargos públicos.

Artículo 52. Los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas, en forma individual o colectiva, a los Poderes del Estado o a cualquier autoridad; de obtener una pronta resolución o respuesta y de que se les comunique lo resuelto en los plazos que la ley establezca.

Artículo 53. Se reconoce el derecho de reunión pacífica; el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo.

Artículo 54. Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley.

Artículo 55. Los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho de organizar o afiliarse a partidos políticos, con el fin de participar, ejercer y optar al poder.

Capítulo III

Derechos Sociales

Artículo 56. El Estado prestará atención especial en todos sus programas a los defensores de la dignidad, el honor y la soberanía de la nación, a los familiares de éstos y de los caídos en defensa de la misma, de acuerdo a las leyes.

Artículo 57. Los nicaragüenses tienen el derecho al trabajo acorde con su naturaleza humana.

Artículo 58. Los nicaragüenses tienen derecho a la educación y a la cultura.

Artículo 59. Los nicaragüenses tienen derecho, por igual, a la salud. El Estado establecerá las condiciones básicas para su promoción, protección, recuperación y rehabilitación.

Corresponde al Estado dirigir y organizar los programas, servicios y acciones de salud y promover la participación popular en defensa de la misma.

Los ciudadanos tienen la obligación de acatar las medidas sanitarias que se determinen.

Artículo 60. Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable; es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos naturales.

Artículo 61. El Estado garantiza a los nicaragüenses el derecho a la seguridad social para su protección. Integral frente a las contingencias sociales de la vida y el trabajo, en la forma y condiciones que determine la ley.

Artículo 62. El Estado procurará establecer programas en beneficio de los discapacitados para su rehabilitación física, psicosocial y profesional y para su ubicación laboral

Artículo 63. Es derecho de los nicaragüenses estar protegidos contra el hambre. El Estado promoverá programas que aseguren una adecuada disponibilidad de alimentos y una distribución equitativa de los mismos.

Artículo 64. Los nicaragüenses tienen derecho a una vivienda digna, cómoda y segura que garantice la privacidad familiar. El Estado promoverá la realización de este derecho.

Artículo 65. Los nicaragüenses tienen derecho al deporte, a la educación física, a la recreación y al esparcimiento. El Estado impulsará la práctica del deporte y de la educación física, mediante la participación organizada y masiva del pueblo, para la formación integral de los nicaragüenses. Esto se realizará con programas y proyectos especiales.

Artículo 66. Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Artículo 67. El derecho de informar es una responsabilidad social y se ejerce con estricto respeto a los principios establecidos en la

Constitución. Este derecho no puede estar sujeto a censura, sino a responsabilidades ulteriores establecidas en la ley.

Artículo 68. Los medios de comunicación social están al servicio de los intereses nacionales. El Estado promoverá el acceso del pueblo de y sus organizaciones a los medios de comunicación, y evitará que éstos sean sometidos a intereses extranjeros o al monopolio del poder económico de algún grupo.

La existencia y el funcionamiento de los medios de comunicación públicos, corporativos y privados no serán objeto de censura previa y estarán sujetos a lo establecido en la ley.

Artículo 69. Todas las personas, individual o colectivamente, tienen derecho a manifestar sus creencias religiosas en privado o en público, mediante el culto, las prácticas y su enseñanza.

Nadie puede eludir la observancia de las leyes ni impedir a otros el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes invocando creencias o disposiciones religiosas.

Capítulo IV

Derechos de Familia

Artículo 70. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de ésta y del Estado.

Artículo 71. Es derecho de los nicaragüenses constituir una familia. La ley regulará y protegerá este derecho.

Artículo 72. El matrimonio y la unión de hecho estable están protegidos por el Estado; descansan en el acuerdo voluntario del hombre y la mujer y podrán disolverse por mutuo consentimiento o por la voluntad de una de las partes. La ley regulará esta materia.

Artículo 73. Las relaciones familiares descansan en el respeto, solidaridad e igualdad absoluta de derechos y responsabilidades entre el hombre y la mujer. Los padres deben atender el mantenimiento del hogar y la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común, con iguales derechos y responsabilidades. Los hijos a su vez,

están obligados a respetar y ayudar a sus padres. Estos deberes y derechos se cumplirán de acuerdo con la legislación de la materia.

Artículo 74. El Estado otorga protección especial al proceso de reproducción humana. La mujer tendrá protección especial durante el embarazo y gozará de licencia con remuneración salarial y prestaciones adecuadas de seguridad social. Nadie podrá negar empleo a las mujeres aduciendo razones de embarazo ni despedirlas durante éste o en el período postnatal; todo de conformidad con la ley.

Artículo 75. Todos los hijos tienen iguales derechos. No se utilizarán designaciones discriminatorias en materia de filiación. En la legislación común, no tienen ningún valor las disposiciones o clasificaciones que disminuyan o nieguen la igualdad de los hijos.

Artículo 76. El Estado creará programas y desarrollará centros especiales para velar por los menores; éstos tienen derecho a las medidas de prevención, protección y educación que su condición requiere, por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Artículo 77. Los ancianos tienen derecho a medidas de protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado.

Artículo 78. El Estado protege la paternidad y la maternidad responsables. Se establece el derecho de investigar la paternidad y la maternidad.

Artículo 79. Se establece el derecho de adopción en interés exclusivo del desarrollo integral del menor. La ley regulará esta materia.

Capítulo V

Derechos Laborales

Artículo 80. El trabajo es un derecho y una responsabilidad social. El trabajo de los nicaragüenses es el medio fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad, de las personas y es fuente de riqueza y prosperidad de la nación. El Estado procurará la ocupación plena y productiva de todos los nicaragüenses, en condiciones que garanticen los derechos fundamentales de la persona.

Artículo 81. Los trabajadores tienen derecho de participar en la gestión de las empresas, por medio de sus organizaciones y de conformidad con la ley.

Artículo 82. Los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que les aseguren en especial:

1) Salario igual por trabajo igual en idénticas condiciones, adecuado a su responsabilidad social, sin discriminaciones por razones políticas, religiosas, sociales, de sexo o de cualquier otra clase, que les asegure un bienestar compatible con la dignidad humana.

2) Ser remunerado en moneda de curso legal en su centro de trabajo.

3) La inembargabilidad del salario mínimo y las prestaciones sociales, excepto para protección de su familia y en los términos que establezca la ley.

4) Condiciones de trabajo que les garanticen la integridad física, la salud, la higiene y la disminución de los riesgos profesionales para hacer efectiva la seguridad ocupacional del trabajador.

5) Jornada laboral de ocho horas, descanso semanal, vacaciones, remuneración por los días feriados nacionales y salario por décimo tercer mes de conformidad con la ley.

6) Estabilidad en el trabajo conforme a la ley, e igual oportunidad de ser promovido, sin más limitaciones que los factores de tiempo, servicio, capacidad, eficiencia y responsabilidad.

7) Seguridad social para protección integral y medios de subsistencia en casos de invalidez, vejez, riesgos profesionales, enfermedad y maternidad; y a sus familiares en casos de muerte, en la forma y condiciones que determine la ley.

Artículo 83. Se reconoce el derecho a la huelga.

Artículo 84. Se prohíbe el trabajo de los menores, en labores que puedan afectar su desarrollo normal o su ciclo de instrucción obligatoria. Se protegerá a los niños y adolescentes contra cualquier clase de explotación económica y social.

Artículo 85. Los trabajadores tienen derecho a su formación cultural, científica y técnica; el Estado la facilitará mediante programas especiales.

Artículo 86. Todo nicaragüense tiene derecho a elegir y a ejercer libremente su profesión u oficio y a escoger un lugar de trabajo sin más requisitos que el título académico y que cumpla una función social.

Artículo 87. En Nicaragua existe plena libertad sindical. Los trabajadores se organizarán voluntariamente en sindicatos y éstos podrán constituirse conforme lo establece la ley.

Ningún trabajador está obligado a pertenecer a determinado sindicato, ni renunciar al que pertenezca. Se reconoce la plena autonomía sindical y se respeta el fuero sindical.

Capítulo VI

Derechos de las comunidades de la Costa Atlántica

Artículo 88. Se garantiza el derecho inalienable de los trabajadores para que, en defensa de sus intereses particulares o gremiales, celebren con los empleadores:

- 1) Contratos individuales.
- 2) Convenios colectivos. Ambos de conformidad con la ley.

Artículo 89. Las comunidades de la Costa Atlántica son parte indisoluble del pueblo nicaragüense, y como tal gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones. Las comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de preservar y desarrollar su identidad cultural en la unidad nacional; dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones.

El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las comunidades de la Costa Atlántica. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales.

Artículo 90. Las comunidades de la Costa Atlántica tienen derecho a la libre expresión y preservación de sus lenguas, arte y cultura. El desarrollo de su cultura y sus valores enriquece la cultura nacional. El Estado creará programas especiales para el ejercicio de estos derechos.

Artículo 91. El Estado tiene la obligación de dictar leyes destinadas a promover acciones que aseguren que ningún nicaragüense sea objeto de discriminación por razón de su lengua, cultura y origen.

TÍTULO V

DEFENSA NACIONAL

Capítulo Único

Artículo 92. Es deber y derecho de todos los nicaragüenses luchar por la defensa de la vida, de la patria, de la justicia y de la paz para el desarrollo integral de la nación.

Artículo 93. El pueblo nicaragüense tiene derecho de armarse para defender su soberanía, su independencia y sus conquistas revolucionarias. Es deber del Estado dirigir, organizar y armar al pueblo para garantizar este derecho.

Artículo 94. La defensa de la Patria y la Revolución descansa en la movilización y participación organizada de todo el pueblo en la lucha contra sus agresores. El Estado promoverá la incorporación masiva del pueblo a las distintas modalidades y tareas de la defensa del país.

Artículo 95. El Ejército Popular Sandinista tiene carácter nacional y debe guardar protección, respeto y obediencia a la presente Constitución Política.

El Ejército Popular Sandinista es el brazo armado del pueblo y heredero directo del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. El Estado prepara, organiza y dirige la participación popular en la defensa armada de la patria, por medio del Ejército Popular Sandinista.

No pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional que los establecidos por la ley, la cual regulará las bases de la organización militar.

Artículo 96. Los nicaragüenses tienen el deber de empuñar las armas, para defender la patria y las conquistas del pueblo ante agresiones y amenazas de un país extranjero o de fuerzas dirigidas y apoyadas por cualquier país. Se establece el Servicio Militar Patriótico, de acuerdo con los términos de la ley.

Artículo 97. La lucha contra las acciones promovidas desde el exterior para subvertir el orden revolucionario construido por el pueblo nicaragüense y el enfrentamiento a las actividades delictivas y antisociales, forman parte integral de la defensa de la Revolución. El Estado crea los cuerpos de seguridad y de orden interior, cuyas funciones están determinadas por la ley.

TITULO VI ECONOMIA NACIONAL REFORMA AGRARIA Y FINANZAS Capítulo I Economía Nacional

Artículo 98. La función principal del Estado en la economía es desarrollar materialmente el país; suprimir el atraso y la dependencia heredados; mejorar las condiciones de vida del pueblo y realizar una distribución cada vez mas justa de la riqueza.

Artículo 99. El Estado dirige y planifica la economía nacional para garantizar y defender los intereses de las mayorías y orientarlas en función de los objetivos del progreso económico-social.

La Banca Central, el Sistema Financiero Nacional, los Seguros y Reaseguros y el Comercio Exterior, como instrumentos de la dirección económica, corresponden al área estatal de manera irrenunciable.

Artículo 100. El Estado promulgará la Ley de Inversiones Extranjeras a fin de que contribuya al desarrollo económico-social del país, sin detrimento de la soberanía nacional.

Artículo 101. Los trabajadores y demás sectores productivos tienen el derecho de participar en la elaboración, ejecución y control de los planes económicos.

Artículo 102. Los recursos naturales son patrimonio nacional. La preservación del ambiente y la conservación, desarrollo y explotación racional de los recursos naturales corresponden al Estado; éste podrá celebrar contratos de explotación racional de estos recursos, cuando el interés nacional lo requiera.

Artículo 103. El Estado garantiza la coexistencia democrática de las formas de propiedad pública, privada, cooperativa, asociativa y comunitaria; todas ellas forman parte de la economía mixta, están supeditadas a los intereses superiores de la nación y cumplen una función social.

Artículo 104. Las empresas que se organicen bajo cualesquiera de las formas de propiedad establecidas en esta Constitución, gozan de igualdad ante la ley y las políticas económicas del Estado. Los planes económicos de las empresas deberán ser elaborados con la participación de los trabajadores. La iniciativa económica es libre.

Artículo 105. Es obligación del Estado regular justa y racionalmente la distribución de los bienes básicos de consumo y su abastecimiento, tanto en el campo como en la ciudad. La especulación y el acaparamiento son incompatibles con el régimen económico-social y constituyen delitos graves contra el pueblo.

Capítulo II

Reforma Agraria

Artículo 106. La reforma agraria es instrumento fundamental para realizar una justa distribución de la tierra y medio estratégico para las transformaciones revolucionarias, el desarrollo nacional y el progreso social de Nicaragua. El Estado garantiza el desarrollo de la reforma agraria, para dar cumplimiento pleno a las reivindicaciones históricas de los campesinos.

Artículo 107. La reforma agraria abolirá el latifundio, el rentismo, la ineficiencia en la producción y la exhortación a los campesinos

y promoverá las formas de propiedad compatibles con los objetivos económicos y sociales de la nación, establecidos en esta Constitución.

Artículo 108. Se garantiza la propiedad de la tierra a todos los propietarios que la trabajen productiva y eficientemente. La ley establecerá regulaciones particulares y excepciones, de conformidad con los fines y objetivos de la reforma agraria.

Artículo 109. El Estado promoverá la asociación voluntaria de los campesinos en cooperativas agrícolas, sin discriminación de sexo y de acuerdo con sus recursos facilitará los medios materiales necesarios para elevar su capacidad técnica y productiva, a fin de mejorar las condiciones de vida de los campesinos.

Artículo 110. El Estado promoverá la incorporación voluntaria de pequeños y medianos productores agropecuarios a los planes de desarrollo económico y social del país, bajo formas asociativas e individuales.

Artículo 111. Los campesinos y demás sectores productivos tienen derecho de participar en la definición de las políticas de transformación agraria, por medio de sus propias organizaciones.

Capítulo III

De las Finanzas Públicas

Artículo 112. El Presupuesto General de la República tiene vigencia anual y su objeto es regular los ingresos y egresos de la administración pública. El Presupuesto deberá mostrar las distintas fuentes y destinos de los ingresos y egresos, los que guardarán concordancia y determinará los límites de gastos de los órganos del Estado. No se puede crear ningún gasto extraordinario sino por ley y mediante creación y fijación al mismo tiempo de los recursos para financiarlos.

Artículo 113. El Presupuesto será elaborado por el Presidente de la República y aprobado por la Asamblea Nacional en la Ley Anual del Presupuesto, de conformidad a lo establecido en la presente Constitución y en la Ley.

Artículo 114. El sistema tributario debe tomar en consideración la distribución de la riqueza y de las rentas, así como las necesidades del Estado.

Artículo 115. Los impuestos deben ser creados por ley que establezca su incidencia, tipo impositivo y las garantías a los contribuyentes. El Estado no obligará a pagar impuestos que previamente no estén establecidos en una ley.

TITULO VII

EDUCACION Y CULTURA

Capítulo Único

Artículo 116. La educación tiene como objetivo la formación plena e integral del nicaragüense; dotarlo de una conciencia crítica, científica y humanista; desarrollar su personalidad y el sentido de su dignidad y capacitarlo para asumir las tareas de interés común que demanda el progreso de la nación; por consiguiente, la educación es factor fundamental para la transformación y el desarrollo del individuo y la sociedad.

Artículo 117. La educación es un proceso único, democrático, creativo y participativo que vincula la teoría con la práctica, el trabajo manual con el intelectual y promueve la investigación científica. Se fundamenta en nuestros valores nacionales, en el conocimiento de nuestra historia, de la realidad, de la cultura nacional y universal y en el desarrollo constante de la ciencia y de la técnica; cultiva los valores propios del nuevo nicaragüense, de acuerdo con los principios establecidos en la presente Constitución, cuyo estudio deberá ser promovido.

Artículo 118. El Estado promueve la participación de la familia, de la comunidad y del pueblo en la educación y garantiza el apoyo de los medios de comunicación social a la misma.

Artículo 119. La educación es función indeclinable del Estado. Corresponde a éste planificarla, dirigirla y organizarla. El sistema nacional de educación funciona de manera integrada y de acuerdo con planes nacionales. Su organización y funcionamiento son determinados por la ley.

Es deber del Estado formar y capacitar en todos los niveles y especialidades al personal técnico y profesional necesario para el desarrollo y transformación del país.

Artículo 120. Es papel fundamental del magisterio nacional la aplicación creadora de los planes y políticas educativas. Los maestros tienen derecho a condiciones de vida y trabajo acordes con su dignidad y con la importante función social que desempeñan; serán promovidos y estimulados de acuerdo con la ley.

Artículo 121. El acceso a la educación es libre e igual para todos los nicaragüenses. La enseñanza básica es gratuita y obligatoria. Las Comunidades de la Costa Atlántica tienen acceso en su región a la educación en su lengua materna en los niveles que se determine, de acuerdo con los planes y programas nacionales.

Artículo 122. Los adultos gozarán de oportunidades para educarse y desarrollar habilidades por medio de programas de capacitación y formación. El Estado continuará sus programas educativos para suprimir el analfabetismo.

Artículo 123. Los centros privados dedicados a la enseñanza pueden funcionar en todos los niveles, sujetos a los preceptos establecidos en la presente Constitución.

Artículo 124. La educación en Nicaragua es laica. El Estado reconoce el derecho de los centros privados dedicados a la enseñanza y que sean de orientación religiosa, a impartir religión como materia extracurricular.

Artículo 125. La Educación Superior goza de autonomía financiera, orgánica y administrativa de acuerdo con la ley. Se reconoce la libertad de cátedra. El Estado promueve la libre creación, investigación y difusión de las ciencias, las artes y las letras.

Artículo 126. Es deber del Estado promover el rescate, desarrollo y fortalecimiento de la cultura nacional, sustentada en la participación creativa del pueblo.

El Estado apoyará la cultura nacional en todas sus expresiones, sean de carácter colectivo o de creadores individuales.

Artículo 127. La creación artística y cultural es libre e irrestricta. Los trabajadores de la cultura tienen plena libertad de elegir formas y modos de expresión.

El Estado procurará facilitarles los medios necesarios para crear y difundir sus obras y protege sus derechos de autor.

Artículo 128. El Estado protege el patrimonio arqueológico, histórico, lingüístico, cultural y artístico de la nación.

TÍTULO VIII

DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO

Capítulo I

Principios Generales

Artículo 129. Los Poderes Legislativo, Ejecutivo, judicial y Electoral, son independientes entre si y se coordinan armónicamente, subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la presente Constitución.

Artículo 130. Ningún cargo concede a quien lo ejerce más funciones que las que le confieren la Constitución y las leyes.

Todo funcionario del Estado debe rendir cuentas de sus bienes antes de asumir su cargo y después de entregarlo. La ley regula esta materia.

Artículo 131. Los funcionarios de los cuatro poderes elegidos directa o indirectamente, responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones y deben informarle de su trabajo y actividades oficiales. Deben atender y escuchar sus problemas y procurar resolverlos. La función pública se debe ejercer a favor de los intereses del pueblo. Todo funcionario tiene el deber de desempeñar eficaz y honestamente sus funciones y será responsable de sus actos y omisiones. Se establece la carrera administrativa que será regulada por la ley.

Capítulo II Poder Legislativo

Artículo 132. El Poder Legislativo lo ejerce la Asamblea Nacional, por delegación y mandato del pueblo. La Asamblea Nacional está integrada por noventa representantes con sus respectivos suplentes, elegidos por voto universal, igual, directo, libre y secreto en circunscripciones regionales mediante la aplicación del sistema de representación proporcional, regulado por la Ley Electoral. El número de representantes podrá incrementarse de acuerdo con el censo general de población de conformidad con la ley.

Artículo 133. También forman parte de la Asamblea Nacional como Representantes propietarios y suplentes respectivamente, los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República que, habiendo participado en la elección correspondiente, no hayan sido elegidos, en este caso, deben contar en la circunscripción nacional con un número de votos igual o superior al promedio de los cocientes regionales electorales.

Artículo 134. Para ser Representante ante la Asamblea Nacional se requiere de las siguientes calidades:

- 1) Ser Nacional de Nicaragua.
- 2) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
- 3) Haber cumplido veintiún años de edad.

Artículo 135. Ningún Representante ante la Asamblea Nacional puede obtener concesión alguna del Estado, ser apoderado o gestor de empresas públicas, privadas o extranjeras en contrataciones de éstas con el Estado. La violación de esta disposición anula las concesiones y ventajas obtenidas, y causa la pérdida de la representación.

Artículo 136. Los representantes ante la Asamblea Nacional serán elegidos para un período de seis años, e se contará a partir de su instalación, el nueve de enero del año siguiente al de la elección.

Artículo 137. Los representantes, propietarios y suplentes, electos para integrar la Asamblea Nacional prestan la promesa de ley ante el Presidente del Consejo Supremo Electoral. La Asamblea Nacional será instalada por el Consejo Supremo Electoral.

Artículo 138. Son atribuciones de la Asamblea Nacional:

- 1) Elaborar y aprobar las leyes y decretos, así como reformar y derogar los existentes.
- 2) La interpretación auténtica de la ley.
- 3) Decretar amnistía e indultos, así como, conmutaciones o reducciones de penas.
- 4) Solicitar informes por medio del Presidente de la República a los ministros o viceministros de Estado y presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales. De la misma manera, podrá pedir su comparecencia personal e interpelación.
- 5) Otorgar y cancelar la personalidad jurídica a las entidades de naturaleza civil o religiosa.
- 6) Conocer, discutir y aprobar el Presupuesto General de la República conforme al procedimiento establecido en la Constitución y en la ley.
- 7) Elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral, de ternas propuestas por el Presidente de la República.
- 8) Elegir al Contralor General de la República de terna propuesta por el. Presidente de la República.
- 9) Conocer, admitir y decidir sobre las renunciaciones o faltas definitivas de los representantes ante la Asamblea Nacional.
- 10) Conocer y admitir las renunciaciones o destituciones de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los Magistrados del Consejo Supremo Electoral y del Contralor General de la República.

- 11) Aprobar o desaprobar los tratados internacionales.
- 12) Regular todo lo relativo a los símbolos patrios.
- 13) Crear órdenes honoríficas y distinciones de carácter nacional.
- 14) Crear y otorgar sus propias órdenes de carácter nacional.
- 15) Recibir en sesión solemne al Presidente o al Vicepresidente de la República, para escuchar el informe anual.
- 16) Delegar las facultades legislativas al Presidente de la República durante el período de receso de la Asamblea Nacional, de acuerdo con el Decreto Ley Anual Delegatoria de las funciones legislativas. Se exceptúa lo relativo a los códigos de la República.
- 17) Elegir su Junta Directiva.
- 18) Crear comisiones permanentes, especiales y de investigación.
- 19) Proponer pensiones de gracia y conceder honores a servidores distinguidos de la patria y de la humanidad.
- 20) Determinar la división política y administrativa del país.
- 21) Conocer las políticas y el plan de desarrollo económico y social del país.
- 22) Llenar las vacantes definitivas del Presidente o del Vicepresidente de la República.
- 23) Autorizar la salida del territorio nacional al Presidente de la República, cuando su ausencia sea mayor de un mes.
- 24) Conocer y resolver sobre las quejas presentadas contra los funcionarios que gozan de inmunidad.
- 25) Decretar su Estatuto General y Reglamento Interno.
- 26) Las demás que le confieren la Constitución y las leyes.

Artículo 139. Los representantes estarán exentos de responsabilidad por sus opiniones y votos emitidos en la Asamblea Nacional y gozan de inmunidad conforme la ley.

Artículo 140. Tienen iniciativa de ley los representantes ante la Asamblea Nacional y el Presidente de la República; también la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, en materias propias de su competencia. Este derecho de iniciativa será regulado por el Estatuto General y el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.

Artículo 141. El quórum para las sesiones de la Asamblea Nacional es la mitad más uno de sus miembros. Los proyectos de ley requerirán para su aprobación del voto favorable de la mayoría relativa de los Representantes presentes.

Una vez aprobado el proyecto de ley, será enviado al Presidente de la República para su sanción, promulgación y publicación.

Artículo 142. El Presidente de la República podrá vetar total o parcialmente un proyecto de ley dentro de los quince días siguientes de haberlo recibido. Si no ejerciera esta facultad, ni sancionara, ni promulgara ni publicara el proyecto, el Presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la ley.

Artículo 143. El proyecto de ley vetado total o parcialmente por el Presidente de la República deberá regresar a la Asamblea Nacional con expresión de los motivos del veto; ésta podrá rechazarlo con el voto de la mitad más uno del total de sus representantes, en cuyo caso el Presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la ley.

Capítulo III

Poder Ejecutivo

Artículo 144. El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República, quien es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe Supremo de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de la Nación.

Artículo 145. El Vicepresidente de la República desempeña las funciones que el Presidente le delega y lo sustituirá en el cargo en caso de falta temporal o definitiva.

Artículo 146. La elección del Presidente y Vicepresidente de la República se realiza mediante el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto. Serán elegidos quienes obtengan la mayoría relativa de votos.

Artículo 147. Para ser Presidente o Vicepresidente de la República se requiere de las siguientes calidades:

- 1) Ser nacional de Nicaragua.
- 2) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
- 3) Haber cumplido veinticinco años de edad.

Artículo 148. El Presidente y el Vicepresidente de la República ejercerán sus funciones durante un período de seis años, que se contará a partir de su toma de posesión el día diez de enero del año siguiente al de la elección; dentro de este período gozaran de inmunidad.

Artículo 149. En caso de falta temporal del Presidente de la República, asumirá sus funciones el Vicepresidente. Cuando la falta sea definitiva, el Vicepresidente asumirá el cargo de Presidente de la República por el resto del período y la Asamblea Nacional deberá elegir un nuevo Vicepresidente.

En caso de falta temporal y simultánea del Presidente y del Vicepresidente, asumirá las funciones del primero el Presidente de la Asamblea Nacional o quien haga sus veces por ministerio de la ley.

En caso de falta definitiva del Vicepresidente de la República, la Asamblea Nacional nombrará a quien deba sustituirlo en el cargo.

Si faltaren definitivamente el Presidente y el Vicepresidente de la República, asumirá las funciones del primero el Presidente de la Asamblea Nacional o quien haga sus veces. La Asamblea Nacional deberá nombrar a quienes deban sustituirlos, dentro de las primeras

setenta y dos horas de haberse producido las vacantes. Los así nombrados ejercerán sus funciones por el resto del periodo.

Artículo 150. Son atribuciones del Presidente de la República las siguientes:

- 1) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y las leyes.
- 2) Representar a la nación.
- 3) Ejercer la facultad de iniciativa de ley y el derecho al veto, conforme se establece en la presente Constitución.
- 4) Dictar decretos ejecutivos con fuerza de ley en materia de carácter fiscal y administrativo.
- 5) Elaborar el Presupuesto General de la República y promulgarlo una vez que lo apruebe o conozca, según el caso, la Asamblea Nacional.
- 6) Nombrar y remover a los Ministros y Viceministros de Estado, Ministros Delegados de la Presidencia, Presidentes o Directores de entes autónomos y gubernamentales y demás funcionarios cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución y en las leyes.
- 7) Asumir las facultades legislativas que la Asamblea Nacional, durante su periodo de receso, le delegue
- 8) Dirigir las relaciones internacionales de la República, celebrar los tratados, convenios o acuerdos internacionales y nombrar a los jefes de misiones diplomáticas.
- 9) Decretar y poner en vigencia el Estado de Emergencia en los casos previstos por esta Constitución Política y enviar el decreto a la Asamblea Nacional para su ratificación en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días.
- 10) Reglamentar las leyes.
- 11) Otorgar órdenes honoríficas y condecoraciones de carácter nacional.
- 12) Organizar y dirigir el gobierno y presidir las reuniones del gabinete.
- 13) Dirigir la economía del país, determinar la política y el programa económico-social.
- 14) Proponer ternas a la Asamblea Nacional para la elección de los Magistrados del Consejo Supremo Electoral Corte Suprema de Justicia y del Contralor General de la República.
- 15) Dirigir a la Asamblea Nacional personalmente o por medio

del Vicepresidente el informe anual y otros informes y mensajes especiales.

16) La demás que le confieran esta Constitución y las leyes.

Artículo 151. El Presidente de la República determina el número, organización y competencia de los ministerios de Estado, entes autónomos y gubernamentales. Los Ministros, Viceministros y Presidentes o Directores de entes autónomos y gubernamentales gozan de inmunidad.

Artículo 152. Para ser Ministro, Viceministro, Presidente o Director de entes autónomos y gubernamentales se requiere de las siguientes calidades:

- 1) Ser nacional de Nicaragua.
- 2) Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles.
- 3) Haber cumplido veinticinco años de edad.

Artículo 153. Los Ministros, Viceministros, Presidentes o Directores de entes autónomos y gubernamentales son responsables de sus actos, de conformidad con la Constitución y las leyes.

Capítulo IV

De la Contraloría General de la República

Artículo 154. La Contraloría General de la República es el organismo rector del sistema de control de la administración pública y del Área Propiedad del Pueblo.

Artículo 155. Corresponde a la Contraloría General de la República:

- 1) Establecer el sistema de control que de manera preventiva asegure el uso debido de los fondos.
- 2) El control sucesivo sobre la gestión del Presupuesto General de la República.
- 3) El control, examen y evaluación de la gestión administrativa y financiera de los entes públicos, los subvencionados por el Estado y las Empresas públicas o privadas con participación de capital público.

Artículo 156. La Contraloría General de la República gozará de autonomía funcional y administrativa y será dirigida por el Contralor General de la República; éste rendirá informe anual a la Asamblea Nacional y gozará de inmunidad.

Artículo 157. La ley determinará la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República.

Capítulo V

Poder Judicial

Artículo 158. La justicia emana del pueblo y será impartida en su nombre y delegación por el Poder Judicial, integrado por los Tribunales de Justicia que establezca la ley.

Artículo 159. Los Tribunales de Justicia forman un sistema unitario, cuyo órgano superior es la Corte Suprema de Justicia.

El ejercicio de la jurisdicción de los tribunales corresponde al Poder Judicial. Se establece la jurisdicción militar, cuyo ejercicio es regulado por la ley.

Artículo 160. La administración de la justicia garantiza el principio de la legalidad; protege y tutela los derechos humanos mediante la aplicación de la ley en los asuntos o procesos de su competencia.

Artículo 161. Para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se requiere de las siguientes calidades:

- 1) Ser nacional de Nicaragua.
- 2) Ser abogado.
- 3) Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles.
- 4) Haber cumplido veinticinco años de edad.

Artículo 162. El período de los Magistrados será de seis, años y únicamente podrán ser separados de sus cargos por las causas previstas en la ley.

Los Magistrados gozan de inmunidad.

Artículo 163. La Corte Suprema de Justicia se integrará con siete magistrados como mínimo, elegidos por la Asamblea Nacional, de ternas propuestas por el Presidente de la República. Los Magistrados tomarán posesión de su cargo ante la Asamblea Nacional, previa promesa de ley.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia será nombrado por el Presidente de la República, entre los magistrados elegidos por la Asamblea Nacional.

Artículo 164. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

- 1) Organizar y dirigir la administración de justicia.
- 2) Conocer y resolver los recursos ordinarios y extraordinarios que se presenten contra las resoluciones de los Tribunales de Justicia de la República, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley.
- 3) Conocer y resolver los recursos de amparo por violación de los derechos establecidos en la Constitución, de acuerdo con la Ley de Amparo.
- 4) Conocer y resolver los recursos por inconstitucionalidad de la ley, interpuestos de conformidad con la Constitución y la Ley de Amparo.
- 5) Nombrar a los magistrados de los Tribunales de Apelaciones y a los Jueces de los Tribunales de la República, de acuerdo con los procedimientos que señale la ley.
- 6) Dictar su reglamento interno y nombrar al personal de su dependencia.
- 7) Las demás atribuciones que le confieran la Constitución y las leyes,

Artículo 165. Los magistrados y jueces en su actividad judicial son independientes, y sólo deben obediencia a la Constitución y a la ley; se regirán, entre otros, por los principios de igualdad, publicidad y derecho a la defensa. La justicia en Nicaragua es gratuita.

Artículo 166. La administración de justicia se organizará y funcionará con participación popular, que será determinada por las leyes. Los miembros de los Tribunales de Justicia, sean abogados o no, tienen iguales facultades en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Artículo 167. Los fallos y resoluciones de los tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales y jurídicas afectadas.

Capítulo VI Poder Electoral

Artículo 168. Al Poder Electoral corresponde en forma exclusiva la organización, dirección y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos.

Artículo 169. El Poder Electoral está integrado por el Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales subordinados.

Artículo 170. El Consejo Supremo Electoral está integrado por cinco magistrados con sus respectivos suplentes, elegidos por la Asamblea Nacional, de ternas propuestas por el Presidente de la República. La Asamblea Nacional escogerá al Presidente del Consejo Supremo Electoral, de entre los Magistrados electos.

Artículo 171. Para ser magistrado del Consejo Supremo Electoral se requiere de las siguientes calidades:

- 1) Ser nacional de Nicaragua.
- 2) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
- 3) Haber cumplido veinticinco años de edad.

Artículo 172. El Presidente y los demás Magistrados del Consejo Supremo Electoral ejercerán su función durante un período de seis años a partir de su toma de posesión; dentro de este período gozan de inmunidad.

Artículo 173. El Consejo Supremo Electoral tiene las siguientes atribuciones:

- 1) Organizar y dirigir las elecciones, plebiscitos o referendos que se convoquen de acuerdo a lo establecido en la Constitución y en la ley.
- 2) Nombrar a los miembros de los demás organismos electorales, de acuerdo con la Ley Electoral.

- 3) Elaborar el calendario electoral.
- 4) Aplicar las disposiciones constitucionales y legales referentes al proceso electoral.
- 5) Conocer y resolver en última instancia, de las resoluciones que dicten los organismos electorales subordinados y de las reclamaciones e impugnaciones que presenten los partidos políticos.
- 6) Dictar de conformidad con la ley de la materia, las medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de plena garantía.
- 7) Demandar de los organismos correspondientes, condiciones de seguridad para los partidos políticos participantes en las elecciones.
- 8) Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las elecciones, plebiscitos y referendos; y hacer la declaratoria definitiva de los resultados.
- 9) Dictar su propio reglamento.
- 10) Las demás que le confieran la Constitución y las leyes.

Artículo 174. Los Magistrados del Consejo Supremo Electoral, propietarios y suplentes, tomarán posesión de sus cargos ante el Presidente de la Asamblea Nacional previa promesa de ley.

TÍTULO IX

DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA

Capítulo I

De los Municipios

Artículo 175. El territorio nacional se dividirá para su administración en regiones, departamentos y municipios. Las leyes de la materia determinarán la extensión, número, organización, estructura y funcionamiento de las diversas circunscripciones.

Artículo 176. El Municipio es la unidad base de la división política administrativa del país. La ley determinará su número y extensión.

Artículo 177. El gobierno y la administración de los municipios corresponde a las autoridades municipales, las que gozan de autonomía sin detrimento de las facultades del gobierno central.

Los gobiernos municipales serán elegidos por el pueblo, mediante el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto de conformidad con la ley.

Artículo 178. El período de las autoridades municipales será de seis años, a partir de la toma de posesión del cargo ante el Consejo Supremo Electoral.

Artículo 179. El Estado promoverá el desarrollo integral y armónico de las diversas partes del territorio nacional.

Capítulo II

Comunidades de la Costa Atlántica

Artículo 180. Las comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de vivir y desarrollarse bajo las formas de organización social que corresponden a sus tradiciones históricas y culturales.

El Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de sus formas de propiedad comunal y la libre elección de sus autoridades y representantes.

Asimismo, garantiza la preservación de sus culturas y lenguas, religiones y costumbres.

Artículo 181. El Estado organizará por medio de una ley, el régimen de autonomía en las regiones donde habitan las comunidades de la Costa Atlántica para el ejercicio de sus derechos.

TÍTULO X

SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN SU REFORMA Y DE LAS LEYES CONSTITUCIONALES

Capítulo I

De la Constitución Política

Artículo 182. La Constitución Política es la carta fundamental de la República; las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones.

Artículo 183. Ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República.

Artículo 184. Son leyes Constitucionales: La Ley Electoral, La Ley de Emergencia y La Ley de Amparo, que se dicten bajo la vigencia de la Constitución Política de Nicaragua.

Artículo 185. El Presidente de la República podrá suspender, en todo o en parte del territorio nacional, los derechos y garantías consagradas en esta Constitución en caso de guerra o cuando así lo demande la seguridad de la nación, las condiciones económicas o en caso de catástrofe nacional.

El decreto de suspensión pondrá en vigencia el Estado de Emergencia, por tiempo determinado y prorrogable. La Ley de Emergencia regulará sus modalidades. Durante el Estado de Emergencia será facultad del Presidente de la República aprobar el Presupuesto General de la República y enviarlo a la Asamblea Nacional para su conocimiento.

Artículo 186. El Presidente de la República no podrá suspender los derechos y garantías establecidos en artículos 23, 24, 25 numeral 3) , 26 numeral 3) , 29, 33 numeral 2.1) parte final y los numerales y 5) , 34 excepto los numerales 2 y 8) , 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67 primer párrafo, 68 primer párrafo, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 89, 90 y 91.

Capítulo II

Control Constitucional

Artículo 187. Se establece el Recurso por Inconstitucionalidad contra toda ley, decreto o reglamento que se oponga a lo prescrito por la Constitución Política, el cual podrá ser interpuesto por cualquier ciudadano.

Artículo 188. Se establece el Recurso de Amparo en contra de toda disposición, acto o resolución y en general en contra de toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política.

Artículo 189. Se establece el Recurso de Exhibición Personal en favor de aquellos cuya libertad, integridad física y seguridad, sean violadas o estén en peligro de serlo.

Artículo 190. La Ley de Amparo regulará los recursos establecidos en este capítulo.

Capítulo III

Reformas Constitucionales

Artículo 191. La Asamblea Nacional está facultada para reformar parcialmente la presente Constitución Política y para conocer y resolver sobre la iniciativa de reforma total de la misma.

La iniciativa de reforma parcial corresponde al Presidente de la República o a un tercio de los representantes ante la Asamblea Nacional.

La iniciativa de reforma total corresponde a la mitad más uno de los Representantes ante la Asamblea Nacional.

Artículo 192. La iniciativa de reforma parcial deberá señalar el o los artículos que se pretenden reformar con expresión de motivos; deberá ser enviada a una comisión especial que dictaminara en un plazo no mayor de sesenta días. El proyecto de reforma recibirá a continuación el trámite previsto para la formación de la ley. La iniciativa de reforma parcial deberá ser discutida en dos legislaturas.

Artículo 193. La iniciativa de reforma total seguirá los mismos trámites fijados en el artículo anterior, en lo que sea conducente a su presentación y dictamen.

Al aprobarse la iniciativa de reforma total, la Asamblea Nacional fijará un plazo para la convocatoria de elecciones de Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional conservará su mandato hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional Constituyente.

Mientras no se apruebe por la Asamblea Nacional Constituyente la nueva Constitución, seguirá en vigencia la presente Constitución.

Artículo 194. La aprobación de la reforma parcial requerirá del voto favorable del sesenta por ciento de los Representantes. En el caso de aprobación de la iniciativa de reforma total se requerirá los dos tercios

del total de Representantes. El Presidente de la República promulgará la reforma parcial y en este caso no podrá ejercer el derecho al veto.

Artículo 195. La reforma de las leyes constitucionales se realizará de acuerdo al procedimiento establecido para la reforma parcial de la Constitución, con la excepción del requisito de las dos legislaturas.

TÍTULO XI

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Capítulo Único

Artículo 196. La presente Constitución regirá desde su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, y deroga el Estatuto Fundamental de la República, el Estatuto sobre Derechos y Garantías de los Nicaragüenses y cualquier otra disposición legal que se le oponga.

Artículo 197. La presente Constitución será ampliamente divulgada en el idioma oficial del país; de igual manera será divulgada en las lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica.

Artículo 198. El ordenamiento jurídico existente seguirá en vigencia en todo aquello que no se oponga a la presente Constitución, mientras no sea modificado.

Artículo 199. Los Tribunales Especiales seguirán funcionando al entrar en vigencia esta Constitución, mientras no pasen bajo la jurisdicción del Poder judicial. El nombramiento de sus integrantes y sus procedimientos estarán determinados por las leyes que los establecieron.

Asimismo los Tribunales Ordinarios seguirán funcionando en la forma que lo hacen, mientras no se ponga en práctica el principio de colegiación con representación popular. Este principio podrá aplicarse progresivamente en el territorio nacional, de acuerdo con las circunstancias.

Artículo 200. Se conservará la actual división política administrativa del territorio nacional, hasta que se promulgue la ley de la materia.

Artículo 201. El Presidente y el Vicepresidente de la República y los Representantes ante la Asamblea Nacional, elegidos el cuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, ejercerán sus cargos en

el período que termina el diez y el nueve de enero de mil novecientos noventa y uno, respectivamente.

Los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral y las demás autoridades y funcionarios de los diversos poderes continuarán en el ejercicio de sus cargos mientras no tomen posesión quienes deben sustituirlos de acuerdo a la Constitución.

Artículo 202. Los autógrafos de esta Constitución serán firmados en cuatro ejemplares por el Presidente y los Representantes ante la Asamblea Nacional y por el Presidente de la República. Se guardaran en la Presidencia de la Asamblea Nacional, en la Presidencia de la República, en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y en la Presidencia del Consejo Supremo Electoral y cada uno de ellos se tendrá como texto auténtico de la Constitución Política de Nicaragua. El Presidente de la República la hará publicar en “La Gaceta”, Diario Oficial.

Dado en la sala de sesiones de la asamblea nacional, en la ciudad de managua, a los diecinueve días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y seis “a 25 años, todas las armas contra la agresión”.

Firma de la junta directiva de la asamblea nacional y de los diputados cosntituyentes

Carlos Nuñez Tellez **Presidente**
Leticia Herrera **Vicepresidente**
Mauricio Diaz Davila **Vicepresidente**
Rafael Solis Cerda **Secretario**
Domingo Sanchez Salgado **Secretario**
Juan Tijerino Fajardo **Secretario**
Carlos Mejia Godoy
Heriberto Rodriguez Marin
Orlando Pineda Lopez
Ramon Sanabria Centeno
Irela Prado Bernheim
Filemon Hernandez Muñoz
Rosario Altamirano Lopez
Francisco Jarouin Ramirez
Carlos Centeno Garcia

Eligio Palacios Maradiaga
Blas Espinosa Corrales
Eduardo Zapata Altamirano
Victorino Espinales Reyes
Ma. Teresa Delgado Martinez
Julio Guillen Ramos
Juana Santos Rooque Bervis
Alejandro Bravo Serrano
Onofre Guevara Lopez
Jose Luis Villavicencio O.
Jose Maria Ortiz Cerda
Ramiro Lacayo Montealegre
Luis Rocha Urtecho
Humberto Solis Barkera
Auxiliadora Martinez Suarez
Nathan Sevilla Gomez
Sixto Ulloa Doña
Manuel Eugarrfos Velazquez
Danilo Aguirre Solis
Jose Maria Ruiz Collado
Damaso Vargas Loaisiga
Angela Rosa Acevedo Vasquez
Gustavo Adolfo Vega Vargas
Rafael Chavez Alvarez
Bertha Rosa Flores Zambrana
Jacinto Chavez Lacayo
Enrique Sanchez Arana
L.f. Alvaro Gonzalez Flores
Francisco Mena Aguirre
Julio Marengo Caldera
Rogelio Ramirez Mercado
Wilfredo Lopez Palma
Yadira Mendoza Saravia
Alelandro Seoueira H.
Adrian Ramirez Tellez
Serafin Garcia Torres
Miguel Gonzalez Hernandez
Hermogenes Rodriguez B.
Erasmus Montoya Leiva

Alfonso Lopez Lopez
Luis Chavarria Moreira
Jaime O'neil Perez Altamirano
Orlando Rizo Espinoza
Dorotea Wilson Thatum
Benigna Mendiola Seoueira
Hazel Lau Blanco
Ray Hooker Taylor
Gabriel Aguirre Marin
Edwin Illescas Salinas
Ulises Teran Navas
Gustavo Mendoza Hernandez
Rafael Cordova Rivas
Gerardo Alfaro Selva
Blanca Bermudez Corea
Jose R. Quintanilla Ruiz
Jose Daniel Brenes Aguilar
Lucas Urbina Diaz
Rogers C. Arguello Rivas
Eduardo Coronado Perez
Constantino Pereira B.
Santiago Vega Garcia
Julio Melendez Hermida
Macario Estrada Lopez
Carlos Alfonso Garcia
Ramon Larios Ruiz
Luis Humberto Guzman Arias
Antonio Jarquin Rodriguez
Alfredo Rodriguez Salguera
Leoncio Rayo Gonzalez
Allan Zambrana Salmeron
Ariel Bravo Lorio.
Luis Sanchez Sancho

Por Tanto Publíquese Managua, Nueve De Enero De Mil Novecientos Ochenta Y Siete.

Daniel Ortega Saavedra
Presidente de La Republica

2. Ley de Reforma Constitucional, para las elecciones del 25 de febrero de 1990 Aprobada el 30 de enero de 1990 publicada en la Gaceta No. 46 del 6 de marzo de 1990

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

Hace saber al pueblo nicaragüense que:

LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

CONSIDERANDO

I

Que el Presidente de Nicaragua suscribió el 4 de Agosto de 1989, un Acuerdo con dieciocho partidos políticos donde convinieron que las autoridades ejecutivas y legislativas que resulten electas el 25 de Febrero de 1990, tomarán posesión de sus cargos el 25 y 24 de Abril de 1990, respectivamente.

II

Que para el cumplimiento de dicho Acuerdo se hace necesario reformar transitoriamente la Constitución Política de Nicaragua, reforma que se ha realizado en dos legislaturas y en dos debates: El diez de Octubre de 1989 el primero, y el treinta y uno de Enero del corriente año el segundo.

En uso de sus facultades,

HA DICTADO

La siguiente:

REFORMA CONSTITUCIONAL PARA LAS ELECCIONES DEL 25 DE FEBRERO DE 1990, APROBADA EN DOS DEBATES SESIONES ORDINARIAS NÚMERO QUINCE DE 1989 Y UNO DE 1990.

Artículo 1. Se reforma el Art. 201, primer párrafo de la Constitución Política, el que se leerá así:

Los representantes ante la Asamblea Nacional electos el 25 de febrero de 1990, serán instalados por el Consejo Supremo Electoral el 24 de abril de ese mismo año, para finalizar el período de los que fueron elegidos el 4 de Noviembre de 1984 y cumplir su propio período conforme el Arto. 136 Cn.

El Presidente y Vice-Presidente de la República electos el 25 de Febrero de 1990 tomarán posesión de sus cargos prestando la promesa de Ley ante el Presidente de la Asamblea Nacional el 25 de Abril de ese mismo año, para finalizar el período de los que fueron elegidos el 4 de noviembre de 1984 y cumplir su propio período, conforme el Arto. 148 Cn.

Artículo 2. La presente disposición entrará en vigencia desde su publicación en “La Gaceta”, Diario Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los treinta días del mes de enero de mil novecientos noventa, “Año de la Paz y la Reconstrucción”. -**LETICIA HERRERA SÁNCHEZ**, Presidente de la Asamblea Nacional, por la Ley. - **RAFAEL SOLÍS CERDA**, Secretario de la Asamblea Nacional.

Por tanto, publíquese y ejecútese. Managua, treinta y uno de Enero de 1990, “Año de la Paz y la Reconstrucción”. **DANIEL ORTEGA SAAVEDRA**, Presidente de la República.

3. Ley No. 115, Ley de falta temporal del Presidente de la Republica, aprobada: 01/11/90, publicada: 23/11/90 en la Gaceta No. 226.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

Hace saber al pueblo Nicaragüense que:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

En uso de sus facultades

Ha dictado

La siguiente:

LEY DE FALTA TEMPORAL DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Artículo 1. Se produce falta temporal del Presidente de la República cuando saliere del país por un período mayor de treinta días.

También se produce falta temporal en caso de imposibilidad manifiesta del Presidente de la República para ejercer su mandato.

En tales casos asumirá el cargo quien deba sustituirlo de conformidad a lo dispuesto en los Artículos. 145 y 149 de la Constitución Política.

Artículo 2. La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación por cualquier medio de comunicación social, sin perjuicio de su posterior publicación en “La “Gaceta”, Diario Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los veinticinco días del mes de Octubre de mil novecientos noventa.-
Luis Sánchez Sancho, Presidente de la Asamblea Nacional por la Ley.-
Alfredo César Aguirre, Secretario de la Asamblea Nacional.

Por Tanto.- Téngase como Ley de la República.- Publíquese y Ejecútese.- Managua, primero de Noviembre de mil novecientos noventa.- Violeta Barrios de Chamorro, Presidente de la República.

Con fecha dos de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, los Doctores: MAX HERNANDEZ, LEONEL BLANDIN y JOSE BLANDON introdujeron ante la Corte Suprema de Justicia, un Recurso por Inconstitucionalidad contra la denominada Ley No. 173. Este recurso fue resuelto por Auto del cuatro de Mayo de mil novecientos noventa y cinco, razonando en el por cuanto “la Ley No. 173 a que hacen referencia los recurrentes, fue publicada en “El Nuevo Diario” del seis de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, y no en La Gaceta, Diario Oficial, como lo señala el mismo texto de la Ley que en su **Artículo 2** determina que la vigencia de la Ley será a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, hecho que no ha ocurrido según se desprende del mismo recurso. (VER SENTENCIA No. 99 del cinco y SENTENCIA No. 106 del veintiuno de agosto de 1996)

4. Ley N° 173, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua. Aprobada: 30/08/94

El Presidente de la República de Nicaragua
Hace saber al pueblo nicaragüense que:
La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua
En uso de sus facultades;
Ha Dictado
La siguiente:

Artículo 1. Refórmanse los Artos. 192 y 195 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 5 del nueve de Enero de mil novecientos ochenta y siete, los que se leerán así:

Artículo 192.- La iniciativa de reforma parcial deberá señalar el o los títulos, capítulos y artículos, que se pretenden reformar, suprimir o adicionar con expresión de motivos. La iniciativa deberá ser enviada a una comisión especial que dictaminará en un plazo no mayor de sesenta días. El proyecto de reforma recibirá a continuación el trámite previsto para la formación de la ley.

Artículo 195.- La reforma de las Leyes Constitucionales se realizará de acuerdo al procedimiento establecido para la reforma parcial de la Constitución.”

Artículo 2. La presente Ley de Reforma Parcial entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los veintitrés días del mes de Febrero de mil novecientos noventa y cuatro. Luis Humberto Guzmán Áreas, Presidente de la Asamblea Nacional. Francisco Duarte Tapia, Secretario de la Asamblea Nacional.

Por no haber promulgado, ni mandado a publicar el Presidente de la República, la Reforma Parcial a la Constitución Política, aprobada por la Asamblea Nacional el 23 de febrero del año en curso, en acatamiento a lo dispuesto en los Artos. 142 y 192 Cn. en mi carácter de Presidente de la Asamblea Nacional, mando a publicarla. Por tanto: publíquese y ejecútese. Managua, 30 de agosto de mil novecientos noventa y cuatro. Luis Humberto Guzmán Áreas, Presidente de la Asamblea Nacional.

5. Ley No.192, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua. Publicada: 04/07/95 Gaceta N°:124

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

Hace saber al pueblo nicaragüense que:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

CONSIDERANDO

I

Que se hace necesario el perfeccionamiento de un Estado de Derecho en nuestro país para el ejercicio de la plena democracia y la aplicación de la justicia social.

II

Que para avanzar en el proceso de estabilización e institucionalización del país y del sistema político y profundizar nuestro sistema democrático, se hace necesaria la revisión y adecuación del actual ordenamiento jurídico constitucional en correspondencia con la realidad actual.

III

Que en este nuevo contexto, nosotros los representantes ante la Asamblea Nacional profundamente convencidos de esa necesidad, bajo la protección de Dios, procedemos a la reforma parcial de la Constitución Política.

En uso de sus facultades:

HA DICTADO

La siguiente:

LEY DE REFORMA PARCIAL A LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

Artículo 1. Refórmanse los Artos. 1, 2, 4 y 5 del Capítulo Único, Título I “Principios Fundamentales de la Constitución Política”, los que se leerán así:

Artículo 1. La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional, son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo. Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos.

Artículo 2. La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos, decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación. El poder político lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse este poder o representación. También podrá ejercerlo de manera directa por medio del referéndum y del plebiscito, y otros procedimientos que establezcan la presente Constitución y las leyes.

Artículo 4. El Estado promoverá y garantizará los avances de carácter social y político para asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses, protegiéndolos contra toda forma de explotación, discriminación y exclusión.

Artículo 5. Son principios de la nación nicaragüense, la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad de la persona humana, el pluralismo político, social y étnico, el reconocimiento a las distintas formas de propiedad, la libre cooperación internacional y el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos.

El pluralismo político asegura la existencia y participación de todas las organizaciones políticas en los asuntos económicos, políticos y sociales del país, sin restricción ideológica, excepto aquellos

que pretenden el restablecimiento de todo tipo de dictadura o de cualquier sistema antidemocrático.

El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución, y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales, así como mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley. Para las comunidades de la Costa Atlántica se establece el régimen de autonomía en la presente Constitución.

Las diferentes formas de propiedad: pública, privada, asociativa, cooperativa y comunitaria, deberán ser garantizadas y estimuladas sin discriminación para producir riquezas, y todas ellas dentro de su libre funcionamiento deberán cumplir una función social.

Nicaragua fundamenta sus relaciones internacionales en la amistad y solidaridad entre los pueblos y la reciprocidad entre los Estados. Por tanto, se inhibe y proscribe todo tipo de agresión política, militar, económica, cultural y religiosa, y la intervención en los asuntos internos de otros Estados. Reconoce el principio de solución pacífica de las controversias internacionales por los medios que ofrece el derecho internacional y proscribe el uso de armas nucleares y otros medios de destrucción masiva en conflictos internos e internacionales; asegura el asilo para los perseguidos políticos, y rechaza toda subordinación de un Estado respecto a otro.

Nicaragua se adhiere a los principios que conforman el Derecho Internacional Americano reconocido y ratificado soberanamente.

Nicaragua privilegia la integración regional y propugna por la reconstrucción de la gran Patria Centroamericana.

Artículo 2. Refórmense los Artos. 26, 28, 33, 34, 42 y 44, del Capítulo I “Derechos Individuales”, Título IV Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense de la Constitución Política, los que se leerán así:

Artículo 26.- Toda persona tiene derecho:

- 1) A su vida privada y a la de su familia.
- 2) A la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia y sus comunicaciones de todo tipo.
- 3) Al respeto de su honra y reputación.
- 4) A conocer toda información que sobre ella hayan registrado las autoridades estatales, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad tienen esa información.

El domicilio sólo puede ser allanado por orden escrita de juez competente, excepto:

- a) si los que habitaren en una casa manifestaren que allí se está cometiendo un delito o de ella se pidiera auxilio;
- b) si por incendio, inundación u otra causa semejante, se hallare amenazada la vida de los habitantes o de la propiedad;
- c) cuando se denunciare que personas extrañas han sido vistas en una morada, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito;
- d) en caso de persecución actual e inmediata de un delincuente;
- e) para rescatar a la persona que sufra secuestros.

En todos los casos se procederá de acuerdo a la ley.

La Ley fija los casos y procedimientos para el examen de documentos privados, libros contables y sus anexos cuando sea indispensable para esclarecer asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia o por motivos fiscales.

Las cartas, documentos y demás papeles privados substraídos ilegalmente no producen efecto alguno en juicio o fuera de él.

Artículo 28. Los nicaragüenses que se encuentren en el extranjero gozan del amparo y protección del Estado los que se hacen efectivos por medio de sus representaciones diplomáticas y consulares.

Artículo 33. Nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la ley con arreglo a un procedimiento legal. En consecuencia:

1) La detención sólo podrá efectuarse en virtud de mandamiento escrito de juez competente o de las autoridades expresamente facultadas por la ley, salvo el caso de flagrante delito.

2) Todo detenido tiene derecho:

2.1. A ser informado sin demora, en idioma o lengua que comprenda y en forma detallada, de las causas de su detención y de la acusación formulada en su contra; a que se informe de su detención por parte de la policía y el mismo a informar a su familia o a quien estime conveniente; y también a ser tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

2.2. A ser puesto en libertad o a la orden de autoridad competente dentro del plazo de las 48 horas posteriores a su detención.

3) Una vez cumplida la pena impuesta, nadie deberá continuar detenido después de dictarse la orden de excarcelación por la autoridad competente.

4) Toda detención ilegal causa responsabilidad civil y penal en la autoridad que la ordene o ejecute.

5) Los organismos correspondientes procurarán que los procesados y los condenados guarden prisión en centros diferentes.

Artículo 34. Todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a las siguientes garantías mínimas:

1) A que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme la ley.

2) A ser juzgado sin dilaciones por tribunal competente establecido por la ley. No hay fuero atractivo. Nadie puede ser sustraído de su juez competente ni llevado a jurisdicción de excepción.

3) A ser sometido al juicio por jurados en los casos determinados por la ley. Se establece el recurso de revisión.

4) A que se garantice su intervención y defensa desde el inicio del proceso y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa.

5) A que se le nombre defensor de oficio cuando en la primera intervención no hubiera designado defensor; o cuando no fuere habido, previo llamamiento por edicto.

El procesado tiene derecho a comunicarse libre y privadamente con su defensor.

6) A ser asistido gratuitamente por un intérprete si no comprende

o no habla el idioma empleado por el tribunal.

7) A no ser obligado a declarar contra si mismo ni contra su cónyuge o compañero en unión de hecho estable, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni a confesarse culpable.

8) A que se le dicte sentencia dentro de los términos legales, en cada una de las instancias del proceso.

9) A recurrir ante un tribunal superior a fin de que su caso sea revisado cuando hubiese sido condenado por cualquier delito.

10) A no ser procesado nuevamente por el delito por el cual fue condenado o absuelto mediante sentencia firme.

11) A no ser procesado ni condenado por acto u omisión que, al tiempo de cometerse, no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. Se prohíbe dictar leyes proscriptas o aplicar al reo penas o tratos infamantes.

El proceso penal deber ser público. El acceso de la prensa y el público en general podrá ser limitado por consideraciones de moral y orden público.

El ofendido será tenido como parte en los juicios desde el inicio de los mismos y en todas sus instancias.

Artículo 42. En Nicaragua se reconoce y garantiza el derecho de refugio y de asilo. El refugio y el asilo amparan únicamente a los perseguidos por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos.

La ley determinará la condición de asilado o refugiado político, de acuerdo con los convenios internacionales ratificados por Nicaragua. En caso se resolviera la expulsión de un asilado, nunca podrá enviársele al país donde fuese perseguido.

Artículo 44. Se garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción. En virtud de la función social de la propiedad, este derecho está sujeto, por causa de utilidad pública o de interés social, a las limitaciones y obligaciones que en cuanto a su ejercicio le impongan las leyes. Los bienes inmuebles mencionados en el párrafo primero pueden ser

objeto de expropiación de acuerdo a la Ley, previo pago en efectivo de justa indemnización.

Tratándose de la expropiación de latifundios incultivados para fines de reforma agraria la ley determinará la forma, cuantificación, plazos de pagos e intereses que se reconozcan en concepto de indemnización.

Se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos.

Artículo 3. Refórmase el Arto. 51, del Capítulo II “Derechos Políticos”, Título IV “Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense” de la Constitución Política, el que se leerá así:

Artículo. 51. Los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos en elecciones periódicas y optar a cargos públicos, salvo las limitaciones contempladas en esta Constitución Política.

Es deber del ciudadano desempeñar los cargos de jurado y otros de carácter concejil, salvo excusa calificada por la ley.

Artículo 4. Refórmanse los Artos. 56 y 68 del Capítulo III “Derechos Sociales”, Título IV “Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense” de la Constitución Política, los que se leerán así:

Artículo 56. El Estado prestará atención especial en todos sus programas a los discapacitados y los familiares de caídos y víctimas de guerra en general.

Artículo 68. Los medios de comunicación, dentro de su función social, deberán contribuir al desarrollo de la nación.

Los nicaragüenses tienen derecho de acceso a los medios de comunicación social y al ejercicio de aclaración cuando sean afectados en sus derechos y garantías.

El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros o al monopolio económico de algún grupo. La ley regulará esta materia.

La importación de papel, maquinaria y equipo y refacciones para los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos así como la importación, circulación y venta de libros, folletos, revistas, materiales escolares y científicos de enseñanzas, diarios y otras publicaciones periódicas, estarán exentas de toda clase de impuestos municipales, regionales y fiscales.

Los medios de comunicación públicos, corporativos y privados no podrán ser objeto de censura previa. En ningún caso podrán decomisarse, como instrumento o cuerpo del delito, la imprenta o sus accesorios, ni cualquier otro medio o equipo destinado a la difusión del pensamiento.

Artículo 5. Refórmase el Arto. 71 del Capítulo IV “Derechos de la Familia”, Título IV “Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense” de la Constitución Política, el que se leerá así:

Artículo 71. Es derecho de los nicaragüenses constituir una familia. Se garantiza el patrimonio familiar, que es inembargable y exento de toda carga pública. La ley regulará y protegerá estos derechos.

La niñez goza de protección especial y de todos los derechos que su condición requiere, por lo cual tiene plena vigencia la convención internacional de los derechos del niño y la niña.

Artículo 6. Refórmense los Artos. 92, 93, 94, 95, 96 y 97 del Título V, Capítulo Único “Defensa Nacional” de la Constitución Política, los que se leerán así:

Artículo 92. El Ejército de Nicaragua es la institución armada para la defensa de la soberanía, de la independencia y la integridad territorial.

Sólo en casos excepcionales, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá en apoyo a la Policía Nacional ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua cuando la estabilidad de la República estuviera amenazada por grandes desórdenes internos, calamidades o desastres naturales.

Se prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio nacional. Podrá autorizarse el tránsito o estacionamiento

de naves, aeronaves y maquinarias extranjeras militares para fines humanitarios siempre que sean solicitadas por el Gobierno de la República y ratificados por la Asamblea Nacional.

Artículo 93. El Ejército de Nicaragua es una institución nacional, de carácter profesional, apartidista, apolítica, obediente y no deliberante. Los miembros del Ejército deberán recibir capacitación cívica y en materia de derechos humanos.

Los delitos y faltas estrictamente militares, cometidos por miembros del Ejército y la Policía, serán conocidos por los tribunales militares establecidos por ley.

Los delitos y faltas comunes cometidos por los militares y policías serán conocidos por los tribunales comunes. En ningún caso los civiles podrán ser juzgados por tribunales militares.

Artículo 94. Los miembros del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional no podrán desarrollar actividades político-partidistas, ni desempeñar cargo alguno en organizaciones políticas. Tampoco podrán optar a cargos públicos de elección popular si no hubieren renunciado de su calidad de militar o de policía en servicio activo, por lo menos un año antes de las elecciones en las que pretendan participar.

La organización, estructuras, actividades, escalafón, ascensos, jubilaciones y todo lo relativo al desarrollo operacional de estos organismos, se regirán por la ley de la materia.

Artículo 95. El Ejército de Nicaragua se regirá en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia. Estará sometido a la autoridad civil que será ejercida directamente por el Presidente de la República en su carácter de Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, o a través del Ministerio correspondiente.

No pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional ni rangos militares que los establecidos por la ley.

Artículo 96. No habrá servicio militar obligatorio, y se prohíbe toda forma de reclutamiento forzoso para integrar el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional.

Se prohíbe a los organismos del ejército y la policía, y a cualquier otra institución del Estado, ejercer actividades de espionaje político.

Artículo 97. La Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil. Tiene por misión garantizar el orden interno, la seguridad de los ciudadanos, la prevención y persecución del delito y los demás que le señale la ley. La Policía Nacional es profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante. La Policía Nacional se regirá en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia. Estará sometida a la autoridad civil que será ejercida por el Presidente de la República, a través del Ministerio correspondiente.

Dentro de sus funciones la Policía Nacional auxiliará al poder jurisdiccional. La organización interna de la Policía Nacional se fundamenta en la jerarquía y disciplina de sus mandos.

Artículo 7. Refórmanse los Artos. 99, 104 y 105, del Capítulo I “Economía Nacional” del Título VI “Economía Nacional, Reforma Agraria y Finanzas Públicas”, de la Constitución Política, los que se leerán así:

Artículo 99. El Estado, es responsable de promover el desarrollo integral del país y como gestor del bien común, deberá garantizar los intereses y las necesidades particulares, sociales, sectoriales y regionales de la nación. Es responsabilidad del Estado proteger, fomentar y promover las formas de propiedad y de gestión económica y empresarial privada, estatal, cooperativa, asociativa, comunitaria y mixta para garantizar la democracia económica y social.

El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares. Se reconoce el rol protagónico de la iniciativa privada, la cual comprende, en un sentido amplio a grandes, medianas y pequeñas empresas, microempresas, empresas cooperativas, asociativas y otras.

El Banco Central es el ente estatal regulador del sistema monetario. Los bancos estatales y otras instituciones financieras del Estado serán instrumentos financieros de fomento, inversión y desarrollo y diversificarán sus créditos con énfasis en los pequeños y medianos

productores. Le corresponde al Estado garantizar su existencia y funcionamiento de manera irrenunciable.

El Estado garantiza la libertad de empresa y el establecimiento de bancos y otras instituciones financieras, privadas y estatales que se registrarán conforme las leyes de la materia. Las actividades de comercio exterior, seguros y reaseguros estatales y privados serán reguladas por la ley.

Artículo 104. Las empresas que se organicen bajo cualquiera de las formas de propiedad establecidas en esta Constitución, gozan de igualdad ante la ley y las políticas económicas del Estado. La iniciativa económica es libre.

Se garantiza el pleno ejercicio de las actividades económicas sin más limitaciones que, por motivos sociales o de interés nacional, impongan las leyes.

Artículo 105. Es obligación del Estado promover, facilitar y regular la prestación de los servicios públicos básicos de energía, comunicación, agua, transportes, infraestructura vial, puertos y aeropuertos a la población, y derecho inalienable de la misma el acceso a ellos. Las inversiones privadas y sus modalidades y las concesiones de explotación a sujetos privados en estas áreas serán reguladas por la ley en cada caso.

Los servicios de educación, salud y seguridad social, son deberes indeclinables del Estado, que está obligado a prestarlos sin exclusiones, a mejorarlos y ampliarlos. Las instalaciones e infraestructura de dichos servicios propiedad del Estado, no pueden ser enajenado bajo ninguna modalidad.

Se garantiza la gratuidad de la salud para los sectores vulnerables de la población priorizando el cumplimiento de los programas materno infantil. Los servicios estatales de salud y educación deberán ser ampliados y fortalecidos. Se garantiza el derecho de establecer servicios privados en las áreas de salud y educación.

Es deber del Estado garantizar el control de calidad de bienes y servicios y evitar la especulación y el acaparamiento de los bienes básicos de consumo.

Artículo 8. Refórmanse los Artos. 106 y 107 del Capítulo II “Reforma Agraria” del Título VI “Economía Nacional, Reforma Agraria y Finanzas Públicas”, de la Constitución Política, los que se leerán así:

Artículo 106. La Reforma Agraria es instrumento fundamental para la democratización de la propiedad y la justa distribución de la tierra y es un medio que constituye parte esencial para la promoción y estrategia global de la reconstrucción ecológica y el desarrollo económico sostenible del país. La Reforma Agraria tendrá en cuenta la relación tierra-hombre socialmente necesaria; también se garantiza las propiedades a los campesinos beneficiarios de la misma de acuerdo con la ley.

Artículo 107. La Reforma Agraria eliminará el latifundio ocioso y se hará prioritariamente con tierras del Estado. Cuando la expropiación de latifundios ociosos afecte a propietarios privados se hará cumpliendo con lo estipulado en el Artículo 44 de esta Constitución. La Reforma Agraria eliminará cualquier forma de explotación a los campesinos, a las comunidades indígenas del país y promoverá las formas de propiedad compatibles con los objetivos económicos y sociales de la nación, establecidos en esta Constitución. El régimen de propiedad de las tierras de las comunidades indígenas se regulará de acuerdo a la ley de la materia.

Artículo 9. Refórmanse los Artos. 112, 113, 114 del Capítulo III “De las Finanzas Públicas” del Título VI “Economía Nacional, Reforma Agraria y Finanzas Públicas”, de la Constitución Política, los que se leerán así:

Artículo 112. La Ley de Presupuesto General de la República tiene vigencia anual y su objeto es regular los ingresos y egresos ordinarios y extraordinarios de la administración pública. La ley determinará los límites de gastos de los órganos del Estado y deberá mostrar las distintas fuentes y destinos de todos los ingresos y egresos, los que serán concordantes entre sí.

La Asamblea Nacional podrá modificar el Proyecto de Presupuesto enviado por el Presidente de la República pero no se puede crear

ningún gasto extraordinario sino por ley y mediante creación y fijación al mismo tiempo de los recursos para financiarlos. La Ley del Régimen Presupuestario regulará esta materia.

Toda modificación al Presupuesto General de la República que suponga aumento o disminución de los créditos, disminución de los ingresos o transferencias entre distintas instituciones requerirá de la aprobación de la Asamblea Nacional. La Ley Anual del Presupuesto no puede crear tributos.

Artículo 113. Corresponde al Presidente de la República, la formulación del Proyecto de Ley Anual del Presupuesto, el que deberá someter para su discusión y aprobación a la Asamblea Nacional de acuerdo con la ley de la materia.

El Proyecto de Ley Anual de Presupuesto deberá contener, para información de la Asamblea Nacional, los Presupuestos de los entes autónomos y gubernamentales, y de las empresas del Estado.

Artículo 114. Corresponde exclusivamente y de forma indelegable a la Asamblea Nacional la potestad para crear, aprobar, modificar o suprimir tributos. El Sistema Tributario debe de tomar en consideración la distribución de la riquezas y de las rentas.

Se prohíben los tributos o impuestos de carácter confiscatorio.

Estarán exentas del pago de toda clase de impuesto los medicamentos, vacunas y sueros de consumo humano, órtesis y prótesis, lo mismo que los insumos y materia prima necesarios para la elaboración de esos productos de conformidad con la clasificación y procedimientos que se establezcan.

Artículo 10. Refórmense los Artos. 121 y 125 del Título VII, Capítulo Único “Educación y Cultura”, de la Constitución Política, los que se leerán así:

Artículo 121. El acceso a la educación es libre e igual para todos los nicaragüenses. La enseñanza primaria es gratuita y obligatoria en los centros del Estado. La enseñanza secundaria es gratuita en los centros del Estado, sin perjuicio de las contribuciones voluntarias

que puedan hacer los padres de familia. Nadie podrá ser excluido en ninguna forma de un centro estatal por razones económicas. Los pueblos indígenas y las Comunidades étnicas de la Costa Atlántica tienen derecho en su región a la educación intercultural en su lengua materna, de acuerdo a la ley.

Artículo 125. Las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior gozan de autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa, de acuerdo con la Ley.

Estarán exentos de toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, regionales y municipales. Sus bienes y rentas no podrán ser objeto de intervención, expropiación ni embargo, excepto cuando la obligación que se haga valer, tenga su origen en contratos civiles, mercantiles o laborales.

Los profesores, estudiantes y trabajadores administrativos participarán en la gestión universitaria.

Las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior que según la ley deben ser financiados por el Estado, recibirán una aportación anual del 6% del Presupuesto General de la República, la cual se distribuirá de acuerdo con la ley. El Estado podrá otorgar aportaciones adicionales para gastos extraordinarios de dichas universidades y centros de educación técnica superior.

Se garantiza la libertad de cátedra. El Estado promueve y protege la libre creación, investigación y difusión de las ciencias, la tecnología, las artes y las letras, y garantiza y protege la propiedad intelectual.

Artículo 11. Refórmense los Artos. 130 y 131 del Capítulo I “Principios Generales”, del Título VIII “De la Organización del Estado”, de la Constitución Política, los que se leerán así:

Artículo 130. La nación nicaragüense se constituye en un Estado Social de Derecho. Ningún cargo concede a quien lo ejerce más funciones que las que le confieren la Constitución y las leyes.

Todo funcionario del Estado debe rendir cuenta de sus bienes antes de asumir su cargo y después de entregarlo. La ley regula esta materia.

Los funcionarios públicos de cualquier poder del Estado, elegidos directa e indirectamente, los ministros y vice-ministros de Estado, los presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales, y los Embajadores de Nicaragua en el exterior no pueden obtener concesión alguna del Estado. Tampoco podrán actuar como apoderados o gestores de empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en contrataciones de éstas con el Estado. La violación de esta disposición anula las concesiones o ventajas obtenidas y causa la pérdida de la representación y el cargo.

La Asamblea Nacional, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados, deberá autorizar previamente y declarar la privación de la inmunidad. Sin este procedimiento los funcionarios públicos, que conforme la presente Constitución gozan de inmunidad personal, no podrán ser detenidos ni procesados, excepto en causas relativas a los derechos de familia y laborales. Dicha inmunidad es renunciable. La ley regulará la materia.

En los casos de privación de la inmunidad por causas penales contra el Presidente y el Vice-presidente de la República, una vez privados de ella, es competente para procesarlos la Corte Suprema de Justicia en pleno.

En todos los Poderes del Estado y sus dependencias, así como en las instituciones creadas en esta Constitución, no se podrán hacer recaer nombramientos en personas que tengan parentesco cercano con la autoridad que hace el nombramiento y, en su caso, con la persona de donde hubiere emanado esta autoridad. Para los nombramientos de los funcionarios principales regirá la prohibición del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La ley regulará esta materia.

Esta prohibición no comprende el caso de los nombramientos que correspondan al cumplimiento de la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, la de Carrera Docente, de Carrera Judicial, de Carrera del Servicio Exterior y demás leyes similares que se dictaren.

Artículo 131. Los funcionarios de los cuatro Poderes del Estado, elegidos directa o indirectamente, responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones y deben informarle de su trabajo

y actividades oficiales. Deben atender y escuchar sus problemas y procurar resolverlos. La función pública se debe ejercer a favor de los intereses del pueblo.

El Estado, de conformidad con la ley, será responsable patrimonialmente de las lesiones que, como consecuencia de las acciones u omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, sufran los particulares en sus bienes, derechos e intereses, salvo los casos de fuerza mayor. El Estado podrá repetir contra el funcionario o empleado público causante de la lesión. Los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la violación de la Constitución, por falta de probidad administrativa y por cualquier otro delito o falta cometida en el desempeño de sus funciones.

También son responsables ante el Estado de los perjuicios que causaren por abuso, negligencia y omisión en el ejercicio del cargo. Las funciones civiles no podrán ser militarizadas. El servicio civil y la carrera administrativa serán regulados por la ley.

Artículo 12. Refórmanse los Artos. 132, 134, 136, 138, 140, 141 y 142, del Capítulo II “Poder Legislativo”, del Título VIII “De la Organización del Estado”, de la Constitución Política, los que se leerán así:

Artículo 132. El Poder Legislativo lo ejerce la Asamblea Nacional por delegación y mandato del pueblo. La Asamblea Nacional está integrada por noventa diputados con sus respectivos suplentes, elegidos por voto universal, igual, directo, libre y secreto, mediante el sistema de representación proporcional. En carácter nacional, de acuerdo con lo que se establezca en la Ley Electoral, se elegirán 20 diputados y en las circunscripciones departamentales y regiones autónomas 70 Diputados.

Se establece la obligatoriedad de destinar un porcentaje suficiente del Presupuesto General de la República a la Asamblea Nacional.

Artículo 134. Para ser diputado se requiere de las siguientes calidades:

- 1) Ser nacional de Nicaragua.
- 2) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
- 3) Haber cumplido veintiún años de edad.
- 4) Haber residido o trabajado en forma continua en el país los dos años anteriores a la elección, salvo que cumpliera misiones diplomáticas o trabaje en organismos internacionales o realizare estudios en el extranjero. Además, haber nacido o residido en los últimos dos años en el departamento o región autónoma por el cual se pretende salir electo.

No podrán ser candidatos a Diputados propietarios o suplentes:

- 1) Los ministros, vice-ministros de Estado, magistrados del Poder Judicial, del Consejo Supremo Electoral, el Contralor General de la República, el Procurador de los Derechos Humanos y los alcaldes, a menos que hayan renunciado al cargo doce meses antes de la elección.
- 2) Los que hubieran renunciado a la nacionalidad nicaragüense, salvo que la hubiesen recuperado al menos cinco años antes de verificarse la elección.
- 3) Los ministros de cualquier culto religioso, salvo que hubieran renunciado a su ejercicio al menos doce meses antes de la elección.

Artículo 136. Los Diputados ante la Asamblea Nacional serán elegidos para un período de cinco años, que se contará a partir de su instalación, el nueve de enero del año siguiente al de la elección.

Artículo 138. Son atribuciones de la Asamblea Nacional:

- 1) Elaborar y aprobar las leyes y decretos, así como reformar y derogar los existentes.
- 2) La interpretación auténtica de la Ley;
- 3) Conceder amnistía e indulto por su propia iniciativa o por iniciativa del Presidente de la República.

4) Solicitar informes, a los ministros y Vice-ministros de Estado, Presidentes o Directores de entes Autónomos y Gubernamentales. También, podrá requerir su comparecencia personal e interpelación. La comparecencia será obligatoria bajos los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Si como consecuencia de la interpelación, la Asamblea Nacional por mayoría absoluta de sus miembros considera que ha lugar a formación de causa, el funcionario interpelado perderá desde ese momento su inmunidad.

5) Otorgar y cancelar la personalidad jurídica a las asociaciones civiles.

6) Conocer, discutir y aprobar el Proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la República y ser informada periódicamente de su ejercicio conforme al procedimiento establecido en la Constitución y en la Ley.

7) Elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de listas separadas, propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes. El plazo para presentar las listas será de quince días contados a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no hubiere lista presentada por el Presidente de la República, bastarán las propuestas por los diputados de la Asamblea Nacional. Se elegirá a cada Magistrado con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los diputados de la Asamblea Nacional.

8) Elegir a los magistrados, propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral de listas separadas, propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por los Diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes. El plazo para presentar las listas será de quince días contados a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no hubiere lista presentada por el Presidente de la República, bastarán las propuestas por los Diputados de la Asamblea Nacional. Se elegirá a cada Magistrado con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los diputados de la Asamblea Nacional.

9) Elegir al Superintendente y Vice-superintendente General de Bancos y de otras Instituciones Financieras de listas propuestas por el Presidente de la República. Elegir al Contralor y Sub-Contralor General de la República de listas separadas, propuestas por el Presidente de la República y por Diputados de la Asamblea Nacional. El plazo para presentar listas será de quince días contados a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no hubiere listas presentadas por el Presidente de la República, bastarán las propuestas por los Diputados. El Procurador y Sub-Procurador de Derechos Humanos serán electos por la Asamblea Nacional de listas propuestas por los Diputados, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes.

Los candidatos propuestos deberán ser electos con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los Diputados de la Asamblea Nacional. Los candidatos propuestos para los cargos mencionados en los incisos 7, 8 y 9 no deberán tener vínculos de parentesco entre sí, ni con el Presidente de la República, ni con los Diputados proponentes, en el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Además, no deberán ser miembros de las Juntas Directivas Nacionales, Departamentales y Municipales de Partido Políticos y si lo fueren deberán cesar en sus funciones partidarias al ser electos. No podrán ser candidatos a Contralor y Sub-Contralor General de la República quienes al momento de su nombramiento se desempeñaren como Ministros, Viceministros, Presidentes o Directores de Entes Autónomos o Gubernamentales o de bancos estatales, o instituciones financieras del Estado o hubiesen desempeñado estos cargos durante los seis meses anteriores a su designación.

La Asamblea Nacional, a través de Comisiones Especiales, podrá convocar audiencias con los candidatos. Los Candidatos deberán estar debidamente calificados para el cargo y su postulación deberá acompañarse de la documentación que se les solicitare.

10) Conocer, admitir y decidir sobre las faltas definitivas de los diputados ante la Asamblea Nacional. Son causa de falta definitiva, y en consecuencia acarrear la pérdida de la condición de Diputado, las siguientes:

i) Renuncia al cargo.

ii) Fallecimiento.

iii) Condena mediante sentencia firme a pena de privación de libertad o de inhabilitación para ejercer el cargo por delito que merezca pena más que correccional por un término igual o mayor al resto de su período.

iv) Abandono de sus funciones parlamentarias durante sesenta días continuos dentro de una misma legislatura, sin causa justificada ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

v) Contravención a lo dispuesto en el tercer párrafo del Arto. 130 Cn.

vi) Recibir retribución de fondos estatales, regionales o municipales, por cargo o empleo en otros Poderes del Estado o empresas estatales, salvo caso de docencia o del ejercicio de la medicina. Si un diputado aceptare desempeñar cargo en otros Poderes del Estado, solo podrá reincorporarse a la Asamblea Nacional cuando hubiese cesado en el otro cargo.

vii) Incumplimiento de la obligación de declarar sus bienes ante la Contraloría General de la República al momento de la toma de posesión del cargo.

11) Conocer y admitir las renunciaciones y resolver sobre destituciones de los funcionarios mencionados en los numerales 7), 8) y 9) por las causas y procedimientos establecidos en la ley.

12) Aprobar o rechazar los tratados, convenios, pactos, acuerdos y contratos internacionales: de carácter económico, de comercio internacional, de integración regional, de defensa y seguridad, los que aumentan el endeudamiento externo o comprometen el crédito de la nación y los que vinculan el ordenamiento jurídico del Estado.

Dichos instrumentos deberán ser presentados a la Asamblea Nacional en un plazo de quince días a partir de su suscripción, solamente

podrán ser dictaminados y debatidos en lo general y deberán ser aprobados o rechazados en un plazo no mayor de 60 días a partir de su presentación en la Asamblea Nacional. Vencido el plazo se tendrán por aprobados para todos los efectos legales.

13) Aprobar todo lo relativo a los símbolos patrios.

14) Crear órdenes honoríficas y distinciones de carácter nacional.

15) Crear y otorgar sus propias órdenes de carácter nacional.

16) Recibir en sesión solemne al Presidente y al Vicepresidente de la República, para escuchar el informe anual.

17) Elegir su Junta Directiva.

18) Crear comisiones permanentes, especiales y de investigación.

19) Conceder pensiones de gracia y conceder honores a servidores distinguidos de la patria y la humanidad.

20) Determinar la división política y administrativa del territorio nacional.

21) Conocer y hacer recomendaciones sobre las políticas y planes de desarrollo económico y social del país.

22) Llenar las vacantes definitivas del Vice-presidente de la República y del Presidente y del Vice-presidente, cuando éstas se produzcan simultáneamente.

23) Autorizar la salida del territorio nacional al Presidente de la República, cuando su ausencia sea mayor de quince días, y la del Vice-presidente, en caso de ausencia del territorio nacional del Presidente;

24) Recibir de las autoridades judiciales o directamente de los ciudadanos las acusaciones o quejas presentadas en contra de los funcionarios que gozan de inmunidad, para conocer y resolver sobre las mismas;

- 25) Dictar o reformar su Estatuto y Reglamento Interno;
- 26) Autorizar o negar la salida de tropas del territorio nacional;
- 27) Crear, aprobar, modificar o suprimir tributos, y aprobar los planes de arbitrios municipales;
- 28) Aprobar, rechazar o modificar el Decreto del Ejecutivo que declara la Suspensión de Derechos y Garantías constitucionales o el Estado de Emergencia, así como sus prórrogas;
- 29) Recibir anualmente los informes del Contralor General de la República, del Procurador de Derechos Humanos, del Superintendente de Banco y otras Instituciones Financieras y del Presidente del Banco Central, sin perjuicio de otras informaciones que les sean requeridas;
- 30) Nombrar al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. La ley regulará su funcionamiento;
- 31) Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias;
- 32) Las demás que le confieren la Constitución y las leyes.

Artículo 140. Tienen iniciativa de ley:

- 1) Cada uno de los Diputados ante la Asamblea Nacional, quienes además gozan del derecho de iniciativa de Decretos, resoluciones y declaraciones legislativas.
- 2) El Presidente de la República.
- 3) La Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, los Consejos Regionales Autónomos y los Concejos Municipales, en materias propias de su competencia.
- 4) Los ciudadanos. En este caso la iniciativa deberá ser respaldada por un número no menor de cinco mil firmas. Se exceptúan las leyes orgánicas, tributarias o de carácter internacional y las de amnistía y de indultos.

Artículo 141. El quórum para las sesiones de la Asamblea Nacional se constituye con la mitad más uno del total de los Diputados que la integran.

Los Proyectos de Ley, Decretos, resoluciones, acuerdos y declaraciones requerirán, para su aprobación, del voto favorable de la mayoría absoluta de los Diputados presentes, salvo en los casos en que la Constitución exija otra clase de mayoría.

Toda iniciativa de Ley deberá ser presentada con su correspondiente exposición de motivos en Secretaría de la Asamblea Nacional.

Todas las iniciativas de Ley presentadas, una vez leídas ante el Plenario de la Asamblea Nacional, pasarán directamente a Comisión.

En caso de iniciativa urgente del Presidente de la República, la Junta Directiva podrá someterla de inmediato a discusión del Plenario si se hubiera entregado el Proyecto a los Diputados con cuarenta y ocho horas de anticipación.

Los proyectos de Códigos y de leyes extensas, a criterio del Plenario pueden ser considerados y aprobados por Capítulos.

Recibido el dictamen de la comisión dictaminadora, este será leído ante el Plenario y será sometido a debate en lo general; si es aprobado, será sometido a debate en lo particular.

Una vez aprobado el Proyecto de Ley por la Asamblea Nacional será enviado al Presidente de la República para su sanción, promulgación y publicación, salvo aquellos que no requieren tales trámites. No necesitan sanción del Poder Ejecutivo las reformas a la Constitución y las leyes constitucionales ni los Decretos aprobados por la Asamblea Nacional. En el caso que el Presidente de la República no promulgara ni publicara el proyecto de las reformas a la Constitución o a las leyes constitucionales y cuando no sancionare, promulgare ni publicare las demás leyes en un plazo de quince días, el Presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicarla por cualquier medio de comunicación social escrito, entrando en vigencia desde dicha fecha, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario

Oficial, la que deberá hacer mención de la fecha de su publicación en los medios de comunicación social.

Las leyes serán reglamentadas cuando ellas expresamente así lo determinen. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional encomendará la reglamentación de las leyes a la Comisión respectiva para su aprobación en el Plenario, cuando el Presidente de la República no lo hiciere en el plazo establecido.

Las leyes sólo se derogan o se reforman por otras leyes y entrarán en vigencia a partir del día de su publicación en “La Gaceta”, Diario Oficial, excepto cuando ellas mismas establezcan otra modalidad.

Cuando la Asamblea Nacional apruebe reformas sustanciales a las Leyes, podrá ordenar que su texto íntegro con las reformas incorporadas, sea publicado en “La Gaceta”, Diario Oficial, salvo las reformas a los Códigos.

Las iniciativas de Ley presentadas en una legislatura y no sometidas a debate, serán consideradas en la siguiente legislatura. Las que fueren rechazadas, no podrán ser consideradas en la misma legislatura.

Artículo 142. El Presidente de la República podrá vetar total o parcialmente un proyecto de Ley dentro de los quince días siguientes a aquél en que lo haya recibido. Si no ejerciere esta facultad ni sancionara, promulgara y publicara el proyecto, el Presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la Ley en cualquier medio de difusión nacional escrito.

El Presidente de la República en el caso del veto parcial podrá introducir modificaciones o supresiones al articulado de la ley.

Artículo 13. Refórmanse los Artos. 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151 y 152 del Capítulo III “Poder Ejecutivo”, del Título VIII “De la Organización del Estado”, de la Constitución Política, los que se leerán así:

Artículo 144. El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República, quien es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua.

Artículo 145. El Vice-presidente de la República desempeña las funciones que le señale la presente Constitución Política, y las que le delegue el Presidente de la República directamente o a través de la ley.

Asimismo sustituirá en el cargo al Presidente, en casos de falta temporal o definitiva.

Artículo 147. En ningún caso podrán ser elegidos Presidente o Vice-presidente de la República los candidatos que no obtuvieren como mayoría relativa al menos el cuarenta y cinco por ciento de los votos válidos. Si ninguno de los candidatos alcanzare este porcentaje, se realizará una segunda elección entre los que hubiesen obtenido el primero y segundo lugar, y será electo el que obtenga el mayor número de votos.

Para ser Presidente o Vicepresidente de la República se requiere de las siguientes calidades:

- 1) Ser nacional de Nicaragua.
- 2) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
- 3) Haber cumplido veinticinco años de edad.
- 4) Haber residido o trabajado en forma continua en el país los cinco años anteriores a la elección, salvo que cumpliera misión diplomática o estudios en el extranjero.

No podrá ser candidato a Presidente ni Vice-presidente de la República:

- a) El que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiere ejercido por dos períodos presidenciales.
- b) El Vice-presidente de la República o el llamado a reemplazarlo, si hubiere ejercido su cargo o el de Presidente en propiedad durante los doce meses anteriores a la fecha en que se efectúa elección para el período siguiente.

c) Los parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad y los que sean o hayan sido parientes dentro del segundo grado de afinidad, del que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente.

d) Los que encabecen o financien un golpe de Estado, los que alteren el orden constitucional y como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura del Gobierno y ministerios o Vice-ministerios, o magistraturas en otros poderes del Estado.

e) Los ministros de cualquier culto religioso, salvo que hubieren renunciado a su ejercicio al menos doce meses antes de la elección.

f) El Presidente de la Asamblea Nacional, los ministros, vice-ministros de Estado, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, el Contralor y el Subcontralor General de la República, el Procurador y Subprocurador de los Derechos Humanos, y el Concejal que estuviere ejerciendo el cargo de Alcalde, a menos que hayan renunciado al cargo doce meses antes de la elección.

g) Los que hubieren renunciado en alguna oportunidad a la nacionalidad nicaragüense.

Artículo 148. El Presidente y el Vice-presidente de la República electos tomarán posesión de sus cargos ante la Asamblea Nacional, en sesión solemne y prestarán la promesa de ley ante el Presidente de la Asamblea Nacional.

El Presidente y Vice-presidente ejercerán sus funciones por un período de cinco años, que se contará a partir de su toma de posesión el día diez de enero del año siguiente de la elección. Dentro de este período gozarán de inmunidad de conformidad con la ley.

Artículo 149. El Presidente de la República podrá salir del país en ejercicio de su cargo por un período menor de quince días sin ninguna autorización. Para un período mayor de quince días y menor de treinta días requerirá previa autorización de la Asamblea Nacional. En este último caso corresponderá al Vice-presidente de la República el ejercicio de la función de Gobierno de la Presidencia.

También podrá salir del país el Presidente de la República por un tiempo no mayor de tres meses con permiso de la Asamblea Nacional, siempre que deposite el ejercicio de la Presidencia en el Vice-Presidente; pero si la ausencia pasare de tres meses, cualquiera que fuera la causa, perderá el cargo por ese solo hecho, salvo que la Asamblea Nacional considere el caso de fuerza mayor y prorrogue el permiso por un tiempo prudencial

La salida del país del Presidente de la República sin autorización de la Asamblea Nacional por un período en que esta autorización fuera necesaria o por un período mayor que el autorizado se entenderá como abandono de su cargo.

En caso de falta temporal del Presidente de la República, el Vice-presidente no podrá salir sin previa autorización de la Asamblea Nacional. Su salida sin dicha autorización se entenderá como abandono del cargo.

Si el Vice-Presidente de la República estuviera ausente del país, y el Presidente de la República también tuviera que salir del territorio nacional en ejercicio de su cargo, las funciones administrativas las asumirá el Ministro correspondiente según el orden de precedencia legal.

En ningún caso podrá salir del país el Presidente de la República que tuviere causa criminal pendiente que mereciere pena más que correccional.

Son faltas temporales del Presidente de la República:

- 1) Las ausencias temporales del territorio nacional, por más de quince días.
- 2) La imposibilidad o incapacidad temporal manifiesta para ejercer el cargo, declarada por la Asamblea Nacional y aprobada por los dos tercios de los diputados.

Además de las establecidas en el presente artículo, son faltas definitivas del Presidente y Vice-presidente de la República:

a) La muerte.

b) La renuncia, cuando le sea aceptada por la Asamblea Nacional.

a) La incapacidad total permanente declarada por la Asamblea Nacional aprobada por los dos tercios de los diputados.

En caso de falta temporal del Presidente de la República asumirá sus funciones el Vice-presidente.

En caso de imposibilidad o incapacidad temporal y simultánea del Presidente y el Vice-presidente ejercerá interinamente la Presidencia de la República el Presidente de la Asamblea Nacional. Mientras ejerza interinamente la Presidencia de la República, será sustituido en su cargo por el Primer Vice-presidente de la Asamblea Nacional.

Por falta definitiva del Presidente de la República asumirá el cargo, por el resto del período, el Vice-presidente y la Asamblea Nacional deberá elegir un nuevo Vice-presidente.

En caso de falta definitiva del Vice-presidente de la República, la Asamblea Nacional nombrará a quien deba sustituirlo en el cargo.

Si faltaren definitivamente el Presidente y el Vice-presidente de la República, asumirá las funciones del primero el Presidente de la Asamblea Nacional o quien haga sus veces. La Asamblea Nacional deberá nombrar a quienes deban sustituirlo dentro de las primeras setenta y dos horas de haberse producido las vacantes. Los así nombrados ejercerán sus funciones por el resto del período.

En todos los casos mencionados, la Asamblea Nacional elegirá a los sustitutos de entre sus miembros.

Artículo 150. Son atribuciones del Presidente de la República las siguientes:

1) Cumplir la Constitución Política y las Leyes, y hacer que los funcionarios bajo su dependencia también las cumplan.

2) Representar a la nación.

- 3) Ejercer la facultad de iniciativa de ley y el derecho al veto, conforme se establece en la presente Constitución.
- 4) Dictar decretos ejecutivos en materia administrativa.
- 5) Elaborar el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la República y presentarlo a consideración de la Asamblea Nacional para su aprobación, y sancionarlo y publicarlo una vez aprobado.
- 6) Nombrar y remover a los Ministros y Vice-ministros de Estado, presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales, jefes de misiones diplomáticas y demás funcionarios cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución y en las leyes.
- 7) Solicitar al Presidente de la Asamblea Nacional la convocatoria de sesiones extraordinarias, durante el período de receso de la Asamblea para legislar sobre asuntos de urgencia.
- 8) Dirigir las relaciones internacionales de la República. Negociar, celebrar y firmar los tratados, convenios o acuerdos y demás instrumentos que establece el inciso 12) del artículo 138 de la Constitución Política para ser aprobados por la Asamblea Nacional.
- 9) Decretar y poner en vigencia la Suspensión de Derechos y Garantías, en los casos previstos por esta Constitución Política, y enviar el decreto correspondiente a la Asamblea Nacional, en un plazo no mayor de setenta y dos horas, para su aprobación, modificación o rechazo.
- 10) Reglamentar las leyes que lo requieran, en un plazo no mayor de sesenta días.
- 11) Otorgar órdenes honoríficas y condecoraciones de carácter nacional.
- 12) Organizar y dirigir el Gobierno.

13) Dirigir la economía del país, determinando la política y el programa económico social.

Crear un Consejo Nacional de Planificación Económica y Social que le sirva de apoyo para dirigir la política económica y social del país. En el Consejo estarán representadas las organizaciones empresariales, laborales, cooperativas, comunitarias y otras que determine el Presidente de la República.

14) Proponer a la Asamblea Nacional listas de candidatos para la elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral, del Contralor y Sub-Contralor General de la República, y del Superintendente y Vice-superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

15) Presentar a la Asamblea Nacional, personalmente o por medio del Vice-presidente, el informe anual y otros informes y mensajes especiales.

16) Proporcionar a los funcionarios del Poder Judicial el apoyo necesario para hacer efectivas sus providencias sin demora alguna.

17) Las demás que le confieran esta Constitución y las leyes.

Artículo 151. El número organización y competencia de los ministerios de Estado, de los entes autónomos y gubernamentales y de los bancos estatales y demás instituciones financieras del Estado, serán determinados por la ley. Los ministros y Vice-ministros gozan de inmunidad.

Los decretos y providencias del Presidente de la República deben ser refrendados por los Ministros de Estado de las respectivas ramas, salvo aquellos acuerdos que se refieran a nombramiento o remoción de sus ministros o Vice-ministros de Estado.

El Consejo de Ministros será presidido por el Presidente de la República, y, en su defecto, por el Vice-presidente. El Consejo de Ministros estará integrado por el Vice-Presidente de la República y los Ministros de Estado. Sus funciones son determinadas por la Constitución.

Los ministros y Vice-ministros de Estado y los presidentes o directores de entes autónomos o gubernamentales, serán personalmente responsables de los actos que firmaren o autorizaren, y solidariamente de los que suscribieren o acordaren con el Presidente de la República o con los otros ministerios de Estado.

Los Ministros y Vice-Ministros de Estado y los Presidentes o Directores de Entes Autónomos o Gubernamentales proporcionarán a la Asamblea Nacional las informaciones que se les pidan relativas a los negocios de sus respectivas ramas, ya sea en forma escrita o verbal. También pueden ser interpelados por resolución de la Asamblea Nacional.

Artículo 152. Para ser ministro, Vice-ministro, presidente o director de entes autónomos y gubernamentales, y embajadores, se requiere de las siguientes calidades:

- 1) Ser nacional de Nicaragua.
- 2) Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles.
- 3) Haber cumplido veinticinco años de edad.

No podrán ser ministros, Vice-ministros, presidentes o directores de entes autónomos o gubernamentales ni embajadores:

- a) Los militares en servicio activo.
- b) Los que desempeñen simultáneamente otro cargo en alguno de los Poderes del Estado.
- c) Los que hubieren renunciado en alguna oportunidad a la nacionalidad nicaragüense, salvo que la hubiesen recuperado al menos cinco años antes del nombramiento.
- d) Los que hubieren recaudado o administrado fondos públicos o municipales, sin estar finiquitadas sus cuentas.
- e) Los deudores morosos de la Hacienda Pública.

f) Los que estén comprendidos en el sexto párrafo del Arto. 130 de esta Constitución.

Artículo 14. Refórmense los Artos. 154, 155 y 156 del Capítulo IV “De la Contraloría General de la República”, del Título VIII “De la Organización del Estado”, de la Constitución Política, los que se leerán así:

Artículo 154. La Contraloría General de la República es el organismo rector del sistema de control de la administración pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado.

Artículo 155. Corresponde a la Contraloría General de la República:

- 1) Establecer el sistema de control que de manera preventiva asegure el uso debido de los fondos gubernamentales.
- 2) El control sucesivo sobre la gestión del Presupuesto General de la República.
- 3) El control, examen y evaluación de la gestión administrativa y financiera de los entes públicos, los subvencionados por el Estado y las empresas públicas o privadas con participación de capital público.

Artículo 156. La Contraloría General de la República es un organismo independiente sometido solamente al cumplimiento de la constitución y las leyes; gozará de autonomía funcional y administrativa. El Contralor informará de su gestión personalmente a la Asamblea Nacional cada año, o cuando ésta lo solicite.

La Contraloría deberá hacer públicos los resultados de sus investigaciones, y cuando de los mismos se presumieran responsabilidades penales deberá enviar su investigación a los tribunales de Justicia, bajo el apercibimiento de encubridor si no lo hiciera, de los delitos que posteriormente se determinara cometieron los investigados.

El Contralor y el Sub-contralor General de la República serán electos por la Asamblea Nacional de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9) del Artículo 138, para un período de seis años, dentro del cual gozarán de inmunidad.

Artículo 15. Refórmense los Artos. 159, 161, 162, 163 y 164 del Capítulo V “Poder Judicial”, del Título VIII “De la Organización del Estado”, de la Constitución Política, los que se leerán así:

Artículo 159. Los tribunales de justicia forman un sistema unitario cuyo órgano superior es la Corte Suprema de Justicia. El Poder Judicial recibirá no menos del 4% del Presupuesto General de la República. Habrá Tribunales de Apelación, jueces de Distrito, jueces Locales, cuya organización y funcionamiento será determinado por la ley. Se establece la carrera judicial que será regulada por la ley.

Las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponden exclusivamente al Poder Judicial. Los Tribunales militares sólo conocerán las faltas y delitos estrictamente militares, sin perjuicio de las instancias y recursos ante la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 161. Para ser Magistrado de los Tribunales de Justicia se requiere:

1) Ser nacional de Nicaragua y no haber renunciado a la nacionalidad nicaragüense, salvo que la hubieren recuperado por lo menos en los últimos cinco años anteriores a su elección.

2) Ser abogado de moralidad notoria, haber ejercido una judicatura o la profesión por lo menos durante diez años o haber sido Magistrado de los Tribunales de Apelaciones durante cinco años cuando se opte para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

3) Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles.

4) Haber cumplido treinta y cinco años de edad y no ser mayor de setenta y cinco años al día de la elección.

5) No haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía y del notariado por resolución judicial firme.

6) No ser militar en servicio activo, o siéndolo, no haber renunciado por lo menos doce meses antes de la elección.

Artículo 162. El período de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia será de siete años, y el de los magistrados de los Tribunales de Apelaciones, de cinco años. Únicamente podrán ser separados de sus cargos por las causas previstas en la Constitución y la ley. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia gozan de inmunidad.

Artículo 163. La Corte Suprema de Justicia estará integrada por doce magistrados, electos por la Asamblea Nacional.

La Corte Suprema de Justicia se integrará en Salas, que estarán conformadas con un número no menor de tres magistrados cada una: Civil, Penal, de lo Constitucional y de lo Contencioso-Administrativo, cuya organización e integración se acordará entre los mismos magistrados. La Corte Plena conocerá y resolverá los recursos de inconstitucionalidad de la ley, y los conflictos de competencia y constitucionalidad entre los poderes del Estado.

Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia toman posesión de su cargo ante la Asamblea Nacional, previa promesa de ley, y eligen de entre ellos a su Presidente, por mayoría de votos para un período de un año pudiendo ser reelectos.

Artículo 164. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

1) Organizar y dirigir la administración de justicia.

2) Conocer y resolver los recursos ordinarios y extraordinarios que se presenten contra las resoluciones de los Tribunales de Justicia de la República, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley.

3) Conocer y resolver los recursos de amparo por violación de los derechos establecidos en la Constitución, de acuerdo a la Ley de Amparo.

- 4) Conocer y resolver los recursos por inconstitucionalidad de la ley.
- 5) Nombrar a los magistrados de los Tribunales de Apelaciones.
- 6) Resolver sobre las solicitudes de extradición de ciudadanos de otros países y denegar las de los nacionales.
- 7) Nombrar o destituir a los jueces, médicos forenses y registradores públicos de la propiedad inmueble y mercantil de todo el país, de conformidad con la Constitución y la ley.
- 8) Extender autorización para el ejercicio de las profesiones de abogado y notario, lo mismo que suspenderlos y rehabilitarlos de conformidad con la ley.
- 9) Conceder autorización para la ejecución de sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros.
- 10) Conocer y resolver los conflictos administrativos surgidos entre los organismos de la administración pública y entre éstos y los particulares.
- 11) Conocer y resolver los conflictos que surjan entre los municipios o entre estos y los organismos del Gobierno Central.
- 12) Conocer y resolver los conflictos de competencia y constitucionalidad entre los poderes del Estado.
- 13) Conocer y resolver los conflictos de constitucionalidad entre el gobierno Central y los gobiernos municipales y de las regiones autónomas de la Costa Atlántica.
- 14) Dictar su reglamento interno y nombrar al personal de su dependencia.
- 15) Las demás atribuciones que le confieran la Constitución y las leyes.

Artículo 16. Refórmanse los Artos. 170 171 172, y 173 del Capítulo VI “Poder Electoral”, del Título VIII “De la Organización del Estado”, de la Constitución Política, los que se leerán así:

Artículo 170. El Consejo Supremo Electoral estará integrado por cinco magistrados con sus respectivos suplentes, elegidos por la Asamblea Nacional, de conformidad con las disposiciones contenidas en el numeral 8 del Artículo 138.

El Presidente del Consejo Supremo Electoral será electo por la Asamblea Nacional con el sesenta por ciento de los votos de los Diputados y tendrá a su cargo la administración de la institución. El período del Presidente del Consejo Supremo Electoral será el mismo de los magistrados.

Artículo 171. Para ser Magistrado del Consejo Supremo Electoral se requiere:

- 1) Ser nacional de Nicaragua.
- 2) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
- 3) Haber cumplido treinta años de edad y no ser mayor de setenta y cinco años al día de la elección.

No podrán ser magistrados del Consejo Supremo Electoral:

- a) Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los candidatos a Presidente y Vice-presidente de la República.

En el caso de que ya se encontrase electo antes de las elecciones presidenciales, estará implicado, y por tal razón inhibido de ejercer, durante todo el proceso electoral, debiendo incorporar a su suplente.

- b) Los que ejerzan cargos de elección popular o sean candidatos a alguno de ellos.
- c) Los funcionarios o empleados de otro Poder del Estado en cargos retribuidos con fondos fiscales, regionales o municipales, salvo en lo relacionado al ejercicio de la docencia o la medicina.

- d) El militar en servicio activo, o el que ya no siéndolo no hubiere renunciado por lo menos doce meses antes de la elección.
- e) Los que hubieren renunciado en alguna oportunidad a la nacionalidad nicaragüense y no la hubieren recuperado por lo menos cinco años antes de la elección.

Artículo 172. Los magistrados del Consejo Supremo Electoral ejercerán su función durante un período de cinco años a partir de su toma de posesión; dentro de este período gozan de inmunidad.

Artículo 173. El Consejo Supremo Electoral tiene las siguientes atribuciones:

- 1) Organizar y dirigir las elecciones, plebiscitos o referendos que se convoquen de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en la ley.
- 2) Nombrar a los miembros de los demás organismos electorales de acuerdo con la Ley Electoral.
- 3) Elaborar el calendario electoral.
- 4) Aplicar las disposiciones constitucionales y legales referentes al proceso electoral.
- 5) Conocer y resolver en última instancia de las resoluciones que dicten los organismos electorales subordinados y de las reclamaciones e impugnaciones que presenten los partidos políticos.
- 6) Dictar de conformidad con la ley de la materia, las medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de plena garantía.
- 7) Demandar de los organismos correspondientes condiciones de seguridad para los partidos políticos participantes en las elecciones.
- 8) Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las elecciones, plebiscitos, referendos, y hacer la declaratoria definitiva de los resultados.

9) Dictar su propio reglamento.

10) Organizar bajo su dependencia el Registro Central del Estado Civil de las Personas, la cedulación ciudadana y el padrón electoral.

11) Otorgar la personalidad jurídica como partidos políticos a las agrupaciones que cumplan los requisitos establecidos en la ley.

12) Cancelar y suspender la personalidad jurídica de los partidos políticos que no logren al menos la elección de un diputado en las elecciones de autoridades generales y en los otros casos que regula la ley de la materia.

13) Vigilar y resolver los conflictos sobre la legitimidad de los Representantes y directivos de los partidos políticos y sobre el cumplimiento de disposiciones legales que se refieran a los partidos políticos, sus estatutos y reglamentos.

14) Las demás que le confieran la Constitución y las leyes.

De las resoluciones del Consejo Supremo en materia electoral no habrá recurso alguno ordinario ni extraordinario.

Artículo 17. Refórmanse los Artos. 175, 176, 177 y 178 del Capítulo I “De los Municipios”, Título IX “División Político Administrativa” de la Constitución Política, los que se leerán así:

Artículo 175. El territorio nacional se dividirá para su administración, en departamentos, regiones autónomas de la Costa Atlántica y municipios. Las leyes de la materia determinarán su creación, extensión, número, organización, estructura y funcionamiento de las diversas circunscripciones territoriales.

Artículo 176. El Municipio es la unidad base de la división política administrativa del país.

Artículo 177. Los Municipios gozan de autonomía política administrativa y financiera. La administración y gobiernos de los mismos corresponden a las autoridades municipales.

La autonomía no exime ni inhibe al Poder Ejecutivo ni a los demás poderes del Estado, de sus obligaciones y responsabilidades con los municipios. Se establece la obligatoriedad de destinar un porcentaje suficiente del Presupuesto General de la República a los municipios del país, el que se distribuirá priorizando a los municipios con menos capacidad de ingresos. El porcentaje y su distribución serán fijados por la ley.

La autonomía es regulada conforme la Ley de Municipios, que requerirá para su aprobación y reforma de la votación favorable de la mayoría absoluta de Diputados.

Los gobiernos municipales tienen competencia en materia que incida en el desarrollo socio-económico de su circunscripción. En los contratos de explotación racional de los recursos naturales ubicados en el municipio respectivo el Estado solicitará y tomará en cuenta la opinión de los gobiernos municipales antes de autorizarlos.

La Ley de Municipios deberá incluir, entre otros aspectos, las competencias municipales, las relaciones con el Gobierno Central, con los pueblos indígenas de todo el país y con todos los Poderes del Estado, y la coordinación inter-institucional.

Artículo 178. El Alcalde, el Vicealcalde y los concejales serán elegidos por el pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, de conformidad con la ley. Serán electos Alcalde y Vice-alcalde, los candidatos que obtengan la mayoría relativa de los votos. Los Concejales serán electos por representación proporcional de acuerdo con el cociente electoral. El Alcalde y el Vice-alcalde sólo podrán ser reelectos por un período. La reelección del Alcalde y Vice-alcalde no podrá ser para el período inmediato siguiente.

Para ser Alcalde se requiere de las siguientes calidades:

- 1) Ser nacional de Nicaragua.
- 2) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
- 3) Haber cumplido veintiún años de edad.

4) Haber residido o trabajado de forma continua en el país, los dos años anteriores a la elección, salvo que cumpliera misiones diplomáticas o estudio en el extranjero. Además, haber nacido en el municipio por el cual se pretende salir electo, o haber residido en él, los últimos dos años.

El período de las autoridades municipales será de cuatro años, contados a partir de la toma de posesión del cargo ante el Consejo Supremo Electoral.

5) No podrán ser candidatos a Alcalde los ministros y Vice-ministros de Estado a menos que hayan renunciado a sus cargos doce meses antes de la elección.

Los Concejales, el Alcalde y el Vice-alcalde podrán perder su condición por las siguientes causas:

a) Renuncia del cargo.

b) Por muerte.

c) Condena mediante sentencia firme a pena de privación de libertad o de inhabilitación para ejercer el cargo por delito que merezca pena más que correccional por un término igual o mayor al resto de su período.

d) Abandono de sus funciones durante sesenta días continuos.

e) Contravención a lo dispuesto en el tercer párrafo del Arto. 130 Cn.

f) Incumplimiento de la obligación de declarar sus bienes ante la Contraloría General de la República al momento de la toma de posesión del cargo.

g) Haber sido declarado incurso de malos manejos de los fondos de la alcaldía, según resolución de la Contraloría General de la República. En los casos de los incisos d) y e), el Concejo Municipal correspondiente deberá aprobar una resolución declarando que el Alcalde o concejal ha incurrido en la circunstancia que motiva la pérdida de su condición.

Dicha resolución o los documentos públicos o auténticos que acrediten las circunstancias establecidas en los otros numerales, deberá ser remitida al Consejo Supremo Electoral, acompañando el nombre del sustituto que será el Vicealcalde cuando se sustituya al Alcalde o cualquiera de los Concejales electos cuando se sustituya al Vicealcalde, o la solicitud de declaración de propietario, para el de los Concejales.

El Consejo Supremo electoral procederá en un término no menor de quince días a tomar la promesa de ley y darle posesión del cargo.

Las limitaciones de los Concejales para trabajar en la administración municipal, así como el régimen de dietas serán reguladas por la ley.

Artículo 18. Refórmanse el Arto. 181 del Capítulo II “Comunidades de la Costa Atlántica”, Título IX “División Político Administrativa” de la Constitución Política, el que se leerá así:

Artículo 181. El Estado organizará, por medio de una Ley el régimen de autonomía para los pueblos indígenas y las Comunidades étnicas de la Costa Atlántica, la que deberá contener entre otras normas: las atribuciones de su órganos de gobierno, su relación con el Poder Ejecutivo y Legislativo y con los municipios y el ejercicio de sus derechos. Dicha ley, para su aprobación y reforma, requerirá de la mayoría establecida para la reforma a las leyes constitucionales.

Las concesiones y los contratos de explotación racional de los recursos naturales que otorga el Estado en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica deberán contar con la aprobación del Consejo Regional Autónomo correspondiente.

Los miembros de los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica podrán perder su condición por las causas y los procedimientos que establezca la ley.

Artículo 19. Refórmase el Arto. 185 del Capítulo I “De la Constitución Política” Título X “Supremacía de la Constitución, Su Reforma y De las Leyes Constitucionales” de la Constitución Política, el que se leerá así:

Artículo 185. El Presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar, para la totalidad o parte del territorio nacional y por tiempo determinado y prorrogable, la suspensión de Derechos y Garantías, cuando así lo demande la seguridad de la nación, las condiciones económicas o en caso de catástrofe nacional. La Ley de Emergencia regulará sus modalidades.

Artículo 20. Se establecen las siguientes disposiciones finales y transitorias de la presente Reforma Parcial a la Constitución Política de la República:

I) En todos los artículos de la Constitución Política en los que se diga representantes ante la Asamblea Nacional deberá leerse Diputados de la Asamblea Nacional.

II) Quedan vigentes en lo que no se opongan a esta Constitución los decretos creadores y las leyes orgánicas de los ministerios de Estado, entes autónomos y gubernamentales. En un plazo de noventa días después de la entrada en vigencia de la presente reforma parcial a la Constitución, el Presidente de la República deberá remitir a la Asamblea Nacional la ley orgánica que regula la organización, competencias y procedimientos del Poder Ejecutivo.

Una vez aprobada dicha ley, el Presidente de la República, deberá garantizar lo dispuesto a los nombramientos de sus funcionarios, conforme lo dispuesto en esta Constitución.

La Legislación Tributaria continuará vigente con las modificaciones establecidas en las presentes Reformas.

III) Los funcionarios de los Poderes del Estado y de las instituciones reguladas por la Constitución, que tuvieren un período determinado, cumplirán los mismos. Los Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral que están actualmente en posesión de su cargo finalizarán el período para el cual fueron elegidos; los Magistrados de los Tribunales de Apelaciones continuarán en el ejercicio de su cargo por el período de un año a partir de la publicación de la presente Reforma, pudiendo ser reelegidos. Los demás funcionarios del Poder Judicial o Electoral continuarán en el ejercicio de sus funciones y cesarán en sus cargos de conformidad con la ley que rija la materia.

La Asamblea Nacional elegirá los cargos vacantes de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en un plazo máximo de cuarenta y cinco días, después de entrada en vigencia la presente Reforma de conformidad al procedimiento establecida en las mismas.

La Asamblea Nacional elegirá al Contralor y Sub-Contralor General de la República en un plazo máximo de ciento veinte días después de entrada en vigencia la presente Reforma de conformidad al procedimiento establecido en las mismas.

El Super-Intendente y Vice Super-Intendente General de Bancos y otras instituciones financieras del Estado, continuarán en el ejercicio de su cargo hasta finalizar el período para el cual han sido nombrados.

Para las atribuciones establecidas en el Artículo 173, numerales 11), 12) y 13) el Consejo Supremo Electoral, procederá en lo pertinente conforme lo establecido en la Ley Electoral

IV) Los Miembros de los Concejos Municipales electos el veinticinco de febrero de mil novecientos noventa, una vez que finalicen su mandato, continuarán interinamente ejerciendo las funciones administrativas de los gobiernos municipales hasta la toma de posesión de las nuevas autoridades que habrán de sustituirles que tendrá lugar entre el quince y el treinta y uno de Enero de mil novecientos noventa y siete de acuerdo con el calendario elaborado por el Consejo Supremo Electoral.

V) Mientras no se dicte la ley del régimen de autonomía a que se refiere el Artículo 181 de esta Constitución, continuará vigente la Ley No. 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, en lo que no se oponga a la Constitución Política.

VI) El texto de la Constitución Política deberá incorporar las presentes reformas.

Artículo 21. La presente Reforma Parcial a la Constitución Política entrará en vigencia a partir de su publicación por cualquier medio de comunicación social escrito, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial, la que deberá hacer mención de la fecha de publicación en el medio en que haya sido publicada.

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, al primer día del mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco

LUIS HUMBERTO GUZMÁN

**Presidente de la
Asamblea Nacional**

JULIA MENA RIVERA

**Secretaria de la
Asamblea Nacional**

No habiendo cumplido la Presidenta de la República, con la obligación que le señala el arto. 194 de la Constitución Política de promulgar la presente Ley No. 192 de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, de acuerdo a lo dispuesto en los artos. 142 y 192 Cn. y la Ley No. 186 de dieciséis de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, en mi carácter de Presidente de la Asamblea Nacional, mando a publicarla. Por Tanto: Publíquese para su entrada en vigencia. Managua, veintitrés de Febrero de mil novecientos noventa y cinco.

**FUE PUBLICADO EN EL NUEVO DIARIO EL 24 DE FEBRERO
DE 1995**

Por SENTENCIA No. 8, DEL 8 DE MAYO DE 1995, LA CSJ DECLARÓ NULA LA PUBLICACIÓN ANTERIOR. “Se declara sin ningún valor ni efecto legal la publicación de la llamada Ley No. 192 ordenada por el Honorable Señor Presidente de la Asamblea Nacional y aparecida en El Nuevo Diario del día veinticuatro de Febrero del año en curso por el desacato a lo ordenado en resolución de las dos y treinta minutos de la tarde del día diez del mismo mes, por el Tribunal de Apelaciones de Masaya, la que le fue notificada al propio Señor Presidente de la Asamblea, el catorce de Febrero del corriente año”, dando lugar a negociaciones, ratificándose las mismas mediante la aprobación de la Ley No. 199, Ley Marco de Implementación de las Reformas Constitucionales, y la posterior publicación de las Reformas Constitucionales el 4 de julio de 1995 en La Gaceta No. 124 de 1995.

6. Ley No.199. Ley Marco de Implementación de las Reformas Constitucionales. Aprobada: 03/07/95, Publicada: 5/07/95, en la gaceta N° 125.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

Hace saber al pueblo nicaragüense que:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

CONSIDERANDO

I

Que los Poderes Legislativo y Ejecutivo con la presencia de Su Eminencia Reverendísima el Cardenal Miguel Obando y Bravo como Testigo y Garante han logrado alcanzar un Acuerdo Político el pasado 14 de los corrientes y una serie de acuerdos concretos sobre la implementación de varias disposiciones constitucionales reformadas, con el propósito de encontrar soluciones consensuadas a los diferendos existentes en materia institucional.

II

Que por medio de esos acuerdos y compromisos se propiciará un mayor fortalecimiento del proceso de institucionalización y de las relaciones armónicas entre los dos Poderes del Estado tal como lo señala el arto. 129 Cn. en beneficio del pueblo nicaragüense.

III

Que forma parte del Acuerdo Político la necesidad que se apruebe por el Plenario de la Asamblea Nacional una Ley Marco consensuada entre los dos Poderes del Estado que establezca el compromiso institucional sobre la forma de llevar a cabo la implementación de las Reformas a la Constitución.

IV

Que este instrumento de carácter temporal, denominado Ley Marco, es parte y consecuencia del Acuerdo Político y de las negociaciones

entre los dos Poderes. Por lo que no debe ser considerado únicamente desde el punto de vista meramente formal. Ya que desde el momento en que sea aprobada esta Ley Marco en la forma establecida en el Acuerdo Político, su contenido, independientemente de su formalidad, debe entenderse como un compromiso institucional adquirido entre los dos Poderes para cumplir con los fines establecidos en esta misma ley, para lograr la viabilidad de la implementación de las Reformas y para el cumplimiento del Acuerdo Político.

En uso de sus facultades;

HA DICTADO:

La siguiente:

LEY MARCO DE IMPLEMENTACION DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES

TITULO I OBJETO Y ALCANCE DE LA LEY Capítulo Único

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto enmarcar dentro del ordenamiento jurídico, los conceptos y compromisos contenidos en el Acuerdo Político suscrito entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo el catorce de junio del corriente año, para implementar la Reforma Parcial a la Constitución Política en los temas expresamente consignados en ésta ley. La mención de los artículos de la Constitución que se hace en lo sucesivo en la presente ley, debe entenderse que se refiere a los artículos ya reformados según la Ley 192. Todas las leyes a aprobarse establecidas en la presente Ley Marco, y esta misma Ley, se harán mediante el procedimiento establecido en el Arto. 141 de la Constitución y en consenso con el Poder Ejecutivo; con excepción de la Ley de Autonomía de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica.

TITULO II

CONCEPTOS Y REGULACION

Capítulo I

Derechos Individuales y Sociales

Artículo 2. El derecho de las personas a no ser detenidas ni privadas de su libertad arbitrariamente y de ser puestas a la orden de las autoridades competentes conforme lo dispuesto en el Arto. 33 2.2. Cn. será asegurado mediante una Ley de Garantías Ciudadanas que entre otras cosas comprenda lo siguiente:

- a) Las atribuciones de la autoridad competente, en casos de detención;
- b) La autoridad de la Policía como auxiliar del Poder Jurisdiccional; y
- c) Las garantías individuales ciudadanas para que se respeten los derechos al detenido.

Artículo 3. El Estado reconoce, fomenta y garantiza el derecho y la existencia de las distintas formas de propiedad privada: individual, asociativa, cooperativa y comunitaria sobre toda clase de bienes corporales e incorporeales. El Estado protege su inviolabilidad.

Se elaborará una ley sobre la Propiedad, que incluirá entre otros temas el respeto al derecho de propiedad privada y el reconocimiento por parte del Estado de la existencia de la propiedad privada, individual, asociativa, cooperativa y comunitaria sobre toda clase de bienes, corporales e incorporeales.

Artículo 4. En relación al Arto. 68 Cn., párrafo final, se emitirá una reforma a la Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras Sustancias Controladas, en la que se establezca el alcance de las acciones de incautación y decomiso de bienes comprometidos como instrumentos de delito en actividades de narcotráfico y lavado de dinero.

Artículo 5. En relación al Arto. 71 Cn., en materia de patrimonio familiar, se dictará una Ley de Patrimonio Familiar orientada a la protección de las familias más pobres.

Artículo 6. Se dictará una ley de Reforma Agraria que regule especialmente lo siguiente:

- a) Los alcances de la misma;
- b) Determinación de los sujetos beneficiarios; y
- c) La definición de latifundio ocioso, incultivado e improductivo.

Artículo 7. Se considera que una reforma a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior deberá ser consensuada con la Comunidad Universitaria.

Capítulo II

Economía Nacional

Artículo 8. El orden económico se fundamenta en los principios de eficiencia, equidad y justicia social, que posibiliten el mejoramiento del nivel de vida de los nicaragüenses. Para alcanzar un desarrollo económico en forma ordenada, equitativa y sostenible, el Estado se compromete a buscar consistentemente el equilibrio macro económico y la estabilidad interna y externa de la economía nicaragüense; extender los frutos del crecimiento económico a las grandes mayorías y al conjunto del territorio; avanzar significativamente en la generación de empleo y la reducción de la pobreza; lograr una eficiente reinserción del país en la economía internacional y tutelar la preservación del medio ambiente y los recursos naturales.

Para todo ello se dictará una ley de consenso sobre el rol del Estado y los particulares.

Artículo 9. En relación con el Arto. 99 Cn, se dictará una Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, que garantice un marco de eficiencia administrativa y financiera a esas instituciones y que defina el papel de fomento de la Banca Estatal, sin que implique en forma alguna competencia desleal en relación con la banca privada.

Artículo 10. Reformar la Ley de Defensa del Consumidor en aras de contribuir a la economía de los ciudadanos y que establezca los mecanismos necesarios para garantizar el control de calidad de los productos y evitar el acaparamiento y la especulación.

Capítulo III

Materia fiscal y financiera

Artículo 11. La Asamblea Nacional expresa su compromiso de no modificar el techo presupuestario que el Poder Ejecutivo presente en el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la República. Con el fin de garantizar un proceso eficiente y armónico en la aprobación del Presupuesto Nacional se reformará la Ley de Régimen Presupuestario, en el que se incluirán entre otras modificaciones el concepto de ingresos presupuestarios y la definición de ingresos corrientes, ordinarios, extraordinarios e ingresos de capital y financiamiento del déficit, como préstamos y donaciones.

En el caso de la asignación presupuestaria establecida en el Arto. 159 Cn., dicho porcentaje se aplicará gradualmente conforme acuerdo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, haciendo énfasis durante los primeros años en inversión pública y capacitación.

Artículo 12. Las leyes, ya sean de iniciativa del Ejecutivo o del Legislativo, que establezcan, modifiquen o supriman impuestos o modifiquen la base tributaria y las tasas serán consensuadas entre ambos poderes del Estado. La anterior disposición no comprende la modificación de pagos a cuenta y retenciones sobre tributos, de las cuotas o aranceles de derechos por servicios que presta el Estado, multas y recargos administrativos.

Artículo 13. Para garantizar la modernización del sistema tributario, será aprobado con amplia consulta el Código Tributario.

Artículo 14. Las exenciones a que se refiere el Arto. 68 Cn, serán reguladas mediante ley ordinaria.

Capítulo IV

Organización del Estado

Artículo 15. La ley que regule la aplicación de lo dispuesto en el Arto. 130 Cn, párrafo sexto, entrará en vigencia a partir del 8 de Enero de 1997.

Artículo 16. En relación al Arto.145 Cn, párrafo 1, parte final, se dictará una Ley de funciones y atribuciones del Vice-presidente de la República, por iniciativa del Presidente de la República.

Artículo 17. La Asamblea Nacional dictará de conformidad con su Estatuto General y bajo lo dispuesto en el Arto. 1 de esta Ley, el procedimiento para la aprobación posterior por parte de la Asamblea Nacional de los Tratados y Convenios Económicos Internacionales previamente negociados y suscritos por parte del Ejecutivo.

Transitoriamente, mientras se establece el procedimiento a que se refiere esta disposición, la Asamblea aprobará antes de la entrada a receso los instrumentos que remitan con carácter de urgencia el Poder Ejecutivo.

Artículo 18. Se elaborará una ley que regule lo establecido en el Arto. 149 Cn, párrafo 7 inciso 2 y párrafo 8, inciso c, para viabilizar la aplicación de esta disposición.

Artículo 19. En la reforma a la Ley electoral se regulará lo dispuesto por los Artos. 146 y 147 Cn, de que el sistema para las elecciones generales de Presidente y Vice-presidente de la República será a dos vueltas, cuando en la primera vuelta los candidatos no obtuvieren como mayoría relativa al menos el cuarenta y cinco por ciento de los votos válidos.

Artículo 20. Se dictará una Ley Orgánica que regule la Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. El Proyecto de ley será iniciativa del Presidente de la República, respetándose la actual organización y competencia de los Ministerios del Gobierno. Así mismo, se elaborará una Ley que regule la atribución de la Presidencia de la República para hacer cumplir las leyes, y de reglamentarlas.

Artículo 21. Para fines de modernización y reforma de la administración pública y de legislación sobre la regulación de los servicios públicos básicos, se realizarán los cambios que sean necesarios.

Artículo 22. Se procederá a reformar la Ley de Municipios, ampliamente consultada y consensuada con las autoridades municipales del país para fortalecer la autonomía y gestión municipal.

Artículo 23. Se hará una reforma a la Ley de Autonomía para fortalecer la gestión de las regiones autónomas de la Costa Atlántica, mediante amplias consultas y consensuadas con los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica y Consejos Regionales Autónomos.

Artículo 24. La Asamblea Nacional procederá a dictar, mediante ley los procedimientos en relación a los siguientes temas:

a) En relación con el Arto. 138, inciso cuarto, de la Constitución, se establecerá un procedimiento que contribuya a una cooperación eficiente y armónica entre las instituciones del Estado y la Asamblea Nacional.

b) Se establecerá un procedimiento expedito mediante el cual la Asamblea Nacional ejerza la atribución conferida en el Arto. 92 de la Ley de Reforma Constitucional. En relación al párrafo 2 de ese mismo artículo el Presidente consultará con al menos 50% de los ministros.

Artículo 25. Se reformará, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, con el fin de dotarla de mayores y más idóneos instrumentos para la consecución de sus fines.

Artículo. 26. Se elaborará una reforma a la Ley de Emergencia, a fin de adecuarla a las modificaciones establecidas en la Reforma Parcial de la Constitución Política.

Artículo 27. A efectos de los dispuesto en el arto. 138, inciso 3 se elaborará una nueva Ley de Indulto.

Artículo 28. Se elaborará una ley que establezca las causales y procedimientos establecidos en el Arto. 138 inciso 11 Cn.

Artículo 29. Le corresponde a la Asamblea Nacional elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia por la entrada en vigencia de la Ley No. 192, Ley de Reforma Parcial a la Constitución en virtud de la ampliación ordenada por el Arto. 163, párrafo primero de dicha ley. La elección de dichos magistrados se hará de conformidad con el procedimiento fijado por la Ley No. 192. Las vacantes que se produzcan después de esta elección se harán de consenso con el Poder Ejecutivo.

Artículo 30. La elección del Contralor General de la República y del Sub-Contralor se hará en forma concertada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

TÍTULO III

Disposiciones Finales

Artículo 31. La presente Ley Marco tendrá vigencia hasta el primero de enero de mil novecientos noventa y siete y no podrá ser reformada antes de esa fecha, y requerirá para su aprobación por lo menos del 60% del total de los miembros de la Asamblea Nacional.

Artículo 32. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la Ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los tres días del mes de julio de mil novecientos noventa y cinco.

LUIS HUMBERTO GUZMAN
Presidente de la Asamblea Nacional

JULIA MENA
Secretaria de la
Asamblea Nacional

7. Ley N° 330. Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua. Aprobada: 18/01/2000, Publicada: 19/01/2000, Gaceta N° 13

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

Hace saber al pueblo nicaragüense que:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

CONSIDERANDO

I

Que nuestra Constitución Política es el ordenamiento legal superior que organiza los poderes del Estado, consagra los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y recoge los principios fundamentales de la nación nicaragüense.

II

Que el texto Constitucional que nos rige data del año 1987 el cual fue reformado parcialmente en el año 1995, esta reforma parcial avanzó en el proceso de estabilización e institucionalización del sistema político. Para afianzar la gobernabilidad se requiere hacer una adecuación de la Carta Fundamentada en la búsqueda del perfeccionamiento de nuestro sistema democrático.

III

Que esta reforma tiene primordialmente el propósito de fortalecer la propia naturaleza de la nacionalidad nicaragüense, el ejercicio de los derechos políticos, dotar a las instituciones públicas que ella menciona de mayor capacidad funcional y ampliar la composición de sus órganos de dirección, para que las competencias y atribuciones que la propia Constitución y las Leyes le confieren, puedan ser ejercidas con más eficacia para que tengan como resultado una mejor atención a las necesidades y requerimiento de los ciudadanos.

HA DICTADO

La siguiente:

LEY DE REFORMA PARCIAL A LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

Artículo 1. Se reforma el Arto. 10 del Título II. Capítulo Único, “Sobre el Estado”, de la Constitución Política, el que se leerá así:

Artículo 10. El territorio nacional es el comprendido entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico y las Repúblicas de Honduras y Costa Rica. La soberanía, jurisdicción y derechos de Nicaragua se extienden a las islas, cayos y bancos adyacentes, así como a las aguas anteriores, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva y el espacio aéreo correspondiente, de conformidad con la ley y las normas de Derecho Intercontinental.

La República de Nicaragua únicamente reconoce obligaciones sobre su territorio que hayan sido libremente consentidos y de conformidad con la Constitución Política de la República y con las normas de Derecho Internacional. Asimismo, no acepta los tratados suscritos por otros países en los cuales Nicaragua no sea Parte Contratante.”

Artículo 2. Se reforma el Arto.20 del Título III, Capítulo Único “La Nacionalidad Nicaragüense”, de la Constitución Política, el que se leerá así:

“Artículo 20. Ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad”.

Artículo 3. Se reforma el Arto. 130 del Capítulo I “Principios Generales”, y los Artos. 133, 134 y 138, del Capítulo II “Poder legislativo”, del Título VIII, “De la Organización del Estado”, de la Constitución Política, de la manera siguiente:

El párrafo cuarto Artículo 130 se leerá así:

“La Asamblea Nacional mediante resolución aprobada por todos los tercios de votos podrá declarar la privación de inmunidad del Presidente de la República. Respecto a otros funcionarios la resolución será aprobada con el voto favorable de la mayoría de sus miembros. Sin este procedimiento los funcionarios públicos

que conformen la presente Constitución gozan de inmunidad, no podrán ser detenidos, ni procesados excepto en causas relativas los derechos de la familia y laborales. La inmunidad es renunciable. La Ley regulará esta materia”.

El Artículo 133 se leerá así:

“Artículo 133. “También forman parte de la Asamblea Nacional como Diputados, propietario y suplente respectivamente, el ex-presidente de la República y el ex-vicepresidente electos por el voto popular directo en el periodo inmediato anterior; y como diputados, propietarios y suplentes los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República que participaron en la elección correspondiente, y hubiesen obtenido el segundo lugar.”

El Artículo 134 se leerá así:

Artículo 134, para ser diputado se requiere las siguientes calidades:

- a) Ser nacional de Nicaragua. Quienes hayan adquirido otra nacionalidad deberán haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de verificarse la elección.
- b) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
- c) Haber cumplido 21 años de edad.
- d) Haber residido en forma continua en el país los cuatro años anteriores a la elección, salvo que durante dicho periodo cumplieren misiones diplomáticas, o trabajaren en Organismos Internacionales o realizarse estudios en el extranjero. Además, haber nacido o haber residido durante los últimos dos años en el Departamento o Región Autónoma por el cual se pretende salir electo.

2. “No podrán ser candidatos a diputados, propietarios o suplentes:

- a) Los ministros, viceministros de Estado, magistrados del poder judicial, del Consejo Supremo Electoral, los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, el Procurador y Subprocurador General de Justicia, el Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el Fiscal general de la República y el Fiscal General Adjunto de la República y los Alcaldes, a menos que renuncien al cargo doce meses antes de la elección.

b) Los ministros de cualquier culto religioso, salvo que hubiere renunciado a su ejercicio al menos doce meses antes de la elección.”

Se agrega un segundo párrafo al numeral 7) del Artículo 138 que se leerá así:

“Asimismo se elegirán a un número igual de Conjueces con los mismos requisitos y procedimientos con el que se nombran a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.”

Se reforman los párrafos primero y segundo del numeral 9 del Arto. 138, que se leerán así:

“Elegir al Superintendente y Vicesuperintendente General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, de listas propuestas por el Presidente de la República. Elegir al Fiscal General de la República quien estará a cargo del Ministerio Público y al Fiscal General Adjunto de la República de ternas separadas propuestas por el Presidente de la República y por diputados de la Asamblea Nacional los que serán electos por un período de cinco años contados desde su toma de posesión; deberán tener las mismas calidades que se requieren para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y gozarán de inmunidad. Elegir a los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República de listas separadas, propuestas por el Presidente de la República y por Diputados de la Asamblea Nacional.

El plazo para presentar las listas será de quince días contados a partir de la correspondiente convocatoria para su elección. Si no hubiere listas presentadas por el Presidente de la República, bastarán las propuestas por los diputados. Cada candidato debe ser electo con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los miembros de la Asamblea Nacional. Elegir al Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, de listas propuestas por los Diputados, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes; debiendo alcanzar en su elección al menos el voto favorable del sesenta por ciento de los diputados. El Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos gozan de inmunidad.

Los candidatos propuestos para los cargos mencionados en los numerales 7), 8) y el presente, no deberán tener vínculos de parentesco entre sí, ni con el Presidente de la República ni con los diputados proponentes, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Además no deberán ser miembros de las Juntas Directivas Nacionales, Departamentales y Municipales de Partidos Políticos y, si lo fueren, deberán cesar en sus funciones partidarias al ser electos.”

Se reforma el numeral 29 del Arto. 138, que se leerá así:

“29) Recibir anualmente los informes del presidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República o del que el Consejo designe; del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos; del Fiscal General de la República; del Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras y del Presidente del banco Central, sin perjuicio de otras informaciones que les sean requeridas.”

Artículo 4. Se reforman los Artos. 147, 150 y 152 del Capítulo III, “Poder Ejecutivo” del Título VIII “De la Organización del Estado”, de la Constitución Política de la manera siguiente;

El primer párrafo del Arto. 147 se leerá así:

“Para ser elegidos Presidente y Vicepresidente de la República los candidatos a tales cargos deberán obtener como mayoría relativa al menos el cuarenta por ciento de los votos válidos, salvo el caso de aquellos que habiendo obtenido un mínimo del treinta y cinco por ciento de los votos válidos superen a los candidatos que obtuvieren el segundo lugar por una diferencia mínima de un cinco puntos porcentuales. Si ninguno de los candidatos alcanzare el porcentaje para ser electo, se realizará una segunda elección únicamente entre los candidatos que hubiesen obtenido el primero y segundo lugar, y serán electos los que obtengan el mayor número de votos.

En caso de renuncia, falta definitiva o incapacidad permanente de cualquiera de los candidatos a Presidente o del Vicepresidente de la República, durante el proceso electoral el partido político al que pertenecieren designará a quien o quienes deban sustituirlo.”

Los numerales 1 y 4 del mismo Arto. 147 se leerán así:

“1. Ser nacional de Nicaragua. Quien hubiese adquirido otra nacionalidad deberá haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de verificarse la elección.”

“4. Haber residido en forma continua en el país los cuatro años anteriores a la elección, salvo que durante dicho período cumpliera Misión Diplomática, trabajare en Organismos Internacionales o realizare estudios en el extranjero.”

El inciso f) del Artículo 147, se leerá así:

“f) El Presidente de la Asamblea Nacional, los Ministros o Viceministros de Estados, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, el Fiscal general de la República y el Fiscal general Adjunto de la República, el Procurador y Subprocurador General de Justicia, el Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, y los que estuvieren ejerciendo el cargo de alcalde, a menos que hayan renunciado al cargo doce meses antes de la elección.”

Se suprime el inciso g) del Artículo 147

El numeral 14 del Artículo 150, se leerá así:

“14) Proponer a la Asamblea Nacional listas o ternas en su caso, de candidatos para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral, de los miembros del Consejo Superior de la Contraloría general de la república, del Superintendente y Vicesuperintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras del Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto de la República.”

El primer párrafo del Artículo 152, se leerá así:

“Artículo 152. Para ser Ministro, Viceministro, Presidente o Director de entes autónomos y gubernamentales. Embajadores y jefes superiores del ejército y de la policía, se requiere de las siguientes calidades.”

El numeral 1 del Artículo 152, se leerá así:

1) Ser nacional de Nicaragua. Los que hubiesen adquirido otra nacionalidad deberán haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de la fecha de su nombramiento.”

Se agrega el numeral 4 al Artículo 152, el que se leerá así:

“4) Haber residido en forma continua en el país al menos cuatro años anteriores a la fecha de su nombramiento, salvo que durante dicho período cumpliera misión diplomática, trabajare en Organismos Internacionales o realizare estudios en el extranjero.”

Se deroga el inciso c) del Arto. 152.

Artículo 5. Se forman los Artos. 154 y 156 del Capítulo IV “De la Contraloría General de la República”, del Título VIII” “De la Organización del Estado”, de la Constitución Política de la manera siguiente:

“Artículo 154, se leerá así:

“Artículo 154. La Contraloría General de la República es el organismo Rector del sistema de control de la Administración Pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado. Para dirigirla créase el Consejo Superior de la Contraloría General de la República, que estará integrado por cinco miembros propietarios y tres suplentes, electos por la Asamblea Nacional para un período de cinco años, dentro del cual gozarán de inmunidad. Las funciones de los miembros suplentes son para suplir única y exclusivamente las ausencias temporales de los miembros propietarios, quienes la ejercerán por previa escogencia del miembro propietario a quien sustituyan.”.

El primer párrafo, del Artículo 156, se leerá así:

“La Contraloría General de la República es un organismo independiente, sometido solamente al cumplimiento de la Constitución y las leyes; gozará de autonomía funcional y administrativa. La Asamblea Nacional autorizará auditorías sobre su gestión.”

El párrafo tercero del Artículo 156, se leerá así:

“El Presidente y el Vicepresidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República serán elegidos por los miembros del Consejo Superior de entre ellos mismos, por mayoría de votos y por el período de un año, pudiendo ser reelectos. El Presidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República o quien éste designe de entre los miembros del Consejo, informará de la gestión del organismo a la Asamblea Nacional cada año o cuando esta lo solicite, este acto lo realizará personalmente el Presidente o designado”.

Artículo 6. Se reforman los Artos. 161, 162, 163, y 164 del Capítulo V “Poder Judicial”, Título VIII de la “Organización del Estado” de la Constitución Política, de la manera siguiente:

El inciso 1) del Artículo 161, se leerá así:

“1. Ser nacional de Nicaragua. Los que hubiesen adquirido otra nacionalidad deberán haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de la fecha de elección.”

Se agrega el numeral 7 al mismo Arto. 161 el que se leerá así:

“7. Haber residido en forma continuada en el país lo cuatro años anteriores a la fecha de su elección, salvo que durante ese período cumpliera misión diplomática, trabajare en Organismos Internacionales o realizare estudios en el extranjero.”

El Artículo. 162 se leerá así

“Artículo 162. EL período de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el de los Magistrados de los Tribunales de Apelaciones será de cinco años. Únicamente podrán ser separados de sus cargos por las causas previstas en la Constitución y la Ley. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia gozarán de inmunidad.”

El Artículo 163, se leerá así:

“Artículo 163. La Corte Suprema de Justicia estará integrada por dieciséis magistrados electos por la Asamblea Nacional, por un periodo de cinco años.

La Corte Suprema de Justicia se integrará en Salas, cuya organización e integración se acordará entre los mismos magistrados, conforme lo estipula la Ley de la materia. La Corte Plena conocerá y resolverá los recursos de inconstitucionalidad de la Ley y los conflictos de competencia y constitucionalidad entre los poderes del Estado. La Asamblea Nacional nombrará por cada magistrado a un Conjuez. Estos Conjueces serán llamados a integrar Corte Plena o cualquiera de las Salas cuando se produjeran ausencia, excusa, implicancia o recusación de cualquiera de los magistrados.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia toman la posesión de su cargo ante la Asamblea Nacional, previa promesa de ley, y eligen entre ellos a su Presidente y Vicepresidente por mayoría de votos para un período de un año, pudiendo ser reelecto”.

El Artículo 164, inciso 5 se leerá así:

“5. Nombrar y destituir con el voto favorable de las tres cuartas partes de sus miembros a los magistrados de los Tribunales de Apelaciones.”

Artículo 7. Se reforman los Artos. 170, 171 y 173 del Capítulo VI “Poder Electoral” del Título VIII “De la Organización del Estado”, de la Constitución Política, de la manera siguiente:

El Artículo 170, se leerá así:

“Artículo 170. El Consejo Supremo Electoral estará integrado por siete magistrados propietarios y tres suplentes, elegidos por la Asamblea Nacional, de conformidad con las disposiciones contenidas en el numeral 8) del Artículo 138.

Los miembros del Consejo Supremo Electoral elegirán entre ellos al Presidente y Vicepresidente del mismo. Su período será de un año, pudiendo ser reelegido.”

El numeral 1) del Artículo. 171, se leerá así:

“1. Ser nacional de Nicaragua. En el caso de quien hubiere adquirido otra nacionalidad deberá haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de ser electo para el cargo.”

Se agrega el numeral 4, al Artículo que se leerá así:

“4. Haber residido en forma continuada en el país los cuatro años anteriores a su elección, salvo que durante dicho período cumpliera misión diplomática, trabajare en organismos internacionales o realizare estudios en el extranjero.”

Se deroga el inciso e) del Artículo 171.

Se agrega un segundo párrafo al numeral 4, del Artículo 173, que se leerá así:

“Así mismo, velar sobre el cumplimiento de dichas disposiciones por los candidatos que participen en las elecciones generales y municipales. En el caso de las elecciones municipales, para ser electo Alcalde, Vice-alcalde y concejal requiere haber residido o trabajado en forma continua en el país los cuatro años anteriores a la elección, salvo que cumpliera Misiones Diplomáticas o estudio en el Extranjero. Además, se requiere haber residido en forma continuada los últimos dos años en el municipio por el cual se pretende salir electo.”

El numeral 12) del Artículo. 173, se leerá así:

“12) Cancelar la personalidad jurídica a los partidos políticos que no obtengan al menos un cuatro por ciento del total de votos válidos en las elecciones de autoridades generales, y cancelar o suspender las mismas en los otros casos que regula la ley de la materia”.

Disposiciones transitorias y finales

Artículo 8. Se establecen las siguientes disposiciones transitorias y finales de las presentes reformas parciales a la Constitución Política de la República de Nicaragua:

I) Será aplicable el Artículo 20 de las presentes reformas aún a los nicaragüenses que hubiesen renunciado a su nacionalidad o adquirido otra antes de la entrada en vigencia de las mismas.

II) Los actuales doce magistrados continuarán integrando la Corte Suprema de Justicia y terminarán su período en las distintas fecha para las que fueron electos.

La actual Asamblea Nacional elegirá a los cuatro nuevos magistrados para completar los dieciséis a que se refiere el Artículo 163 de estas reformas. La elección la hará en un plazo máximo de sesenta días después de entrada en vigencia la presente reforma constitucional, y tomarán posesión inmediatamente después de ser electos. Para la elección de estos magistrados bastará la presentación de la lista de candidatos por el Presidente de la República y por los diputados de la Asamblea Nacional.

III) En igual plazo y procedimiento se nombrarán los nuevos magistrados propietarios del Consejo Supremo Electoral a que se refiere el Artículo 170 de estas reformas quienes tomarán posesión después de ser electos. El nombramiento de los tres magistrados suplentes a que se refiere el mismo artículo, se hará una vez que los actuales terminen el período para el que fueron electos. El resto de magistrados del Consejo Supremo Electoral se elegirán una vez que los actuales cumplan el período para el que fueron electos.

Los que tomaron posesión el día cuatro de julio de mil novecientos noventa y cinco finalizaran su período el día tres de julio del año dos mil.

En el plazo de treinta días a partir de la elección de los dos nuevos miembros del Consejo Supremo Electoral éste se reorganizará para elegir su Presidente y Vicepresidente.

IV. La actual Asamblea Nacional elegirá a cuatro de los cinco miembros propietarios del Consejo Superior de la Contraloría General de la República a que se refiere el Artículo 154 de la presente reforma dentro de los treinta días posteriores a que estas entren en vigencia. El actual Contralor General de la República será miembro propietario de dicho Consejo hasta finalizar el período para el que fue electo. Igualmente la Asamblea Nacional procederá a elegir a dos de los tres miembros suplentes del Consejo. La actual Subcontraloría de la república ejercerá el cargo de Suplente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, hasta finalizare el período para el que fue electa.

V. Las decisiones del Consejo Superior de la Contraloría General de la República se tomarán con el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. Las disposiciones legales, que hagan referencia a las funciones del Contralor General de la República serán ejercidas por el Consejo Superior de la Contraloría General de la República.

VI. Queda suprimido el primer párrafo del numeral 4) del Artículo 178 de la Constitución Política para armonizar el texto de esa disposición con la reforma del numeral 4) del Artículo 173 de la Constitución Política. Una vez publicada esta Ley, al texto de la Constitución Política se deberá incorporar las presentes reformas.”

Artículo 9. Esta reforma parcial a la Constitución Política entrará en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio de comunicación social, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial y deroga cualquier disposición que se le oponga.

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los dieciocho días del mes de Enero del dos mil.- IVAN ESCOBAR FORNOS, Presidente de la Asamblea Nacional.- PEDRO JOAQUIN RIOS CASTELLON, Secretario de la Asamblea Nacional.

Publíquese y Ejecútese. Managua, dieciocho de enero del año dos mil. ARNOLDO ALEMAN LACAYO, Presidente de la República de Nicaragua.

8. Ley No. 490. Ley que Reforma Parcialmente el artículo 138, inciso 12. Constitucional. Publicado en La Gaceta No. 132 del 7 de julio de 2004. Aprobación en primera legislatura el 19 noviembre de 2003. Aprobación en segunda legislatura el 15 de junio de 2004

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICIARAGUA

Hace saber el pueblo nicaragüense que:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

CONSIDERANDO

I

Que el plazo de sesenta días perentorios, señalado en el inciso 12 del Artículo 138 de la Constitución Política, es muy limitado para estudiar debidamente los instrumentos internacionales que requieren la aprobación del Poder Legislativo.

II

Que la aprobación o ratificación legislativa por omisión prescrita en el párrafo segundo del inciso 12 del Artículo 138 Constitucional, es limitativa a las atribuciones soberanas de la Asamblea Nacional, al establecer un plazo de sesenta días, para que la Asamblea Nacional se pronuncie dentro de dicho plazo, aprobando o rechazado los instrumentos internacionales que someta a su consideración del Poder Ejecutivo, y caso de no hacerlo, “se tendrá por aprobados para todos los efectos legales.

III

Que esta disposición del inciso 12 del Artículo 138 de la Constitución Política debe ser eliminada, para evitar que se pueda convertir en ley nacional un tratado que no ha sido considerado, estudiado, ni sometido a votación para su aprobación por el Poder Legislativo; y que además podría no tener aún una vigencia internacional, en los casos en que el tratado re quiera depósito o intercambio de ratificaciones para su validez, como sucede en la mayoría de los tratados o convenciones multilaterales.

Que es desventajoso para el país en el campo internacional, que un convenio o tratado internacional, pueda considerarse aprobado para todos sus efectos legales, simplemente porque el Poder Legislativo no se haya pronunciado aprobando o rechazando el proyecto de ley en un determinado plazo. Aceptar la prescripción de un plazo, para aprobar los instrumentos internacionales que pasarán a ser leyes nacionales, una vez aprobados por omisión por el mero transcurso de sesenta días, no se compagina con la seriedad y prudencia que debe pautar la aprobación de las leyes que regirán los destinos de Nicaragua.

POR TANTO

En uso de las facultades

HA DICTADO

La siguiente:

LEY QUE REFORMA PARCIALMENTE EL ARTÍCULO 138, INCISO 12 CONSTITUCIONAL

Artículo 1. Refórmase el Artículo 138, inciso 12, párrafo primero de la Constitución Política, el que se leerá así:

“Aprobar o rechazar los instrumentos internacionales celebrados con países u organismos sujetos de Derecho Internacional”.

Artículo 2. Reformase el Artículo 138, inciso 12, párrafo segundo de la Constitución Política, el que se leerá así:

“Dichos instrumentos internacionales solamente podrán ser dictaminados, debatidos, aprobados o rechazados en lo general, sin poder hacerles cambios o agregados a su texto. La aprobación legislativa les conferirá efectos legales, dentro y fuera de Nicaragua una vez que hayan entrado en vigencia internacionalmente, mediante depósito o intercambio de ratificaciones o cumplimiento de los requisitos o plazos, previstos en el texto del tratado o instrumento internacional”.

Artículo 3. La presente Ley, aprobada en las dos legislaturas, entrará en vigor a partir de su publicación en cualquier medio de comunicación escrito, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la Sala de sesiones de la Asamblea Nacional, a los quince días del mes de Junio del dos mil cuatro.- CARLOS NOGUERA PASTORA, Presidente de la Asamblea Nacional. EDUARDO GOMEZ LOPEZ, Secretario por la Ley Asamblea Nacional.

Por tanto: Publíquese y Ejecútese. Managua, uno de julio del año dos mil cuatro. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER, Presidente de la República de Nicaragua.

9. Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de Nicaragua Ley 520

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

Hace saber al pueblo nicaragüense que:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE
NICARAGUA

CONSIDERANDO

I

Que Nicaragua es una República democrática, participativa y representativa. Son órganos de gobierno: El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Electoral.

II

Que los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral son independientes entre sí y se coordinan armónicamente, subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la Constitución.

III

Que la nación nicaragüense se constituye en un Estado Social de Derecho en donde la función pública se debe ejercer a favor de los intereses del pueblo.

IV

El número, organización y competencia de los ministerios de Estado, de los entes autónomos y gubernamentales, y de los bancos estatales y demás instituciones financieras del Estado, serán determinados por la ley.

En uso de sus facultades;

HA DICTADO

La siguiente:

LEY DE REFORMA PARCIAL A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

Artículo 1. Se reforma el numeral 4) del Artículo 138 del Capítulo II “Poder Legislativo”, del Título VIII “De la Organización del Estado”, de la Constitución Política, el cual se leerá así:

“Artículo 138.

4. Solicitar informes a los ministros y viceministros de Estado, Procurador y Subprocurador General de Justicia, presidentes o Directores de entes autónomos y gubernamentales quienes tendrán la obligación ineludible de rendirlos. También podrá requerir su comparecencia personal e interpelación. La comparecencia será obligatoria, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. La no comparecencia injustificada será causal de destitución.

Si considera que ha lugar a formación de causa, esta decisión acarreará la pérdida de la inmunidad, en los casos en que el funcionario aludido gozare de ella.

Si la Asamblea Nacional considera al funcionario no apto para el ejercicio del cargo, con votación calificada del sesenta por ciento de los Diputados lo destituirá, y pondrá en conocimiento al Presidente de la República para que dentro del plazo de tres días haga efectiva esta decisión.

Durante el período de Gobierno 2002-2007, lo indicado en la reforma de este artículo deberá implementarse hasta que se logre el consenso entre los tres principales actores políticos del país: Los dos grupos parlamentarios mayoritarios y el Gobierno de la República, de manera que garantice las relaciones armónicas”.

Artículo 2. Se reforma el numeral 30) del Artículo 138, del Capítulo II “Poder Legislativo”, del Título VIII “De la Organización del Estado”, de la Constitución Política, el que se leerá así:

“Artículo 138. 30) Ratificar en un plazo no mayor de quince días hábiles, con el voto favorable del sesenta por ciento del total de Diputados, el nombramiento hecho por el Presidente de la

República a los ministros y viceministros de Estado, Procurador y Subprocurador General de la República, jefes de misiones diplomáticas, y presidentes o directores de Entes Autónomos y gubernamentales. El nombramiento sólo se considerará firme hasta que la Asamblea Nacional lo ratifique. De no producirse la ratificación el Presidente de la República deberá proceder a un nuevo nombramiento dentro del plazo de treinta hábiles, debiendo someterse el nuevo nombramiento al procedimiento de ratificación ya establecido.

Durante el período de Gobierno 2002-2007, lo indicado en la reforma de este Artículo deberá implementarse hasta que se logre el consenso entre los tres principales actores políticos del país: Los dos grupos Parlamentarios mayoritarios y el Gobierno de la República, de manera que garantice las relaciones armónicas”.

Artículo 3. Se reforma el numeral 9) del Arto 138, del Capítulo II “Poder Legislativo” del Título VIII “De la Organización del Estado”, de la Constitución Política, el que se leerá así:

“Artículo 138. Inciso 9. Elegir con el sesenta por ciento de los votos del total de los Diputados de la Asamblea Nacional, de listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por los Diputados, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes:

a) Al Superintendente y Vice Superintendente General de Bancos y otras Instituciones Financieras; b) al Fiscal General de la República quien estará a cargo del Ministerio Público y al Fiscal General Adjunto de la República, quienes deberán tener las mismas calidades que se requieren para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia; c) a los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República; d) al Procurador y Sub Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos; e) al Superintendente y a los Intendentes de Servicios Públicos; f) al Director y Subdirector del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural. Todos estos funcionarios serán elegidos para un período de cinco años y gozarán de inmunidad.

Los candidatos propuestos para los cargos mencionados en este numeral y en los numerales 7) y 8) no deberán tener vínculos de

parentesco entre sí, ni con el Presidente de la República, ni con los Diputados proponentes, dentro del cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad, ni deberán ser miembros de las Junta Directivas Nacionales, Departamentales o Municipales de Partidos Políticos y si lo fueren, deberán cesar en sus funciones partidarias.

El plazo para presentar las listas de candidatos será de quince días contados a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no hubiere listas presentadas por el Presidente de la República, bastarán las listas propuestas por los diputados.

La Asamblea Nacional a través de Comisiones Especiales podrá convocar a audiencias con los candidatos. Los candidatos deberán estar debidamente calificados para el cargo y su postulación deberá acompañarse de la documentación que se les solicitare.

Durante el período de gobierno 2002-2007, en lo referido a los nombramientos en los incisos e y f, atenderá el consenso de los tres principales actores políticos de país: Los dos grupos Parlamentarios mayoritarios y el Gobierno de la República, de manera que garantice las relaciones armónicas”.

Artículo 4. Se reforma el Artículo 143 de la Constitución Política del Capítulo II “Poder Legislativo”, del Título VIII “De la Organización del Estado”, de la Constitución Política, el que se leerá así:

“Artículo 143. Un proyecto de Ley vetado total o parcialmente por el Presidente de la República deberá regresar a la Asamblea Nacional con expresión de los motivos del veto.

La Asamblea Nacional podrá rechazar el veto total con un número de votos que exceda la mitad del total de diputados, en cuyo caso el Presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la Ley.

Cuando el veto sea parcial, éste deberá contener expresión de motivos de cada uno de los artículos vetados. La Comisión correspondiente deberá dictaminar sobre cada uno de los artículos vetados. La Asamblea Nacional, con un número de votos que exceda la mitad de sus Miembros podrá rechazar el veto de cada Artículo en cuyo caso el Presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la Ley.”

Artículo 5. Se reforma el párrafo 6) del Artículo 150 del Capítulo III “Poder Ejecutivo” del Título VIII “De la Organización del Estado”, de la Constitución Política, el cual se leerá así:

“6) Nombrar y remover a los Ministros y Viceministros de Estado, Procurador y Subprocurador General de la República, directores de ente autónomos y gubernamentales, Jefes de Misiones Diplomáticas, debiendo poner en conocimiento de la Asamblea Nacional, dentro del término de tres días, el nombramiento para su ratificación, el cual se considerará firme hasta que la Asamblea Nacional lo ratifique.

Durante el período de Gobierno 2002-2007, lo indicado en la reforma de este Artículo deberá implementarse hasta que se logre el consenso entre los tres principales actores políticos del país: Los dos grupos Parlamentarios mayoritarios y el Gobierno de la República, de manera que garantice las relaciones armónicas”.

Artículo 6. Se adiciona un segundo párrafo al numeral 6 del Artículo 150, del Capítulo III, “Poder Ejecutivo” del Título VIII “De la Organización del Estado”, de la Constitución Política, el cual se leerá así:

6. Destituir de sus cargos a los funcionarios en los casos que la Asamblea Nacional lo haya decidido en uso de sus atribuciones.

Durante el período de Gobierno 2002-2007, lo indicado en la reforma de este Artículo deberá implementarse hasta que se logre el consenso entre los tres principales actores políticos del país: Los dos grupos Parlamentarios mayoritarios y el Gobierno de la República, de manera que garantice las relaciones armónicas”.

Artículo 7. El texto de la Constitución Política deberá incorporar la presente reforma.

Artículo 8. La presente Reforma Parcial a la Constitución Política de Nicaragua entrará en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio de comunicación social escrito, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial, la que deberá hacer mención de la fecha de publicación en el medio en que haya sido publicada.

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los trece días del mes de enero del año dos mil cinco. RENE NUÑEZ TELLEZ.- Presidente de la Asamblea Nacional.- MARIA AUXILIADORA ALEMAN ZEAS.- Secretaria de la Asamblea Nacional.

Enviados los autógrafos para su promulgación publicación.

10. Ley No. 521. Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de Nicaragua

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

Hace saber al pueblo nicaragüense que:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

CONSIDERANDO

I

Que el Artículo 9 de la Constitución Política de la República de Nicaragua establece como mandato del Estado, privilegiar la Unidad Centroamericana y apoyar y promover todos los esfuerzos para lograr la integración política y económica y la cooperación de América Central.

II

Que el Artículo 140 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, establece a los representantes y funcionarios públicos a quienes el Estado le otorga iniciativa de Ley.

III

Que el Parlamento Centroamericano es el legítimo Órgano de representación Política de los pueblos centroamericanos y por tal razón debe jugar un activo papel en los procesos de armonización legislativa y la creación Jurídica del Sistema de Integración Centroamericana.

IV

Que los Diputados ante el Parlamento Centroamericano son electos de forma universal, directa y secreta por el pueblo nicaragüense y como tal son, al igual que los Diputados ante la Asamblea Nacional, depositarios de la soberanía y voluntad popular.

V

Que el Estado de Nicaragua, por medio de su Constitución Política de la República, no ha otorgado a los Diputados ante el Parlamento Centroamericano, iniciativa de ley de Decreto Legislativo, no obstante siendo representantes electos por la voluntad popular.

VI

Que al otorgarle iniciativa de Ley y de decretos legislativos al Parlamento Centroamericano y a los diputados y diputadas nicaragüenses que lo conforman, se ubican los esfuerzos para el logro de las más altas aspiraciones de la Unión Centroamericana.

VII

Por tanto, la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, considera procedente reformar el Artículo 140 de la Constitución Política.

En uso de sus facultades;

HA DICTADO

La siguiente:

LEY DE REFORMA PARCIAL AL ARTÍCULO 140 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

Artículo 1. Se reforma el Artículo 140, Capítulo II “Poder Legislativo” del Título VIII “De la Organización del Estado” de la Constitución Política de la República de Nicaragua, el cual deberá leerse así:

“Artículo 140. Tienen iniciativa de Ley:

1) Cada uno de los Diputados de la Asamblea Nacional, quienes además gozan del derecho de iniciativa de decretos, resoluciones y declaraciones legislativas.

- 2) El Presidente de la República.
- 3) La Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, los consejos regionales autónomos y los concejos municipales, en materias propias de su competencia.
- 4) Los Diputados ante el Parlamento Centroamericano por el Estado de Nicaragua. En este caso solo tienen iniciativa de Ley y Decretos Legislativos en materia de Integración Regional.
- 5) Los ciudadanos. En este caso la iniciativa deberá ser respaldada por un número no menor de cinco mil firmas. Se exceptúan las leyes orgánicas, tributarias o de carácter internacional y las de amnistías y de indultos”.

Artículo 2. La presente Reforma Parcial a la Constitución Política de Nicaragua entrará en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio de comunicación social escrito, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial, la que deberá hacer mención de la fecha de publicación en el medio en que haya sido publicada.

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los trece días del mes de enero del año dos mil cinco. RENE NUÑEZ TELLEZ Presidente de la Asamblea Nacional.- MARIA AUXILIADORA ALEMAN ZEAS.- Secretaria de la Asamblea Nacional.

Los autógrafos fueron enviados a la Presidencia para su promulgación y publicación. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 28 del 18 de febrero de 2005.

11. Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de Nicaragua. Ley No. 527. Publicada en La Gaceta No. 68 del 8 de abril de 2005.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

Hace saber al pueblo nicaragüense que:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

En uso de sus facultades;

HA DICTADO

La siguiente:

LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA

Artículo 1. Se adiciona al final del párrafo cuarto del Artículo 68 de la Constitución Política, un enunciado el que se leerá así:

“La importación de papel, maquinaria y equipo y refacciones para los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos así como la importación, circulación y venta de libros, folletos, revistas, materiales escolares y científicos de enseñanzas, diarios y otras publicaciones periódicas, estarán exentas de toda clase de impuestos municipales, regionales y fiscales. Las Leyes tributarias regularán la materia.”

Artículo 2. Se suprime del Artículo 93, segundo párrafo la frase “y la policía”, y del párrafo tercero la frase “y policías”; en consecuencia, los párrafos segundo y tercero del Artículo 93 se leerán así:

“Los delitos y faltas estrictamente militares, cometidos por miembros del Ejército serán conocidos por los Tribunales Militares establecidos por Ley.

Los delitos y faltas comunes cometidos por los militares serán conocidos por los Tribunales Comunes.”

Artículo 3. La presente reforma parcial a la Constitución Política entrará en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio de comunicación social escrito, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial, la que deberá hacer mención de la fecha de publicación en el medio en que haya sido publicada.

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los quince días del mes de marzo del año dos mil cinco. **RENE NUÑEZ TELLEZ Presidente de la Asamblea Nacional. MARIA AUXILIADORA ALEMAN ZEAS Secretaria de la Asamblea Nacional.**

Por no haber promulgado ni mandado a publicar el Presidente de la República la presente Ley No. 527, “Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 141 de la Constitución Política, en mi carácter de Presidente de la Asamblea Nacional, mando a publicarla. Por tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, cinco de abril del año dos mil cinco. **RENE NUÑEZ TELLEZ Presidente de la Asamblea Nacional**

12. Ley No. 558. Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de Nicaragua

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

Hace saber al pueblo nicaragüense que:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

CONSIDERANDO:

I

Que el Artículo 129 de la Constitución Política de Nicaragua establece la coordinación armónica entre los poderes del Estado y la subordinación de los mismos a los intereses supremos de la Nación, por lo que están obligados a encontrar y poner en práctica alternativas de solución a la crisis económica, social y política que atraviesa el país.

II

Que el diálogo nacional es la instancia ideal para alcanzar el consenso necesario sobre las medidas que deben adoptarse para contribuir a mejorar las condiciones de vida del pueblo nicaragüense que aspira vivir en paz, armonía y tolerancia para alcanzar el desarrollo integral de la nación.

III

Que motivados por el deseo de brindar a Nicaragua la estabilidad que requiere para alcanzar el desarrollo pleno en todos los ámbitos de la vida nacional, así como contribuir al proceso de institucionalización de la democracia, la Asamblea Nacional a través de los Partidos Políticos representados en ella y el Presidente de la República han alcanzado un Acuerdo Político, en el cual se han comprometido a establecer el mecanismo legal que decida sobre la implementación de la Ley No. 520, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, aprobada por la Asamblea Nacional.

IV

Que de este Acuerdo Político alcanzado entre la Asamblea Nacional a través de los Partidos Políticos representados en ella y el Presidente de la República, del cual son testigos y garantes Su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel Obando Bravo y el Embajador Dante Caputo, enviado personal del Señor Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, se desprende la necesidad de dictar una Ley Marco que permita restaurar la estabilidad y gobernabilidad del país.

En uso de sus facultades;

HA DICTADO

La siguiente:

LEY MARCO PARA LA ESTABILIDAD Y GOBERNABILIDAD DEL PAÍS

Artículo 1. La Ley No. 520, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua; la Ley No. 511, Ley de la Superintendencia de los Servicios Públicos; la Ley No. 512, Ley Creadora del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural; la Ley de Seguridad Social; así como las demás leyes y actos legislativos que se derivan de las mismas, se suspenden en su aplicación hasta el 20 de enero del 2007. Las nuevas autoridades electas en el 2006, Presidente de la República y Asamblea Nacional, tendrán las facultades de aceptar o rechazar estas leyes antes de o hasta la fecha señalada.

Los funcionarios públicos nombrados por la Asamblea Nacional en virtud de actos legislativos derivados de La Ley No. 520, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, y de otras leyes conexas, asumirán sus cargos a partir del 20 de enero de 2007, salvo lo establecido en la parte final del párrafo anterior.

Artículo 2. En el actual período presidencial que concluye el 10 de enero del 2007, continuarán en pleno ejercicio de sus cargos,

las autoridades nombradas de acuerdo a las leyes que regían antes de la Ley No. 520 y las que se derivan de la misma. En el caso del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), el Presidente de la República someterá a la Asamblea Nacional las ternas para los nombramientos establecidos en la Ley No. 271, Ley de Reforma a la Ley Orgánica del INE.

Artículo. 3. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil cinco.

RENE NÚÑEZ TÉLLEZ
Presidente Asamblea
Nacional

MARÍA AUXILIADORA ALEMÁN
Secretaria de la Asamblea
Nacional

13. Ley No. 610. Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de Nicaragua

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

Hace saber al pueblo nicaragüense que:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

En uso de sus facultades;

HA DICTADO

La siguiente:

LEY DE REFORMA A LA LEY No. 558, LEY MARCO PARA LA ESTABILIDAD Y GOBERNABILIDAD DEL PAÍS

Artículo 1. Se reforman los artículos 1 y 2 de la Ley No. 558, Ley Marco para la Estabilidad y Gobernabilidad del País, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 203 del veinte de octubre de dos mil cinco, los que se leerán así:

“Artículo 1. La Ley No. 520, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua; la Ley No. 511, Ley de la Superintendencia de los Servicios Públicos; la Ley No. 512, Ley Creadora del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural; la Ley de Seguridad Social; así como las demás leyes y actos legislativos que se derivan de las mismas, se suspenden en su aplicación hasta el veinte de enero de dos mil ocho. El Presidente de la República y la Asamblea Nacional, tendrán las facultades de aceptar o rechazar estas leyes antes de o hasta la fecha señalada.

Los funcionarios públicos nombrados por la Asamblea Nacional en virtud de actos legislativos derivados de la Ley No. 520, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, y de otras leyes conexas, asumirán sus cargos a partir del veinte de enero de dos mil ocho, salvo lo establecido en la parte final del párrafo anterior.”

“Artículo 2. Continuarán en pleno ejercicio de sus cargos, las autoridades nombradas por esta Asamblea Nacional en el Instituto Nicaragüense de Energía (INE).”

Artículo 2. Se adiciona un Artículo a la Ley No. 558, Ley Marco para la Estabilidad y Gobernabilidad del País, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 203 del veinte de Octubre de dos mil cinco, el que se leerá así:

“Artículo 3. Siendo que la presente Ley, nace de un acuerdo político o consenso que tiene como uno de sus objetivos, permitir la ampliación de las Reformas Constitucionales, a fin de impulsar la profundización de la institucionalidad democrática del país y el fortalecimiento del Estado de Derecho, y para darle cumplimiento a esa voluntad se crea una Comisión Especial integrada por miembros de las distintas bancadas de la Asamblea Nacional, en base a Resolución de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional en su próxima sesión, la que procederá a elaborar, sustentada en una amplia consulta, un anteproyecto de Reformas Constitucionales, que permita la adecuación de la actual Constitución al desarrollo democrático del país”.

Artículo 3. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio de comunicación social, sin perjuicio a su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil siete.

ING. RENE NÚÑEZ TÉLLEZ
Presidente de la Asamblea
Nacional

DR. WILFREDO NAVARRO
Secretario de la Asamblea
Nacional

14. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, CON REFORMAS INCLUIDAS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

Hace saber al pueblo de Nicaragua que la Asamblea Nacional Constituyente ha consultado con el pueblo, discutido y aprobado la siguiente:

CONSTITUCION POLITICA

PREÁMBULO

NOSOTROS

Representantes del Pueblo de Nicaragua, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente.

Evocando

La lucha de nuestros antepasados indígenas.

El espíritu de unidad centroamericana y la tradición combativa de nuestro Pueblo que, inspirado en el ejemplo del General JOSE DOLORES ESTRADA, ANDRES CASTRO Y ENMANUEL MONGALO, derrotó al dominio filibustero y la intervención norteamericana en la Guerra Nacional.

La gesta antintervencionista de BENJAMIN ZELEDON.

Al General de Hombres Libres, AUGUSTO C. SANDINO, Padre de la Revolución Popular y Antimperialista.

La acción heroica de RIGOBERTO LÓPEZ PÉREZ, iniciador del principio del fin de la dictadura.

El ejemplo de CARLOS FONSECA, el más alto continuador de la herencia de Sandino, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y Jefe de la Revolución.

A todas las generaciones de Héroes y Mártires que forjaron y desarrollaron la lucha de liberación por la independencia nacional.

En Nombre

Del pueblo nicaragüense; de todos los partidos y organizaciones democráticas, patrióticas y revolucionarias de Nicaragua; de sus hombres y mujeres; de sus obreros y campesinos; de su gloriosa juventud; de sus heroicas madres; de los cristianos que desde su fe en DIOS se han comprometido e insertado en la lucha por la liberación de los oprimidos; de sus intelectuales patrióticos; y de todos los que con su trabajo productivo contribuyen a la defensa de la Patria.

De los que luchan y ofrendan sus vidas frente a la agresión imperialista para garantizar la felicidad de las nuevas generaciones.

Por la institucionalización de las conquistas de la Revolución y la construcción de una nueva sociedad que elimine toda clase de explotación y logre la igualdad económica, política y social de los nicaragüenses y el respeto absoluto de los derechos humanos.

POR LA PATRIA, POR LA REVOLUCION,
POR LA UNIDAD DE LA NACION Y POR LA PAZ

Promulgamos la siguiente:

CONSTITUCION POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

TÍTULO I PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Capítulo Único

Artículo 1. La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional, son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo. Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos.

Artículo 2. La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos, decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación. El poder político lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse este poder o representación. También podrá ejercerlo de manera directa por medio del referéndum y del plebiscito y otros procedimientos que establezcan la presente Constitución y las leyes.

Artículo 3. La lucha por la paz y por el establecimiento de un orden internacional justo, son compromisos irrenunciables de la nación nicaragüense. Por ello nos oponemos a todas las formas de dominación y explotación colonialista e imperialista y somos solidarios con todos los pueblos que luchan contra la opresión y la discriminación.

Artículo 4. El Estado promoverá y garantizará los avances de carácter social y político para asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses, protegiéndolos contra toda forma de explotación, discriminación y exclusión.

Artículo 5. Son principios de la nación nicaragüense: la libertad; la justicia; el respeto a la dignidad de la persona humana; el pluralismo político, social y étnico; el reconocimiento a las distintas formas de propiedad; la libre cooperación internacional; y el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos.

El pluralismo político asegura la existencia y participación de todas las organizaciones políticas en los asuntos económicos, políticos y sociales del país, sin restricción ideológica, excepto aquellos que pretenden el restablecimiento de todo tipo de dictadura o de cualquier sistema antidemocrático.

El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos

locales; así como mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley. Para las comunidades de la Costa Atlántica se establece el régimen de autonomía en la presente Constitución.

Las diferentes formas de propiedad pública, privada, asociativa, cooperativa y comunitaria deberán ser garantizadas y estimuladas sin discriminación para producir riquezas, y todas ellas dentro de su libre funcionamiento deberán cumplir una función social.

Nicaragua fundamenta sus relaciones internacionales en la amistad y solidaridad entre los pueblos y la reciprocidad entre los Estados. Por tanto, se inhibe y proscribire todo tipo de agresión política, militar, económica, cultural y religiosa, y la intervención en los asuntos internos de otros Estados. Reconoce el principio de solución pacífica de las controversias internacionales por los medios que ofrece el derecho internacional, y proscribire el uso de armas nucleares y otros medios de destrucción masiva en conflictos internos e internacionales; asegura el asilo para los perseguidos políticos, y rechaza toda subordinación de un Estado respecto a otro.

Nicaragua se adhiere a los principios que conforman el Derecho Internacional Americano reconocido y ratificado soberanamente.

Nicaragua privilegia la integración regional y propugna por la reconstrucción de la Gran Patria Centroamericana.

TITULO II

SOBRE EL ESTADO

Capítulo Único

Artículo 6. Nicaragua es un Estado independiente, libre, soberano, unitario e indivisible.

Artículo 7. Nicaragua es una República democrática, participativa y representativa. Son órganos de gobierno: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Electoral.

Artículo 8. El pueblo de Nicaragua es de naturaleza multiétnica y parte integrante de la nación centroamericana.

Artículo 9. Nicaragua defiende firmemente la unidad centroamericana, apoya y promueve todos los esfuerzos para lograr la integración política y económica y la cooperación en América Central, así como los esfuerzos por establecer y preservar la paz en la región.

Nicaragua aspira a la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe, inspirada en los ideales unitarios de Bolívar y Sandino. En consecuencia, participará con los demás países centroamericanos y latinoamericanos en la creación o elección de los organismos necesarios para tales fines.

Este principio se regulará por la legislación y los tratados respectivos.

Artículo 10. El territorio nacional es el comprendido entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico y las Repúblicas de Honduras y Costa Rica. La soberanía, jurisdicción y derechos de Nicaragua se extienden a las islas, cayos y bancos adyacentes, así como a las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva y el espacio aéreo correspondiente, de conformidad con la ley y las normas de Derecho Internacional.

La República de Nicaragua únicamente reconoce obligaciones internacionales sobre su territorio que hayan sido libremente consentidas y de conformidad con la Constitución Política de la República y con las normas de Derecho Internacional. Asimismo, no acepta los tratados suscritos por otros países en los cuales Nicaragua no sea Parte Contratante.

Artículo 11. El español es el idioma oficial del Estado. Las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua también tendrán uso oficial en los casos que establezca la ley.

Artículo 12. La ciudad de Managua es la capital de la República y sede de los Poderes del Estado. En circunstancias extraordinarias, éstos se podrán establecer en otras partes del territorio nacional.

Artículo 13. Los símbolos patrios son: el Himno Nacional, la Bandera y el Escudo, establecidos por la ley que determina sus características y usos.

Artículo 14. El Estado no tiene religión oficial.

TITULO III

LA NACIONALIDAD NICARAGÜENSE

Capítulo Único

Artículo 15. Los nicaragüenses son nacionales o nacionalizados.

Artículo 16. Son nacionales:

- 1) Los nacidos en el territorio nacional. Se exceptúan los hijos de extranjeros en servicio diplomático, los de funcionarios extranjeros al servicio de organizaciones internacionales o los de enviados por sus gobiernos a desempeñar trabajos en Nicaragua, a menos que optaren por la nacionalidad nicaragüense.
- 2) Los hijos de padre o madre nicaragüense.
- 3) Los nacidos en el extranjero, de padre o madre que originalmente fueron nicaragüenses, siempre y cuando lo solicitaren después de alcanzar la mayoría de edad o emancipación.
- 4) Los infantes de padres desconocidos encontrados en territorio nicaragüense, sin perjuicio de que, conocida su filiación, surtan los efectos que proceden.
- 5) Los hijos de padres extranjeros nacidos a bordo de aeronaves y embarcaciones nicaragüenses, siempre que ellos lo solicitaren.

Artículo 17. Los centroamericanos de origen tienen derecho de optar a la nacionalidad nicaragüense, sin necesidad de renunciar a su nacionalidad y pueden solicitarla ante autoridad competente cuando residan en Nicaragua.

Artículo 18. La Asamblea Nacional podrá declarar nacionales a extranjeros que se hayan distinguido por méritos extraordinarios al servicio de Nicaragua.

Artículo 19. Los extranjeros pueden ser nacionalizados, previa renuncia a su nacionalidad y mediante solicitud ante autoridad competente, cuando cumplieren los requisitos y condiciones que establezcan las leyes de la materia.

Artículo 20. Ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad.

Artículo 21.- La adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes.

Artículo 22. En los casos de doble nacionalidad se procede conforme los tratados y el principio de reciprocidad.

TITULO IV
DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS
DEL PUEBLO NICARAGÜENSE
Capítulo I
Derechos Individuales

Artículo 23. El derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana. En Nicaragua no hay pena de muerte.

Artículo 24. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad, la patria y la humanidad.

Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común.

Artículo 25. Toda persona tiene derecho:

- 1)A la libertad individual.
- 2)A su seguridad.
- 3)Al reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica.

Artículo 26. Toda persona tiene derecho:

- 1)A su vida privada y a la de su familia.
- 2)A la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia y sus comunicaciones de todo tipo.
- 3)Al respeto de su honra y reputación.
- 4)A conocer toda información que sobre ella hayan registrado las autoridades estatales, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad tiene esa información.

El domicilio sólo puede ser allanado por orden escrita de juez competente, excepto:

- a) Si los que habitaren en una casa manifestaren que allí se está cometiendo un delito o de ella se pidiera auxilio;
- b) si por incendio, inundación u otra causa semejante, se hallare amenazada la vida de los habitantes o de la propiedad;
- c) cuando se denunciare que personas extrañas han sido vistas en una morada, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito;
- d) en caso de persecución actual e inmediata de un delincuente;
- e) para rescatar a la persona que sufra secuestro.

En todos los casos se procederá de acuerdo a la ley.

La ley fija los casos y procedimientos para el examen de documentos privados, libros contables y sus anexos, cuando sea indispensable para esclarecer asuntos sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia o por motivos fiscales.

Las cartas, documentos y demás papeles privados sustraídos ilegalmente no producen efecto alguno en juicio o fuera de él.

Artículo 27. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social.

Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos que los nicaragüenses, con la excepción de los derechos políticos y los que establezcan las leyes; no pueden intervenir en los asuntos políticos del país.

El Estado respeta y garantiza los derechos reconocidos en la presente Constitución a todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sujetas a su jurisdicción.

Artículo 28. Los nicaragüenses que se encuentren en el extranjero gozan del amparo y protección del Estado, los que se hacen efectivos por medio de sus representaciones diplomáticas y consulares.

Artículo 29. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos ni a ser obligado a declarar su credo, ideología o creencias.

Artículo 30. Los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio.

Artículo 31. Los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país.

Artículo 32. Ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe.

Artículo 33. Nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria ni ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la ley con arreglo a un procedimiento legal. En consecuencia:

- 1) La detención sólo podrá efectuarse en virtud de mandamiento escrito de juez competente o de las autoridades expresamente facultadas por la ley, salvo el caso de flagrante delito.
- 2) Todo detenido tiene derecho:
 - 2.1 A ser informado sin demora en idioma o lengua que comprenda, y en forma detallada, de las causas de su detención y de la acusación formulada en su contra; a que se informe de su detención por parte de la policía, y él mismo a informar a su familia o a quien estime conveniente; y también a ser tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
 - 2.2 A ser puesto en libertad o a la orden de autoridad competente dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas posteriores a su detención.
- 3) Una vez cumplida la pena impuesta, nadie deberá continuar detenido después de dictarse la orden de excarcelación por la autoridad competente.
- 4) Toda detención ilegal causa responsabilidad civil y penal en la autoridad que la ordene o ejecute.
- 5) Los organismos correspondientes procurarán que los procesados y los condenados guarden prisión en centros diferentes.

Artículo 34. Todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a las siguientes garantías mínimas:

- 1) A que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme la ley.
- 2) A ser juzgado sin dilaciones por tribunal competente establecido por la ley. No hay fuero atractivo. Nadie puede ser sustraído de su juez competente ni llevado a jurisdicción de excepción.
- 3) A ser sometido al juicio por jurados en los casos determinados por la ley. Se establece el recurso de revisión.
- 4) A que se garantice su intervención y defensa desde el inicio del proceso y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa.
- 5) A que se le nombre defensor de oficio cuando en la primera intervención no hubiera designado defensor; o cuando no fuere habido, previo llamamiento por edicto. El procesado tiene derecho a comunicarse libre y privadamente con su defensor.
- 6) A ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado por el tribunal.
- 7) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge o compañero en unión de hecho estable, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni a confesarse culpable.
- 8) A que se le dicte sentencia dentro de los términos legales en cada una de las instancias del proceso.
- 9) A recurrir ante un tribunal superior, a fin de que su caso sea revisado cuando hubiese sido condenado por cualquier delito.
- 10) A no ser procesado nuevamente por el delito por el cual fue condenado o absuelto mediante sentencia firme.
- 11) A no ser procesado ni condenado por acto u omisión que, al tiempo de cometerse, no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. Se prohíbe dictar leyes proscriptivas o aplicar al reo penas o tratos infamantes.

El proceso penal deberá ser público. El acceso de la prensa y el público en general podrá ser limitado, por consideraciones de moral y orden público.

El ofendido será tenido como parte en los juicios, desde el inicio de los mismos y en todas sus instancias.

Artículo 35. Los menores no pueden ser sujetos ni objeto de juzgamiento ni sometidos a procedimiento judicial alguno. Los menores transgresores no pueden ser conducidos a los centros de readaptación penal y serán atendidos en centros bajo la responsabilidad del organismo especializado. Una ley regulará esta materia.

Artículo 36. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley.

Artículo 37. La pena no trasciende de la persona del condenado. No se impondrá pena o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de treinta años.

Artículo 38. La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando favorezca al reo.

Artículo 39. En Nicaragua, el sistema penitenciario es humanitario y tiene como objetivo fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la sociedad. Por medio del sistema progresivo promueve la unidad familiar, la salud, la superación educativa, cultural y la ocupación productiva con remuneración salarial para el interno. Las penas tienen un carácter reeducativo.

Las mujeres condenadas guardarán prisión en centros penales distintos a los de los hombres y se procurará que los guardas sean del mismo sexo.

Artículo 40. Nadie será sometido a servidumbre. La esclavitud y la trata de cualquier naturaleza están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 41. Nadie sea detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente por incumplimiento de deberes alimentarios. Es deber de cualquier ciudadano nacional o extranjero pagar lo que adeuda.

Artículo 42. En Nicaragua se reconoce y garantiza el derecho de refugio y de asilo. El refugio y el asilo amparan únicamente a los

perseguidos por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos.

La ley determinará la condición de asilado o refugiado político, de acuerdo con los convenios internacionales ratificados por Nicaragua. En caso se resolviera la expulsión de un asilado, nunca podrá enviársele al país donde fuese perseguido.

Artículo 43. En Nicaragua no existe extradición por delitos políticos o comunes conexos con ellos, según calificación nicaragüense. La extradición por delitos comunes está regulada por la ley y los tratados internacionales.

Los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional.

Artículo 44. Se garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles, y de los instrumentos y medios de producción.

En virtud de la función social de la propiedad, este derecho está sujeto, por causa de utilidad pública o de interés social, a las limitaciones y obligaciones que en cuanto a su ejercicio le impongan las leyes. Los bienes inmuebles mencionados en el párrafo primero pueden ser objeto de expropiación de acuerdo a la ley, previo pago en efectivo de justa indemnización.

Tratándose de la expropiación de latifundios incultivados, para fines de reforma agraria, la ley determinará la forma, cuantificación, plazos de pagos e intereses que se reconozcan en concepto de indemnización.

Se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos.

Artículo 45. Las personas cuyos derechos constitucionales hayan sido violados o estén en peligro de serlo, pueden interponer el Recurso de Exhibición Personal o de Amparo, según el caso y de acuerdo con la Ley de Amparo.

Artículo 46. En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

Capítulo II

Derechos Políticos

Artículo 47. Son ciudadanos los nicaragüenses que hubieran cumplido dieciséis años de edad.

Sólo los ciudadanos gozan de los derechos políticos consignados en la Constitución y las leyes, sin más limitaciones que las que se establezcan por razones de edad.

Los derechos ciudadanos se suspenden por imposición de pena corporal grave o penas accesorias específicas, y por sentencia ejecutoriada de interdicción civil.

Artículo 48. Se establece la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos; en el ejercicio de los mismos y en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, existe igualdad absoluta entre el hombre y la mujer.

Es obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social del país.

Artículo 49. En Nicaragua tienen derecho de constituir organizaciones los trabajadores de la ciudad y el campo, las mujeres, los jóvenes, los productores agropecuarios, los artesanos, los profesionales, los técnicos, los intelectuales, los artistas, los religiosos, las comunidades de la Costa Atlántica y los pobladores en general, sin discriminación

alguna, con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones según sus propios intereses y participar en la construcción de una nueva sociedad.

Estas organizaciones se formarán de acuerdo a la voluntad participativa y electiva de los ciudadanos, tendrán una función social y podrán o no tener carácter partidario, según su naturaleza y fines.

Artículo 50. Los ciudadanos tienen derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal. Por medio de la ley se garantizará, nacional y localmente, la participación efectiva del pueblo.

Artículo 51. Los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos en elecciones periódicas y optar a cargos públicos, salvo las limitaciones contempladas en esta Constitución Política.

Es deber del ciudadano desempeñar los cargos de jurado y otros de carácter concejil, salvo excusa calificada por la ley.

Artículo 52. Los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas, en forma individual o colectiva, a los poderes del Estado o cualquier autoridad; de obtener una pronta resolución o respuesta y de que se les comunique lo resuelto en los plazos que la ley establezca.

Artículo 53. Se reconoce el derecho de reunión pacífica; el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo.

Artículo 54. Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley.

Artículo 55. Los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho de organizar o afiliarse a partidos políticos, con el fin de participar, ejercer y optar al poder.

Capítulo III

Derechos Sociales

Artículo 56. El Estado prestará atención especial en todos sus programas a los discapacitados y los familiares de caídos y víctimas de guerra en general.

Artículo 57. Los nicaragüenses tienen el derecho al trabajo acorde con su naturaleza humana.

Artículo 58. Los nicaragüenses tienen derecho a la educación y a la cultura.

Artículo 59. Los nicaragüenses tienen derecho, por igual, a la salud. El Estado establecerá las condiciones básicas para su promoción, protección, recuperación y rehabilitación.

Corresponde al Estado dirigir y organizar los programas, servicios y acciones de salud y promover la participación popular en defensa de la misma.

Los ciudadanos tienen la obligación de acatar las medidas sanitarias que se determinen.

Artículo. 60. Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable. Es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos naturales.

Artículo 61. El Estado garantiza a los nicaragüenses el derecho a la seguridad social para su protección integral frente a las contingencias sociales de la vida y el trabajo, en la forma y condiciones que determine la ley.

Artículo 62. El Estado procurará establecer programas en beneficio de los discapacitados para su rehabilitación física, psicosocial y profesional y para su ubicación laboral.

Artículo 63. Es derecho de los nicaragüenses estar protegidos contra el hambre. El Estado promoverá programas que aseguren una

adecuada disponibilidad de alimentos y una distribución equitativa de los mismos.

Artículo 64. Los nicaragüenses tienen derecho a una vivienda digna, cómoda y segura que garantice la privacidad familiar. El Estado promoverá la realización de este derecho.

Artículo 65. Los nicaragüenses tienen derecho al deporte, a la educación física, a la recreación y al esparcimiento. El Estado impulsará la práctica del deporte y la educación física mediante la participación organizada y masiva del pueblo, para la formación integral de los nicaragüenses. Esto se realizará con programas y proyectos especiales.

Artículo 66. Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Artículo 67. El derecho de informar es una responsabilidad social y se ejerce con estricto respeto a los principios establecidos en la Constitución. Este derecho no puede estar sujeto a censura, sino a responsabilidades ulteriores establecidas en la ley.

Artículo 68. Los medios de comunicación, dentro de su función social, deberán contribuir al desarrollo de la nación.

Los nicaragüenses tienen derecho de acceso a los medios de comunicación social y al ejercicio de aclaración cuando sean afectados en sus derechos y garantías.

El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros o al monopolio económico de algún grupo. La ley regulará esta materia.

La importación de papel, maquinaria y equipo y refacciones para los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos, así como la importación, circulación y venta de libros, folletos, revistas, materiales escolares y científicos de enseñanzas, diarios y otras publicaciones periódicas, estarán exentas de toda clase de impuestos municipales, regionales y fiscales.

Los medios de comunicación públicos, corporativos y privados, no podrán ser objeto de censura previa. En ningún caso podrán decomisarse, como instrumento o cuerpo del delito, la imprenta o sus accesorios, ni cualquier otro medio o equipo destinado a la difusión del pensamiento. Las leyes tributarias regularán la materia.

Artículo 69. Todas las personas, individual o colectivamente, tienen derecho a manifestar sus creencias religiosas en privado o en público, mediante el culto, las prácticas y su enseñanza.

Nadie puede eludir la observancia de las leyes, ni impedir a otros el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, invocando creencias o disposiciones religiosas.

Capítulo IV

Derechos de la Familia

Artículo 70. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de ésta y del Estado.

Artículo 71. Es derecho de los nicaragüenses constituir una familia. Se garantiza el patrimonio familiar, que es inembargable y exento de toda carga pública. La ley regulará y protegerá estos derechos.

La niñez goza de protección especial y de todos los derechos que su condición requiere, por lo cual tiene plena vigencia la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña .

Artículo 72. El matrimonio y la unión de hecho estable están protegidos por el Estado; descansan en el acuerdo voluntario del hombre y la mujer y podrán disolverse por mutuo consentimiento o por la voluntad de una de las partes. La ley regulará esta materia.

Artículo 73. Las relaciones familiares descansan en el respeto, solidaridad e igualdad absoluta de derechos y responsabilidades entre el hombre y la mujer.

Los padres deben atender el mantenimiento del hogar y la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común, con iguales derechos y responsabilidades. Los hijos, a su vez, están obligados a respetar

y ayudar a sus padres. Estos deberes y derechos se cumplirán de acuerdo con la legislación de la materia.

Artículo 74. El Estado otorga protección especial al proceso de reproducción humana.

La mujer tendrá protección especial durante el embarazo y gozará de licencia con remuneración salarial y prestaciones adecuadas de seguridad social.

Nadie podrá negar empleo a las mujeres aduciendo razones de embarazo ni despedirlas durante éste o en el período post natal; todo de conformidad con la ley.

Artículo 75. Todos los hijos tienen iguales derechos. No se utilizarán designaciones discriminatorias en materia de filiación. En la legislación común, no tienen ningún valor las disposiciones o clasificaciones que disminuyan o nieguen la igualdad de los hijos.

Artículo. 76.- El Estado creará programas y desarrollará centros especiales para velar por los menores; éstos tienen derecho a las medidas de prevención, protección y educación, que su condición requiere por parte de su familia, de la sociedad y el Estado.

Artículo 77. Los ancianos tienen derecho a medidas de protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado.

Artículo 78. El Estado protege la paternidad y maternidad responsable. Se establece el derecho de investigar la paternidad y la maternidad.

Artículo 79. Se establece el derecho de adopción en interés exclusivo del desarrollo integral del menor. La ley regulará esta materia.

Capítulo V

Derechos Laborales

Artículo 80. El trabajo es un derecho y una responsabilidad social.

El trabajo de los nicaragüenses es el medio fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad, de las personas y es fuente de

riqueza y prosperidad de la nación. El Estado procurará la ocupación plena y productiva de todos los nicaragüenses, en condiciones que garanticen los derechos fundamentales de la persona.

Artículo 81. Los trabajadores tienen derecho de participar en la gestión de las empresas, por medio de sus organizaciones y de conformidad con la ley.

Artículo 82. Los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que les aseguren en especial:

1. Salario igual por trabajo igual en idénticas condiciones, adecuado a su responsabilidad social, sin discriminaciones por razones políticas, religiosas, raciales, de sexo o de cualquier otra clase, que les asegure un bienestar compatible con la dignidad humana.
2. Ser remunerado en moneda de curso legal en su centro de trabajo.
3. La inembargabilidad del salario mínimo y las prestaciones sociales, excepto para protección de su familia y en los términos que establezca la ley.
4. Condiciones de trabajo que les garanticen la integridad física, la salud, la higiene y la disminución de los riesgos profesionales para hacer efectiva la seguridad ocupacional del trabajador.
5. Jornada laboral de ocho horas, descanso semanal, vacaciones, remuneración por los días feriados nacionales y salario por décimo tercer mes, de conformidad con la ley.
6. Estabilidad en el trabajo conforme a la ley e igual oportunidad de ser promovido, sin más limitaciones que los factores de tiempo, servicio, capacidad, eficiencia y responsabilidad.
7. Seguridad social para protección integral y medios de subsistencia en casos de invalidez, vejez, riesgos profesionales, enfermedad y maternidad; y a sus familiares en casos de muerte, en la forma y condiciones que determine la ley.

Artículo 83. Se reconoce el derecho a la huelga.

Artículo 84. Se prohíbe el trabajo de los menores, en labores que puedan afectar su desarrollo normal o su ciclo de instrucción obligatoria. Se protegerá a los niños y adolescentes contra cualquier clase de explotación económica y social.

Artículo 85. Los trabajadores tienen derecho a su formación cultural, científica y técnica; el Estado la facilitará mediante programas especiales.

Artículo 86. Todo nicaragüense tiene derecho a elegir y ejercer libremente su profesión u oficio y a escoger un lugar de trabajo, sin más requisitos que el título académico y que cumpla una función social.

Artículo 87. En Nicaragua existe plena libertad sindical. Los trabajadores se organizarán voluntariamente en sindicatos y éstos podrán constituirse conforme lo establece la ley.

Ningún trabajador está obligado a pertenecer a determinado sindicato, ni renunciar al que pertenezca. Se reconoce la plena autonomía sindical y se respeta el fuero sindical.

Artículo 88. Se garantiza el derecho inalienable de los trabajadores para que, en defensa de sus intereses particulares o gremiales, celebren con los empleadores:

- 1) Contratos individuales.
- 2) Convenios colectivos.

Ambos de conformidad con la ley.

Capítulo VI

Derechos de las comunidades de la Costa Atlántica

Artículo 89. Las comunidades de la Costa Atlántica son parte indisoluble del pueblo nicaragüense y, como tal, gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones.

Las comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de preservar y desarrollar su identidad cultural en la unidad nacional; dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones.

El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las comunidades de la Costa Atlántica. Igualmente

reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales.

Artículo 90. Las comunidades de la Costa Atlántica tienen derecho a la libre expresión y preservación de sus lenguas, arte y cultura. El desarrollo de su cultura y sus valores enriquece la cultura nacional. El Estado creará programas especiales para el ejercicio de estos derechos.

Artículo 91. El Estado tiene la obligación de dictar leyes destinadas a promover acciones que aseguren que ningún nicaragüense sea objeto de discriminación por razón de su lengua, cultura y origen.

TITULO V

DEFENSA NACIONAL

Capítulo Único

Artículo 92. El Ejército de Nicaragua es la institución armada para la defensa de la soberanía, de la independencia y la integridad territorial.

Sólo en casos excepcionales el Presidente de la República, en Consejo de Ministros podrá, en apoyo a la Policía Nacional, ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua cuando la estabilidad de la República estuviera amenazada por grandes desórdenes internos, calamidades o desastres naturales.

Se prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio nacional. Podrá autorizarse el tránsito o estacionamiento de naves, aeronaves y maquinarias extranjeras militares para fines humanitarios siempre que sean solicitadas por el Gobierno de la República y ratificados por la Asamblea Nacional.

Artículo 93. El Ejército de Nicaragua es una institución nacional, de carácter profesional, apartidista, apolítica, obediente y no deliberante. Los miembros del Ejército deberán recibir capacitación cívica y en materia de derechos humanos.

Los delitos y faltas estrictamente militares, cometidos por miembros del Ejército, serán conocidos por los Tribunales Militares establecidos por Ley.

Los delitos y faltas comunes cometidos por los militares serán conocidos por los tribunales comunes.

En ningún caso los civiles podrán ser juzgados por tribunales militares.

Artículo 94. Los miembros del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional, no podrán desarrollar actividades político-partidistas ni desempeñar cargo alguno en organizaciones políticas. Tampoco podrán optar a cargos públicos de elección popular, si no hubieren renunciado de su calidad de militar o de policía en servicio activo por lo menos un año antes de las elecciones en las que pretendan participar.

La organización, estructuras, actividades, escalafón, ascensos, jubilaciones y todo lo relativo al desarrollo operacional de estos organismos, se regirán por la ley de la materia.

Artículo 95. El Ejército de Nicaragua se regirá en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia. Estará sometido a la autoridad civil que será ejercida directamente por el Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, o a través del ministerio correspondiente.

No pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional, ni rangos militares que los establecidos por la ley.

Artículo 96. No habrá servicio militar obligatorio, y se prohíbe toda forma de reclutamiento forzoso para integrar el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional.

Se prohíbe a los organismos del ejército y la policía y a cualquier otra institución del Estado, ejercer actividades de espionaje político.

Artículo 97. La Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil. Tiene por misión garantizar el orden interno, la seguridad de los ciudadanos, la prevención y persecución del delito y los demás que le señale la ley. La Policía Nacional es profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante. La Policía Nacional se regirá en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará

respeto y obediencia. Estará sometida a la autoridad civil que será ejercida por el Presidente de la República a través del ministerio correspondiente.

Dentro de sus funciones, la Policía Nacional auxiliará al poder jurisdiccional. La organización interna de la Policía Nacional se fundamenta en la jerarquía y disciplina de sus mandos.

TITULO VI ECONOMIA NACIONAL, REFORMA AGRARIA Y FINANZAS PÚBLICAS

Capítulo I Economía nacional

Artículo 98. La función principal del Estado en la economía es desarrollar materialmente el país; suprimir el atraso y la dependencia heredados; mejorar las condiciones de vida del pueblo y realizar una distribución cada vez más justa de la riqueza.

Artículo 99. El Estado es responsable de promover el desarrollo integral del país, y como gestor del bien común deberá garantizar los intereses y las necesidades particulares, sociales, sectoriales y regionales de la nación. Es responsabilidad del Estado proteger, fomentar y promover las formas de propiedad y de gestión económica y empresarial privada, estatal, cooperativa, asociativa, comunitaria y mixta, para garantizar la democracia económica y social.

El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares. Se reconoce el rol protagónico de la iniciativa privada, la cual comprende en un sentido amplio, a grandes, medianas y pequeñas empresas, micro empresas, empresas cooperativas, asociativas y otras.

El Banco Central es el ente estatal regulador del sistema monetario. Los bancos estatales y otras instituciones financieras del Estado serán instrumentos financieros de fomento, inversión y desarrollo, y diversificarán sus créditos con énfasis en los pequeños y medianos productores. Le corresponde al Estado garantizar su existencia y funcionamiento de manera irrenunciable.

El Estado garantiza la libertad de empresa y el establecimiento de bancos y otras instituciones financieras, privadas y estatales que se regirán conforme las leyes de la materia. Las actividades de comercio exterior, seguros y reaseguros estatales y privados serán reguladas por la ley.

Artículo 100. El Estado promulgará la Ley de Inversiones Extranjeras, a fin de que contribuya al desarrollo económico social del país, sin detrimento de la soberanía nacional.

Artículo 101. Los trabajadores y demás sectores productivos, tienen el derecho de participar en la elaboración, ejecución y control de los planes económicos.

Artículo 102. Los recursos naturales son patrimonio nacional. La preservación del ambiente y la conservación, desarrollo y explotación racional de los recursos naturales corresponden al Estado; éste podrá celebrar contratos de explotación racional de estos recursos, cuando el interés nacional lo requiera.

Artículo 103. El Estado garantiza la coexistencia democrática de las formas de propiedad pública, privada, cooperativa, asociativa y comunitaria; todas ellas forman parte de la economía mixta, están supeditadas a los intereses superiores de la nación y cumplen una función social.

Artículo 104. Las empresas que se organicen bajo cualesquiera de las formas de propiedad establecidas en esta Constitución, gozan de igualdad ante la ley y las políticas económicas del Estado. La iniciativa económica es libre.

Se garantiza el pleno ejercicio de las actividades económicas, sin más limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes.

Artículo 105. Es obligación del Estado promover, facilitar y regular la prestación de los servicios públicos básicos de energía, comunicación, agua, transportes, infraestructura vial, puertos y aeropuertos a la población, y es derecho inalienable de la misma el acceso a ellos. Las inversiones privadas y sus modalidades y las

concesiones de explotación a sujetos privados en estas áreas, serán reguladas por la ley en cada caso.

Los servicios de educación, salud y seguridad social, son deberes indeclinables del Estado, que está obligado a prestarlos sin exclusiones, a mejorarlos y ampliarlos. Las instalaciones e infraestructura de dichos servicios propiedad del Estado, no pueden ser enajenados bajo ninguna modalidad.

Se garantiza la gratuidad de la salud para los sectores vulnerables de la población, priorizando el cumplimiento de los programas materno - infantil. Los servicios estatales de salud y educación deberán ser ampliados y fortalecidos. Se garantiza el derecho de establecer servicios privados en las áreas de salud y educación.

Es deber del Estado garantizar el control de calidad de bienes y servicios, y evitar la especulación y el acaparamiento de los bienes básicos de consumo.

Capítulo II

Reforma Agraria

Artículo 106. La reforma agraria es instrumento fundamental para la democratización de la propiedad y la justa distribución de la tierra, y es un medio que constituye parte esencial para la promoción y estrategia global de la reconstrucción ecológica y el desarrollo económico sostenible del país. La reforma agraria tendrá en cuenta la relación tierra hombre socialmente necesaria; también se garantiza las propiedades a los campesinos beneficiarios de la misma, de acuerdo con la ley.

Artículo 107. La reforma agraria eliminará el latifundio ocioso y se hará prioritariamente con tierras del Estado. Cuando la expropiación de latifundios ociosos afecte a propietarios privados, se hará cumpliendo con lo estipulado en el Artículo 44 de esta Constitución. La reforma agraria eliminará cualquier forma de explotación a los campesinos, a las comunidades indígenas del país, y promoverá las formas de propiedad compatibles con los objetivos económicos y sociales de la nación establecidos en esta Constitución. El régimen de propiedad de las tierras de las comunidades indígenas se regulará de acuerdo a la ley de la materia.

Artículo 108. Se garantiza la propiedad de la tierra a todos los propietarios que la trabajen productiva y eficientemente. La ley establecerá regulaciones particulares y excepciones, de conformidad con los fines y objetivos de la reforma agraria.

Artículo 109. El Estado promoverá la asociación voluntaria de los campesinos en cooperativas agrícolas, sin discriminación de sexo; y de acuerdo con sus recursos facilitará los medios materiales necesarios para elevar su capacidad técnica y productiva, a fin de mejorar las condiciones de vida de los campesinos.

Artículo 110. El Estado promoverá la incorporación voluntaria de pequeños y medianos productores agropecuarios a los planes de desarrollo económico y social del país, bajo formas asociativas e individuales.

Artículo 111. Los campesinos y demás sectores productivos tienen derecho de participar en la definición de las políticas de transformación agraria, por medio de sus propias organizaciones.

Capítulo III

De las Finanzas Publicas

Artículo 112. La Ley de Presupuesto General de la República tiene vigencia anual y su objeto es regular los ingresos y egresos ordinarios y extraordinarios de la administración pública. La ley determinará los límites de gastos de los órganos del Estado y deberá mostrar las distintas fuentes y destinos de todos los ingresos y egresos, los que serán concordantes entre sí.

La Asamblea Nacional podrá modificar el Proyecto de Presupuesto enviado por el Presidente de la República, pero no se puede crear ningún gasto extraordinario sino por ley y mediante creación y fijación, al mismo tiempo, de los recursos para financiarlos. La Ley de Régimen Presupuestario regulará esta materia.

Toda modificación al Presupuesto General de la República que suponga aumento o disminución de los Créditos, disminución de los ingresos o transferencias entre distintas instituciones, requerirá de la aprobación de la Asamblea Nacional. La Ley Anual de Presupuesto no puede crear tributos.

Artículo 113. Corresponde al Presidente de la República la formulación del Proyecto de Ley Anual de Presupuesto, el que deberá someter para su discusión y aprobación a la Asamblea Nacional, de acuerdo con la ley de la materia.

El Proyecto de Ley Anual de Presupuesto deberá contener, para información de la Asamblea Nacional, los Presupuestos de los entes autónomos y gubernamentales y de las empresas del Estado.

Artículo 114. Corresponde exclusivamente y de forma indelegable a la Asamblea Nacional la potestad para crear, aprobar, modificar o suprimir tributos. El Sistema Tributario debe tomar en consideración la distribución de la riqueza y de las rentas.

Se prohíben los tributos o impuestos de carácter confiscatorio.

Estarán exentas del pago de toda clase de impuesto los medicamentos, vacunas y sueros de consumo humano, órtesis y prótesis; lo mismo que los insumos y materia prima necesarios para la elaboración de esos productos, de conformidad con la clasificación y procedimientos que se establezcan.

Artículo 115. Los impuestos deben ser creados por ley que establezca su incidencia, tipo impositivo y las garantías a los contribuyentes. El Estado no obligará a pagar impuestos que previamente no estén establecidos en una ley.

TITULO VII

EDUCACION Y CULTURA

Capítulo Único

Artículo 116. La educación tiene como objetivo la formación plena e integral del nicaragüense; dotarlo de una conciencia crítica, científica y humanista; desarrollar su personalidad y el sentido de su dignidad; y capacitarlo para asumir las tareas de interés común que demanda el progreso de la nación; por consiguiente, la educación es factor fundamental para la transformación y el desarrollo del individuo y la sociedad.

Artículo 117. La educación es un proceso único, democrático, creativo y participativo que vincula la teoría con la práctica, el trabajo manual con el intelectual y promueve la investigación científica. Se fundamenta en nuestros valores nacionales; en el conocimiento de nuestra historia; de la realidad; de la cultura nacional y universal y en el desarrollo constante de la ciencia y de la técnica; cultiva los valores propios del nuevo nicaragüense, de acuerdo con los principios establecidos en la presente Constitución, cuyo estudio deberá ser promovido.

Artículo 118. El Estado promueve la participación de la familia, de la comunidad y del pueblo en la educación, y garantiza el apoyo de los medios de comunicación social a la misma.

Artículo 119. La educación es función indeclinable del Estado. Corresponde a éste planificarla, dirigirla y organizarla. El sistema nacional de educación funciona de manera integrada y de acuerdo con planes nacionales. Su organización y funcionamiento son determinados por la ley.

Es deber del Estado formar y capacitar en todos los niveles y especialidades al personal técnico y profesional necesario para el desarrollo y transformación del país.

Artículo 120. Es papel fundamental del magisterio nacional la aplicación creadora de los planes y políticas educativas. Los maestros tienen derecho a condiciones de vida y trabajo acordes con su dignidad y con la importante función social que desempeñan; serán promovidos y estimulados de acuerdo con la ley.

Artículo 121. El acceso a la educación es libre e igual para todos los nicaragüenses. La enseñanza primaria es gratuita y obligatoria en los centros del Estado. La enseñanza secundaria es gratuita en los centros del Estado, sin perjuicio de las contribuciones voluntarias que puedan hacer los padres de familia. Nadie podrá ser excluido en ninguna forma de un centro estatal por razones económicas. Los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica tienen derecho en su región a la educación intercultural en su lengua materna, de acuerdo a la ley.

Artículo 122. Los adultos gozarán de oportunidades para educarse y desarrollar habilidades por medio de programas de capacitación y formación. El Estado continuará sus programas educativos para suprimir el analfabetismo.

Artículo 123. Los centros privados dedicados a la enseñanza pueden funcionar en todos los niveles, sujetos a los preceptos establecidos en la presente Constitución.

Artículo 124. La educación en Nicaragua es laica. El Estado reconoce el derecho de los centros privados dedicados a la enseñanza y que sean de orientación religiosa, a impartir religión como materia extracurricular.

Artículo 125. Las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior gozan de autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa, de acuerdo con la ley.

Estarán exentos de toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, regionales y municipales. Sus bienes y rentas no podrán ser objeto de intervención, expropiación ni embargo, excepto cuando la obligación que se haga valer tenga su origen en contratos civiles, mercantiles o laborales.

Los profesores, estudiantes y trabajadores administrativos participarán en la gestión universitaria.

Las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior, que según la ley deben ser financiados por el Estado, recibirán una aportación anual del 6% del Presupuesto General de la República, la cual se distribuirá de acuerdo con la ley. El Estado podrá otorgar aportaciones adicionales para gastos extraordinarios de dichas universidades y centros de educación técnica superior.

Se garantiza la libertad de cátedra. El Estado promueve y protege la libre creación, investigación y difusión de las ciencias, la tecnología, las artes y las letras, y garantiza y protege la propiedad intelectual.

Artículo 126. Es deber del Estado promover el rescate, desarrollo y fortalecimiento de la cultura nacional, sustentada en la participación creativa del pueblo.

El Estado apoyará la cultura nacional en todas sus expresiones, sean de carácter colectivo o de creadores individuales.

Artículo 127. La creación artística y cultural es libre e irrestricta. Los trabajadores de la cultura tienen plena libertad de elegir formas y modos de expresión. El Estado procurará facilitarles los medios necesarios para crear y difundir sus obras, y protege sus derechos de autor.

Artículo 128. El Estado protege el patrimonio arqueológico, histórico, lingüístico, cultural y artístico de la nación.

TITULO VIII

DE LA ORGANIZACION DEL ESTADO

Capítulo I

Principios generales

Artículo 129. Los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral son independientes entre sí y se coordinan armónicamente, subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la presente Constitución.

Artículo 130. La nación nicaragüense se constituye en un Estado Social de Derecho. Ningún cargo concede, a quien lo ejerce, más funciones que las que le confieren la Constitución y las leyes.

Todo funcionario del Estado debe rendir cuenta de sus bienes antes de asumir su cargo y después de entregarlo. La ley regula esta materia.

Los funcionarios públicos de cualquier Poder del Estado, elegidos directa e indirectamente; los ministros y viceministros de Estado; los presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales; y los embajadores de Nicaragua en el exterior no pueden obtener concesión alguna del Estado. Tampoco podrán actuar como apoderados o gestores de empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en contrataciones de éstas con el Estado. La violación de esta disposición anula las concesiones o ventajas obtenidas y causa la pérdida de la representación y el cargo.

La Asamblea Nacional mediante resolución aprobada por dos tercios de votos de sus miembros podrá declarar la privación de inmunidad del Presidente de la República. Respecto a otros funcionarios la resolución será aprobada con el voto favorable de la mayoría de sus miembros. Sin este procedimiento los funcionarios públicos que conforme la presente Constitución gozan de inmunidad, no podrán ser detenidos, ni procesados, excepto en causas relativas a los derechos de familia y laborales. La inmunidad es renunciable. La ley regulará esta materia.

En los casos de privación de la inmunidad por causas penales contra el Presidente y el Vicepresidente de la República, una vez privados de ella, es competente para procesarlos la Corte Suprema de Justicia en pleno.

En todos los poderes del Estado y sus dependencias, así como en las instituciones creadas en esta Constitución, no se podrán hacer recaer nombramientos en personas que tengan parentesco cercano con la autoridad que hace el nombramiento y, en su caso, con la persona de donde hubiere emanado esta autoridad. Para los nombramientos de los funcionarios principales regirá la prohibición del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La ley regulará esta materia.

Esta prohibición no comprende el caso de los nombramientos que correspondan al cumplimiento de la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, la de Carrera Docente, de Carrera Judicial, de Carrera del Servicio Exterior y demás leyes similares que se dictaren.

Artículo 131. Los funcionarios de los cuatro poderes del Estado, elegidos directa o indirectamente, responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones y deben informarle de su trabajo y actividades oficiales. Deben atender y escuchar sus problemas y procurar resolverlos. La función pública se debe ejercer a favor de los intereses del pueblo.

El Estado, de conformidad con la ley, será responsable patrimonialmente de las lesiones que, como consecuencia de las acciones u omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de

su cargo, sufran los particulares en sus bienes, derechos e intereses, salvo los casos de fuerza mayor. El Estado podrá repetir contra el funcionario o empleado público causante de la lesión.

Los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la violación de la Constitución, por falta de probidad administrativa y por cualquier otro delito o falta cometida en el desempeño de sus funciones. También son responsables ante el Estado de los perjuicios que causaren por abuso, negligencia y omisión en el ejercicio del cargo. Las funciones civiles no podrán ser militarizadas. El servicio civil y la carrera administrativa serán regulados por la ley.

Capítulo II

Poder Legislativo

Artículo 132. El Poder Legislativo lo ejerce la Asamblea Nacional por delegación y mandato del pueblo. La Asamblea Nacional está integrada por noventa diputados con sus respectivos suplentes elegidos por voto universal, igual, directo, libre y secreto, mediante el sistema de representación proporcional. En carácter nacional, de acuerdo con lo que se establezca en la Ley Electoral, se elegirán veinte diputados, y en las circunscripciones departamentales y regiones autónomas setenta diputados.

Se establece la obligatoriedad de destinar un porcentaje suficiente del Presupuesto General de la República a la Asamblea Nacional.

Artículo 133. También forman parte de la Asamblea Nacional como Diputados, Propietario y Suplente respectivamente, el Ex Presidente de la República y Ex Vicepresidente electos por el voto popular directo en el período inmediato anterior, y, como Diputados, Propietario y Suplente los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República que participaron en la elección correspondiente, y hubiesen obtenido el segundo lugar.

Artículo 134. 1. Para ser Diputado se requieren las siguientes calidades:

- a) Ser nacional de Nicaragua. Quienes hayan adquirido otra nacionalidad deberán haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de verificarse la elección.
- b) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
- c) Haber cumplido veintiún años de edad.
- d) Haber residido en forma continuada en el país los cuatro años anteriores a la elección, salvo que durante dicho período cumplieren Misiones Diplomáticas, o trabajaren en Organismos Internacionales o realizaren estudios en el extranjero. Además, haber nacido o haber residido durante los últimos dos años en el Departamento o Región Autónoma por el cual se pretende salir electo.

2. No podrán ser candidatos a Diputados, Propietarios o Suplentes:

- a) Los ministros, viceministros de Estado, magistrados del Poder Judicial, del Consejo Supremo Electoral, los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, el Procurador y Subprocurador General de Justicia, El Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal General Adjunto de la República y los Alcaldes, a menos que renuncien al cargo doce meses antes de la elección.
- b) Los Ministros de cualquier culto religioso, salvo que hubieren renunciado a su ejercicio al menos doce meses antes de la elección.

Artículo 135. Ningún Diputado de la Asamblea Nacional puede obtener concesión alguna del Estado ni ser apoderado o gestor de empresas públicas, privadas o extranjeras, en contrataciones de éstas con el Estado. La violación de esta disposición anula las concesiones o ventajas obtenidas y causa la pérdida de la representación.

Artículo 136. Los Diputados de la Asamblea Nacional serán elegidos para un período de cinco años, que se contarán a partir de su instalación el nueve de enero del año siguiente al de la elección.

Artículo 137. Los Diputados, propietarios y suplentes, electos para integrar la Asamblea Nacional, prestarán la promesa de ley ante el Presidente del Consejo Supremo Electoral.

La Asamblea Nacional será instalada por el Consejo Supremo Electoral.

Artículo 138. Son atribuciones de la Asamblea Nacional:

1)Elaborar y aprobar las leyes y decretos, así como reformar y derogar los existentes.

2)La interpretación auténtica de la ley.

3)Conceder amnistía e indulto por su propia iniciativa o por iniciativa del Presidente de la República.

4)Solicitar informes a los Ministros y Viceministros de Estado, Procurador y Subprocurador General de Justicia, Presidentes o Directores de entes autónomos y gubernamentales quienes tendrán la obligación ineludible de rendirlos. También podrá requerir su comparecencia personal e interpelación. La comparecencia será obligatoria, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. La no comparecencia injustificada será causal de destitución.

Si considera que ha lugar a formación de causa, esta decisión acarreará la pérdida de la inmunidad, en los casos en que el funcionario aludido gozare de ella.

Si la Asamblea Nacional considera al funcionario no apto para el ejercicio del cargo, con votación calificada del sesenta por ciento de los Diputados lo destituirá, y pondrá en conocimiento al Presidente de la República para que dentro del plazo de tres días haga efectiva esta decisión.

Durante el período de Gobierno 2002-2007, lo indicado en la reforma de este Artículo deberá implementarse hasta que se logre el consenso entre los tres principales actores políticos del país: Los dos grupos parlamentarios mayoritarios y el Gobierno de la República, de manera que garantice las relaciones armónicas.

5) Otorgar y cancelar la personalidad jurídica a las asociaciones civiles.

6) Conocer, discutir y aprobar el Proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la República, y ser informada periódicamente de su ejercicio conforme al procedimiento establecido en la Constitución y en la ley.

7) Elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes. El plazo para presentar las listas será de quince días contados a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no hubiere listas presentadas por el Presidente de la República, bastarán las propuestas por los diputados de la Asamblea Nacional. Se elegirá a cada magistrado con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los diputados de la Asamblea Nacional.

Asimismo se elegirán a un número igual de Conjueces con los mismos requisitos y procedimientos con el que se nombran a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

8) Elegir a los Magistrados, Propietarios y Suplentes del Consejo Supremo Electoral de listas separadas, propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por los Diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes. El plazo para presentar las listas será de quince días contados a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no hubiere lista presentada por el Presidente de la República, bastarán las propuestas por los Diputados de la Asamblea Nacional. Se elegirá a cada Magistrado con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los Diputados de la Asamblea Nacional.

9) Elegir con el sesenta por ciento de los votos del total de los Diputados de la Asamblea Nacional, de listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por los Diputados en consulta con las asociaciones civiles pertinentes:

a) al Superintendente y Vicesuperintendente General de Bancos y Otras Instituciones Financieras; b) al Fiscal General de la República, quien estará a cargo del Ministerio Público y al Fiscal General Adjunto de la República, quienes deberán tener las mismas calidades que se requieren para ser Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; c) a los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República; d) al Procurador y Sub Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos; e) al Superintendente y a los Intendentes de Servicios Públicos; f) al Director y Subdirector del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural. Todos estos funcionarios serán elegidos para un período de cinco años y gozarán de inmunidad.

Los candidatos propuestos para los cargos mencionados en este numeral y en los numerales 7) y 8) no deberán tener vínculos de parentesco entre sí, ni con el Presidente de la República, ni con los Diputados proponentes, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad ni deberán ser miembros de las Juntas Directivas Nacionales, Departamentales o Municipales de partidos políticos y si lo fueren, deberán cesar en sus funciones partidarias. El plazo para presentar las listas de candidatos será de quince días contados a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no hubiere listas presentadas por el Presidente de la República, bastarán las listas propuestas por los Diputados.

La Asamblea Nacional a través de Comisiones Especiales podrá convocar a audiencias con los candidatos. Los candidatos deberán estar debidamente calificados para el cargo y su postulación deberá acompañarse de la documentación que se les solicitare.

Durante el período de gobierno 2002-2007, en lo referido a los nombramientos en los incisos e y f, atenderá el consenso de los tres principales actores del país: Los dos Grupos Parlamentarios mayoritarios y el Gobierno de la República, de manera que garantice las relaciones armónicas.

10) Conocer, admitir y decidir sobre las faltas definitivas de los diputados de la Asamblea Nacional. Son causas de falta definitiva, y en consecuencia acarrear la pérdida de la condición de Diputado, las siguientes:

- i. Renuncia al cargo;
- ii. Fallecimiento;
- iii. Condena mediante sentencia firme a pena de privación de libertad o de inhabilitación para ejercer el cargo, por delito que merezca pena más que correccional, por un término igual o mayor al resto de su período;
- iv. Abandono de sus funciones parlamentarias durante sesenta días continuos dentro de una misma legislatura, sin causa justificada ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional;
- v. Contravención a lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 130 Cn;
- vi. Recibir retribución de fondos estatales, regionales o municipales, por cargo o empleo en otros Poderes del Estado o Empresas Estatales, salvo caso de docencia o del ejercicio de la medicina. Si un diputado aceptare desempeñar cargo en otros poderes del Estado, sólo podrá reincorporarse a la Asamblea Nacional cuando hubiese cesado en el otro cargo;
- vii. Incumplimiento de la obligación de declarar sus bienes ante la Contraloría General de la República al momento de la toma de posesión del cargo.

11) Conocer y admitir las renunciaciones y resolver sobre destituciones de los funcionarios mencionados en los incisos 7), 8) y 9), por las causas y procedimientos establecidos en la ley.

12) Aprobar o rechazar los instrumentos internacionales celebrados con países u organismos sujetos de Derecho Internacional.

Dichos instrumentos internacionales solamente podrán ser dictaminados, debatidos, aprobados o rechazados en lo general, sin poder hacerles cambios o agregados a su texto. La aprobación legislativa les conferirá efectos legales, dentro y fuera de Nicaragua una vez que hayan entrado en vigencia internacionalmente, mediante depósito o intercambio de ratificaciones o cumplimiento de los requisitos o plazos, previstos en el texto del tratado o instrumento internacional.

13) Aprobar todo lo relativo a los símbolos patrios.

14) Crear órdenes honoríficas y distinciones de carácter nacional.

- 15) Crear y otorgar sus propias órdenes de carácter nacional.
- 16) Recibir en sesión solemne al Presidente y al Vicepresidente de la República, para escuchar el informe anual.
- 17) Elegir su Junta Directiva.
- 18) Crear comisiones permanentes, especiales y de investigación.
- 19) Conceder pensiones de gracia y conceder honores a servidores distinguidos de la patria y la humanidad.
- 20) Determinar la división política y administrativa del territorio nacional.
- 21) Conocer y hacer recomendaciones sobre las políticas y planes de desarrollo económico y social del país.
- 22) Llenar las vacantes definitivas del Vicepresidente de la República, del Presidente y el Vicepresidente, cuando éstas se produzcan simultáneamente.
- 23) Autorizar la salida del territorio nacional al Presidente de la República cuando su ausencia sea mayor de quince días, y la del Vicepresidente, en caso de ausencia del territorio nacional del Presidente.
- 24) Recibir de las autoridades judiciales o directamente de los ciudadanos las acusaciones o quejas presentadas en contra de los funcionarios que gozan de inmunidad, para conocer y resolver sobre las mismas.
- 25) Dictar o reformar su estatuto y reglamento interno.
- 26) Autorizar o negar la salida de tropas del territorio nacional.
- 27) Crear, aprobar, modificar o suprimir tributos, y aprobar los planes de arbitrios municipales.

28) Aprobar, rechazar o modificar el decreto del Ejecutivo que declara la suspensión de derechos y garantías constitucionales o el Estado de Emergencia, así como sus prórrogas.

29) Recibir anualmente los informes del Presidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República o del que el Consejo designe; del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos; del Fiscal General de la República; del Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras y del Presidente del Banco Central, sin perjuicio de otras informaciones que les sean requeridas.

30) Ratificar en un plazo no mayor de quince días hábiles, con el voto favorable del sesenta por ciento del total de Diputados, el nombramiento hecho por el Presidente de la República a los Ministros y Viceministros de Estado, Procurador y Subprocurador General de la República, Jefes de Misiones Diplomáticas, y Presidentes o Directores de Entes Autónomos y gubernamentales. El nombramiento sólo se considerará firme hasta que la Asamblea Nacional lo ratifique. De no producirse la ratificación, el Presidente de la República deberá proceder a un nuevo nombramiento dentro del plazo de treinta días hábiles, debiendo someterse el nuevo nombramiento al procedimiento de ratificación ya establecido.

Durante el período de Gobierno 2002-2007, lo indicado en la reforma de este Artículo deberá implementarse hasta que se logre el consenso entre los tres principales actores políticos del país: Los dos Grupos Parlamentarios mayoritarios y el Gobierno de la República, de manera que garantice las relaciones armónicas.

31) Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias.

32) Las demás que le confieren la Constitución y las leyes.

Artículo 139. Los Diputados estarán exentos de responsabilidad por sus opiniones y votos emitidos en la Asamblea Nacional y gozan de inmunidad conforme la ley.

Artículo 140. Tienen iniciativa de ley:

1) Cada uno de los Diputados de la Asamblea Nacional, quienes

además gozan del derecho de iniciativa de decretos, resoluciones y declaraciones legislativas.

2)El Presidente de la República.

3)La Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, los Consejos Regionales Autónomos y los Concejos Municipales, en materias propias de su competencia.

4)Los Diputados ante el Parlamento Centroamericano por el Estado de Nicaragua. En este caso sólo tienen iniciativa de Ley y Decretos Legislativos en materia de integración regional.

5)Los ciudadanos. En este caso la iniciativa deberá ser respaldada por un número no menor de cinco mil firmas. Se exceptúan las leyes orgánicas, tributarias o de carácter internacional y las de amnistía y de indultos.

Artículo 141. El quórum para las sesiones de la Asamblea Nacional se constituye con la mitad más uno del total de los diputados que la integran.

Los proyectos de ley, decretos, resoluciones, acuerdos y declaraciones requerirán, para su aprobación, del voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados presentes, salvo en los casos en que la Constitución exija otra clase de mayoría.

Toda iniciativa de ley deberá ser presentada con su correspondiente exposición de motivos en Secretaría de la Asamblea Nacional.

Todas las iniciativas de ley presentadas, una vez leídas ante el plenario de la Asamblea Nacional, pasarán directamente a comisión.

En caso de iniciativa urgente del Presidente de la República, la Junta Directiva podrá someterla de inmediato a discusión del plenario si se hubiera entregado el proyecto a los diputados con cuarenta y ocho horas de anticipación.

Los proyectos de códigos y de leyes extensas, a criterio del plenario, pueden ser considerados y aprobados por capítulos.

Recibido el dictamen de la comisión dictaminadora, éste será leído ante el plenario y será sometido a debate en lo general; si es aprobado, será sometido a debate en lo particular.

Una vez aprobado el proyecto de ley por la Asamblea Nacional, será enviado al Presidente de la República para su sanción, promulgación y publicación, salvo aquellos que no requieren tales trámites. No necesitan sanción del Poder Ejecutivo las reformas a la Constitución y las leyes constitucionales, ni los decretos aprobados por la Asamblea Nacional. En caso que el Presidente de la República no promulgara ni publicara el proyecto de las reformas a la Constitución o a las leyes constitucionales; y cuando no sancionare, promulgare ni publicare las demás leyes en un plazo de quince días, el Presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicarlas por cualquier medio de comunicación social escrito, entrando en vigencia desde dicha fecha, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial, la que deberá hacer mención de la fecha de su publicación en los medios de comunicación social.

Las leyes serán reglamentadas cuando ellas expresamente así lo determinen. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional encomendará la reglamentación de las leyes a la comisión respectiva, para su aprobación en el Plenario, cuando el Presidente de la República no lo hiciere en el plazo establecido.

Las leyes sólo se derogan o se reforman por otras leyes y entrarán en vigencia a partir del día de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, excepto cuando ellas mismas establezcan otra modalidad.

Cuando la Asamblea Nacional apruebe reformas sustanciales a las leyes, podrá ordenar que su texto íntegro con las reformas incorporadas sea publicado en La Gaceta, Diario Oficial, salvo las reformas a los códigos.

Las iniciativas de ley presentadas en una legislatura y no sometidas a debate, serán consideradas en la siguiente legislatura. Las que fueren rechazadas, no podrán ser consideradas en la misma legislatura.

Artículo 142. El Presidente de la República podrá vetar total o parcialmente un proyecto de ley dentro de los quince días siguientes a aquél en que lo haya recibido. Si no ejerciere esta facultad ni sancionara, promulgara y publicara el proyecto, el Presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la ley en cualquier medio de difusión nacional escrito.

El Presidente de la República, en el caso del veto parcial, podrá introducir modificaciones o supresiones al articulado de la ley.

Artículo 143. Un proyecto de ley vetado total o parcialmente por el Presidente de la República deberá regresar a la Asamblea Nacional con expresión de los motivos del veto.

La Asamblea Nacional podrá rechazar el veto total con un número de votos que exceda la mitad del total de diputados, en cuyo caso el Presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la ley.

Cuando el veto sea parcial, éste deberá contener expresión de motivos de cada uno de los artículos vetados. La Comisión correspondiente deberá dictaminar sobre cada uno de los artículos vetados. La Asamblea Nacional, con un número de votos que exceda la mitad de sus miembros podrá rechazar el veto de cada artículo, en cuyo caso el Presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la ley.

Capítulo III

Poder Ejecutivo

Artículo 144. El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República, quien es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua.

Artículo 145. El Vicepresidente de la República desempeña las funciones que le señale la presente Constitución Política, y las que le delegue el Presidente de la República directamente o a través de la ley.

Asimismo sustituirá en el cargo al Presidente, en casos de falta temporal o definitiva.

Artículo 146. La elección del Presidente y Vicepresidente de la República se realiza mediante el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto. Serán elegidos quienes obtengan la mayoría relativa de votos.

Artículo 147. Para ser elegidos Presidente y Vicepresidente de la República los candidatos a tales cargos deberán obtener como

mayoría relativa al menos el cuarenta por ciento de los votos válidos, salvo el caso de aquellos que habiendo obtenido un mínimo del treinta y cinco por ciento de los votos válidos superen a los candidatos que obtuvieron el segundo lugar por una diferencia mínima de cinco puntos porcentuales. Si ninguno de los candidatos alcanzare el porcentaje para ser electo, se realizará una segunda elección únicamente entre los candidatos que hubiesen obtenido el primero y segundo lugar y serán electos los que obtengan el mayor número de votos.

En caso de renuncia, falta definitiva o incapacidad permanente de cualquiera de los candidatos a Presidente o del Vicepresidente de la República, durante el proceso electoral, el partido político al que pertenecieren designará a quien o quienes deban sustituirlos.

Para ser Presidente o Vice-Presidente de la República se requiere de las siguientes calidades:

- 1) Ser nacional de Nicaragua. Quien hubiese adquirido otra nacionalidad deberá haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de verificarse la elección.
- 2) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
- 3) Haber cumplido veinticinco años de edad.
- 4) Haber residido en forma continua en el país los cuatro años anteriores a la elección, salvo que durante dicho período cumplieren Misión Diplomática, trabajaren en Organismos Internacionales o realizaren estudios en el extranjero.

No podrá ser candidato a Presidente ni Vicepresidente de la República:

- a) El que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiere ejercido por dos períodos presidenciales;
- b) el Vicepresidente de la República o el llamado a reemplazarlo, si hubiere ejercido su cargo o el de Presidente en propiedad durante los doce meses anteriores a la fecha en que se efectúa la elección para el período siguiente;
- c) los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, y los que

sean o hayan sido parientes dentro del segundo grado de afinidad del que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente;

- d) los que encabecen o financien un golpe de Estado; los que alteren el orden constitucional y como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura del gobierno y ministerios o viceministerios, o magistraturas en otros poderes del Estado;
- e) los ministros de cualquier culto religioso, salvo que hubieren renunciado a su ejercicio al menos doce meses antes de la elección;
- f) el Presidente de la Asamblea Nacional, los ministros o viceministros de Estado, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de República, el Fiscal General de la República y el Fiscal General Adjunto de la República, el Procurador y Subprocurador General de Justicia, el Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, y los que estuvieren ejerciendo el cargo de Alcalde, a menos que hayan renunciado al cargo doce meses antes de la elección.

Artículo 148. El Presidente y el Vicepresidente de la República electos tomarán posesión de sus cargos ante la Asamblea Nacional, en sesión solemne y prestarán la promesa de ley ante el Presidente de la Asamblea Nacional.

El Presidente y Vicepresidente ejercerán sus funciones por un período de cinco años, que se contarán a partir de su toma de posesión el día diez de enero del año siguiente de la elección. Dentro de este período gozarán de inmunidad, de conformidad con la ley.

Artículo 149. El Presidente de la República podrá salir del país en ejercicio de su cargo, por un período menor de quince días sin ninguna autorización. Para un período mayor de quince días y menor de treinta días requerirá previa autorización de la Asamblea Nacional. En este último caso corresponderá al Vicepresidente de la República el ejercicio de la función de gobierno de la Presidencia.

También podrá salir del país el Presidente de la República por un tiempo no mayor de tres meses con permiso de la Asamblea

Nacional, siempre que deposite el ejercicio de la Presidencia en el Vicepresidente; pero si la ausencia pasare de tres meses, cualquiera que fuera la causa, perderá el cargo por ese solo hecho, salvo que la Asamblea Nacional considere el caso de fuerza mayor y prorrogue el permiso por un tiempo prudencial.

La salida del país del Presidente de la República sin autorización de la Asamblea Nacional, por un período en que esta autorización fuera necesaria o por un período mayor que el autorizado, se entenderá como abandono de su cargo.

En caso de falta temporal del Presidente de la República, el Vicepresidente no podrá salir sin previa autorización de la Asamblea Nacional. Su salida sin dicha autorización se entenderá como abandono del cargo.

Si el Vicepresidente de la República estuviera ausente del país y el Presidente de la República también tuviera que salir del territorio nacional en ejercicio de su cargo, las funciones administrativas las asumirá el ministro correspondiente, según el orden de precedencia legal.

En ningún caso podrá salir del país el Presidente de la República que tuviere causa criminal pendiente que mereciere pena más que correccional.

Son faltas temporales del Presidente de la República:

- 1) Las ausencias temporales del territorio nacional por más de quince días.
- 2) La imposibilidad o incapacidad temporal manifiesta para ejercer el cargo, declarada por la Asamblea Nacional y aprobada por los dos tercios de los diputados.

Además de las establecidas en el presente artículo, son faltas definitivas del Presidente y Vicepresidente de la República:

- a) La muerte;

- b) la renuncia, cuando le sea aceptada por la Asamblea Nacional;
- c) la incapacidad total permanente declarada por la Asamblea Nacional, aprobada por los dos tercios de los diputados.

En caso de falta temporal del Presidente de la República asumirá sus funciones el Vicepresidente.

En caso de imposibilidad o incapacidad temporal y simultánea del Presidente y el Vicepresidente, ejercerá interinamente la Presidencia de la República el Presidente de la Asamblea Nacional. Mientras ejerza interinamente la presidencia de la República, será sustituido en su cargo por el Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional.

Por falta definitiva del Presidente de la República asumirá el cargo por el resto del período el Vicepresidente, y la Asamblea Nacional deberá elegir un nuevo Vicepresidente.

En caso de falta definitiva del Vicepresidente de la República, la Asamblea Nacional nombrará a quien deba sustituirlo en el cargo.

Si faltaren definitivamente el Presidente y el Vicepresidente de la República, asumirá las funciones del primero, el Presidente de la Asamblea Nacional o quien haga sus veces. La Asamblea Nacional deberá nombrar a quienes deban sustituirlos dentro de las primeras setenta y dos horas de haberse producido las vacantes. Los así nombrados ejercerán sus funciones por el resto del período.

En todos los casos mencionados, la Asamblea Nacional elegirá a los sustitutos de entre sus miembros.

Artículo 150. Son atribuciones del Presidente de la República, las siguientes:

- 1) Cumplir la Constitución Política y las leyes, y hacer que los funcionarios bajo su dependencia también las cumplan.
- 2) Representar a la nación.

3) Ejercer la facultad de iniciativa de ley y el derecho al veto, conforme se establece en la presente Constitución.

4) Dictar decretos ejecutivos en materia administrativa.

5) Elaborar el proyecto de Ley del Presupuesto General de la República y presentarlo a consideración de la Asamblea Nacional para su aprobación, y sancionarlo y publicarlo una vez aprobado.

6) Nombrar y remover a los Ministros y Viceministros de Estado, Procurador y Subprocurador General de la República, Presidentes, Directores de entes autónomos y gubernamentales, Jefes de Misiones Diplomáticas, debiendo poner en conocimiento de la Asamblea Nacional, dentro del término de tres días, el nombramiento para su ratificación, el cual se considerará firme hasta que la Asamblea Nacional lo ratifique.

Destituir de sus cargos a los funcionarios en los casos que la Asamblea Nacional lo haya decidido en uso de sus atribuciones.

Durante el período de Gobierno 2002-2007, lo indicado en la reforma de este Artículo deberá implementarse hasta que se logre el consenso entre los tres principales actores políticos del país: Los dos Grupos Parlamentarios mayoritarios y el Gobierno de la República, de manera que garantice las relaciones armónicas.

7) Solicitar al Presidente de la Asamblea Nacional la convocatoria de sesiones extraordinarias durante el período de receso de la Asamblea Nacional para legislar sobre asuntos de urgencia.

8) Dirigir las relaciones internacionales de la República. Negociar, celebrar y firmar los tratados, convenios o acuerdos y demás instrumentos que establece el inciso 12) del Artículo 138 de la Constitución Política para ser aprobados por la Asamblea Nacional.

9) Decretar y poner en vigencia la suspensión de derechos y garantías en los casos previstos por esta Constitución Política, y enviar el decreto correspondiente a la Asamblea Nacional en

un plazo no mayor de setenta y dos horas para su aprobación, modificación o rechazo.

10)Reglamentar las leyes que lo requieran, en un plazo no mayor de sesenta días.

11)Otorgar órdenes honoríficas y condecoraciones de carácter nacional.

12)Organizar y dirigir el gobierno.

13)Dirigir la economía del país, determinando la política y el programa económico social.

Crear un Consejo Nacional de Planificación Económica Social que le sirva de apoyo para dirigir la política económica y social del país. En el Consejo estarán representadas las organizaciones empresariales, laborales, cooperativas, comunitarias, y otras que determine el Presidente de la República.

14)Proponer a la Asamblea Nacional, listas o ternas en su caso, de candidatos para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral, de los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, del Superintendente y Vice Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, del Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto de la República.

15)Presentar a la Asamblea Nacional, personalmente o por medio del Vicepresidente, el informe anual y otros informes y mensajes especiales.

16)Proporcionar a los funcionarios del Poder Judicial el apoyo necesario para hacer efectivas sus providencias sin demora alguna.

17)Las demás que le confieran esta Constitución y las leyes.

Artículo 151. El número, organización y competencia de los ministerios de Estado, de los entes autónomos y gubernamentales y

de los bancos estatales y demás instituciones financieras del Estado, serán determinados por la ley. Los ministros y viceministros gozan de inmunidad.

Los decretos y providencias del Presidente de la República deben ser refrendados por los ministros de Estado de las respectivas ramas, salvo aquellos acuerdos que se refieran a nombramiento o remoción de sus ministros o viceministros de Estado.

El Consejo de Ministros será presidido por el Presidente de la República y, en su defecto, por el Vicepresidente. El Consejo de Ministros estará integrado por el Vicepresidente de la República y los ministros de Estado. Sus funciones son determinadas por la Constitución.

Los ministros y viceministros de Estado y los presidentes o directores de entes autónomos o gubernamentales, serán personalmente responsables de los actos que firmaren o autorizaren, y solidariamente de los que suscribieren o acordaren con el Presidente de la República o con los otros ministerios de Estado.

Los ministros y viceministros de Estado y los presidentes o directores de entes autónomos o gubernamentales, proporcionarán a la Asamblea Nacional las informaciones que se les pidan relativas a los negocios de sus respectivas ramas, ya sea en forma escrita o verbal. También pueden ser interpelados por resolución de la Asamblea Nacional.

Artículo 152. Para ser ministro, viceministro, Presidente o Director de Entes Autónomos y Gubernamentales, Embajadores y Jefes Superiores del Ejército y la Policía, se requiere de las siguientes calidades:

- 1) Ser nacional de Nicaragua. Los que hubiesen adquirido otra nacionalidad deberán haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de la fecha de su nombramiento.
- 2) Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles.
- 3) Haber cumplido veinticinco años de edad.

4) Haber residido en forma continua en el país los cuatro años anteriores a la fecha de su nombramiento, salvo que durante dicho período cumpliera Misión Diplomática, trabajare en Organismos Internacionales o realizare estudios en el extranjero.

No podrán ser ministros, viceministros, presidentes o directores de entes autónomos o gubernamentales, y embajadores:

- a) Los militares en servicio activo;
- b) los que desempeñen simultáneamente otro cargo en alguno de los poderes del Estado;
- c) los que hubieren recaudado o administrado fondos públicos o municipales, sin estar finiquitadas sus cuentas;
- d) los deudores morosos de la Hacienda Pública;
- e) los que estén comprendidos en el sexto párrafo del Artículo 130 de esta Constitución.

Artículo 153. Los ministros, viceministros, presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales son responsables de sus actos, de conformidad con la Constitución y las leyes.

Capítulo IV

De la Contraloría General de la República

Artículo 154. La Contraloría General de la República es el Organismo Rector del sistema de control de la Administración Pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado. Para dirigirla créase el Consejo Superior de la Contraloría General de la República, que estará integrado por cinco miembros propietarios y tres suplentes, electos por la Asamblea Nacional para un período de cinco años, dentro del cual gozarán de inmunidad. Las funciones de los miembros suplentes son para suplir única y exclusivamente las ausencias temporales de los miembros propietarios, quienes la ejercerán por previa escogencia del miembro propietario a quien sustituyan.

Artículo 155. Corresponde a la Contraloría General de la República:

- 1) Establecer el sistema de control que de manera preventiva asegure el uso debido de los fondos gubernamentales.
- 2) El control sucesivo sobre la gestión del Presupuesto General de la República.
- 3) El control, examen y evaluación de la gestión administrativa y financiera de los entes públicos, los subvencionados por el Estado y las empresas públicas o privadas con participación de capital público.

Artículo 156. La Contraloría General de la República es un organismo independiente, sometido solamente al cumplimiento de la Constitución y las leyes; gozará de autonomía funcional y administrativa. La Asamblea Nacional autorizará Auditorías sobre su gestión.

La Contraloría deberá hacer públicos los resultados de sus investigaciones, y cuando de los mismos se presumieran responsabilidades penales, deberá enviar su investigación a los tribunales de justicia, bajo el apercibimiento de encubridor, si no lo hiciera, de los delitos que posteriormente se determinara cometieron los investigados.

El Presidente y Vicepresidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República serán elegidos por los miembros del Consejo Superior de entre ellos mismos, por mayoría de votos y por el período de un año, pudiendo ser reelectos. El Presidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República o quien éste designe de entre los Miembros del Consejo, informará de la gestión del organismo a la Asamblea Nacional cada año o cuando ésta lo solicite; este acto lo realizará personalmente el Presidente o el designado.

Artículo 157. La ley determinará la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República.

Capítulo V

Poder Judicial

Artículo 158. La justicia emana del pueblo y será impartida en su nombre y delegación por el Poder Judicial, integrado por los tribunales de justicia que establezca la ley.

Artículo 159. Los tribunales de justicia forman un sistema unitario, cuyo órgano superior es la Corte Suprema de Justicia. El Poder Judicial recibirá no menos del cuatro por ciento del Presupuesto General de la República. Habrá tribunales de apelación, jueces de distrito, jueces locales, cuya organización y funcionamiento será determinado por la ley. Se establece la Carrera Judicial que será regulada por la ley.

Las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponden exclusivamente al Poder Judicial. Los tribunales militares sólo conocerán las faltas y delitos estrictamente militares, sin perjuicio de las instancias y recursos ante la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 160. La administración de la justicia garantiza el principio de la legalidad; protege y tutela los derechos humanos mediante la aplicación de la ley en los asuntos o procesos de su competencia.

Artículo 161. Para ser Magistrado de los tribunales de justicia se requiere:

- 1) Ser nacional de Nicaragua. Los que hubiesen adquirido otra nacionalidad deberán haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de la fecha de elección.
- 2) Ser abogado de moralidad notoria, haber ejercido una judicatura o la profesión por lo menos durante diez años, o haber sido magistrado de los tribunales de apelaciones durante cinco años cuando se opte para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
- 3) Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles.

4) Haber cumplido treinta y cinco años de edad y no ser mayor de setenta y cinco años al día de la elección.

5) No haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía y del notariado por resolución judicial firme.

6) No ser militar en servicio activo o, siéndolo, no haber renunciado por lo menos doce meses antes de la elección.

7) Haber residido en forma continuada en el país los cuatro años anteriores a la fecha de su elección, salvo que durante dicho período cumpliera misión Diplomática, trabajare en Organismos Internacionales o realizare estudios en el extranjero.

Artículo 162. El período de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el de los magistrados de los Tribunales de Apelaciones será de cinco años. Únicamente podrán ser separados de sus cargos por las causas previstas en la Constitución y la ley. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia gozan de inmunidad.

Artículo 163. La Corte Suprema de Justicia estará integrada por dieciséis magistrados electos por la Asamblea Nacional, por un período de cinco años.

La Corte Suprema de Justicia se integrará en Salas, cuya organización e integración se acordará entre los mismos magistrados, conforme lo estipula la Ley de la materia. La Corte Plena conocerá y resolverá lo recursos de inconstitucionalidad de la ley y los conflictos de competencias y constitucionalidad entre los Poderes del Estado. La Asamblea Nacional nombrará por cada magistrado a un Conjuez. Estos Conjueces serán llamados a integrar Corte Plena o cualquiera de las Salas, cuando se produjera ausencia, excusa, implicancia o recusación de cualquiera de los magistrados.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia toman posesión de su cargo ante la Asamblea Nacional, previa promesa de ley y eligen de entre ellos a su Presidente y Vicepresidente por mayoría de votos para un período de un año, pudiendo ser reelectos.

Artículo 164. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

- 1) Organizar y dirigir la administración de justicia.
- 2) Conocer y resolver los recursos ordinarios y extraordinarios que se presenten contra las resoluciones de los tribunales de justicia de la República, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley.
- 3) Conocer y resolver los recursos de amparo por violación de los derechos establecidos en la Constitución, de acuerdo a la Ley de Amparo.
- 4) Conocer y resolver los recursos por inconstitucionalidad de la ley.
- 5) Nombrar y destituir con el voto favorable de las tres cuartas partes de sus miembros a los magistrados de los Tribunales de Apelaciones.
- 6) Resolver sobre las solicitudes de extradición de ciudadanos de otros países y denegar las de los nacionales.
- 7) Nombrar o destituir a los jueces, médicos forenses y registradores públicos de la propiedad inmueble y mercantil de todo el país, de conformidad con la Constitución y la ley.
- 8) Extender autorización para el ejercicio de las profesiones de abogado y notario, lo mismo que suspenderlos y rehabilitarlos de conformidad con la ley.
- 9) Conceder autorización para la ejecución de sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros.
- 10) Conocer y resolver los conflictos administrativos surgidos entre los organismos de la administración pública, y entre éstos y los particulares.
- 11) Conocer y resolver los conflictos que surjan entre los municipios o entre éstos y los organismos del gobierno central.

12) Conocer y resolver los conflictos de competencia y constitucionalidad entre los poderes del Estado.

13) Conocer y resolver los conflictos de constitucionalidad, entre el gobierno central y los gobiernos municipales y de las regiones autónomas de la Costa Atlántica.

14) Dictar su reglamento interno y nombrar al personal de su dependencia.

15) Las demás atribuciones que le confieran la Constitución y las leyes.

Artículo 165. Los magistrados y jueces en su actividad judicial, son independientes y sólo deben obediencia a la Constitución y a la ley; se regirán, entre otros, por los principios de igualdad, publicidad y derecho a la defensa. La justicia en Nicaragua es gratuita.

Artículo 166. La administración de justicia se organizará y funcionará con participación popular, que será determinada por las leyes. Los miembros de los tribunales de justicia, sean abogados o no, tienen iguales facultades en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Artículo 167. Los fallos y resoluciones de los tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales y jurídicas afectadas.

Capítulo VI

Poder Electoral

Artículo 168. Al Poder Electoral corresponde en forma exclusiva la organización, dirección y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos.

Artículo 169. El Poder Electoral está integrado por el Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales subordinados.

Artículo 170. El Consejo Supremo Electoral estará integrado por siete magistrados propietarios y tres suplentes, elegidos por la Asamblea Nacional, de conformidad con las disposiciones contenidas en el numeral 8) del Arto. 138.

Los miembros del Consejo Supremo Electoral elegirán de entre ellos al Presidente y Vicepresidente del mismo. Su período será de un año, pudiendo ser reelegidos.

Artículo 171. Para ser Magistrado del Consejo Supremo Electoral se requiere:

- 1) Ser nacional de Nicaragua. En el caso de quien hubiere adquirido otra nacionalidad deberá haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de ser electo para el cargo.
- 2) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
- 3) Haber cumplido treinta años de edad y no ser mayor de setenta y cinco años al día de la elección.
- 4) Haber residido en forma continuada en el país los cuatro años anteriores a su elección, salvo que durante dicho período **cumpli**ere Misión Diplomática, trabajare en Organismos Internacionales o realizare estudios en el extranjero.

No podrán ser magistrados del Consejo Supremo Electoral:

- a) Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República.

En el caso de que ya se encontrase electo antes de las elecciones presidenciales estará implicado, y por tal razón inhabilitado de ejercer durante todo el proceso electoral, debiendo incorporar a su suplente;

- b) los que ejerzan cargos de elección popular o sean candidatos a algunos de ellos;
- c) los funcionarios o empleados de otro Poder del Estado en cargos retribuidos con fondos fiscales, regionales o municipales, salvo en lo relacionado al ejercicio de la docencia o la medicina;
- d) el militar en servicio activo, o el que ya no siéndolo, no hubiere renunciado por lo menos doce meses antes de la elección .

Artículo 172. Los magistrados del Consejo Supremo Electoral ejercerán su función durante un período de cinco años a partir de su toma de posesión; dentro de este período gozan de inmunidad.

Artículo 173. El Consejo Supremo Electoral tiene las siguientes atribuciones:

- 1) Organizar y dirigir las elecciones, plebiscitos o referendos que se convoquen de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en la ley.
- 2) Nombrar a los miembros de los demás organismos electorales de acuerdo con la Ley Electoral.
- 3) Elaborar el calendario electoral.
- 4) Aplicar las disposiciones constitucionales y legales referentes al proceso electoral.

Asimismo velar sobre el cumplimiento de dichas disposiciones por los candidatos que participen en las elecciones generales y municipales. En el caso de las elecciones municipales, para ser electo Alcalde, Vice Alcalde y Concejal requiere haber residido o trabajado en forma continuada en el país los cuatro años anteriores a la elección, salvo que cumpliera Misiones Diplomáticas o estudio en el extranjero. Además, se requiere haber residido en forma continuada los dos últimos años en el municipio por el cual se pretende salir electo.

- 5) Conocer y resolver en última instancia de las resoluciones que dicten los organismos electorales subordinados y de las reclamaciones e impugnaciones que presenten los partidos políticos.
- 6) Dictar de conformidad con la ley de la materia, las medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de plena garantía .
- 7) Demandar de los organismos correspondientes, condiciones de seguridad para los partidos políticos participantes en las elecciones.

8) Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las elecciones, plebiscitos y referendos, y hacer la declaratoria definitiva de los resultados.

9) Dictar su propio reglamento.

10) Organizar bajo su dependencia el Registro Central del Estado Civil de las Personas, la cedula ciudadana y el padrón electoral.

11) Otorgar la personalidad jurídica como partidos políticos, a las agrupaciones que cumplan los requisitos establecidos en la ley.

12) Cancelar la personalidad jurídica de los Partidos Políticos que no obtengan al menos un cuatro por ciento del total de votos válidos en las elecciones de autoridades generales, y cancelar o suspender la misma en los otros casos que regula la ley de la materia.

13) Vigilar y resolver los conflictos sobre la legitimidad de los representantes y directivos de los partidos políticos y sobre el cumplimiento de disposiciones legales que se refieran a los partidos políticos, sus estatutos y reglamentos.

14) Las demás que le confieran la Constitución y las leyes.

15) De las resoluciones del Consejo Supremo en materia electoral no habrá recurso alguno, ordinario ni extraordinario.

Artículo 174. Los magistrados del Consejo Supremo Electoral, propietarios y suplentes, tomarán posesión de sus cargos ante el Presidente de la Asamblea Nacional, previa promesa de ley.

TITULO IX

DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA

Capítulo I

De los municipios

Artículo 175. El territorio nacional se dividirá para su administración, en departamentos, regiones autónomas de la Costa Atlántica y

municipios. Las leyes de la materia determinarán su creación, extensión, número, organización, estructura y funcionamiento de las diversas circunscripciones territoriales.

Artículo 176. El Municipio es la unidad base de la división política administrativa del país.

Artículo 177. Los municipios gozan de autonomía política administrativa y financiera. La administración y gobiernos de los mismos corresponde a las autoridades municipales.

La autonomía no exime ni inhibe al Poder Ejecutivo ni a los demás poderes del Estado, de sus obligaciones y responsabilidades con los municipios. Se establece la obligatoriedad de destinar un porcentaje suficiente del Presupuesto General de la República a los municipios del país, el que se distribuirá priorizando a los municipios con menos capacidad de ingresos. El porcentaje y su distribución serán fijados por la ley.

La autonomía es regulada conforme la Ley de Municipios, que requerirá para su aprobación y reforma de la votación favorable de la mayoría absoluta de los diputados.

Los gobiernos municipales tienen competencia en materia que incida en el desarrollo socio económico de su circunscripción. En los contratos de explotación racional de los recursos naturales ubicados en el municipio respectivo, el Estado solicitará y tomará en cuenta la opinión de los gobiernos municipales antes de autorizarlos.

La Ley de Municipios deberá incluir, entre otros aspectos, las competencias municipales, las relaciones con el gobierno central, con los pueblos indígenas de todo el país y con todos los poderes del Estado, y la coordinación interinstitucional.

Artículo 178. El Alcalde, el Vicealcalde y los concejales serán elegidos por el pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, de conformidad con la ley. Serán electos Alcalde y Vicealcalde, los candidatos que obtengan la mayoría relativa de los votos. Los concejales serán electos por representación proporcional, de acuerdo con el cociente electoral. El Alcalde y el Vicealcalde

sólo podrán ser reelectos por un período. La reelección del Alcalde y Vicealcalde no podrá ser para el período inmediato siguiente.

Para ser Alcalde se requiere de las siguientes calidades:

- 1) Ser nacional de Nicaragua.
- 2) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
- 3) Haber cumplido veintiún años de edad.
- 4) El período de las autoridades municipales será de cuatro años, contados a partir de la toma de posesión del cargo ante el Consejo Supremo Electoral.
- 5) No podrán ser candidatos a Alcalde los ministros y viceministros de Estado, a menos que hayan renunciado a sus cargos doce meses antes de la elección.

Los concejales, el Alcalde y el Vicealcalde podrán perder su condición por las siguientes causas:

- a) Renuncia del cargo;
- b) por muerte;
- c) condena mediante sentencia firme a pena de privación de libertad o de inhabilitación para ejercer el cargo, por delito que merezca pena más que correccional por un término igual o mayor al resto de su período;
- d) abandono de sus funciones durante sesenta días continuos;
- e) contravención a lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 130 Cn;
- f) incumplimiento de la obligación de declarar sus bienes ante la Contraloría General de la República, al momento de la toma de posesión del cargo;

g) haber sido declarado incurso de malos manejos de los fondos de la Alcaldía, según resolución de la Contraloría General de la República.

En los casos de los incisos d) y e), el Concejo Municipal correspondiente deberá aprobar una resolución declarando que el Alcalde o Concejál ha incurrido en la circunstancia que motiva la pérdida de su condición.

Dicha resolución o los documentos públicos o auténticos que acrediten las circunstancias establecidas en los otros numerales deberá ser remitida al Consejo Supremo Electoral, acompañando el nombre del sustituto, que será el Vicealcalde cuando se sustituya al Alcalde, o cualquiera de los concejales electos cuando se sustituya al Vicealcalde, o la solicitud de declaración de propietario para el de los concejales.

El Consejo Supremo Electoral procederá en un término no menor de quince días a tomar la promesa de ley y darle posesión del cargo.

Las limitaciones de los concejales para trabajar en la administración municipal, así como el régimen de dietas, serán reguladas por la ley.

Artículo 179. El Estado promoverá el desarrollo integral y armónico de las diversas partes del territorio nacional.

Capítulo II

Comunidades de la Costa Atlántica

Artículo 180. Las comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de vivir y desarrollarse bajo las formas de organización social que corresponden a sus tradiciones históricas y culturales.

El Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de sus formas de propiedad comunal y la libre elección de sus autoridades y diputados.

Asimismo garantiza la preservación de sus culturas y lenguas, religiones y costumbres.

Artículo 181.- El Estado organizará, por medio de una ley, el régimen de autonomía para los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica, la que deberá contener, entre otras normas: las atribuciones de sus órganos de gobierno, su relación con el Poder Ejecutivo y Legislativo y con los municipios, y el ejercicio de sus derechos. Dicha ley, para su aprobación y reforma, requerirá de la mayoría establecida para la reforma a las leyes constitucionales.

Las concesiones y los contratos de explotación racional de los recursos naturales que otorga el Estado en las regiones autónomas de la Costa Atlántica, deberán contar con la aprobación del Consejo Regional Autónomo correspondiente.

Los miembros de los consejos regionales autónomos de la Costa Atlántica podrán perder su condición por las causas y los procedimientos que establezca la ley.

TITULO X

SUPREMACIA DE LA CONSTITUCIÓN

SU REFORMA Y DE LAS LEYES CONSTITUCIONALES

Capítulo I

De la Constitución Política

Artículo 182. La Constitución Política es la carta fundamental de la República; las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones.

Artículo 183. Ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República.

Artículo 184. Son leyes constitucionales: La Ley Electoral, La Ley de Emergencia y la Ley de Amparo, que se dicten bajo la vigencia de la Constitución Política de Nicaragua.

Artículo 185. El Presidente de la República en Consejo de Ministros podrá decretar para la totalidad o parte del territorio nacional y por tiempo determinado y prorrogable, la suspensión de derechos

y garantías cuando así lo demande la seguridad de la nación, las condiciones económicas o en caso de catástrofe nacional. La Ley de Emergencia regulará sus modalidades.

Artículo 186. El Presidente de la República no podrá suspender los derechos y garantías establecidos en los artículos 23, 24, 25 numeral 3); 26 numeral 3); 27, 29, 33 numeral 2.1) parte final, y los numerales 3 y 5); 34, excepto los numerales 2 y 8); 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 primer párrafo; 68 primer párrafo; 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 89, 90 y 91.

Capítulo II

Control Constitucional

Artículo 187. Se establece el Recurso por Inconstitucionalidad contra toda ley, decreto o reglamento que se oponga a lo prescrito por la Constitución Política, el cual podrá ser interpuesto por cualquier ciudadano.

Artículo 188. Se establece el Recurso de Amparo en contra de toda disposición, acto o resolución y en general en contra de toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política.

Artículo 189. Se establece el Recurso de Exhibición Personal en favor de aquellos cuya libertad, integridad física y seguridad, sean violadas o estén en peligro de serlo.

Artículo. 190.- La Ley de Amparo regulará los recursos establecidos en este Capítulo.

Capítulo III

Reforma Constitucional

Artículo 191. La Asamblea Nacional está facultada para reformar parcialmente la presente Constitución Política y para conocer y resolver sobre la iniciativa de reforma total de la misma.

La iniciativa de reforma parcial corresponde al Presidente de la República o a un tercio de los diputados de la Asamblea Nacional.

La iniciativa de reforma total corresponde a la mitad más uno de los diputados de la Asamblea Nacional.

Artículo 192. La iniciativa de reforma parcial deberá señalar el o los artículos que se pretenden reformar con expresión de motivos; deberá ser enviada a una comisión especial que dictaminará en un plazo no mayor de sesenta días. El proyecto de reforma recibirá a continuación el trámite previsto para la formación de la ley. La iniciativa de reforma parcial deberá ser discutida en dos legislaturas.

Artículo 193. La iniciativa de reforma total seguirá los mismos trámites fijados en el Artículo anterior, en lo que sea conducente a su presentación y dictamen.

Al aprobarse la iniciativa de reforma total, la Asamblea Nacional fijará un plazo para la convocatoria de elecciones de Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional conservará su mandato hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional Constituyente.

Mientras no se apruebe por la Asamblea Nacional Constituyente la nueva Constitución, seguirá en vigencia la presente Constitución.

Artículo 194. La aprobación de la reforma parcial requerirá del voto favorable del 60 por ciento de los diputados. En caso de aprobación de la iniciativa de reforma total se requerirá los dos tercios del total de los diputados. El Presidente de la República promulgará la reforma parcial y en este caso no podrá ejercer el derecho al veto.

Artículo 195. La reforma de las leyes constitucionales se realizará de acuerdo al procedimiento establecido para la reforma parcial de la Constitución, con la excepción del requisito de las dos legislaturas.

TITULO XI

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Capítulo Único

Artículo 196. La presente Constitución regirá desde su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, y deroga el Estatuto Fundamental de la República, el Estatuto sobre Derechos y Garantías de los Nicaragüenses y cualquier otra disposición legal que se le oponga.

Artículo 197. La presente Constitución será ampliamente divulgada en el idioma oficial del país; de igual manera será divulgada en las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica.

Artículo 198. El ordenamiento jurídico existente seguirá en vigencia en todo aquello que no se oponga a la presente Constitución, mientras no sea modificado.

Artículo 199. Los Tribunales Especiales seguían funcionando al entrar en vigencia esta Constitución, mientras no pasen bajo la jurisdicción del Poder Judicial. El nombramiento de sus integrantes y sus procedimientos estarán determinados por las leyes que los establecieron.

Asimismo los Tribunales Ordinarios seguirán funcionando en la forma que lo hacen, mientras no se ponga en práctica el principio de colegiación con representación popular. Este principio podrá aplicarse progresivamente en el territorio nacional, de acuerdo con las circunstancias.

Artículo 200. Se conservará la actual división política administrativa del territorio nacional, hasta que se promulgue la ley de la materia.

Artículo 201.- Los diputados de la Asamblea Nacional electos el 25 de febrero de 1990, serán instalados por el Consejo Supremo Electoral el 24 de abril de ese mismo año, para finalizar el período de los que fueron elegidos el 4 de noviembre de 1984 y cumplir su propio período conforme el Artículo 136 Cn.

El Presidente y el Vicepresidente de la República electos el 25 de febrero de 1990, tomarán posesión de sus cargos prestando la

promesa de ley ante el Presidente de la Asamblea Nacional el 25 de abril de ese mismo año, para finalizar el período de los que fueron elegidos el 4 de noviembre de 1984 y cumplir su propio período, conforme el Artículo 148 constitucional.

Artículo 202. Los autógrafos de esta Constitución serán firmados en cuatro ejemplares por el Presidente y los diputados de la Asamblea Nacional y por el Presidente de la República. Se guardarán en la Presidencia de la Asamblea Nacional, en la Presidencia de la República, en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y en la Presidencia del Consejo Supremo Electoral, y cada uno de ellos se tendrá como texto auténtico de la Constitución Política de Nicaragua. El Presidente de la República la hará publicar en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en la ciudad de Managua, a los diez y nueve días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y seis.

“A 25 AÑOS, TODAS LAS ARMAS CONTRA LA AGRESION”

BIBLIOGRAFÍA

1. Alonso García, Enrique. La interpretación de la Constitución. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1984.
2. Álvarez Conde, Enrique, Curso de Derecho Constitucional (2 volumen), Tecnos, 1992-1993.
3. Álvarez Lejarza, Emilio. Ensayos Históricos del Derecho Constitucional de Nicaragua.
4. Aragón Reyes, Manuel. Competencias del Tribunal Constitucional Comentarios a las Leyes Políticas, dir. por O. Alzaga, Vol. XII, Madrid, 1987. p. 165 y ss.
5. Asamblea Nacional de Nicaragua, Historia del Poder Legislativo en Nicaragua, 1823-1998, Managua, 1998.
6. Bertrand Galido, Francisco y otros autores. Manual de Derecho Constitucional (2 tomo), Centro de Investigaciones y Capacitación, Proyecto de Reforma Judicial, San Salvador, 1992.
7. Blachi, Alberto B. Control constitucional; el proceso y la jurisdicción constitucional. Ábaco, Buenos Aires, 1998.
8. Blanco Valdés, Roberto L. El valor de la Constitución. Alianza Editorial S.A., Madrid, 1994.
9. Bocanegra Sierra, Raúl. El valor de las sentencias del Tribunal Constitucional. Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid, 1992.
10. Caamaño, Francisco. El Control de Constitucionalidad de disposiciones reglamentaria; Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994.
11. Calderón Margine. Modulo de Derecho Constitucional I, Universidad Centroamericana, Managua, 2004.

12. Canosa Usera, Raúl. Interpretación constitucional y fórmula política. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988.
13. Castro y Castro, Juventino Víctor, Biblioteca de Amparo y Derecho Constitucional, Tomo 1, 2 y 3. Oxford, México, 2003.
14. Castro Rivera, Edwin. Las Reformas Constitucionales 2005. Facultad de Ciencias Jurídicas, UCA, Managua, 2006.
15. Constitución Política de la República de Nicaragua, Publicación oficial de la Asamblea Nacional, 2ª. Ed. oficial, mayo de 2000, Managua, Nicaragua, América Central.
16. Constitución Política de la República de Nicaragua (1987). Publicada por IMPRESOS DE CANADÁ, 1989.
17. Cruz Villalón, P; Jiménez Campo, L; López Guerra, P; Pérez Tremps. Los procesos constitucionales. Cuadernos y Debates No. 41. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992.
18. Cruz Villalón, Pedro. La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1987.
19. De Pina Vara, Rafael. Diccionario de Derecho. XVII edición. Editorial Porrúa. México. 1991.
20. Escobar Fornos, Iván. Derecho Procesal Constitucional. La Constitución y su Defensa. Managua, HISPAMER 1999.
21. Esgueva Gómez, Antonio. Las constituciones políticas y sus reformas en la Historia de Nicaragua, Editorial IHNCA (UCA), Tomos I y II junio, 2000.
22. Favoreu, Louis. Los tribunales constitucionales. Ariel. Barcelona. 1994.
23. FernándezSegado, Francisco. Los inicios de la constitucionalidad en Iberoamérica: del control político al control jurisdiccional.

Revista española de derecho constitucional. 1997. N° 49. pp. 79 a 118.

24. García Belaúnde, D. Los sistemas constitucionales iberoamericanos. Dyckynson, Madrid, 1992.
25. García de Enterría, Eduardo. Curso de Derecho Administrativo. 8ª Edición. Civitas. Madrid. 1997.
26. García Vílchez, Julio Ramón. Reforma constitucional y poder judicial, Editorial Editronic, S.A. Managua, 1998.
27. García Vílchez, Julio Ramón. Soberanía, supranacionalidad y derecho constitucional, Apuntes de Ciencias Jurídicas N. 1. Editronic, S.A. Managua, 1998.
28. Garrido Falla, Fernando. Tratado de Derecho Administrativo. Vol. I. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985-1986.
29. Peces-Barba, Gregorio; Rafael; De Asís Roig, Carlos R; Fernández Liesa; Llamas Cascón Ángel. Curso de derechos fundamentales. Teoría general. Coedición de la Universidad Carlos III de Madrid y Boletín oficial del Estado, Madrid, 1999.
30. Jellinek, George. Teoría General del Estado.
31. Jiménez Campo, Javier. Qué hacer con la Ley Inconstitucional. Ponencia en las III Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional. Septiembre de 1996.
32. López Guerra, Luis. Derecho Constitucional (2 volumen), Valencia, 1991-1992.
33. Montoro Puerto, Miguel. Jurisdicción constitucional y procesos constitucionales, COLEX. Madrid. 1991.
34. Otto y Pardo, Ignacio de. Derecho Constitucional: Sistema de fuentes. 2ª Edición, Ariel, Barcelona. 1995.

35. Parejo Alfonso, Luciano. Manual de Derecho Administrativo. 4ª Edición, Ariel, Barcelona. 1996.
36. Peces-Barba, Gregorio y otros. Derecho Positivo de los Derechos Humanos, Editorial Debate.
37. Pérez Tremps, Pablo. Tribunal Constitucional y Poder Judicial. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985.
38. Ramos Mendoza, Josefina. Jurisprudencia Constitucional de Nicaragua 1913-2000. Corte Suprema de Justicia/Banco Interamericano de Desarrollo, 2001.
39. Rubio Llorente, Francisco y Jiménez Campos, Javier. Estudios sobre jurisdicción constitucional. McGraw-Hill, Madrid, 1998.
40. Santamaría Pastor, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1990.
41. Solís Román, Azalea y otros. Tratado Elemental de Derecho Constitucional Nicaragüense. Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 1999.
42. Tribunales Constitucionales Europeos y Derechos Fundamentales. V.V.A.A. Centro de Estudios Constitucionales, 1984.
43. Valadés, Diego. El Gobierno de Gabinete. Editorial Hispamer, 2005.
44. Vega, Pedro. La Reforma Constitucional y la Problemática del poder constituyente. Editorial, Tecnos.

**Se Terminó de imprimir en los
Talleres de Impresiones Helios S.A.
Managua, Nicaragua, Junio 2007**

La Edición consta de 500 Ejemplares





200991182



ISBN 999240546-5

9 789992 405468